ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las trece horas del día treinta de junio del año dos mil nueve, en el domicilio del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, sito en el número once de la calle Carrizal de la colonia Carrizal de esta ciudad, reunidos los miembros del Consejo General del propio Instituto, licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro: licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro; licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo; licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez; licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova; sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza; doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa; Consejeros Electorales; licenciado José Vidal Uribe Concha, Director General; así como los representantes de Partidos

Políticos: licenciada María Daniela Correa Ruiz, representante del Partido Acción Nacional; licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional; licenciado Carlos Alejandro Pérez Espíndola, representante del Partido de la Revolución Democrática; licenciado Luis Daniel Nieves López, representante de Convergencia; licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del partido Nueva Alianza; ciudadano Eloy Leyva Ojeda, representante del Partido Socialdemócrata; del licenciado José Ascención Martínez Hernández, representante del Partido del Trabajo; licenciada Perla Patricia Flores Suárez, representante del Partido Verde Ecologista de México; licenciado Sócrates Alejandro Valdés Rosales, representante de la coalición "Juntos para Creer"; quienes asisten a la sesión ordinaria convocada con anterioridad en tiempo y forma y bajo el siguiente: Orden del día: I.- Verificación de quórum, declaración de existencia legal del mismo, e instalación de la sesión. II.- Aprobación del orden del día propuesto. III.- Aprobación del acta de sesión ordinaria del veintinueve de mayo; y extraordinarias de fecha cinco y diecisiete de junio del presente. IV.- Informe de la Presidenta del

Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. V.- Informe del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. VI.- Informe del Director General del Instituto Electoral de Querétaro, y aprobación en su caso. VII.- Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que resuelve respecto de los dictámenes relativos al cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales. VIII.- Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro que aprueba el dictamen que determina la procedencia de la autorización para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral local dos mil nueve, solicitada por las personas morales: Consulta, S. A. de C. V., Arias, Asiain Asociados en Investigación, S. C., Licea Servicios Integrales en Opinión, S.C., Mendoza Blanco & Asociados, S. C., Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, S. A. de C. V., Inteligencia Dirigida, S. C., Tendencia IM, S. C, y la persona física Jorge Luis Sierra Heredia. IX.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de

resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional, partido Convergencia y otros, relativo al expediente sesenta diagonal dos mil nueve. X.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y otro, relativa al expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve. XI.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, relativa al expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve. XII.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros, relativa al expediente

sesenta y cinco diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y siete diagonal dos mil nueve. XIII.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros, relativa al expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve. XIV.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Juan Ricardo Ramírez Luna, en contra del Partido Acción Nacional, relativa al expediente sesenta y ocho diagonal dos mil nueve. XV.- Presentación de la solicitud que formulan los representantes del Partido Revolucionario Institucional y la coalición "Juntos para Creer", respecto del establecimiento de medidas cautelares que impidan que los ciudadanos fotografíen con sus teléfonos celulares o cámaras fotográficas las boletas electorales al momento de sufragar el cinco de julio del presente año. XVI.- Asuntos Generales.- En el uso de la voz la

licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Buenas tardes a las señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado, a los funcionarios y representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos presentes, gracias por su asistencia a esta sesión ordinaria de Consejo General. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo sesenta y siete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, solicito al licenciado Antonio Rivera Casas, haga uso de la voz. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Buenos días. En primer término, doy lectura a la convocatoria a sesión, remitida en tiempo y forma a todos los miembros de este colegiado. Por acuerdo de la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos uno, dos, tres, veinticuatro, treinta, fracción primera; cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, sesenta y cinco, fracciones octava, vigésima cuarta, vigésima octava, trigésima primera y trigésima quinta; sesenta y seis, fracción tercera; sesenta y siete, fracciones primera y segunda y cuarta; sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y seis, fracción segunda; noventa y seis, ciento trece, fracción primera; doscientos

doce, doscientos trece, doscientos catorce, doscientos veinticuatro, doscientos veintisiete, doscientos veintiocho, doscientos veintinueve y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, once, fracciones primera y segunda; doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintidós, veintiocho, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete del Reglamento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, uno, tres, cuatro, sesenta y uno, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y seis, sesenta y ocho, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa y ciento uno del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, me permito convocarlo a sesión ordinaria del propio Consejo, la que tendrá verificativo el próximo día treinta de los corrientes a las trece horas en la sala de sesiones de este Consejo General, ubicada en Carrizal número once, colonia Carrizal en esta ciudad, y bajo en siguiente orden del día. Primero.- Verificación de quórum, declaración de existencia legal del mismo, e instalación de la sesión. Segundo.- Aprobación del orden del día propuesto. Tercero.- Aprobación del acta de

sesión ordinaria del veintinueve de mayo; y extraordinarias de fecha cinco y diecisiete de junio del presente. Cuarto.- Informe de la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Quinto.- Informe del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Sexto.- Informe del Director General del Instituto Electoral de Querétaro, y aprobación en su caso. Séptimo.- Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que resuelve respecto de los dictámenes relativos al cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales. Octavo.- Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro que aprueba el dictamen que determina la procedencia de la autorización para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral local dos mil nueve, solicitada por las personas morales: Consulta, S. A. de C. V., Arias, Asiain Asociados en Investigación, S. C., Licea Servicios Integrales en Opinión, S.C., Mendoza Blanco & Asociados, S. C., Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, S. A. de C. V.,

Inteligencia Dirigida, S. C., Tendencia IM, S. C, y la persona física Jorge Luis Sierra Heredia. Noveno.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional, partido Convergencia y otros, relativo al expediente sesenta diagonal dos mil nueve. Décimo.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y otro, relativa al expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve. Décimo primero.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, relativa al expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve. Décimo segundo.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia

presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros, relativa al expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y siete diagonal dos mil nueve. Décimo tercero.-Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros, relativa al expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve. Décimo cuarto.- Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Juan Ricardo Ramírez Luna, en contra del Partido Acción Nacional, relativa al expediente sesenta y ocho diagonal dos mil nueve. Décimo quinto.- Presentación de la solicitud que formulan los representantes del Partido Revolucionario Institucional y la coalición "Juntos para Creer", respecto del establecimiento de medidas cautelares que impidan que los ciudadanos fotografíen con sus teléfonos celulares o cámaras fotográficas las boletas electorales al momento de sufragar el cinco de julio del presente

año. Décimo sexto.- Asuntos Generales. En cumplimiento de lo expuesto, me propongo a desahogar el primer punto que es la verificación de quórum, declaración de existencia legal del mismo, e instalación de la sesión. De acuerdo con la lista de asistencia, damos cuenta con la presencia de los representantes de los partidos políticos. Del licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional; licenciado Carlos Alejandro Pérez Espíndola, representante del Partido de la Revolución Democrática; del doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia; del licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del Partido Nueva Alianza; del ciudadano Eloy Leyva Ojeda, representante del partido Socialdemócrata; del licenciado José Ascención Martínez Hernández, representante del Partido del Trabajo; de la licenciada Perla Patricia Flores Suárez, representante del Partido Verde Ecologista de México; del licenciado Sócrates Alejandro Valdez Rosales, representante de la coalición "Juntos para Creer". Asimismo doy cuenta de la presencia de las señoras y señores Consejeros Electorales, de la licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez, del sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, del doctor

Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, del licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo, del licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova, de la licenciada Cecilia Pérez Zepeda y del licenciado Antonio Rivera Casas. Asimismo damos cuenta con al presencia del licenciado José Vidal Uribe Concha, Director General del Instituto Electoral de Querétaro, por lo anterior, Presidenta, existe quórum legal para sesionar y se instala formalmente la sesión. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del segundo punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Es el relativo a la aprobación del orden del día propuesto, le informo que para asuntos generales se anota en primer lugar al doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia y en segundo lugar el licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del partido Nueva Alianza. Solicitaría antes de aprobar la orden día de manera económica que nos pusiéramos de pie para la toma de protesta de ley, si fueran tan amables al doctor Marco Antonio León Hernández. En el uso de la voz la

licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Electoral.- Doctor Marco Antonio León Hernández, representante suplente del Partido Convergencia, ¿protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la propia del Estado, la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo reglamentos y acuerdos de este Consejo, para el bien de la ciudadanía?. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Sí, protesto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Si no lo hiciera así, que la propia ciudadanía se lo demande. Si son tan amables de sentarse, bienvenido. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Adelante licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Pediría el sentido del voto para la aprobación del orden del día propuesto. Acto seguido los Consejeros Electorales levantan su mano derecha en señal de aprobación. Tenemos siete votos para aprobar el orden de día, Presidenta. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez

Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Es el consistente en la aprobación del acta de la sesión ordinaria del veintinueve de mayo; y extraordinarias de fechas cinco y diecisiete de junio del presente. ¿Si no hubiere alguna observación o comentario?... Pediría a las señoras y señores consejeros electorales su voto en forma económica para la aprobación de las actas. Acto seguido los consejeros electorales levantan su mano derecha en señal de aprobación. Tenemos siete votos para aprobar las actas, Presidenta. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del cuarto punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Es el relativo al informe de la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Agradezco su presencia en esta sesión ordinaria del Consejo General y me permito dar cuenta de las

actividades relevantes realizadas por la Presidencia a mi cargo, correspondientes al mes en curso. Primero: El once de junio del presente y con el propósito de dar cumplimiento al artículo ciento veintisiete, fracción cuarta, incisos a) y e) una servidora solicitó al Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y al Tribunal Superior de Justicia del Estado los directorios correspondientes, mismos que fueron entregados y publicados oportunamente. Segundo: Como cada Proceso Electoral, el día doce de junio el Instituto Electoral de Querétaro ofreció un desayuno a Líderes de Opinión en el Estado, entregándose la Carpeta de Información Electoral Básica, Querétaro dos mil nueve, la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la Cartografía Electoral del Estado y las Plataformas Electorales presentadas por las fuerzas políticas para esta contienda electoral; en este acto se logró contar con la presencia de titulares de los órganos de gobierno, magistrados, académicos, investigadores, ministros de culto religioso, medios de comunicación y organizaciones civiles y sociales en representación de la ciudadanía. Tercero: En atención a la invitación del Director General de este instituto y derivado del anexo técnico número once, el día quince de junio

una servidora y el Presidente de la Comisión de Organización Electoral acudimos al acto de entrega-recepción de las Listas Nominales en las instalaciones de la Dirección del Registro Federal de Electores en la ciudad de México. Cuarto: En esa misma fecha la de la voz y los Señores Consejeros Electorales presenciamos al debate entre candidatos al cargo de gobernador del estado, organizado por este instituto. Quinto.- A petición del Presidente de la Barra Queretana del Colegio de Abogados, asociación civil, el dieciocho de junio se llevó a cabo una exposición de información relativa al Proceso Electoral dos mil nueve, en la que participamos la suscrita, el Secretario Ejecutivo de este Consejo y el Director General. Sexto.- El veinte de junio acudí al curso de capacitación para el funcionamiento de la Urna Electrónica, dirigido a Auxiliares de los Consejos Distritales y Municipales. Séptimo: Los días veintidós y veintisiete del presente, se llevaron a cabo los simulacros del Sistema de Difusión de Resultados Electorales Preliminares dos mil nueve, el primero, con la presencia de partidos políticos y el segundo, partidos políticos y medios de comunicación, en ambos actos se contó con la asistencia de Consejeros Electorales y una servidora.

Octavo: De conformidad al Anexo Técnico Número Once, celebrado con el Instituto Federal Electoral; el día veintidós del mes en curso, se reunió la Comisión de Análisis y Seguimiento Técnico para atender asuntos de su competencia. Noveno:- A petición del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, el día veintinueve de junio se llevó a cabo una plática con sus integrantes en los que se proporcionó información sobre la función que tiene esa figura de conformidad a nuestra legislación electoral vigente. Décimo: De conformidad al artículo sesenta y seis, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, informo a ustedes que me he reunido con el Director General, con el propósito de dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo. Décimo Primero: A continuación, menciono a ustedes las fechas en que sesionaron las Comisiones Permanentes y transitoria de este Consejo General. Uno:- Comisiones Unidas Radiodifusión y de Debates, el primero de junio. Dos.- Comisión de Debates, el pasado seis, diez y el día de hoy. Tres.- Comisión de Radiodifusión, los días trece y veintisiete de junio. Cuatro:- Comisión de Organización Electoral, el dieciséis de junio. Cinco:- Comisión de Educación Cívica y

Capacitación Electoral, el veintitrés de junio. Seis.- Comisión de Control Interno, el veintinueve de junio. Todas ellas para conocer y resolver asuntos de su competencia. De conformidad al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro relativo al uso de Internet como medio de difusión de propaganda político-electoral y gubernamental, esta Coordinación ha monitoreado alrededor de setenta y seis páginas Web diariamente. Hasta el momento los sitios monitoreados han cumplido con lo que establecen los artículos treinta y dos y ciento siete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. La unidad de enlace a cargo de esta Coordinación, ha dado cumplimiento a los artículos tercero, fracción tercera, y siete de la Ley Estatal de Acceso a la Información, durante el mes que se informa se ha brindando respuesta oportuna a veintiún solicitudes de ciudadanos, quienes hicieron uso del ejercicio de este derecho en diversos temas relacionados con este Instituto. De igual forma, se continúa con la producción y edición del programa de radio Expresiones para Elegir, que se transmite a través de la frecuencia ochenta y nueve punto cinco de frecuencia modulada y quinientos ochenta de amplitud modulada de Radio Universidad, el segundo y

miércoles de cada mes. Se da puntual seguimiento a la actualización de información del sitio oficial Web. Licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del quinto punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Doy cuenta de las actividades de mayor relevancia realizadas por la Secretaría Ejecutiva a mi cargo en el mes que se informa, las que son adicionales a las tareas institucionales en que participamos y que ha dado cuenta por separado la licenciada Cecilia Pérez Zepeda. Uno.- Se realizaron por el suscrito y el equipo de apoyo, las guardias que por vencimiento de término se cumplían los días tres, nueve y veintiuno del presente, derivadas de la sesión ordinaria del veintinueve de mayo y extraordinarias del cinco y diecisiete del presente. Dos.- Fueron elaboradas las convocatorias, se preparó la documentación correspondiente y se notificó oportunamente por el de la voz y el personal de apoyo, para las sesiones extraordinarias del cinco y diecisiete, así como para la ordinaria del día de la fecha. Tres.- Se dio trámite oportuno a la correspondencia de las áreas que dependen de esta Secretaría. Cuatro.- Fueron realizadas las versiones estenográficas de las

actas de sesión del veintinueve de mayo y cinco y diecisiete del mes en curso, de las que se ha dado cuenta y puesto a consideración de este colegiado en la presente sesión. Cinco.- En el periodo que se informa fueron elaborados por la Secretaría Ejecutiva, cinco acuerdos de Consejo y nueve resoluciones. Seis.- En relación a los procedimientos sancionadores electorales que instruyó este Consejo, con motivo de los estados financieros del cuarto trimestre de dos mil ocho, iniciados en contra de Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, se informa que se encuentran en periodo de sustanciación. Procedimientos sancionadores. Siete.- El día doce del presente, se presentó por parte del Partido Acción Nacional denuncia de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos en Cadereyta de Montes, Querétaro, que atribuyó al Partido Revolucionario Institucional estatal y municipal, a dos de sus candidatos y en contra de Convergencia estatal y uno de sus candidatos, con dicha causa se inició el expediente sesenta diagonal dos mil nueve; el día de la fecha se presenta la resolución de dicho asunto. Ocho.- El día diecisiete del presente se presentó denuncia por parte del Partido

Revolucionario Institucional del comité municipal de El Marqués, con motivo de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos en dicho municipio que atribuyó al Partido Acción Nacional municipal y a su candidato, con dicha causa se inició el expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve; el día de la fecha se presenta la resolución de dicho asunto. Nueve.- El día diecisiete del presente se presentaron dos denuncias por parte del Partido Acción Nacional estatal, con motivo de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos en el Centro Histórico de la ciudad, en las calles de Damián Carmona y en Prospero C. Vega; con dichas causas se iniciaron los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, que se acumularon; el día de la fecha se presenta la resolución de dichos asuntos. Diez. El día dieciocho del presente se presentó denuncia por parte del Partido Acción Nacional Estatal, con motivo de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos en la ciudad de Querétaro y concretamente en la calle Zafiro de la colonia España, se formó el expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve; en igual

sentido, en fecha diecinueve del presente el Partido Acción Nacional presenta denuncia de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos en la ciudad de Querétaro y concretamente con motivo de unos espectaculares, se formó el expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve; dichos asuntos fueron acumulados y el día de la fecha se presenta la resolución a los mismos. Once.- El día diecinueve del presente se presentó denuncia por parte del Partido Acción Nacional estatal, con motivo de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral sucedidos con motivo de la publicación de opiniones en medios de comunicación impresos, con dicha causa se inició el expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve; el día de la fecha se presenta la resolución de dicho asunto. Doce.- El día diecinueve del presente se presentó denuncia por parte del ciudadano Juan Ricardo Ramírez Luna, con motivo de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral que atribuye al Partido Acción Nacional estatal y otro, con dicha causa se inició el expediente sesenta y ocho diagonal dos mil nueve; el día de la fecha se presenta la resolución de dicho asunto. Igualmente informo que se han presentado otras

denuncias de hechos probablemente violatorios de la normatividad electoral por parte de diversas fuerzas políticas, se encuentran en sustanciación y en su oportunidad se dará cuenta de ellas. Trece.- En relación a la resolución que aprobara este Colegiado en la pasada sesión ordinaria, seguida en el expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, en la que se sanciona vía Procedimiento Especial Sancionador a la fuerza política a la que se le imputan los hechos; informo que fue recurrida por denunciante y denunciado mediante el recurso de impugnación señalado por la ley; se sustanció y se remitió a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que le formó el Toca Electoral correspondiente y al resolver, por una parte conforma la resolución del Consejo y por otra sobresee del asunto. Catorce.- En fecha nueve de junio se presentó denuncia para iniciar procedimiento especial sancionador por parte del Partido Revolucionario Institucional municipal de Pinal de Amoles, con motivo de inconformidad al haber nombrado representante ante el Consejo Municipal a un funcionario público de dicho municipio; ante incumplimiento en los requisitos para radicar tal procedimiento sancionador, fue prevenido para que

cumpliera con los mismos y al no hacerlo, se tuvo por no presentada la denuncia. Quince.- En fecha doce de junio se presentó denuncia para iniciar procedimiento especial sancionador por parte de licenciado José Víctor Delgado Maya del Instituto Federal Electoral y Antropólogo Diego Prieto Hernández del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con motivo de colocación de propaganda política en un templo de San Antonio de la Cal, en Tolimán, Querétaro, y en el Garitón ubicado en la calle de Invierno esquina calle Porvenir; como en dichas denuncias se carecía de algunos de los requisitos como el domicilio de los denunciados, entre otros, fueron prevenidos los denunciantes para que cumplieran con ellos; al no hacerlo, se tuvo por no presentada la denuncia. Dieciséis.- En fecha catorce de junio se presentó denuncia para iniciar procedimiento especial sancionador por parte del Partido Revolucionario Institucional municipal de Pinal de Amoles, con motivo de colocar propaganda política en lugares prohibidos por la Ley Electoral; ante incumplimiento en los requisitos para radicar tal procedimiento sancionador, fue prevenido para que cumpliera con los mismos y al no hacerlo, se tuvo por no presentada la

denuncia. Diecisiete.- En fecha catorce de junio se presentó denuncia para iniciar procedimiento especial sancionador por parte del Partido Acción Nacional de El Marqués, con motivo de colocar propaganda política en lugares prohibidos, modificar el emblema del Partido Revolucionario Institucional y realizar campaña con errores ortográficos, lo que esta restringido por la Ley Electoral; ante incumplimiento en los requisitos para radicar tal procedimiento sancionador, fue prevenido para que cumpliera con los mismos y al no hacerlo, se tuvo por no presentada la denuncia. Resoluciones de la sala electoral. Dieciocho.- El pasado treinta y uno de mayo la ciudadana María Cándida Acosta Pérez presentó recurso de apelación en contra de la resolución de este colegiado, en la que se aprobó la lista de candidatos de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática; se sustanció y se remitió a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que le formó el Toca Electoral veintiocho diagonal dos mil nueve y que en fecha diez de junio de la presente anualidad, dicha Sala desechó su recurso al actualizarse dos causas de improcedencia. Diecinueve.- El pasado veintidós de junio se presentó recurso de

apelación por parte del Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución de este Colegiado, en la que se aprobó la resolución de fecha diecisiete del mismo mes emitida en el expediente cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado, en el que se sanciona al apelante; se sustanció y se remitió a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde será atendida la inconformidad en plenitud de jurisdicción. Veinte.- Como se informó en aquellos días del veintidós de abril del año en curso, los ciudadanos Pablo Héctor González Loyola Pérez, Oscar Alberto Alcazar Zaragoza y Ma. Leonor Zarraga Jurado presentaron un escrito ante esta Secretaria en el que informaban de la no realización del quinto consejo estatal electivo de candidaturas del Partido de la Revolución Democrática; en esa ocasión y ante la incompetencia legal para resolver sobre asuntos de carácter interno de dicho partido, se le formó a la solicitud el cuaderno cero seis diagonal dos mil nueve y remitió a dicha fuerza política para su atención. En contra de dicha determinación en fecha once de mayo se inconformaron dichos ciudadanos y presentaron el recurso de apelación, mismo que fue sustanciado con el número de cuaderno doce diagonal

dos mil nueve y remitido a la Sala Electoral, el que se registró como toca electoral tres diagonal dos mil nueve. El pasado tres del mes en curso resuelve dicha sala y confirma la resolución emitida por esta Secretaria, consistente en la remisión de dicho asunto al Partido de la Revolución Democrática por ser de su competencia. Veintiuno.- El veintiuno de mayo se presentó un medio de impugnación registrándose con el cuaderno veintiuno diagonal dos mil nueve, mediante el cual el partido Convergencia se inconforma del registro concedido por este Colegiado a la lista de candidatos a diputados de representación proporcional en el primer lugar de la misma en propietario y suplente del partido Nueva Alianza, se remitió oportunamente a la sala electoral para su sustanciación registrándose como toca electoral veinticinco diagonal dos mil nueve. En fecha once del mes en curso se dicta resolución en la que se confirma la dictada por este Colegiado. Veintidós.- Como se informó oportunamente, en relación al recurso de apelación que fuera promovido por Francisco González de Cosio en fecha veintiuno de mayo pasado, en la que se inconforma de la resolución de este Colegiado que aprobó el registro del candidato a gobernador del Partido de la

Revolución Democrática resuelto el diecisiete de mayo; en razón de lo anterior dicha Sala Electoral en el Toca Electoral veintiuno diagonal dos mil nueve en fecha once de junio resolvió confirmar la dictada por esta instancia electoral. Veintitrés.- De igual manera y como han sido ustedes informados, el ciudadano Iván Castro Montes impugno mediante el recurso de apelación la resolución dictada por este Colegiado el diecisiete de mayo del año en curso, relativa a la procedencia de la lista de candidatos por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional; se dio el trámite correspondiente y fue remitido a la sala electoral del Estado, asignándole el número de registro como toca electoral veintisiete diagonal dos mil nueve; dicha sala en fecha veinticinco de junio emite resolución en la que confirma la resolución dictada por este Consejo. Veinticuatro.- El veinticinco de mayo se presentó un medio de impugnación registrándose con el cuaderno veintitrés diagonal dos mil nueve, mediante el cual el la ciudadana Rosa María Paola Ramírez Arellano se inconforma, entre otros, del registro concedido por este colegiado a la lista de candidatos por el principio de representación proporcional de fecha diecisiete de mayo del año

en curso; se da tramite a la apelación y se remite a la Sala Regional segunda con sede en Monterrey, Nuevo León, perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; dicho tribunal en fecha dieciséis del presente emite resolución en que desecha por notoriamente improcedente el recurso presentado, quedando en consecuencia firme la resolución dictada por el Consejo. Veinticinco.- Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como fue conocido por Ustedes, el Partido del Trabajo por medio de la Coordinadora Nacional impugnó el decreto de la Legislatura del Estado con el que se aprobó la Ley Electoral del Estado de Querétaro de fecha trece de diciembre de dos mil ocho. En fecha diecinueve del presente el Instituto Electoral de Querétaro, es notificado de la resolución relativa a dicho asunto en la cual se declara parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que corresponderá a la Legislatura del Estado atender y resolver al respecto. Veintiséis.- Se informa a este colegiado que el día de ayer fue presentado escrito ante esta Secretaría signado por los ciudadanos: Gustavo Nieto Chávez, J. Jesús Ángeles Nájera, Gerardo Sánchez Vázquez y J. Belem Junco Márquez, en el que

solicitan se refuercen los mecanismos de observación electoral aumentando el número de observadores, bajo la autorización, vigilancia y competencia de este Instituto. Por ser fecha caducada en inatendible dicha solicitud. Veintisiete.- La Coordinación Jurídica ha otorgado el apoyo necesario a la Coordinación de Información y Medios, en los trámites legales que los particulares en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, presentan ante la referida Coordinación. Veintiocho.- El día de la fecha fue recibido en la Secretaría a mi cargo oficio girado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en el que informa del acuerdo emitido por el Consejo Local en el que se emitieron las medidas necesarias para garantizar la libertad y secrecía del sufragio. Veintinueve.- Se informa que la Comisión Transitoria encargada de fijar las reglas y fechas relativas a la convocatoria a un debate público entre los candidatos a Gobernador del Estado, al haber concluido las actividades para las que fue creada, ha quedado extinguida. Las anteriores, son las actividades más sobresalientes realizadas en el periodo que se informa. Santiago de Querétaro, Querétaro, junio treinta de dos mil nueve. Atentamente licenciado Antonio Rivera Casas,

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del sexto punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Antes doy cuenta de la presencia de la licenciada María Daniela Correa Ruiz, representante suplente del Partido Acción Nacional. El sexto punto es el relativo al informe del Director General del Instituto Electoral de Querétaro, y aprobación en su caso. En el uso de la voz el licenciado José Vidal Uribe Concha, Director General.- Conforme a las disposiciones legales vigentes, en mi calidad de Director General procedo a rendir ante este colegiado, el informe de las actividades sobresalientes que durante el mes de junio realizaron las direcciones, coordinaciones y consejos electorales adscritos; independientemente de aquellas que están siendo ejecutadas de acuerdo al Programa General de Trabajo que este máximo órgano de dirección aprobó para el presente año, al tenor de lo siguiente: Cumpliendo con los acuerdos emitidos por el Consejo General de este Instituto en fecha veintinueve de mayo del presente año, a

través de los cuales se aprobaron los dictámenes formulados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral respecto de los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre del año dos mil ocho, presentados por los partidos políticos; Remití a la Dirección de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, copias certificadas de los mismos. La empresa "DSI Elecciones, sociedad anónima de capital variable." capacitó a los Consejeros Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales, en el funcionamiento del "Sistema de Difusión de Resultados Electorales Preliminares dos mil nueve" y explicó la normatividad para el funcionamiento de los centros de cómputo en los consejos. Asimismo, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral aprovechó la presencia de los funcionarios para instruirlos sobre la entrega-recepción de documentación y materiales electorales, contenido del paquete que se distribuye a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla y sobre el equipamiento de casillas. Atendiendo el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aprobado por el Consejo General en la pasada sesión ordinaria;

la Presidenta del Consejo General, el Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral, el Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico y el suscrito, acudimos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, para llevar a cabo la firma del convenio de apoyo y colaboración, que establecerá las bases de colaboración interinstitucional. Para la instrumentación de diversos programas, proyectos y eventos en materia político electoral. Asimismo, se firmó el contrato de comodato para obtener en calidad de préstamo las urnas electrónicas que se usarán en la "Primera Consulta Infantil y Juvenil de los Queretanos". En este orden de ideas, el Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico, capacitó a los veinticuatro auxiliares de los consejos electorales sobre las actividades a realizar el cinco de julio y en la instalación de las urnas electrónicas. Derivado de lo anterior, se giraron oficios de petición a los dieciocho presidentes municipales, solicitando apoyo de un espacio físico en las plazas públicas principales, para ubicar las mesas receptoras electrónicas de votación. También se celebró la suscripción del Convenio General de Colaboración con la Comisión Estatal de

Información Gubernamental en el Estado, y la firma de la adenda al Anexo Técnico Número Once que se tiene suscrito con el Instituto Federal Electoral, por la adquisición de un tanto más de la Lista Nominal de Electores. De conformidad al Anexo Técnico Número Once que se tiene suscrito con el Instituto Federal Electoral, un servidor, en compañía de la Presidenta del Consejo General y del Presidente de la Comisión de Organización Electoral de este organismo, acudimos al centro nacional de impresión del Instituto Federal Electoral a la entrega-recepción de las listas nominales de electores definitivas con fotografía que utilizará el Instituto Federal Electoral el próximo cinco de julio, mismas que ya fueron remitidas a los veinticuatro consejos electorales y a los partidos políticos. En vía de alcance, se envió a las fuerzas políticas un tanto más de la lista nominal adicional que contiene los registros de ciudadanos que resultaron favorecidos producto de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Materia Electoral. El de la voz y el Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico, sostuvimos una reunión con los cuerpos de seguridad del gobierno del estado y municipales,

exponiendo dos etapas del proceso electoral: la jornada electoral y la posterior a ella; otorgándoles datos y ubicación de casillas de cada, una de sus demarcaciones. Lo anterior, en el marco de los convenios que en materia de seguridad pública se tienen suscritos con el Poder Ejecutivo y los dieciocho municipios. Fueron enviadas para su publicación al Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", las resoluciones de sustitución de candidatos y de solicitud de sustitución por resolución judicial de los consejos de: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Querétaro sexto, Tequisquiapan y Tolimán, para su publicación. También se remitieron los acuerdos aprobados por los veinticuatro consejos electorales, relativos a la integración de las mesas directivas de casilla. Informo a este colegiado, que se presentaron dos separaciones definitivas al cargo de consejero electoral; uno del Consejo Distrital Décimo de San Juan del Río y otro del Distrito Doce de El Marqués; así como una renuncia del supervisor del distrito décimo cuarto de Cadereyta de Montes. Participé con pláticas inductivas relacionadas a las tres etapas

del proceso electoral, impartidas a: los líderes de opinión, integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Querétaro, abogados del Partido Acción Nacional y al Consejo de Notarios Públicos de Querétaro. Durante este mes, "D cincuenta y uno, Elecciones, sociedad anónima de capital variable.", Empresa encargada de implementar el "Sistema de Difusión de Resultados Electorales Preliminares dos mil nueve" realizó simulacros, con el fin de verificar que los centros de captura ubicados en los quince consejos distritales y nueve municipales, se encuentren en condiciones óptimas de operación y que su nivel de integración con el centro de cómputo estatal sea el adecuado, así como observar la operación de este último en todas y cada una de las fases que van desde la recepción de la información, integración, validación, procesamiento y exposición de la misma. Estos actos se realizaron en el centro de cómputo estatal, asistiendo consejeros electorales, representantes de las fuerzas políticas y medios de comunicación. Cabe resaltar, que los representantes de los partidos políticos Convergencia y del Trabajo, durante el simulacro celebrado el día veintisiete de junio presentaron por escrito, observaciones a la transmisión de datos, mismas que serán

atendidas por la empresa contratada. Por lo anterior, ha quedado debidamente validada por los integrantes de este colegiado, la forma en que operará y difundirá información el "Sistema de Difusión de Resultados Electorales Preliminares dos mil nueve". Con fundamento en los artículos ciento veinticuatro, ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, personal del área jurídica de la dirección a mi cargo impartió un curso a los Consejeros Presidentes y Secretarios Técnicos de los veinticuatro consejos electorales, abordando los temas de las sesiones de: la jornada electoral y de cómputos. Como parte de las actividades de seguimiento de la jornada electoral que tengo a mi cargo, el Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico celebró reuniones de trabajo con secretarios técnicos y supervisores de los consejos electorales, para dar a conocer la forma en que operará el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. La Coordinación Administrativa realizó actividades concernientes a recursos humanos, materiales y suministros, y financieros, que por razones de operación y de ejercicio del gasto se ejecutaron en el mes que se informa. La Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos sesenta y uno y sesenta y dos del Reglamento de Fiscalización, emitió las observaciones derivadas de los estados financieros del primer trimestre del año en curso, mismas que fueron contestadas en tiempo por parte de los partidos políticos y la asociación política, asimismo, es de informar que se está efectuando la revisión de los estados financieros de precampaña presentados por los partidos políticos y coalición. Atendiendo lo preceptuado por los artículos ciento seis, inciso c) y ciento nueve, último párrafo, ha implementado el mecanismo de monitoreo de gastos de campaña por parte del personal de monitoreo, supervisores y capacitadores-asistentes electorales de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Querétaro. Respecto a los eventos que mediante agenda nos dan a conocer los candidatos, así como los que informa la empresa contratada y los que se detectan a través de los diferentes medios de comunicación. Observando lo previsto en el artículo setenta y ocho, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se trasladaron las urnas y mamparas, de la empresa "Empaques Industriales del Potosí, sociedad anónima de capital variable" a la bodega del Instituto Electoral de

Querétaro; distribuyéndose a los consejos distritales y municipales. El titular y funcionarios de apoyo de la dirección ejecutiva, acudieron a las instalaciones de "Talleres Gráficos de México" para validar las muestras de las boletas a pie de máquina. Los funcionarios de apoyo, junto con personal contratado ex - profeso, revisaron las boletas para su posterior empaquetado por distrito y municipio. Fueron trasladadas las boletas y la documentación electoral desde la empresa "Talleres Gráficos de México" a las instalaciones de transportes "Julián de Obregón sociedad anónima de capital variable" de esta ciudad. En el lugar se hizo el transbordo de la documentación electoral a siete unidades para distribuirlas en los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de Querétaro y proceder en términos del artículo ciento dieciocho de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. En este tenor, se dio seguimiento al armado de los mil novecientos noventa y cinco paquetes electorales que se entregarán a los presidentes de las mesas directivas durante el periodo comprendido del veintinueve de junio al tres de julio; por lo que se dará seguimiento a la distribución de la documentación y materiales electorales. Por parte de los consejos

distritales y municipales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Referente a la coordinación establecida entre las áreas de organización del Instituto Electoral de Querétaro y del Instituto Federal Electoral, y derivado del anexo técnico número once signado entre ambas instituciones, se determinarán las necesidades de mobiliario en las casillas, a fin de equiparlas a más tardar para el día cuatro de julio, correspondiendo al Instituto Electoral de Querétaro las casillas ubicadas en las demarcaciones territoriales de los distritos electorales federales cero uno y cero cuatro. Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral informa que hasta el día de hoy se han presentado treinta y ocho sustituciones de capacitadores - asistentes electorales, lo que representa prácticamente el diez por ciento del total de Capacitadores Asistente Electoral contratados. Derivado de la entrega de cartas - notificación a los ciento doce mil seiscientos sesenta y ocho ciudadanos insaculados, se logró identificar a veintisiete mil treinta y tres ciudadanos que cumplían con los requisitos; estos ciudadanos fueron los que se consideraron para llevar a cabo de forma automatizada la integración de las mil novecientos

noventa y cinco casillas que se prevé instalar el próximo cinco de julio. En este acto estuvieron presentes los integrantes del Consejo General. Por lo que ve a coordinación, supervisión y en su caso retroalimentación a la capacitación electoral de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, se informa que la estrategia utilizada por esta Dirección Ejecutiva para la integración y capacitación de las mesas receptoras de votación, contempla la instrucción de los posibles funcionarios de casilla, desde el momento en que fueron notificados, esto en razón de que ya se conocía el resultado del sorteo de la letra por parte del consejo general, lo que ha significado que en su mayoría han recibido entre tres y cuatro sesiones de instrucción. Para la conformación e impresión del Encarte con la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla; esta dirección, de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió al titular de la Coordinación de Información y Medios del Instituto Electoral de Querétaro. El archivo electrónico y la impresión con los domicilios de las mil novecientos noventa y cinco casillas y los trece mil novecientos sesenta y cinco nombres de funcionarios propietarios y suplentes. Los Consejos

Distritales y Municipales han atendido las responsabilidades que por mandato de ley les corresponde, de las que de manera particular cada secretario técnico ha dado cuenta al consejo en el que está adscrito. Por último, se dio atención oportuna a la correspondencia recibida, tanto interna como externa, por parte de los órganos operativos. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- ¿Si no hubiere alguna observación u comentario al informe del Director General?... Pediría Consejeros Electorales su voto de manera económica para la aprobación del informe. Acto seguido los Consejeros Electorales levantan su mano derecha en señal de aprobación. Tenemos siete votos para la aprobación del informe, Presidenta. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del séptimo punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación, y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro que resuelve respecto de los dictámenes relativos al cumplimiento de las disposiciones y

criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales. Antecedentes. Primero.- En doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, mediante la cual se otorga al Instituto Electoral de Querétaro el rango constitucional de organismo público autónomo, estableciéndose que será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño. Segundo.- En treinta y uno de marzo de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Constitución Política del Estado de Querétaro, en la que se reformó el artículo treinta y dos, el cual entró en vigor al día siguiente; asimismo, en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaída en la acción de inconstitucionalidad setenta y seis diagonal dos mil ocho y sus acumulados setenta y siete diagonal dos mil ocho y setenta y ocho dos mil ocho, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el citado

periódico oficial la modificación ordenada por el Máximo Tribunal del País, al segundo párrafo del artículo treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la cual entró en vigor al día siguiente. Tercero.- En cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ordenamiento que regula los derechos político-electorales de los ciudadanos; la organización, constitución, fusión y registro de las organizaciones y partidos políticos estatales; la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos en el Estado; de igual manera, el sistema de medios de impugnación, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Cuarto.- En diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, treinta de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil dos, treinta de septiembre y uno de octubre de dos mil cinco, veinte de octubre y diecisiete de noviembre de dos mil seis, once de abril, trece y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La

Sombra de Arteaga", las leyes que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Quinto.- En veinte y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Considerando. Uno.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarenta y uno, primer párrafo, señala: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El párrafo segundo cita: "La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas". Dos.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo ciento dieciséis, establece: "Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a la siguientes normas"; la fracción

cuarta, señala: "Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que"; y el inciso b) cita: "En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad"; el inciso c) cita: "Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones". Tres.- Que la Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo treinta y dos, señala: "El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales. En su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores". Cuatro.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo uno, establece: "La presente Ley es de orden público e interés social; tiene por objeto reglamentar lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos,

la organización, constitución, fusión y registro de las instituciones políticas estatales y la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los Ayuntamientos en el Estado". Cinco.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo segundo, indica: "Las autoridades del Estado, las de los municipios, los organismos electorales y las instituciones políticas, velarán por la estricta aplicación y cumplimiento de esta Ley; promoverán la participación democrática de los ciudadanos; alentarán toda expresión que tienda a fortalecer el régimen de partidos y colaborarán con el Instituto Electoral de Querétaro en la preparación y desarrollo del proceso electoral". Seis.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo veintiuno, dispone: "Las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres años para renovar el Poder Legislativo y los ayuntamientos y cada seis años para la elección del titular del Poder Ejecutivo, mismas que tendrán lugar el primer domingo de julio del año que corresponda a la elección. El Consejo General hará la declaratoria pública del inicio del proceso electoral ciento dos días naturales antes de la celebración de las elecciones. Dicha

declaratoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 'La Sombra de Arteaga''. Siete.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo cincuenta y ocho, indica: "El Instituto Electoral de Querétaro tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el territorio del mismo, contando con órganos de dirección y operativos, dentro de la siguiente estructura: Primero.- Consejo General; Segundo.- Dirección General; Tercero.- Consejos distritales; Cuarto.- Consejos municipales; y Quinto.- Mesas directivas de casilla''. Ocho.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo cincuenta y nueve, dispone: "Son órganos de dirección del Instituto Electoral de Querétaro, el Consejo General del mismo y la Dirección General en materia operativa''. Nueve.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo sesenta, dice: "El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, equidad, imparcialidad, objetividad e independencia rijan todas las actividades de los órganos electorales''. Diez.- Que la Ley

Electoral del Estado de Querétaro en el artículo sesenta y cinco, señala: "El Consejo General tiene competencia para"; y la fracción trigésima primera, indica: "Dictar los acuerdos, implementar los mecanismos necesarios para la debida observancia de la ley". Once.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y seis, cita: "El proceso electoral está constituido por la serie de actos que realizan los organismos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, encaminados a elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley". Doce.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y siete, refiere: "El proceso electoral iniciará con la declaratoria que al efecto emita el Consejo General y concluye cuando sean entregadas las constancias de mayoría y haya vencido el término para la interposición de recursos o, en su caso, se emitan las resoluciones por los órganos jurisdiccionales competentes. La declaratoria se realizará ciento dos días naturales antes del primer domingo de julio del año al que corresponda la elección". Trece.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y ocho, indica: "Las etapas

del proceso electoral son''; y la fracción primera, refiere: ''La preparatoria de la elección''. Catorce.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo ciento dos, indica: ''La etapa preparatoria de la elección, inicia con la sesión del Consejo General del Instituto en que emita la declaratoria correspondiente, la que deberá efectuarse ciento dos días naturales antes del primer domingo de julio del año en que corresponda la elección y concluye al iniciarse la jornada electoral. La etapa preparatoria de la elección comprende''; y la fracción primera, cita: ''La integración y funcionamiento de los órganos electorales''. Quince.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo ciento trece, señala: ''Para la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, en el período comprendido desde el inicio de las campañas electorales y hasta dos horas después del cierre oficial de las casillas el día de la elección, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones''; y la fracción primera, cita: ''La persona física o moral u organización que solicite u ordene la publicación, deberá entregar previamente copia del estudio completo al Consejo General, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, quien lo turnará a la comisión que corresponda, con la finalidad de dictaminar el cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables, remitiéndolo al Consejo General para que resuelva lo conducente; si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, quien lo haga deberá dar a conocer la metodología empleada y el grado de confiabilidad''. Dieciséis.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo primero, cita: "El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo sesenta y cinco, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y tiene como finalidad regular el funcionamiento interno del Instituto Electoral de Querétaro''. Diecisiete.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo veinticinco, refiere: "Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Consejo integrará comisiones, mismas que podrán tener el carácter de permanentes o transitorias''. Dieciocho.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo veintiséis, indica: "Serán consideradas como comisiones permanentes''; y la fracción cuarta, cita: "Radio-Difusión''. Diecinueve.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de

Querétaro en el artículo treinta y siete, señala: "La Comisión de Radio-Difusión, tiene competencia para"; la fracción décima primera, refiere: "Elaborar y rendir al Consejo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, los proyectos de dictamen derivados del ejercicio de sus funciones, que así lo requieran"; la fracción décima tercera, cita: "Elaborar y someter a la consideración del Consejo, el proyecto de criterios generales que deberán adoptar las personas físicas y morales u organizaciones interesadas en producir, publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales o las tendencias de las votaciones"; la fracción décima cuarta, indica: "Conocer los estudios que remita el Secretario Ejecutivo, derivado de la elaboración de encuestas o sondeos de opinión que sobre asuntos electorales realicen las personas físicas o morales; debiendo remitir al Consejo el dictamen respectivo para que resuelva lo procedente en términos de lo dispuesto por el artículo ciento trece, fracción primera de la Ley". Veinte.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo primero, cita: "El presente reglamento se expide con fundamento en el artículo treinta y

siete, fracción primera del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, y tiene como finalidad regular el funcionamiento interno de la Comisión de Radiodifusión. Su contenido es de observancia obligatoria para todos sus integrantes". Veintiuno.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo segundo, refiere: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis, fracción cuarta del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, la Comisión de Radiodifusión es considerada como comisión permanente y será competente para llevar a cabo las actividades que establece el artículo treinta y siete del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro". Veintidós.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo once, indica: "La Comisión tendrá a su cargo la elaboración y remisión al Consejo General de los dictámenes derivados del ejercicio de sus funciones, para someterlos a su consideración, en los casos que así se requiera. Veintitrés.- Que en sesión ordinaria de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro, celebrada el veintidós de junio del año en curso se trataron entre otros

asuntos, los relativos al cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales, respecto de las publicaciones realizadas en los siguientes medios de comunicación y días de publicación. Inciso a).- Periódicos Noticias, Diario de Querétaro y El Corregidor, de fecha quince de junio de dos mil nueve, elaborada por el maestro José Luis Ruiz Gutiérrez de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Inciso b).- Periódico Diario de Querétaro, de fecha quince de junio de dos mil nueve, elaborada por La Compañía Periodística del Sol de Querétaro sociedad anónima de capital variable. Inciso c).- Periódicos A. M. y Noticias, de fecha trece de junio de dos mil nueve, elaborada por el Colegio Queretano de Economistas. Veinticuatro.- Que en la sesión mencionada en el considerando anterior se emitieron los respectivos dictámenes, en el siguiente sentido. La encuesta publicada en los periódicos Noticias, Diario de Querétaro y El Corregidor, de fecha quince de junio de dos mil nueve, elaborada por el maestro José Luis Ruiz Gutiérrez de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, no cumple con las disposiciones y

criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización. La encuesta realizada por de Diario de Querétaro, de fecha quince de junio de dos mil nueve, elaborada por La Compañía Periodística del Sol de Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable, cumple con las disposiciones y criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. El sondeo realizado por los periódicos A. M. y Noticias, de fecha trece de junio de dos mil nueve, elaborada por el Colegio Queretano de Economistas, cumple con las disposiciones y criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. Veinticinco.- Que en sesión ordinaria de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro, celebrada el trece de junio del año en curso se trataron entre otros asuntos, los relativos al cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales, respecto de las siguientes personas morales. Inciso a).- Sondeo realizado por "Grupo Autovoto" de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, sobre la

preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de gobernador. Inciso b).- Sondeo realizado por el "Colegio Queretano de Economistas asociación civil.", de fecha diecisiete y dieciocho de junio de dos mil nueve, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de gobernador. Inciso c).- Encuesta realizada por el "veinticuatro, tres, sesenta y cinco, Agencia Política", de fechas veintidós y veintitrés de junio del presente año, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Inciso d).- Encuesta realizada por "Inteligencia Dirigida, Sociedad Civil", de fechas veinte de junio del presente año, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Veinticinco.- Que en la sesión mencionada en el considerando anterior se emitieron los respectivos dictámenes, en el siguiente sentido. El realizado por "Grupo Autovoto", cumple con las disposiciones legales y con la mayoría de de los criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. El realizado por "Colegio Queretano de

Economistas asociación civil", cumple con las disposiciones legales y con la mayoría de los criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. El realizado por "veinticuatro, tres, sesenta y cinco, Agencia Política", cumple con las disposiciones y criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. El realizado por "Inteligencia Dirigida, Sociedad civil", cumple con las disposiciones y criterios generales de carácter científico en su elaboración y realización; con las observaciones mencionadas en el punto cuatro de los considerandos. Con base en las consideraciones anteriores y con apoyo en lo dispuesto por el artículo cuarenta y uno, primero y segundo párrafos, ciento dieciséis, fracción cuarta, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro; uno, dos, veintiuno, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y cinco, fracción trigésima primera; noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, fracción primera,

ciento dos, fracción primera, ciento trece, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; uno, veinticinco, veintiséis, fracción cuarta; treinta y siete, fracciones décima primera. Décima tercera y décima cuarta del Reglamento Interior del Instituto; uno, dos, once del Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto, éste Consejo General tiene a bien expedir el siguiente acuerdo. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer, resolver y aprobar los dictámenes que determinan, en su caso, el cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de opinión sobre asuntos electorales, respecto de las publicaciones, sondeos y encuestas realizadas. Inciso a).- Encuesta elaborada por el maestro José Luis Ruiz Gutiérrez de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y publicada por los periódicos: Noticias, Diario de Querétaro y El Corregidor, en fecha quince de junio de dos mil nueve. Inciso b).- Encuesta elaborada por La Compañía Periodística del Sol de Querétaro, sociedad anónima de capital variable y publicada por periódico Diario de Querétaro, en fecha quince de junio de dos mil nueve.

Inciso c).- Sondeo elaborado por el Colegio Queretano de Economistas y publicada por periódicos: A.M. y Noticias, en fecha trece de junio de dos mil nueve. Inciso d).- Sondeo realizado por "Grupo Autovoto" de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de gobernador. Inciso e).- Sondeo realizado por el "Colegio Queretano de Economistas, asociación civil", de fecha diecisiete y dieciocho de junio de dos mil nueve, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de gobernador. Inciso f).- Encuesta realizada por "veinticuatro, tres, sesenta y cinco, Agencia Política", de fechas veintidós y veintitrés de junio del presente año, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Inciso g).- Encuesta realizada por "Inteligencia Dirigida, Sociedad Civil", de fecha veinte de junio del presente año, sobre la preferencia electoral de los ciudadanos para el cargo de Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Segundo.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aprueba los dictámenes que determinan, en su caso, el cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables en encuestas y sondeos de

opinión sobre asuntos electorales, que se citan en el resolutivo que antecede, los que como anexos forman parte del presente dándose por reproducidos en su integridad para todos los efectos legales. Tercero.- Remítase copia certificada del presente acuerdo, así como de los dictámenes correspondientes, a los medios de comunicación que los publicaron; a las personas morales y físicas que los realizaron, a fin de que en lo subsecuente cumplan con las observaciones que en los dictámenes se realizan, autorizando para que practiquen indistintamente dicha diligencia al licenciado Pablo Cabrera Olvera, maestro Oscar José Serrato Quillo y Javier Afif Musiate Córdova, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro. Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los treinta días de junio del dos mil nueve. Damos fe. El ciudadano Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor.

¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... A favor. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para aprobar el presente acuerdo, Presidenta. Firman el presente acuerdo la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del octavo punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que aprueba el dictamen, que determina la procedencia de la autorización para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral, correspondientes al proceso electoral local dos mil nueve, solicitada por las personas morales:, Consulta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Arias, Asiain Asociados en Investigación, Sociedad Civil, Licea Servicios Integrales en Opinión, Sociedad Civil, Mendoza Blanco & Asociados, Sociedad

Civil, Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, Sociedad Civil de Capital Variable, Inteligencia Dirigida, Sociedad Civil, Tendencia IM, Sociedad Civil, y la persona física Jorge Luis Sierra Heredia. Antecedentes. Primero.- En doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, mediante la cual se otorga al Instituto Electoral de Querétaro el rango constitucional de organismo público autónomo, estableciéndose que será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño. Segundo.- En treinta y uno de marzo de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Constitución Política del Estado de Querétaro, en la que se reformó el artículo treinta y dos, el cual entró en vigor al día siguiente; asimismo, en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaída en la acción de inconstitucionalidad setenta y seis diagonal dos mil ocho y sus

acumulados setenta y siete diagonal dos mil ocho y setenta y ocho dos mil ocho, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el citado periódico oficial la modificación ordenada por el Máximo Tribunal del País, al segundo párrafo del artículo treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la cual entró en vigor al día siguiente. Tercero:- En cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ordenamiento que regula los derechos político-electorales de los ciudadanos; la organización, constitución, fusión y registro de las organizaciones y partidos políticos estatales; la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos en el Estado; de igual manera, el sistema de medios de impugnación, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Cuarto:- En diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, treinta de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil dos, treinta de septiembre y uno de octubre de dos mil cinco, veinte de octubre y diecisiete de noviembre de

dos mil seis, once de abril, trece y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", las leyes que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Quinto.- En veinte y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Considerando. Uno.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarenta y uno, primer párrafo, señala: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El párrafo segundo cita: "La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas". Dos.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo ciento dieciséis, establece: "Los

Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a la siguientes normas''; la fracción cuarta, señala: ''Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que''; y el inciso b) cita: ''En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad''; el inciso c) cita: ''Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones''. Tres.- Que la Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo treinta y dos, señala: ''El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales. En su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores''. Cuatro: Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo uno, establece: ''La presente Ley es de orden público e

interés social; tiene por objeto reglamentar lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, la organización, constitución, fusión y registro de las instituciones políticas estatales y la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los Ayuntamientos en el Estado". Cinco.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo segundo, indica: "Las autoridades del Estado, las de los municipios, los organismos electorales y las instituciones políticas, velarán por la estricta aplicación y cumplimiento de esta Ley; promoverán la participación democrática de los ciudadanos; alentarán toda expresión que tienda a fortalecer el régimen de partidos y colaborarán con el Instituto Electoral de Querétaro en la preparación y desarrollo del proceso electoral". Seis.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo veintiuno, dispone: "Las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres años para renovar el Poder Legislativo y los ayuntamientos y cada seis años para la elección del titular del Poder Ejecutivo, mismas que tendrán lugar el primer domingo de julio del año que corresponda a la elección. El Consejo General hará la

declaratoria pública del inicio del proceso electoral ciento dos días naturales antes de la celebración de las elecciones. Dicha declaratoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 'La Sombra de Arteaga''. Siete.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo cincuenta y ocho, indica: "El Instituto Electoral de Querétaro tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el territorio del mismo, contando con órganos de dirección y operativos, dentro de la siguiente estructura: Primero.- Consejo General; Segundo.- Dirección General; Tercero.- Consejos distritales; Cuarto.- Consejos municipales; y Quinto.- Mesas directivas de casilla''. Ocho.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo cincuenta y nueve, dispone: "Son órganos de dirección del Instituto Electoral de Querétaro, el Consejo General del mismo y la Dirección General en materia operativa''. Nueve.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo sesenta, dice: "El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, equidad,

imparcialidad, objetividad e independencia rijan todas las actividades de los órganos electorales''. Diez. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo sesenta y cinco, señala: ''El Consejo General tiene competencia para''; y la fracción trigésima primera, indica: ''Dictar los acuerdos, implementar los mecanismos necesarios para la debida observancia de la ley''. Once.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y seis, cita: ''El proceso electoral está constituido por la serie de actos que realizan los organismos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, encaminados a elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley''. Doce.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y siete, refiere: ''El proceso electoral iniciará con la declaratoria que al efecto emita el Consejo General y concluye cuando sean entregadas las constancias de mayoría y haya vencido el término para la interposición de recursos o, en su caso, se emitan las resoluciones por los órganos jurisdiccionales competentes. La declaratoria se realizará ciento dos días naturales antes del primer domingo de julio del año al que

corresponda la elección''. Trece.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo noventa y ocho, indica: "Las etapas del proceso electoral son''; y la fracción primera, refiere: "La preparatoria de la elección''; la fracción segunda, indica: "La jornada electoral''. Catorce.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo ciento dos, indica: "La etapa preparatoria de la elección, inicia con la sesión del Consejo General del Instituto en que emita la declaratoria correspondiente, la que deberá efectuarse ciento dos días naturales antes del primer domingo de julio del año en que corresponda la elección y concluye al iniciarse la jornada electoral. La etapa preparatoria de la elección comprende''; y la fracción primera, cita: "La integración y funcionamiento de los órganos electorales''. Quince.- Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en el artículo ciento trece, señala: "Para la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, en el período comprendido desde el inicio de las campañas electorales y hasta dos horas después del cierre oficial de las casillas el día de la elección, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones''; y la fracción primera, cita: "La

persona física o moral u organización que solicite u ordene la publicación, deberá entregar previamente copia del estudio completo al Consejo General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, quien lo turnará a la comisión que corresponda, con la finalidad de dictaminar el cumplimiento de las disposiciones y criterios aplicables, remitiéndolo al Consejo General para que resuelva lo conducente; si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, quien lo haga deberá dar a conocer la metodología empleada y el grado de confiabilidad''; la fracción segunda, refiere: "Durante los ocho días previos a la elección y hasta dos horas después del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir, por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quienes lo hicieren quedarán sujetos a las penas aplicables a aquellos que incurran en el tipo penal previsto en el Código Penal del Estado de Querétaro''; la fracción tercera, indica: "Las personas físicas o morales u organizaciones interesadas en producir, publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias

electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones en el Estado de Querétaro, adoptarán los criterios generales de carácter científico y observarán las disposiciones que para tal efecto determine el Consejo General". Dieciséis.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo primero, cita: "El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo sesenta y cinco, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y tiene como finalidad regular el funcionamiento interno del Instituto Electoral de Querétaro". Diecisiete.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo veinticinco, refiere: "Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Consejo integrará comisiones, mismas que podrán tener el carácter de permanentes o transitorias". Dieciocho.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo veintiséis, indica: "Serán consideradas como comisiones permanentes"; y la fracción cuarta, cita: "Radio-Difusión". Diecinueve.- Que el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo treinta y siete, señala: "La Comisión de Radio-Difusión, tiene competencia para"; la fracción décima

primera, refiere: "Elaborar y rendir al Consejo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, los proyectos de dictamen derivados del ejercicio de sus funciones, que así lo requieran"; la fracción décima tercera, cita: "Elaborar y someter a la consideración del Consejo, el proyecto de criterios generales que deberán adoptar las personas físicas y morales u organizaciones interesadas en producir, publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales o las tendencias de las votaciones"; la fracción décima cuarta, indica: "Conocer los estudios que remita el Secretario Ejecutivo, derivado de la elaboración de encuestas o sondeos de opinión que sobre asuntos electorales realicen las personas físicas o morales; debiendo remitir al Consejo el dictamen respectivo para que resuelva lo procedente en términos de lo dispuesto por el artículo ciento trece, fracción primera de la Ley". Veinte.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo primero, cita: "El presente reglamento se expide con fundamento en el artículo treinta y siete, fracción primera del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, y tiene como finalidad regular el

funcionamiento interno de la Comisión de Radiodifusión. Su contenido es de observancia obligatoria para todos sus integrantes". Veintiuno.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo segundo, refiere: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis, fracción cuarta del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, la Comisión de Radiodifusión es considerada como comisión permanente y será competente para llevar a cabo las actividades que establece el artículo treinta y siete del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro". Veintidós.- Que el Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro en el artículo once, indica: "La Comisión tendrá a su cargo la elaboración y remisión al Consejo General de los dictámenes derivados del ejercicio de sus funciones, para someterlos a su consideración, en los casos que así se requiera. Veintitrés.- Que en la sesión extraordinaria celebrada el quince de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto tuvo a bien aprobar, mediante acuerdo, los Criterios Generales de Carácter Científico que deberán observar las personas físicas o morales u organizaciones que produzcan,

publiquen o difundan Encuestas o Sondeos de opinión sobre asuntos electorales desde el inicio de las campañas electorales y hasta dos horas después del cierre oficial de las casillas el día de la elección dentro del proceso electoral dos mil nueve del Estado de Querétaro. Veinticuatro.- Que particularmente en las encuestas de salida el día de la jornada electoral, se aprobaron por el Consejo General del Instituto, los criterios generales aplicables, que enseguida se citan. Encuestas de salida. Primero.- Las personas físicas o morales u organizaciones interesadas en llevar a cabo encuestas que tengan por objeto dar a conocer las tendencias de las votaciones para Gobernador, Diputados Locales, y Ayuntamientos, el día de la elección, deberán presentar su solicitud ante la Comisión de Radiodifusión, quien dictaminará con base en los criterios aprobados y sometiéndolo a la aprobación del Consejo General de conformidad con lo siguiente. Segundo.- El diseño y la metodología de la encuesta deberán respetar la libertad y el secreto del voto. Tercero.- Los encuestadores deberán portar la identificación correspondiente, se abstendrán de portar propaganda de partido político alguno y no tendrán acceso al área que ocupen las casillas, pudiendo ejecutar

su trabajo en las inmediaciones, preferentemente a treinta metros de distancia de la casilla, cuidando en todo tiempo de no confundir al electorado entre su encuesta de salida y la elección oficial. Cuarto.- No se permitirá realizar este tipo de encuestas a los partidos políticos o sus organizaciones. Quinto.- Al dar a conocer los resultados, deberá indicarse la vitrina metodológica y la advertencia de que se trata de un estudio muestral. La difusión de los resultados de estas encuestas podrá hacerse a partir de las veinte horas del domingo cinco de julio, esto es, hasta dos horas después del cierre oficial de las casillas. Sexto.- Queda prohibido difundir resultados, por cualquier medio, durante el desarrollo de las votaciones. Séptimo.- El término para solicitar autorización al Consejo General es el día veinte de junio de dos mil nueve en horas hábiles. Dos.- En la difusión de los resultados de encuestas de salida deberá de indicarse el nombre de la persona física o moral u organización que patrocinó dicha encuesta, así como la persona física o moral u organización que ordene su difusión. Tres.- Las personas físicas o morales u organizaciones responsables deberán entregar al Consejo General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, dentro de los cinco días

siguientes al de la jornada electoral, el documento que contenga el estudio completo, incluyendo resultados y diseño de la muestra. Disposiciones Generales. Primero.- Las personas físicas o morales u organizaciones responsables de las encuestas, deberán conservar en su poder todos y cada uno de los originales de los documentos, procedimientos y cuestionarios utilizados para su encuesta, hasta un mes después del día de las elecciones. En caso de haberse utilizado medios magnéticos para la recopilación de la información, el responsable deberá estar en posibilidades de presentar los programas de captura y la base de datos que se hayan generado a partir de la recopilación de dicha información. Asimismo, deberá estar en posibilidad de presentar por escrito, al Consejo General, una descripción detallada de la forma en que se realizó el trabajo de campo. Segundo.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento trece de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la difusión o publicación de los resultados de las encuestas o sondeos de opinión podrán hacerse una vez iniciadas las campañas y hasta el veintiséis de junio de dos mil nueve; o dos horas después del cierre oficial de las casillas. Es decir, entre las cero, cero, cero, uno horas del

sábado veintisiete de junio y las veinte horas del domingo cinco de julio del dos mil nueve, estará prohibida la publicación y difusión de los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Veinticinco.- Que en sesión ordinaria de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Electoral de Querétaro, celebrada el veintidós de junio del año en curso se emitió dictamen, mediante el cual se determina la procedencia de la autorización a efecto de que puedan realizar encuestas de salida para el día de la jornada electoral del proceso electoral del dos mil nueve, en virtud de cumplir con las disposiciones y criterios generales de carácter científico, las personas morales siguientes: Consulta, Sociedad Anónima de Capital Variable; Arias, Asiain Asociados en Investigaciones, Sociedad Civil; Licea Servicios Integrales en Opinión, Sociedad Civil; Mendoza Blanco & Asociados, Sociedad Civil; Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable; Inteligencia Dirigida, Sociedad Civil; Tendencia IM, Sociedad Civil; y la persona física Jorge Luis Sierra Heredia. Asimismo, en dicho dictamen se señala a las

empresas y persona física, solicitantes, su obligación de sujetarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo ciento trece de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Dictamen, solicitudes y demás documentación que como anexos forman parte integrante del presente, dándose por reproducidos en su integridad para todos los efectos legales. Con base en las consideraciones anteriores y con apoyo en lo dispuesto por el artículo cuarenta y uno, primero y segundo párrafos, ciento dieciséis, fracción cuarta, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro; uno, dos, veintiuno, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y cinco, fracción trigésima primera; noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, fracción primera; ciento dos, fracción primera; ciento trece de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; uno, veinticinco, veintiséis, fracción cuarta; treinta y siete, fracciones décima primera, décima tercera y décima cuarta del Reglamento Interior del Instituto; uno, dos, once del Reglamento de la Comisión de Radiodifusión del Instituto; así como a los Criterios Generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas o morales u

organizaciones que produzcan, publiquen o difundan encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales, que fueron aprobados por este Consejo, tiene a bien expedir el siguiente acuerdo. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer, resolver y aprobar el dictamen que determinan procedente la autorización para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral, correspondientes al proceso electoral local dos mil nueve, solicitada por las personas morales y física: Consulta, sociedad anónima de capital variable; Arias, Asiain Asociados en Investigaciones, Sociedad Civil; Licea Servicios Integrales en Opinión, Sociedad Civil; Mendoza Blanco & Asociados, Sociedad Civil; Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, Sociedad Anónima de Capital Variable; Inteligencia Dirigida, Sociedad Civil; Tendencia IM, Sociedad Civil; y Jorge Luis Sierra Heredia. Segundo.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aprueba el dictamen que determinan procedente la autorización para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral, correspondientes al proceso electoral local dos mil nueve, solicitadas por las personas morales y física,

que se citan en el resolutivo que antecede. Dictamen, solicitudes y demás documentación que como anexos forman parte integrante del presente, dándose por reproducidos en su integridad para todos los efectos legales. Tercero.- Las personas físicas y morales autorizadas se sujetarán a lo dispuesto por el artículo ciento trece de la Ley Electoral del Estado y a los criterios aprobados por este colegiado, y bajo ninguna circunstancia difundirán los resultados antes de las veinte horas del día de la jornada electoral, y quienes lo hicieren quedarán sujetos a la responsabilidad legal procedente; esta inobservancia tendrá como consecuencia, además, que le será negada en lo futuro la autorización para realizar un ejercicio similar. Cuarto.- Se instruye al Director General para que la autorización materia de este acuerdo se haga del conocimiento de los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, para su debido cumplimiento. Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los treinta días de junio del dos mil nueve. Damos fe. El ciudadano Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro,

hace constar que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación ¿Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... A favor. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para aprobar el presente acuerdo, Presidenta. Firman el presente acuerdo la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del noveno punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, partido Convergencia y otros, relativa al expediente sesenta diagonal dos mil nueve. Vistos los

autos del expediente sesenta diagonal dos mil nueve, relativo al procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, por conducto de su representante propietario el licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, ambos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia en el Estado, así como a Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a Presidente Municipal de Cadereyta de Montes Querétaro, postulado por el Partido Convergencia; por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Antecedentes. Primero.- En nueve de junio de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito de denuncia firmado por el licenciado Greco Rosas Méndez, en su carácter de representante propietario

del Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros. Segundo.- En diez de junio de dos mil nueve, el citado promovente presentó un escrito en vía de alcance a su denuncia, remitiendo copias para correr traslado a los denunciados. Tercero.- En doce de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo en el que se admitió a trámite la denuncia planteada, se ordenó la apertura del expediente sesenta diagonal dos mil nueve; se ordenó emplazar a los denunciados, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas, manifestaran lo que a su interés legal conviniera; y, se proveyó sobre las medidas cautelares solicitadas, instruyéndose al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un Notario Público, a fin de verificar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con el propósito de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraren. Cuarto.- En veintiuno de junio de dos mil nueve, se tuvo por precluído el derecho del Partido Convergencia, así como del ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, postulado por el citado partido, para ofrecer medios de prueba dentro de este procedimiento, al no haber

comparecido para contestar las imputaciones que le fueron atribuidas, dentro del plazo que se le concedió para tal efecto. Quinto.- En veintitrés de junio de dos mil nueve, se tuvo al licenciado Hiram Rubio García en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, contestando en tiempo y forma la denuncia, ofreciendo medios de prueba para sustentar su dicho. Sexto.- En veinticuatro de junio de dos mil nueve, se tuvo a los ciudadanos Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, Orlando Muñoz Flores candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal, todos del Partido Revolucionario Institucional del Municipio del citado municipio, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se les atribuyeron, realizando las manifestaciones que estimaron pertinentes, y ofreciendo los medios de convicción que indicaron en su escrito. Séptimo.- En veinticinco de junio de dos mil nueve, se agregó a los autos la escritura pública once mil cuatrocientos treinta y ocho, de diecisiete de junio de dos mil nueve, pasada ante la fe del

Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Uno, de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro; y, se abrió la causa en su periodo probatorio. Octavo.- En veintisiete de junio de dos mil nueve, se proveyó sobre la admisión y desechamiento de los medios de prueba aportados por las partes; se ordenó el cierre del periodo probatorio; se pusieron los autos en estado de resolución, en virtud de haberse agotado las fases de este procedimiento y no encontrarse medio de prueba pendiente de acordar; finalmente, se instruyó la elaboración del proyecto respectivo. Presupuestos procesales, competencia.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarto, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, fracción primera, y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera, siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento

Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera, siete, dieciséis y treinta y uno, párrafo segundo del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador el Instituto Electoral de Querétaro. Personería.- Las partes acreditaron la personería con la que se ostentan dentro del presente procedimiento sancionador electoral. Esto es así debido a lo siguiente. El representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, y el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Hiram Rubio García, demostraron tener legitimación ad processum para comparecer con el carácter que se adjudicaron, en virtud de que sus respectivos nombramientos obran dentro del registro que para tal efecto se llevan en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en

términos de los artículo sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y quince, último párrafo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Los ciudadanos Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, Orlando Muñoz Flores candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal, todos del Partido Revolucionario Institucional del Municipio del citado municipio, en su escrito de contestación manifestaron tener el carácter con el que se ostentan, circunstancia que se tiene por demostrada en razón del reconocimiento expreso que formularon, acorde con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro; aunado a que la misma se aprecia de los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en términos del artículo sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Por último, en relación al Partido Convergencia en el Estado, y al candidato ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, se tiene por acreditada su personería, en

virtud de que, si bien no comparecieron al procedimiento, a pesar de haber sido debidamente emplazados, según se aprecia de las constancias de notificación que obran en el sumario; dicha situación se aprecia de los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en términos del artículo sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Vía.- La vía propuesta por el denunciante fue la correcta. En su escrito de denuncia expresamente manifestó: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos treinta y dos, fracción primera y ciento diez, fracción primera; doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; y uno, tres, cinco, siete, once al quince y demás relativos y aplicables del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, vengo a denunciar a". Atendiendo a la naturaleza jurídica de la denuncia, consistente en hechos probablemente constitutivos de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, en razón de que, el Titulo Tercero "Del régimen sancionador electoral disciplinario interno", Capitulo Tercero "Del procedimiento especial", de la Ley Electoral del Estado de

Querétaro, es claro en ordenar que durante proceso electoral se seguirán por este tipo de vía, las denuncias que se formulen con motivo de la presunta comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, lo cual se encuentra descrito concretamente en el artículo doscientos treinta y dos, fracción segunda, situación que se encuentra reforzada en el ordinal cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que establece los supuesto para la instrumentación del procedimiento especial. Por lo tanto, válidamente se puede concluir que el procedimiento sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite. Resumen de los actos denunciados, puntos controvertidos y fijación de la litis. El denunciante se duele de que en el municipio de Cadereyta de Montes Querétaro, se encuentra diversa propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional y el partido Convergencia, específicamente lonas de vinil y gallardetes de plástico, sujetados de árboles adyacentes a las vialidades y equipamiento urbano de esa cabecera

municipal, así como a los postes de madera y concreto que se utilizan para el tendido del cableado eléctrico, en las calles Madero, Hidalgo, Zaragoza y Ocampo, circunstancia que considera actos presuntamente constitutivos de infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral del Estado. Por su parte el licenciado Hiram Rubio García, con el carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación solamente manifiesto que ya habían sido retiradas tanto las lonas, como los gallardetes referidos en el acuerdo que admitió este procedimiento. A su vez, los ciudadanos Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, Orlando Muñoz Flores candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal, todos del Partido Revolucionario Institucional del Municipio del citado municipio, en su escrito de contestación señalaron que los hechos que se les atribuyeron son parcialmente ciertos, ya que efectivamente sí se colocó la propaganda en los lugares indicados en la denuncia, en virtud de un error cometido

por el personal encargado de colocar propaganda, por lo que se procedió al retiro inmediato de la propaganda denunciada. Por su parte el partido Convergencia en el Estado y el candidato a la Presidencia municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Miguel Ángel Leal Cisneros, fueron omisos en dar contestación a la denuncia, pese a que fueron debidamente emplazados, por lo que se declaró precluído su derecho a ofrecer medios de prueba, sin que tal omisión generará presunción alguna respecto a la veracidad de los hechos denunciados. Considerando. Uno.- Por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria; corresponde al denunciante la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que funde su pretensión; más aún en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la vía especial, acorde con la hipótesis prevista por el ordinal trece del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para el denunciante; en cambio, rige a favor de los denunciados el

principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegaron una conducta infractora. Segundo.- Valoración del material probatorio, en autos existen los medios de prueba que a continuación se describen, los cuales fueron allegados al procedimiento por las razones que igualmente se indican, y que son tomados en consideración para emitir la presente resolución, con base en el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que debe valorarse la fuerza convictita de los medios de prueba, teniendo como finalidad el esclarecimiento de la verdad, en relación con las pretensiones de todas las partes en conflicto y no solo del oferente, puesto que el procedimiento sancionador electoral se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. En tal sentido cobra aplicación la jurisprudencia J. diecinueve diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuarta época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, con el rubro: "Adquisición procesal en materia electoral. El Partido Acción

Nacional, en su carácter de denunciante, ofreció por conducto de su representante propietario, un medio de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en su escrito de denuncia, consistente en la escritura pública nueve mil doscientos ochenta y cuatro, de veintinueve de mayo de dos mil nueve, con respaldo fotográfico, elaborada por el Notario Público Titular de la Notaria Dos, de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno, acorde con los artículos treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, para acreditar la existencia de lonas y gallardetes de los partidos denunciados, colocados en la infraestructura urbana de la cabecera municipal del municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". En otro aspecto, el licenciado Hiram Rubio García, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, todos del Partido Revolucionario Institucional, ofrecieron las pruebas técnicas que señalaron en sus respectivos escritos de contestación. Adicionalmente, fueron coincidentes en referir que se colocaron las lonas y gallardetes denunciados, pero que ya las habían retirado como consecuencia

de la prevención que les fue realizada en el emplazamiento al presente procedimiento especial; pruebas que merecen valor probatorio de indicio en lo individual y pleno en su conjunto, para acreditar la existencia de la referida publicidad; de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción tercera, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en pruebas técnicas, que enlazados entre sí de acuerdo a un recto raciocinio, generan convicción sobre la verdad de los hechos en ellos descritos, al concatenarse con las afirmaciones vertidas tanto por el denunciante, como por los denunciados. Por otra parte, el Partido Convergencia en el Estado y el ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a la Presidencia municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, postulado por dicho partido, al ser omisos en dar contestación a la denuncia, se les tuvo por precluído su derecho a ofrecer medios de prueba, en aplicación del artículo veintiocho, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador

del Instituto Electoral de Querétaro: En atención a la medida cautelar otorgada en autos, mediante acuerdo del once de junio de dos mil nueve, en el que se instruyó al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un Notario Público, a fin de verificar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con el propósito de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran; en veinticinco de junio de dos mil nueve, se agregó a los autos, la escritura pública once mil cuatrocientos treinta y ocho, de diecisiete de junio de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Uno, de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro: Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar la existencia de: a) cinco gallardetes del Partido Revolucionario Institucional colocados en la calle Hidalgo; b) doce gallardetes del Partido Revolucionario Institucional colocados en la calle Hidalgo; c) dos mantas de aproximadamente tres metros por uno treinta metros del Partido Revolucionario Institucional colocadas en la calle Ocampo; d) tres gallardetes del Partido Revolucionario Institucional colocados en la calle Madero; y, e) un gallardete del partido

Convergencia colocado en la calle Madero; de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera, cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. Asimismo, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, mil novecientos noventa y siete, guión, dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". Al tenor de los datos que a continuación se detallan. Inciso a).- En la esquina que forman las calle de

Miguel Hidalgo y Cinco de Mayo, en el Poste de energía eléctrica se encuentra colocado un gallardete de plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso b).- En la misma direcci6n, en el poste de teléfonos, a un costado de la casa marcada con el número sesenta y ocho de la calle de Miguel Hidalgo, a la altura de la Escuela Primaria "Encarnación Cabrera", se encuentra un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso c).- En la esquina que forman las calle de Miguel Hidalgo y Felipe Ángeles, en el lado de la Plazuela de la Iglesia de 'San Gaspar, sobre el poste de teléfonos, se encuentra un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario institucional "Abelardo Ledesma". Inciso d).- Sobre la misma calle de Miguel Hidalgo, al inicio del domicilio que ocupa la Supervisión Escolar de Preescolar de a zona cuarenta y cuatro de San Joaquín-Cadereyta, sobre el poste de teléfono, se encuentra un gallardete de plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto

Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso e).- A unos cuantos metros mas adelante y sobre la acera contraria a la altura de la Miscelánea "Cristian", sobre el Poste de energía eléctrica, se encuentra un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Acto seguido, y siendo las dieciocho horas con seis minutos del día, procedimos a realizar el recorrido sobre la calle de Ignacio Zaragoza, con dirección poniente al oriente y norte, es decir, del barrio La ermita hacia la carretera federal ciento veinte, San Juan del Río-Xilitla, comenzando a la altura de la calle principal que conduce hacia fuentes y pueblo nuevo, en donde se puede apreciar lo siguiente. Inciso a).- A la altura del camino principal hacia el barrio de fuentes y pueblo nuevo, sobre la misma calle de Ignacio Zaragoza, sobre el poste de energía eléctrica se puede apreciar un gallardete de plástico del candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso b).- Sobre la misma acera del lado sur, a la altura del domicilio marcado con el

numero cuarenta y ocho guión A, cuarenta y ocho guión letra "A", sobre el poste de energía eléctrica se puede ver un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario institucional "Abelardo Ledesma". Inciso c).- En el mismo sentido, en el lote baldío ubicado entre los domicilios marcados con los números cuarenta y nueve y cincuenta, sobre el poste de energía eléctrica se puede apreciar un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso d).- Asimismo, y a la altura de una construcción nueva con cortinas de acero color verde, sin numero oficial, sobre el poste de teléfonos, se verifica la colocación de un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso e).- Sobre la misma vialidad a la altura de la casa marcada con el número cuarenta y uno, sobre el poste de energía eléctrica, se verifica la instalación de un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional

"Abelardo Ledesma". Inciso f).- Mas adelantes sobre la misma acera, frente a la casa marcada con el número treinta y uno en el que aparece pintada publicidad del Partido del Trabajo, sobre el poste de energía eléctrica se encuentra colocado un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso g).- En la esquina del lado sur que forman las calles de Ignacio Zaragoza con calle Revolución, frente a la Sastrería "Mendoza", se aprecia que en el poste de energía eléctrica se ha colocado un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso h).- En la esquina opuesta del lado norte a la que se refiere el punto que antecedente, sobre el poste de energía eléctrica se aprecia un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso i).- A la altura de la casa marcada con el número veintitrés, sobre el poste de energía eléctrica se encuentra un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto

Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso j).- A la altura de la casa marcada con el número diecisiete, sobre el poste de energía eléctrica, se encuentra un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso k).- Asimismo, sobre el poste de teléfono que se ubica en la esquina que forman la calle de Ignacio Zaragoza con Santos Degollado, se encuentra un gallardete de plástico del candidato a Diputado Local por el décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso l).- Asimismo, sobre el poste de teléfono que se ubica en la esquina que forman la calle de Ignacio Zaragoza con Guadalupe Victoria frente al templo de nuestra Señora del Refugio, se encuentra un gallardete de plástico del candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito por Parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Acto seguido, y siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día, procedimos a realizar el recorrido sobre la calle de Melchor Ocampo; con dirección norte al sur; comenzando por la carretera Federal

ciento veinte, San Juan del Río-Xilitla hasta la Calle Revolución, en donde se puede apreciar únicamente la colocación de una manta de medias aproximadas de tres metros por un metro con treinta centímetros, colocada a la altura de la central de autobuses de esta Ciudad de Cadereyta de Montes, Estado de Querétaro, y que corresponde a propaganda política del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma'', misma que está sujeta a un poste de energía eléctrica y uno de telefonía. Enseguida, y siendo las dieciocho treinta horas con treinta minutos del día, procedimos a recorrer la calle de Francisco I. Madero, en dirección de sur a norte, partiendo de la calle de Miguel Hidalgo hasta la calle de José María Morelos en un primer tramo, en el cual se pudo verificar que a la altura de la negociación mercantil "Nutrimentos Purina", sobre el poste de energía eléctrica, se encuentra colocado un gallardete de plástico del candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". En un segundo recorrido por esta misma vialidad de Francisco I. Madero en atención a la circulación vehicular, se

realiza en sentido de Norte a Sur, de la Carretera Federal ciento veinte San Juan del Río-Xilitla, con dirección a la calle José María Morelos, en donde se puede apreciar la siguiente propaganda. Inciso a).-A la altura de la esquina que forma la Carretera Federal ciento veinte, San Juan del Río- Xilitla, con la calle Francisco I. Madero, del lado del "Conjunto Condominal Comercial Cadereyta", sobre el poste de energía eléctrica se puede apreciar un gallardete de Plástico del Candidato a Presidente Municipal por el Partido denominado Convergencia, "Miguel Leal". Inciso b).- Sobre la misma acera frente ala negociación mercantil denominada "Novedades Vázquez", frente al local marcado con el numero cuarenta y nueve guión letra "B", sobre el poste de teléfono se puede ver un gallardete de plástico del candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Inciso c).- A la altura de la negociación mercantil denominada "La Florecita", se encuentra colocada una manta de medias aproximadas de tres metros por un metro con treinta centímetros, y que corresponde a propaganda política del Candidato a Presidente Municipal por el Partido denominado

Partido Revolucionario Institucional Orlando Muñoz". Inciso d).- Mas adelante, frente a la negociación mercantil denominada "Envolturas y Regalos Ghost", marcado con el numero treinta y cinco, sobre el poste de energía eléctrica se puede ver un gallardete de Plástico del Candidato a Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional "Abelardo Ledesma". Puesto que, valorar cualquier medio de convicción, consiste no solamente en decidir si fue debidamente ofrecido, admitido, preparado y desahogado, sino concederle o negarle la posibilidad de demostrar determinados hechos, atendiendo al valor con que lo tasa la normatividad aplicable. Tales aseveraciones tienen razón de ser en la jurisprudencia J punto cuarenta y cinco diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento ochenta y seis guión ciento ochenta y siete, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "pruebas documentales. Sus alcances". Así también en lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia,

en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". Tercero:- Se acredita el nexo de causalidad entre la hipótesis normativa específica y el hecho fáctico concreto, en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Convergencia. Se corrobora la existencia de un enlace causal entre la conducta consistente en la colocación de propaganda partidista referente a la colocación de gallardetes promocionales y mantas promocionales de los partidos Revolucionario Institucional, Convergencia, sus candidatos, y la exigibilidad jurídica o juicio de reproche, de atribuir dicha actuación, en autoría material e intelectual, al Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia, y a sus candidatos, respectivamente. Se explica. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario licenciado Hiram Rubio García, al rendir su contestación, literalmente manifestó en la única foja de su escrito: Que vengo por medio del presente escrito y encontrándome dentro

del término concedido a hacer de su conocimiento que han sido retirados tanto las lonas como los gallardetes para lo cual anexo las fotografías correspondientes". Por otra parte Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia municipal por el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, y Juan Francisco Gutiérrez Vega Presidente del Comité Directivo Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, todos del Partido Revolucionario Institucional del municipio, al rendir su contestación, literalmente manifestaron a foja uno de su escrito. Es parcialmente cierto ya que efectivamente sí se colocó la propaganda en los lugares que señala, pero lo anterior y bajo protesta de decir verdad manifestamos que se debió a un error de los ciudadanos Marcelino Santibáñez Marín y Byron Orlando Olvera Alvarado, que es (sic) la persona que se encargan (sic) de colocar la propaganda, lo que se presume del hecho de que fue en los únicos lugares donde se colocó y no en la totalidad del equipamiento; amén de lo anterior de manera inmediata se procedió a retirar la propaganda materia de la presente denuncia, tal y como lo acredito (sic) con las fotografías que

anexo''. De lo transcrito se puede advertir el reconocimiento expreso que realiza el Partido Revolucionario Institucional en el Estado, los citados candidatos, así como el Presidente del Comité Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, del aludido partido, sobre la colocación de gallardetes promocionales y mantas promocionales del Partido Revolucionario Institucional, y de sus candidatos en diversas calles de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, lo cual se traduce en una confesión de los actos denunciados, situación que no se encuentra sujeta a prueba ni objeción alguna, por disposición del artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Más aún porque la autoría de los promocionales de mérito, no ha sido motivo de controversia por parte del partido denunciado. El partido Convergencia en el Estado, y el ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, postulado por el referido partido, fueron omisos en la contestación de la denuncia, a pesar de haber sido debidamente emplazados; en consecuencia, no controvirtieron la autoría de los promocionales objeto del presente procedimiento. Aunado a que,

tal y como se aprecia de las escritura públicas que obran en autos, las cuales ya han sido valoradas en párrafos precedentes, consideraciones que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, en abrevio de repeticiones infructuosas, en atención al principio de economía procesal; la propaganda en análisis, contiene el emblema del Partido Convergencia. Quinto:- Estudio de fondo del análisis minucioso de la litis, se advierte que el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, aduce esencialmente que: en la cabecera Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, los partidos Revolucionario Institucional y Convergencia, así como sus candidatos colocaron mantas y gallardetes propagandísticos en la infraestructura urbana de dicho lugar. Toda vez que la litis a resolver se centra en determinar si la colocación de tales promocionales son violatorios de la normatividad electoral, conviene citar el artículo ciento diez, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que establece: "En la fijación, colocación y retiro de la propaganda electoral, los partidos políticos y las coaliciones se sujetarán a las siguientes reglas. Podrá colgarse en bastidores y mamparas, siempre que no se dañe, ni se impida la

visibilidad de conductores de vehículos o peatones o que corran algún riesgo. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, incluyendo los postes utilizados para la infraestructura del servicio telefónico y de electricidad". Del numeral transcrito se advierte que, existe una prohibición expresa para la colocación de la propaganda de los partidos políticos y los candidatos en sus campañas, contravenir tal disposición legal coloca a las instituciones y candidatos en violaciones a la normatividad electoral en dos vertientes. Así, en el caso concreto, la conducta de los partidos políticos y candidatos denunciados, encuadra dentro de la hipótesis legal, y trae como consecuencia la aplicación en su perjuicio, de las sanciones que contempla la normatividad electoral con motivo de dicha transgresión, porque contrariamente a lo afirmado por los denunciados "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento". Puesto que los actos prohibidos por la norma electoral y denunciados por el Partido Acción Nacional, han sido demostrados plenamente, al tenor de las documentales públicas que obran en actuaciones, y su atribución subjetiva ha sido fehacientemente acreditada, según lo argumentado en considerandos precedentes. Sexto.- Suspensión

definitiva como se advierte de la contestación a las imputaciones que realizaron tanto el Partido Revolucionario Institucional en el Estado, como los ciudadano Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, todos del Partido Revolucionario Institucional, los gallardetes y mantas de sus candidatos han sido retirados, tal y como lo acreditan con las pruebas técnicas que anexaron, consistentes en la impresión de imágenes digitalizadas; en la especie no se aprecia la necesidad de ordenar la suspensión definitiva de dicha propaganda, dado que la misma fue cumplida voluntaria y espontáneamente por los aludidos denunciados. Sin embargo, respecto de la propaganda colocada por el Partido Convergencia en el Estado, y por el ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, postulado por dicho instituto político, identificada en el considerando segundo, punto cuarto de esta resolución, al contravenir la normatividad

electoral en los términos que se han expuesto, este Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, como garante de velar y salvaguardar el desarrollo periódico y pacífico del proceso electoral, ante la presencia de publicidad que violenta el orden jurídico vigente y la posibilidad de producir afectación al desarrollo del proceso electoral, resulta incuestionable que esta obligado a tomar las medidas que resultaran necesarias para restaurar el orden jurídico electoral violado. Consecuentemente, se ordena la suspensión inmediata de dicha propaganda en definitiva. Esto con independencia de la sanción que por la comisión de infracciones administrativas se hace acreedor el partido Convergencia y su candidato. Instrúyase el envió de copia autorizada de la presente resolución, mediante oficio dirigido al Ayuntamiento Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su recepción, cumplimente la suspensión definitiva determinada, y tenga a bien informar a esta autoridad electoral al respecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias comprobatorias pertinentes. En el entendido que, el Partido Convergencia, deberá cubrir las erogaciones que cause al

Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro, con motivo de los gastos que realicen por la suspensión de sus promocionales. Séptimo.- Individualización de la sanción a efecto de proceder a la individualización de la sanción, se toman en cuenta las siguientes consideraciones. Es necesario puntualizar que, los partidos políticos y sus candidatos se encuentran vinculados jurídicamente a conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. Como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden, existieron infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, por parte del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, de los ciudadano Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, y Juan Francisco Gutiérrez Vega, Presidente del Comité Directivo Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, todos del Partido Revolucionario Institucional; así como por parte

del Partido Convergencia en el Estado y del ciudadano Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a la presidencia municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro; pues como ha quedado acreditado durante la prosecución del procedimiento sancionador, se aportaron suficientes elementos para comprobar las violaciones que se les atribuyeron. En este orden de ideas, el partido político denunciado, debe ser sancionado por la comisión de infracciones que redundan en el incumplimiento de la disposición contenida en el artículo ciento diez, primer párrafo, fracción primera y doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. En esa vertiente, tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que, por llevar implícito el ejercicio del ius puniendi, comúnmente conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir,

limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en lo relativo a la imposición de sanciones, adopta la postura del aforismo romano nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos, uno, tres y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe. Inciso a).- Un principio de reserva legal, así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción. Inciso b).- El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho. Inciso c).- La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita,

abstracta, general e impersonal, a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad. Inciso d).- Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta -odiosa sunt restringenda-, porque el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre debe ser acotado y muy limitado, por cuanto los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos, en atención a los principios indubio pro cive y favor libertatis. Asimismo, el ius puniendi, consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta -imputación subjetiva. Entonces, las

circunstancias sujetas a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para fijar la sanción que corresponda a los partidos políticos y a los candidatos, por las irregularidades cometidas, comprende tanto a las de carácter objetivo: la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar, como a las subjetivas: el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia, el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia que rodean a la contravención de la norma administrativa. Lo argumentado encuentra sustento en la jurisprudencia J punto cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, con el rubro: "Régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". Y en la jurisprudencia J punto veinticuatro diagonal dos mil tres, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a páginas veintiocho guión veintinueve, del suplemento siete de la Revista Justicia Electoral dos mil cuatro, cuyo rubro es: "sanciones administrativas en materia electoral. elementos para su fijación e

individualización''. Por tal motivo, una vez acreditadas las infracciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Convergencia y por los multicitados candidatos de ambos partidos, y su atribución subjetiva, con base en las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad electoral determina que las faltas cometidas por los denunciados, son de orden particularmente leve, porque se ponderan las circunstancias del caso específico que han sido materia de estudio, en atención al principio de equidad, que implica considerar las condiciones especificas, que imperan en el contexto de la materialización de la conducta reprochable. En esa óptica, con fundamento en los artículos doscientos veinticuatro de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, siguiendo una adecuada técnica jurídica, de acuerdo a la conjugación de los siguientes elementos: a) la gravedad de las irregularidades cometidas, b) las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron llevadas a cabo, c) la lesión causada a bienes jurídicamente tutelados, d) medios de ejecución empleados, e) las condiciones

externas y socioeconómica del infractor, f) grado de intencionalidad, y g) situación de reincidencia, que no fue materia de la denuncia de mérito. Es decir, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, ponderando la magnitud de afectación que se le irrogaría, para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en la contienda del proceso electoral dos mil nueve, en fechas cercanas a la jornada comicial, se determina un grado de reprochabilidad situado en el punto mínimo del catalogo de sanciones, para los denunciados. Esto quiere decir que, de entre la graduación existente, a saber, de entre las sanciones previstas por el artículo treinta y cinco del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, este Consejo General considera procedente la sanción contemplada en la fracción primera del artículo invocado, consistente en amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional en el ámbito estatal y municipal, al partido Convergencia y a los candidatos de ambos partidos. Siendo aplicables por identidad jurídica sustancial, los lineamientos establecidos en la jurisprudencia S tres ELJ cero nueve diagonal dos mil nueve,

sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a páginas veintinueve guión treinta de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Arbitrio para la imposición de sanciones. Lo tiene el Consejo General del Instituto Federal Electoral". Lo anterior, por ser ambos órganos gubernativos: el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autoridades administrativas electorales, encargadas de la organización de los comicios electivos, así como de la imposición de sanciones por infracciones administrativas en la materia; esto es, con la misma naturaleza institucional y facultades, aunque claro, en distintos ámbitos de competencia. Por ende, formúlese formal amonestación pública a los partidos Revolucionario Institucional y Convergencia, así como a los referidos candidatos de ambos partidos, por el incumplimiento de las normas que regulan la propaganda electoral, apercibidos que de repetir las conductas infractoras en sentido similar, se le considerará reincidentes, y en caso de ser conducente, se les aplicaran sanciones más severas.

Así, el Consejo General de este instituto, asumiendo la responsabilidad que le ha sido conferida por la ciudadanía, de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones electorales, así como ajustar su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad; sanciona a los partidos infractores y a sus candidatos en los términos indicados. Fundamentos de la resolución. De conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro; uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y siete, fracciones octava, décima primera, décima tercera y décima cuarta; ciento siete, fracción tercera; ciento diez, primer párrafo y fracción primera, ciento veintidós, fracción primera, inciso a) y fracción segunda, inciso a), doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; uno, ocho, veintitrés, párrafo primero, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta y uno y sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro; uno, dos, tres,

cinco, fracción tercera, siete, ocho, nueve, once, fracción primera; trece, veinticuatro, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, fracción primera y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, por conducto de su representante propietario el licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, ambos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia en el Estado, así como a Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a Presidente Municipal de

Cadereyta de Montes Querétaro, postulado por el Partido Convergencia; por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Segundo.- Se acreditaron en autos las conductas atribuidas al Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, ambos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia en el Estado, así como a Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a Presidente Municipal de Cadereyta de Montes Querétaro, postulado por el Partido Convergencia; en lo tocante a las detalladas en el considerando segundo, punto cuarto de esta resolución, con apoyo en las argumentaciones contenidas en el considerando quinto, de esta resolución; por ende, procede sancionar a los partidos y candidatos denunciados, consecuentemente, se aplica formal amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Comité

Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, Orlando Muñoz Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Abelardo Antonio Ledesma Fragoso, candidato a diputado local por el Décimo Cuarto Distrito, ambos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia en el Estado, así como a Miguel Ángel Leal Cisneros, candidato a Presidente Municipal de Cadereyta de Montes Querétaro, postulado por el Partido Convergencia, por el incumplimiento de las normas que regulan la propaganda electoral, apercibidos que de repetir las conductas infractoras en sentido similar, se le considerará reincidentes, y en caso de ser conducente, se le aplicaran sanciones más severas. Tercero.- Se ordena la suspensión inmediata, de la propaganda identificada en el considerando segundo, punto cuarto, de esta resolución, en definitiva, conforme a los términos y para los efectos precisados en el considerando sexto; asimismo, se ordena remitir al Ayuntamiento Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro el oficio correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, cumplimente la suspensión definitiva determinada, y

tenga a bien informar a esta autoridad electoral la ejecución al respecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias comprobatorias pertinentes. En el entendido que, el Partido Convergencia, deberá cubrir las erogaciones que cause al Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro, con motivo de los gastos que realicen por la suspensión de sus promocionales. Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Córdova y Mtro. Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para que practiquen indistintamente dicha diligencia. Quinto.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A

favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... En contra. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos seis votos a favor y uno en contra para aprobar la presente resolución, Presidenta. Firman el presente acuerdo la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del décimo punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y otro, relativa al expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve. Vistos los autos del expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve, relativo al procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario, licenciado Héctor

Gutiérrez Lara, acreditado ante el consejo distrital Décimo Segundo en el Municipio de El Marqués, Querétaro, en contra del Partido Acción Nacional y el ingeniero Jorge Lomelí Noriega, candidato a Presidente Municipal del Municipio de El Marqués Querétaro, de dicho partido político por la comisión de presuntas violaciones a las reglas que regulan la propaganda electoral. Antecedentes. Primero.- El nueve de junio del año en curso, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, el oficio CD diagonal doce diagonal ciento treinta y cinco diagonal dos mil nueve, signado por el licenciado René Montiel Salazar, Secretario Técnico del Consejo Distrital Décimo Segundo del Instituto Electoral de Querétaro con sede en el Municipio de El Marqués, por el que remitió un escrito de denuncia, firmado por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Décimo Segundo en El Marqués, Querétaro, licenciado Héctor Gutiérrez Lara, por presuntas violaciones a la normatividad electoral que describe en su ocurso. Segundo.- En once de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo mediante el cual se radicó la denuncia con el número de cuaderno treinta y

tres diagonal dos mil nueve, con motivo de que se realizaron prevenciones al promovente por deficiencias encontradas en el escrito de denuncia aludido consistentes en adjuntar documento idóneo para acreditar su personalidad, señalar el domicilio de los denunciados para su emplazamiento, relacionar las pruebas que ofrece con los hechos que manifiesta y anexar las copias de traslado pertinentes para los denunciados, en virtud de lo cual, se le señaló un plazo de veinticuatro horas para perfeccionar dichos requisitos, bajo el apercibimiento de que en caso omiso, se le tendría por no presentada la denuncia. Tercero.- En fecha quince de junio del año en curso a las diecinueve horas, se le notificó al promovente de la prevención que se le formulara, en el domicilio que él mismo señaló para su emplazamiento y notificación, identificándose a satisfacción de quien realizara la diligencia y comenzando desde esa hora a contar el plazo otorgado para perfeccionar la denuncia realizada. Cuarto.- En fecha dieciséis de junio siendo las diez horas con veintinueve minutos, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito signado por el licenciado Héctor Gutiérrez Lara, mediante el cual dio

cumplimiento al acuerdo en el que se le previno, anexando tres juegos de su escrito inicial de demanda a efecto de correr traslado, exhibiendo documento idóneo para acreditar su personalidad, señalando domicilio de los denunciados y relacionando las pruebas que ofrece con los hechos descritos en su denuncia, radicando la denuncia de mérito. Quinto.- En fecha diecisiete de junio del año en curso, visto el cumplimiento de la prevención formulada al denunciante, Secretaria Ejecutiva admite la denuncia que motivara la presente causa y acuerda la radicación del expediente sesenta y dos diagonal dos mil nueve, levantando posteriormente constancia de ello e integrando debidamente al mismo, el cuaderno número treinta y tres diagonal dos mil nueve, procediendo al emplazamiento de los denunciados en los términos requeridos para tal efecto e instruyendo la contratación de notario público para que de fe de la publicidad electoral que alude el denunciante, como medida cautelar, acordando la suspensión provisional de la propaganda electoral aludida. Sexto.- En fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, se emplaza al Partido Acción Nacional del Comité Directivo Municipal en el Marqués, Querétaro, mediante oficio de

número SE diagonal mil noventa y cinco diagonal dos mil nueve. Séptimo.- Con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, se da cuenta en Secretaria Ejecutiva del oficio número CJ diagonal cero sesenta y nueve diagonal dos mil nueve, mediante el cual el licenciado Pablo Cabrera Olvera remite el testimonio de la escritura pública mediante la cual el notario, licenciado Roberto Reyes Olvera da fe de que no existe la propaganda electoral motivo de la presente causa, asentándolo así en dicho documento, el cual se glosa al expediente que nos ocupa. Octavo.- En la misma fecha en que se desarrolla el antecedente que precede, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para emplazar al ingeniero Jorge Lomelí Noriega, candidato a Presidente Municipal del Municipio de El Marqués Querétaro, quien previo citatorio no se localizo, levantando constancia respectiva para los efectos legales a que hubiera lugar. Noveno.- El veintitrés de junio del año en curso se acuerda por la Secretaría Ejecutiva notificarle por estrados al ingeniero Jorge Lomelí Noriega, con el carácter que se le atribuye, emplazándolo. Décimo.- A las veinte horas del veintisiete de junio de dos mil nueve, se emite acuerdo que tiene por no contestados los hechos que se atribuyen a los

denunciados, habiendo perdido el derecho a manifestarse en sentido alguno sobre los mismos, sin que ello implique generar presunción sobre la veracidad de los hechos de la denuncia, y se abre la causa en su periodo probatorio por un plazo de hasta setenta y dos horas, para el desahogo de los medios de convicción que se ofrecen. Décimo primero.- A las diecinueve horas del veintinueve de junio del presente año, la Secretaría Ejecutiva, en vista de que se ha fijado la litis, y no se ha contestado la denuncia de mérito, emite acuerdo para admitir o desechar medios de prueba, cerrar el periodo probatorio y poner los autos en estado de resolución en virtud de haberse agotado las fases del procedimiento. Competencia.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, fracción primera; ciento siete, fracción segunda; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de

Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador el Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, dieciséis y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador el Instituto Electoral de Querétaro. Personería.- El actor acredita la personería con la que se ostenta dentro del presente procedimiento sancionador electoral, mientras los denunciados la tienen por acreditada debido al efecto de la legitimación pasiva. Esto es así conforme a lo siguiente. Uno:- El licenciado Héctor Gutiérrez Lara, hizo patente su personería con su acreditación como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Décimo Segundo, de cinco de mayo de dos mi

nueve, suscrito por el ciudadano licenciado René Montiel Salazar, Secretario Técnico del Consejo Distrital Duodécimo, mismo que exhibió mediante copia simple, que presume la existencia de su original y que además en los archivos de Secretaria Ejecutiva del propio instituto obran las constancias de la acreditación aludida en los términos del diverso sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, con lo que se demostró su calidad de representante de la fuerza política en comento. Dos.- Los denunciados no han acreditado su personería de manera expresa ante el presente órgano colegiado, sin embargo, el carácter que se les atribuye obra acreditado en archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Querétaro, además de que al ser denunciados de la presente causa, se materializa la legitimación ad processum cuyo efecto inmediato es proporcionar personalidad de los autos del expediente. Vía.- La vía propuesta por el denunciante fue la correcta. En su escrito de denuncia expresamente manifiesta en lo que interesa: "Probable violación de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en lo que respecta a la colocación de propaganda cometidos. Por el Partido Acción Nacional en el Municipio de El

Marqués, Querétaro o su candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Querétaro, el ingeniero Jorge Lomelí Noriega". Atendiendo a la naturaleza jurídica y a la fecha en que ocurrieron los hechos jurídicamente relevantes y presuntamente violatorios a la que se hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, siendo la correcta en virtud de las razones que a continuación se exponen. Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal, comúnmente conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen al respecto, para el efecto de evitar la transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal,

sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes. Las argumentaciones vertidas tienen como razón de ser, los lineamientos contenidos en la tesis relevante S tres EL cero cincuenta y cuatro diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a foja trescientos setenta y nueve de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: ''Derecho administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal''. En ese sentido, al conocer y substanciar los procedimientos sancionadores electorales, se tomó en cuenta el momento en que supuestamente se suscitaron los hechos jurídicamente relevantes para el caso y presuntamente constitutivos de violaciones a la normatividad electoral, ya que es de explorado derecho que el ámbito temporal en el que acontecen los hechos, es imprescindible para determinar sus efectos y consecuencias jurídicas. Por tal motivo, de un análisis integral de la denuncia, esta autoridad electoral advirtió que el denunciante

realiza imputaciones sobre hechos presuntamente efectuados por el Partido Acción Nacional en el Municipio de El Marqués, Querétaro o su candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Querétaro, el ingeniero Jorge Lomelí Noriega los cuales se encuentran previstos y sancionados por el artículo ciento siete, fracción tercera; ciento diez, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, dispositivo que interpretado de manera sistemática con los ordinales doscientos treinta y dos, fracción segunda del mismo ordenamiento; válidamente se puede concluir que el procedimiento especial sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite; ya que la hipótesis de procedencia que prevé el ordinal cinco fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, contemplan tal figura. Resumen de los actos o puntos controvertidos y declaración del derecho aplicable. El denunciante, manifiesta que le genera agravio el hecho de que: "a la altura del barrio el Pinito en el Municipio de El Marqués, Querétaro, con dirección a Querétaro capital, observo que en el cerro que se encuentra a mi derecha, está puesto una leyenda que dice LOMELI, en el cerro de enfrente

al que hago mención también existe otro letrero con el apellido del candidato del Partido Acción Nacional en El Marqués, Querétaro, que dice LOMELI. Por todo lo anterior es que las conductas realizadas cometidos por el Partido Acción Nacional de El Marqués o su candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, Querétaro, el ingeniero Jorge Lomeli Noriega, se consideran como típicas, antijurídicas y culpables, creo desde mi punto de vista muy personal, que al momento de pintar su apellido en cerros y destruir la naturaleza, para poder alcanzar a tener un impacto visual de su apellido, esto es y está violentando la Ley Electoral de Estado de Querétaro. En su artículo ciento diez, fracción segunda de la muticitada ley'' (sic). Por su parte, los denunciados, al no presentar contestación han perdido su derecho de aportar pruebas que les benefician en torno a la denuncia de hechos previamente mencionada. En atención a los términos en los que se fijó la litis dentro del procedimiento en estudio, puede observarse que de entre los hechos destaca la existencia de la propaganda motivo de los hechos que nos ocupan. Por consiguiente, en razón del ámbito temporal en el que presuntamente ocurrió esencialmente el hecho

destacado, se determina que las disposiciones normativas aplicables para la substanciación del procedimiento fueron las adecuadas, a saber: la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada el trece de diciembre de dos mil ocho, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", y demás cuerpos normativos en vigor a partir de esa fecha, dicho en otras palabras, los ordenamientos vigentes al momento de la comisión de las conductas en estudio. Considerando. Primero.- Por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la ley de la materia, corresponde al denunciante la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que funde su pretensión; más aún en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la hipótesis prevista por el ordinal ciento siete, fracción tercera; ciento diez, fracción segunda; doscientos treinta y dos, fracción segunda, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para el denunciante; en cambio, rige a favor

de los denunciados el principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegó una conducta infractora. Segundo.- El denunciante, ofreció y se admitieron los medios de prueba consistentes en: Inciso a).- La prueba técnica identificada en el apartado primero del capítulo de pruebas de su escrito de denuncia, consistente en video que fue tomado a algunos letreros y que se encuentra en medio de lectura óptica con tecnología láser (disco compacto), producto de avances de la ciencia y tecnología; toda vez que precisa circunstancias y establece el objeto de la prueba; esto es, los hechos jurídicamente relevantes que pretende demostrar, en los términos del diverso nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que se tuvo por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, y a la cual se le atribuye valor probatorio de indicio en virtud de lo estipulado en la fracción segunda del artículo cuarenta y siete de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Querétaro. Inciso b).- La prueba técnica identificada en el apartado segundo del capítulo de pruebas de su escrito de denuncia, consistente en cuatro impresiones de imágenes digitales, incluyendo un total de

ocho fotografías, producto de avances de la ciencia y tecnología; toda vez que precisa circunstancias y establece el objeto de la prueba; esto es, los hechos jurídicamente relevantes que pretende demostrar, en los términos del diverso nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que se tuvo por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, y a la cual se le atribuye valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción segunda del artículo cuarenta y siete de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Querétaro. Así también en lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres, de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". Tercero.- Por su parte, los denunciados, Comité Directivo Municipal de El Marqués Querétaro, del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de dicha municipalidad ingeniero Jorge Lomelí Noriega al no contestar la denuncia interpuesta en su contra, no ofrecieron

ningún medio de prueba a su favor. Cuarto:- No obstante lo anterior, los medios de prueba ofertados por el denunciante no se consideran suficientes para acreditar plenamente el nexo causal que existe entre los denunciados y los hechos motivo de la denuncia, para responsabilizarlos en los términos que son planteados, sin acreditarse de manera física e inmediata la aludida propaganda electoral en la ubicación en que se manifiesta en el escrito de denuncia, y de igual manera verificar que se transgredan principios de orden público en los términos de la Ley Electoral para el Estado de Querétaro, toda vez que la valoración de la infracción y en su caso la imposición de una sanción, requieren de precisar las circunstancias específicas del caso, por lo que se instruyó la contratación de los servicios de un notario público a efecto de que la Secretaría Ejecutiva pudiera sustanciar correctamente el procedimiento, de lo cual resultó que en lo que interesa, el notario adscrito a la Notaría número uno de esta demarcación notarial, dentro del testimonio de la escritura pública número veintiocho mil seiscientos cuarenta y uno correspondiente al tomo doscientos veinticinco, se pronunció en el siguiente tenor. "Siendo las trece horas con cuarenta y cinco

minutos, el ciudadano licenciado Pablo Cabrera Olvera, me solicita me trasladé sobre la carretera Tampico, a la altura del barrio el Pinito, en el Municipio de El Marqués, Querétaro, Donde se encuentra un cerro con piedras pintadas de blanco sin que se aprecie texto o leyenda alguna. En un segundo cerro del mismo rumbo descrito anteriormente igualmente se encuentran piedras pintadas de blanco sino que tampoco se aprecie texto o leyenda alguna en mi presencia se toman fotografías y se mandan agregar al apéndice del protocolo y a los testimonios que se expidan,''(sic). Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para acreditar la inexistencia de los hechos denunciados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera, cuarenta y dos, fracción cuarto; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco,

diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". Quinto.- Con base a lo anterior, y dado que el valor probatorio de una escritura pública supera el valor probatorio que pudieran cobrar las pruebas documentales de carácter privado, con fundamento en el artículo cuarenta y siete, fracciones primera y segunda armónicamente interpretadas, resulta claro que lo comprendido dentro de la documental publica en mención sustituye en cuanto a valor probatorio por ser contradictorio con las pruebas ofrecidas por el denunciante, a las mismas. Sexto.- Análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento. Este consejo General, atendiendo a que las causas de sobreseimiento, son de previo y especial pronunciamiento, así

como de estudio oficioso, hayan sido alegadas o no por las partes, estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo veintiuno, fracción primera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionado del Instituto Electoral de Querétaro, en relación con los diversos veintisiete, veintiocho, fracción cuarta; veintinueve, fracción séptima de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, en virtud de lo estipulado por los artículos cinco y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, sobre el aspecto que a continuación se aborda. Según se advierte de la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta y uno, de veintidós de junio de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Uno, de esta demarcación notarial, después de haberse constituido en el lugar de los hechos denunciados, por el personal de la Secretaría Ejecutiva y el fedatario notarial, no se encontró en ambos cerros leyenda alguna. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar la inexistencia de las leyendas en los dos cerros descritos con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho,

fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. Esto es así porque, de conformidad con el marco jurídico aplicable, dicha documental pública, es suficiente para desvirtuar la fuerza convictiva que pudiera proporcionar la prueba técnica aportada por el denunciante, específicamente las impresiones fotográfica de los dos cerros que –según lo refirió el promovente–, se encontraba ubicada en los lugares que reseño. Circunstancia que no puede ser de otra manera, porque la aludida prueba técnica consistió en la impresión de tres imágenes digitales con la leyenda "LOMELI" imágenes digitales, producto de los avances de la ciencia y tecnología. Es ampliamente conocido que el contenido de una imagen digital es manipulable por aquellos sujetos que tengan los conocimientos técnicos y el software computacional requerido, quienes pueden modificar su contenido sin complicaciones, estando en la

posibilidad de añadir elementos con los que no contaba, o quitar elementos existentes, produciendo una percepción falsa del contenido real del la imagen de la cual se obtuvo la impresión, e incluso, generar contenidos sin sustento fáctico, lo cual en el lenguaje común se conoce como "fotomontaje". Por ello, el artículo cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, establece que las pruebas técnicas tendrán eficacia demostrativa si y sólo si, cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí; lo cual en el caso no acontece. En esa tesitura, al demostrarse la inexistencia de las leyendas contenidas en ambos cerros precisadas por el promovente en su denuncia, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el procedimiento. Lo antepuesto, en virtud de haber esgrimido el razonamiento, con su aparejada valoración por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, y se desprende la inexistencia de infracción alguna a la normatividad electoral ya

que al desahogar la diligencia respectiva que obra en el testimonio notarial multicitado, el veintidós de junio del año en curso, en el que al constituirse en el barrio el Pinito, en el Municipio de El Marqués, Querétaro, no se encontró colocada la propaganda descrita en la denuncia, lo cual, adicionalmente se ilustra mediante fotografías que al efecto se anexaron a dicho testimonio y en su lugar se han encontrado piedras pintadas de blanco sin que se aprecie texto o leyenda alguna, por lo que se resuelve el sobreseimiento de la causa en los términos expuestos con antelación. Fundamentos de la Resolución.- De conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, sesenta y siete, fracción octava, décima tercera; ciento siete, fracción tercera; ciento diez, fracción cuarta; doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, ocho, veintitrés, párrafo primero, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, fracción primera, segunda y tercera, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos,

fracción cuarta; cuarenta y cuatro; cuarenta y siete, fracción primera, segundo; cincuenta y nueve, sesenta y uno y sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción primera; siete, ocho, nueve, once, fracción primera y segunda; trece, veintiuno, fracción primera; treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; ante lo infundado de las imputaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario, licenciado Héctor Gutiérrez Lara, representante propietario del mismo instituto político ante el Consejo Distrital Décimo Segundo de El Marqués, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro se pronuncia jurídicamente en la causa que nos ocupa en los siguientes términos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario, licenciado Héctor

Gutiérrez Lara, representante propietario del mismo instituto político ante el Consejo Distrital Décimo Segundo de El Marqués, en contra del Partido Acción Nacional y el ingeniero Jorge Lomelí Noriega, candidato a Presidente Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, de dicha fuerza política, por la posible comisión de violaciones a la normatividad electoral. Segundo.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro resuelve el sobreseimiento de la causa que nos ocupa por motivo de la inexistencia de la propaganda electoral aludida en el escrito de denuncia, por la probable comisión de violaciones a la normatividad electoral, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución, y en consecuencia no procede sanción alguna a los denunciados Partido Acción Nacional y el ingeniero Jorge Lomelí Noriega, candidato a Presidente Municipal del Municipio de El Marqués Querétaro, de dicha fuerza política. Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Cordova y maestro Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para que practiquen indistintamente

dicha diligencia. Cuarto.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... A favor. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para aprobar la presente resolución, Presidenta. Firman la presente resolución la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del décimo primero punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación y aprobación en su

caso, del proyecto de Resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, relativa al expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve. Resolución, vistos los autos del expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve, y los de su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, relativos al procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de presuntas violaciones a las reglas que regulan la propaganda electoral. Antecedentes. Primero.- El diecisiete de junio del año en curso, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, dos escritos de denuncia signados por el licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional, manifestando hechos que considera violatorios de la normatividad electoral, ofreciendo como medios de prueba para acreditar su dicho, fotografías que

en ambos escritos de denuncia describe e hizo consistir en la colocación de mantas de plástico relativas a propaganda prohibida por la normatividad electoral. Segundo:- En fecha diecisiete de junio del año en curso, la Secretaria Ejecutiva admitió las denuncias y acordó la radicación de los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, procediendo al emplazamiento en ambos casos del mismo denunciado Partido Revolucionario Institucional, acordando la contratación de notario público en cada uno de los expedientes para que diera fe de la publicidad electoral que alude el denunciante y la suspensión provisional de la propaganda electoral que refiere el denunciante, consistente en el retiro y resguardo de la las mantas de plástico que aludió. Tercero:- Con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, se da cuenta en Secretaria Ejecutiva de los oficios número CJ diagonal cero sesenta y seis diagonal dos mil nueve y CJ diagonal cero sesenta y siete diagonal dos mil nueve, relativos a los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, respectivamente, mediante los cuales el licenciado Pablo Cabrera Olvera remite los testimonios de la escrituras

públicas veintiocho mil seiscientos treinta y nueve y veintiocho mil seiscientos treinta y ocho respectivamente, mediante las cuales el notario, licenciado Roberto Reyes Olvera dio fe de las condiciones y circunstancias específicas de la colocación de la propaganda electoral en cada caso, efectuando las precisiones necesarias y asentándolo así en dichos testimonios notariales, los cuales se glosaron a los expedientes correspondientes. Cuarto.- En veintitrés de junio del año en curso, se recibieron las contestaciones, de los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, respectivamente, mediante escritos signados por el licenciado Juan Saldaña Zamora en su calidad de representante suplente de la fuerza política denunciada, ofertando los medios de convicción correspondientes en cada uno. Quinto.- Con fecha veinticuatro de junio del año, se agregaron en autos de los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, ambas contestaciones a las denuncias interpuestas en contra del Partido Revolucionario Institucional, y se instruyo girar oficios al Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, solicitando la suspensión provisional de la propaganda electoral,

dado que la fuerza política que fuera denunciada, hizo caso omiso de la suspensión provisional determinada, y acto seguido se abrieron las causas en su periodo probatorio. Sexto.- Con fecha veintisiete de junio de dos mil nueve, en vista de que se fijó la litis, se contesto la denuncia de mérito en el expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve, se emitió acuerdo para admitir, desechar medios de prueba y cerrar el periodo probatorio, mientras que en el expediente sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, se emitió acuerdo para admitir, desechar medios de prueba, cerro periodo probatorio, se instruyo la acumulación de ambos expedientes por conexidad en la causa, ordenándose el glose de ambos expedientes y se pusieron los autos en estado de resolución en virtud de haberse agotado las fases del procedimiento. Competencia.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cincuenta y cinco, cincuenta y

seis, cincuenta y ocho, fracción primera; ciento diez, fracción sexta; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador el Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos, uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, dieciséis y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador el Instituto Electoral de Querétaro. Personería.- Las partes tienen acreditada la personería con la que se ostentan dentro del presente procedimiento sancionador electoral. Esto es así debido a lo siguiente. El licenciado Greco Rosas Méndez, en su carácter de denunciante y el licenciado Juan Saldaña Zamora, en su carácter de denunciado acreditaron su personería como representantes

propietario y suplente del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional respectivamente en los términos que contempla el último párrafo del artículo quince del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador, cuestión que se convalida toda vez que en los archivos de Secretaria Ejecutiva del propio instituto obran las constancias de sus nombramientos en los términos del diverso sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, con lo que se demostró su calidad que ambos ostentan. Vía.- La vía en que se sustancio el procedimiento especial sancionador fue la correcta, en virtud de que. En sus dos escritos de denuncia relativos a los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, coincidente y sustancialmente el denunciante manifestó: "comparezco para interponer formal denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, y/o quien resulte responsable". Con base a lo anterior, atendiendo a la naturaleza jurídica de la denuncia, consistente en hechos probablemente constitutivos de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, en razón de que, el Titulo

Tercero "Del régimen Sancionador electoral disciplinario interno", Capitulo Tercero "Del procedimiento especial", de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, es claro en ordenar que durante proceso electoral se seguirán por este tipo de vía, las denuncias que se formulen con motivo de la presunta comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, lo cual se encuentra descrito concretamente en los artículos ciento diez, fracción sexta; doscientos treinta y dos, fracción segunda del referido ordenamiento, situación que se encuentra reforzada en el ordinal cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que establece los supuesto para la instrumentación del procedimiento especial. Por lo tanto, se concluye que el procedimiento sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite. Resumen de los actos o puntos controvertidos y declaración del derecho aplicable. Primero:- Relativo al expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve, el denunciante manifiesta que le causa agravio principalmente el hecho de que:

"circulando por la calle Damián Carmona de norte a sur, a la altura del Jardín Histórico, perteneciente a la Delegación Centro Histórico de ésta ciudad se encuentra colocada en un domicilio, una manta de material plástico relativos a la propaganda política del Candidato a Gobernador por nuestro Estado, el ciudadano José Calzada Rovirosa, representando al Partido Revolucionario Institucional lo cual considero violatorio de lo establecido en la fracción sexta del artículo ciento diez de la Ley Electoral del Estado de Querétaro"(sic). Segundo.- Por su parte, el denunciado, en relación a dicho expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve, en su respectivo escrito de contestación de manera sustancial señala lo siguiente: "El denunciante incumple lo dispuesto por el inciso d) de la fracción primera, el artículo doscientos veintisiete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como la fracción cuarta del artículo quince del Reglamento Especial Sancionador del Estado de Querétaro como se desprende de la narración que hace de los hechos, esta es por demás oscura e imprecisa, dejando en consecuencia a mi Partido, en estado de indefensión, para poder controvertir de forma adecuada las imputaciones que realiza el denunciante omite

señalar el domicilio en que se encuentra colocada la manta que refiere, dando una descripción vaga de la casa en que se encuentra colocada la "manta de plástico" que refiere en consecuencia, es por demás notorio que los hechos de la denuncia son por demás vagos e imprecisos; por lo que debió desecharse la denuncia presentada, al no cumplir los requisitos que para su presentación exige tanto la Ley Electoral como el Reglamento Especial Sancionador ahora bien, el denunciante refiere que la colocación de "la manta" que refiere, lo considera violatorio de lo previsto por la fracción sexta del artículo ciento diez de la Ley Electoral para el Estado de Querétaro tampoco puede hablarse que la casa, en la que refiere el denunciante se encontraba colocada la "manta", se encuentre en una zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos; pues para que pueda considerarse como zona, es menester, en términos de lo previsto por los artículos treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; que se comprendan varios monumentos, lo que en especie no se da"(sic). Tercero:- Respecto al expediente sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, el denunciante manifiesta que le

causa agravio principalmente el hecho de que: "circulando por la de Próspero C. Vega en dirección norte – sur, exactamente del lado izquierdo de la calle en el número cincuenta y ocho guión uno, perteneciente a la Delegación Centro Histórico de ésta ciudad se encuentra colocada en un domicilio, una manta de material plástico relativos a la propaganda política del Candidato a Diputado Por el Primer Distrito, el ciudadano Juan de Jesús Maciel representando al Partido Revolucionario Institucional lo cual considero violatorio de lo establecido en la fracción sexta del artículo ciento diez de la Ley Electoral del Estado de Querétaro"(sic). Cuarto.- Por su parte, el denunciado en relación al expediente sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, en su respectivo escrito de contestación de manera sustancial señala lo siguiente: "El denunciante incumple lo dispuesto por el inciso d) de la fracción primera, el artículo doscientos veintisiete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como la fracción cuarta del artículo quince del Reglamento Especial Sancionador del Estado de Querétaro como se desprende de la narración que hace de los hechos, esta es por demás oscura e imprecisa, dejando en consecuencia a mi Partido, en estado de

indefensión, para poder controvertir de forma adecuada las imputaciones que realiza el denunciante omite señalar el domicilio en que se encuentra colocada la manta que refiere, dando una descripción vaga de la casa en que se encuentra colocada la "manta de plástico" que refiere consecuencia, es por demás notorio que los hechos de la denuncia son por demás vagos e imprecisos; por lo que ésta autoridad debió desechar la denuncia presentada, al no cumplir los requisitos que para su presentación exige tanto la Ley Electoral como el Reglamento Especial Sancionador, ahora bien, el denunciante refiere que la colocación de "la manta" que refiere, lo considera violatorio de lo previsto por la fracción sexta del artículo cieno diez de la Ley Electoral para el Estado de Querétaro, tampoco puede hablarse que el número que refiere el denunciante se encontraba colocada la "manta", se encuentra en una zona de monumentos Arqueológicos, Artísticos o Históricos; pues para que pueda considerarse como zona, es menester, en términos de lo previsto por los artículos, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; que se comprendan varios monumentos, lo

que en la especie no se da''(sic). En atención a los términos en los que se fijó la litis dentro del procedimiento en estudio, puede observarse que de entre los hechos destaca el cuestionamiento de saber si la colocación de la propaganda motivo de la causa que nos ocupa, ha sido realizada en zona considerada como histórica por alguno de los ordenamientos legales aplicables a la materia. Por consiguiente, y en razón del ámbito temporal y espacial en el que presuntamente ocurrieron esencialmente los hechos destacados, se determina que las disposiciones normativas aplicables para la substanciación del procedimiento fueron las adecuadas, a saber: la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada el trece de diciembre de dos mil ocho, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", y demás cuerpos normativos en vigor a partir de esa fecha, dicho en otras palabras, los ordenamientos vigentes al momento de la comisión de las conductas en estudio, así como el decreto de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, emitido por ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, y publicado en Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara zona de

monumentos históricos en la ciudad de Querétaro de Arteaga, Estado de Querétaro, con el perímetro, características y condiciones a que se refiere el decreto y en que se determinó que el perímetro "A", siendo que en la especie dicho decreto como normatividad jurídica, no es objeto de prueba. Considerando. Primero.- Por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la ley de la materia, corresponde a los denunciantes la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que funde su pretensión; más aún en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la hipótesis prevista por el ordinal doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para los denunciantes; en cambio, rige a favor de los denunciados el principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegó una conducta infractora. Segundo.- El denunciante, ofreció, se admitieron y desahogaron los medios de prueba consistentes en. Dentro del

expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve. Inciso a).- La prueba técnica que acompañó el denunciante a su escrito inicial, y relaciona con todos y cada uno de los hechos que se tuvo por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, consistente en una impresión de fotografías con nueve imágenes que muestra dos mantas plásticas en diversos ángulos, producto de avances de la ciencia y tecnología; toda vez que muestra circunstancias y establece el objeto de la prueba; esto es, los hechos jurídicamente relevantes que pretende demostrar, en los términos del diverso nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, y a la cual se le atribuye valor probatorio de indicio en virtud de lo estipulado en la fracción segundo, del artículo cuarenta y siete de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Querétaro. Dentro del expediente sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve. Inciso b).- La prueba técnica que acompañó el denunciante a su escrito inicial, y relaciona con todos y cada uno de los hechos que se tuvo por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, consistente en una impresión de fotografías con dos imágenes que muestra una

manta plástica en dos ángulos, producto de avances de la ciencia y tecnología; toda vez que muestra circunstancias y establece el objeto de la prueba; esto es, los hechos jurídicamente relevantes que pretende demostrar, en los términos del diverso nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, y a la cual se le atribuye valor probatorio de indicio en virtud de lo estipulado en la fracción segunda del artículo cuarenta y siete de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Querétaro. Tercero.- El denunciado ofreció y se desecharon los medios de prueba consistentes dentro de ambos expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, coincidente y respectivamente oferto: Inciso c).- La prueba instrumental de actuaciones, identificada en el apartado respectivo de sus escritos de contestación, con el número uno, debido a que no se encuentran en el listado que establecen los medios de prueba que pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral, ya que únicamente prevé las pruebas documentales y técnicas; sin que pase inadvertido a esta autoridad electoral que dicho

medio de convicción no es más que la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de resolver. Inciso d).- La prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humana, identificadas en el apartado respectivo de sus escritos de contestación, con el número dos, porque no se encuentra dentro del catalogo que contempla los medios de prueba que pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral, ya que sólo establece las pruebas documentales y técnicas; atendiendo además que, es de explorado derecho, que solamente puede darse entrada a los medios de prueba expresamente reconocidos por la normatividad vigente; sin que pase desapercibido a esta autoridad electoral que dicho medio de convicción no es más que la valoración de la prueba misma. No pasa inadvertido que, dentro de ambos procedimientos se ofrecieron por el denunciado, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que como ya se dijo, no son más que la valoración de la prueba misma, pues como se sabe, existen presunciones iure et de iure y también iuris tantum, así como la instrumental de actuaciones, la cual consiste en la totalidad de

constancias que existen dentro del presente expediente, por lo que concatenadas con los medios de convicción consistente en la documental pública de los testimonios notariales y pruebas técnicas de fotografía descritas con antelación, crean en el ánimo del órgano colegiado electoral la certeza de los hechos denunciados, en virtud de que no existen en la causa medio de convicción que lo desvirtúen. Sin que pase desapercibido lo señalado por el denunciante en le sentido de que el denunciante no preciso los domicilios en que se contenía dicha propaganda, empero, al haberse instruido en ambos expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, por la Secretaria Ejecutiva, al funcionario electoral para que en compañía del notario público se diera fe de la existencia de dichas mantas, se hizo constar y asentaron los domicilio exactos de las mantas ubicada en la calle Prospero C. Vega, entre las calles quince de mayo y avenida universidad de esta ciudad de Querétaro, donde se encuentra el predio con el número cincuenta y ocho guión uno, entre los números sesenta y dos y cincuenta y seis, así como el domicilio ubicado en Privada Damián Carmona, de esta ciudad de

Querétaro, donde se encuentran la fachada de la Parte Lateral del Local número setenta y uno guión D, dos mantas. Lo antepuesto, tiene sustento al valorar cualquier medio de convicción, consiste no solamente en decidir si fue debidamente ofrecido, admitido, preparado y desahogado, sino concederle o negarle la posibilidad de demostrar determinados hechos, atendiendo al valor con que lo tasa la normatividad aplicable. Tales aseveraciones tienen razón de ser en la jurisprudencia J punto cuarenta y cinco diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento ochenta y seis guión ciento ochenta y siete de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "Pruebas documentales. Sus alcances". Así también en lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres, de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". Cuarto.- Los

medios de prueba ofertados por el denunciante en ambos expedientes se consideraron suficientes para acreditar indiciariamente la existencia de las propagandas aludidas en la denuncia, así como la responsabilidad del denunciado en los términos que son planteados, por lo que se instruyó la contratación de los servicios del notario público, quien mediante sus testimonios notariales corroboro la existencia, permanencia y descripción detallada de la propaganda cuestionada, precisando su ubicación en el centro histórico de la ciudad de Querétaro en los términos siguientes. Relativo al expediente sesenta y tres diagonal dos mil nueve, en lo que interesa, el notario adscrito a la Notaría número uno de esta demarcación notarial, dentro del testimonio de la escritura pública número veintiocho mil seiscientos treinta y nueve correspondiente al tomo doscientos veinticinco, se pronuncia en el siguiente tenor: "el ciudadano Pablo Cabrera Olvera, me solicita me traslade al domicilio ubicado en Privada Damián Carmona, de ésta ciudad de Querétaro, donde se encuentran en la fachada de la parte lateral del local número setenta y uno guión D dos mantas: Uno.- Con Fondo Verde y Letras Blancas el nombre de Pepe Calzada, y la

Leyenda: "Tu Gobernador", acompaña al texto fotografía que es identificado pro el solicitante como Pepe Calzada, y con logotipo del Partido Revolucionario Institucional. Dos.- Con Fondo Verde y Rojo, y Letras Blancas las Leyendas: "Querétaro Creo en Ti", y "Construyendo la Plataforma Electoral, opina al teléfono, cuatro, cuatro, dos, dos, uno, cuatro, tres, dos, cero, cuatro", y con logotipo del Partido Revolucionario Institucional"(sic), tomando fotografías que se mandaron agregar al apéndice del protocolo para mayor ilustración. Respecto al expediente sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, sustancialmente el notario adscrito a la notaría número uno de esta demarcación notarial, dentro del testimonio de la escritura pública número veintiocho mil seiscientos treinta y ocho correspondiente al tomo doscientos veinticinco, se pronuncia al tenor literal siguiente: "el ciudadano licenciado Pablo Cabrera Olvera me solicita que me traslade al domicilio ubicado en calle Próspero C. Vega, entre las Calles quince de mayo y avenida universidad, de ésta ciudad de Querétaro, donde se encuentra el predio con el número cincuenta y ocho guión y uno, entre los número sesenta y dos y cincuenta y seis, donde colgada en la Fachada que da a la calle se encuentra

la manta con Letras Blancas el nombre de Juan de Jesús Maciel, excepto la letra "M" que lo está de Color Rojo, y las Leyendas: "Diputado Local Primer Distrito" acompaña al texto fotografía que es identificado por el solicitante como Juan de Jesús Maciel y con logotipo del Partido Revolucionario Institucional"(sic), tomando fotografías que se mandaron agregar al apéndice del protocolo para mayor ilustración. Medios de prueba al que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en documentos expedidos por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. Lo expuesto, tiene sustento en que los acontecimientos sometidos a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, deben contemplar si la actuación cometida y presuntamente infractora, tiene un nexo causal con los supuestos infractores, a efecto de determinar si efectivamente desplegaron conducta reprochable atribuida, dicho

enlace debe ser valorado tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que debieron de haberse suscitado para la perpetración de la conducta, siendo que en la especie no se colma, además de que debe estar debidamente cerciorado de la veracidad de los hechos y la existencia y continuidad de la publicidad mencionada en el escrito de denuncia. Lo argumentado encuentra sustento en la jurisprudencia J punto cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, con el rubro: "Régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance

probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". En razón de lo anterior, se corrobora fehacientemente que existe nexo causal entre la fuerza política denunciada y la existencia y permanencia de la propaganda electoral consistente en las mantas de plástico que fueron motivo de verificación notarial, en consecuencia, se acredita que la autoría de las propagandas corresponde al Partido Revolucionario Institucional, cuyo logotipo se encuentra insertado en las mismas. Quinto.- Con relación a precisar si los domicilios en los cuales se encuentran las propagandas que nos ocupan, se encuentran considerados como zona de monumentos históricos, merece especial atención que como normatividad aplicable, no esta sujeto a prueba, consistente en el decreto de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, emitido por ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, y publicado en Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara zona de monumentos históricos en la ciudad de Querétaro de Arteaga, Estado de Querétaro, con el perímetro, características y condiciones a que se refiere el decreto y en que se determinó que el perímetro "A", que

comprende: "Partiendo del punto identificado con el numeral uno, situado en el cruce de los ejes de la Calle Nicolás Campa Norte y la Avenida Universidad Poniente; continúa por el eje de la Avenida Universidad Poniente hasta entroncar con el eje de la Calle Nicolás Bravo Norte dos; siguiendo por el eje de la Calle Nicolás Bravo Norte hasta cruzar con el eje de la Calle Ferrocarriles Nacionales de México Poniente tres; continuando por el eje de la Calle Ferrocarriles Nacionales de México Poniente y Ferrocarriles Nacionales de México Oriente hasta entroncar con el eje de la Calle Rayón Norte cuatro; prosiguiendo por el eje de la Calle Rayón Norte y su continuación la Calle Ignacio Altamirano Norte hasta cruzar con el eje de la calle quince de Mayo Oriente cinco; siguiendo por el eje de la calle quince de Mayo Oriente hasta su entronque con el eje de la Calle Calandrias Norte, seis; continuando por el eje de la Calle Calandrias Norte hasta cruzar con el eje de la Prolongación dieciséis de Septiembre Oriente siete; prosiguiendo por el eje de la Calle Prolongación dieciséis de Septiembre Oriente hasta su entronque con el eje de la Calle Circunvalación Sur ocho; siguiendo por el eje de la Calle Circunvalación Sur hasta cruzar

con la acera Norte de la Calzada de los Arcos nueve; continuando por la acera norte de la Calzada de los Arcos hasta donde empieza el Acueducto diez; prosiguiendo de la terminación de la acera norte de la Calzada de los Arcos hasta el entronque con la Calle Cerrada de los Arcos con la acera Sur de la Calzada de los Arcos once; siguiendo por la acera Sur de la Calzada de los Arcos hasta el entronque con los ejes de las Calles veinte de Noviembre Oriente y Avenida Ignacio Zaragoza Oriente doce; continuando por el eje de la avenida Ignacio Zaragoza Oriente hasta cruzar con el eje de la Calle Prolongación doctor Luis Pasteur Sur trece; prosiguiendo por el eje de la Calle Prolongación doctor Luis Pasteur Sur hasta su entronque con el eje de la Avenida Constituyentes Oriente catorce, siguiendo por el eje de la Avenida Constituyentes Oriente hasta cruzar con el eje de la Calle Prolongación Corregidora Sur quince; continuando por el eje de la Calle Prolongación Corregidora Sur hasta su entronque con el eje de la Avenida Ignacio Zaragoza Oriente dieciséis; prosiguiendo por el eje de la Avenida Ignacio Zaragoza Oriente e Ignacio Zaragoza Poniente hasta cruzar con el eje de la Calle Nicolás Campa Sur diecisiete; siguiendo por el eje de la Calle

Nicolás Campa Sur y Nicolás Campa Norte hasta su entronque con el eje de la Avenida Universidad Poniente, siendo el punto uno de la zona "A" cerrándose así este perímetro". De lo anterior es posible colegir que en aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, acorde a lo previsto en el artículo cuarenta y siete de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, tanto el domicilio ubicado en la privada Damian Carmona, como el que se encuentra en la Calle Próspero C. Vega, ambas de de la colonia centro, lugares en donde se encontró la existencia y permanencia de las tres mantas de plástico con la propaganda electoral cuestionada y descritas en la causa, cuya autoría se atribuyó y acredito al Partido Revolucionario Institucional, se encuentran indubitablemente dentro del perímetro "A" y, como consecuencia dentro de la zona de monumentos históricos, por lo que contraviene la restricción prevista en el artículo ciento diez fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Con base a lo anterior, han quedado demostradas las infracciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional respecto de los hechos que nos ocupan, en virtud de lo dispuesto por los artículos doscientos

treinta y dos, fracción segunda; ciento diez, fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, once, fracción primera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro y el decreto de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, emitido por ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, y publicado en Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara zona de monumentos históricos en la ciudad de Querétaro de Arteaga, Estado de Querétaro. Sexto.- Respecto de la medida cautelar provisional que se determinó, y toda vez que han quedado comprobadas las infracciones a la normatividad electoral, por tal motivo, con fundamento en los artículos uno, ciento diez, fracción sexta; doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno y veintitrés del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, el Consejo General resuelve la procedencia sobre el retiro físico y suspensión en definitiva de la propaganda identificada en actuaciones y cuya medida cautelar fue decretada provisionalmente por la Secretaria Ejecutiva. Séptimo.- Individualización de la sanción,

relativo a los principios mutatis mutandis y el ius puniendi estatal, de los cuales se extraen principios aplicables a la materia electoral por su especial autonomía, y toda vez que tratándose las presentes causas del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que, por llevar implícito el ejercicio del ius puniendi, comúnmente conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente trasgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad; luego entonces y en observancia al principio de legalidad puesto en relación con el ius puniendi estatal, las circunstancias sujetas a consideración del Consejo

General del Instituto Electoral de Querétaro, para fijar la sanción que corresponda al partido político por las irregularidades cometidas, comprende tanto a las de carácter objetivo: la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar, como a las subjetivas: el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia, el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia que rodean a la contravención de la norma administrativa. Lo argumentado encuentra sustento en la jurisprudencia J punto cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, con el rubro: "Régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". Y en la jurisprudencia J punto veinticuatro diagonal dos mil tres, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a páginas veintiocho guión veintinueve, del suplemento siete, de la Revista Justicia Electoral dos mil cuatro, cuyo rubro es: "Sanciones administrativas en materia electoral. Elementos para su fijación e individualización". Es necesario puntualizar que, los partidos políticos se encuentran vinculados jurídicamente a

conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. Como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden, existieron infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, por parte del Partido Revolucionario Institucional; durante la prosecución del procedimiento sancionador, se aportaron suficientes elementos para comprobar las violaciones que se le atribuyeron. En este orden de ideas, el partido político denunciado, debe ser sancionado por la comisión de infracciones que redundan en el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera; ciento diez, fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Por tal motivo, una vez acreditadas las infracciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, y su atribución subjetiva,

con base en las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad electoral determina que las faltas cometidas por el partido denunciado, son de orden particularmente leves, porque se ponderan las circunstancias del caso específico que han sido materia de estudio, en atención al principio de equidad, que implica considerar las condiciones especificas, que imperan en el contexto de la materialización de la conducta reprochable. De lo que se ha demostrado en autos, se puede valorar que el Partido Revolucionario Institucional está obteniendo una ventaja por sobre otras fuerzas políticas al tener publicidad en sitios donde la suya es exclusiva de las demás bajo conciencia de violentar la normatividad electoral que al efecto se pronuncia e interpreta en el sentido de que una prohibición expresa, está siendo quebrantada deliberadamente, sin embargo y a pesar de que la difusión en los lugares en que se encuentran las mantas plásticas puede ser considerada como concurrida, y otorgar por ende una ventaja considerable, no implica un quebrantamiento que acumule conductas que generen mayor daño que la difusión indebida de su propia propaganda, y contando con la ventaja de que se trata de actos similares en la

causa sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve, pues a pesar de existir coincidencia en con las características de la propaganda cuestionada y su emisor, entendido éste como el Partido revolucionario Institucional, tampoco existe reincidencia en virtud de que no obra en los archivos de Secretaria Ejecutiva del propio Instituto, registro alguno de que al día de los hechos denunciados haya causado ejecutoria denuncia alguna en contra del partido denunciado, sin perjuicio de la acumulación por conexidad en la causa. En esa tesitura, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, ponderando la magnitud de afectación real que se le irrogaría, para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en la contienda del proceso electoral dos mil nueve, en fechas muy cercanas a la jornada comicial, se determina un grado de reprochabilidad situado en un punto ligeramente superior al mínimo del parámetro de sanciones, para el Partido Revolucionario Institucional, por las conductas desplegadas y valoradas en su conjunto. Esto quiere decir que, con respaldo en los artículos cinco; doscientos veintidós, fracción primera, inciso

c), doscientos veinticuatro de la Ley Electoral de Querétaro, en correlación con los ordinales cincuenta y nueve, párrafo primero; sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y treinta y cinco del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, este Consejo General considera procedente la sanción pecuniaria contemplada en la fracción tercera del artículo invocado en último término, consistente en la reducción de ministración mensual del financiamiento público que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, toda vez que la sanción impuesta contempla como máximo el veinticinco por ciento de la percepción de financiamiento público, se procede a graduar o individualizar la sanción, tomando como base la ministración mensual del financiamiento público ordinario que prevalecía al momento de la materialización de los hechos objeto de estudio, que en la especie fue de doscientos veintisiete mil ochocientos cinco pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional, siendo esta cantidad el cien por ciento de la ministración mensual que percibe el Partido Revolucionario Institucional en el dos mil

nueve, según constan en los archivos de la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Instituto Electoral de Querétaro. En esa tesitura, el veinticinco por ciento de la ministración que mensualmente percibe el partido, corresponde a la cantidad de cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, moneda nacional. Lo cual implica que, para la individualización de la sanción, debe partirse desde el monto mínimo no especificado, que sería el cero por ciento, por ser el porcentaje menor, y oscilar de acuerdo a las circunstancias particulares del caso concreto, hasta el veinticinco por ciento, como monto máximo. En esa óptica, con fundamento en los artículos doscientos veinticuatro de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, siguiendo una adecuada técnica jurídica, esta autoridad establece una graduación de sanciones entre la mínima y la máxima, para determinar la sanción aplicable al partido infractor, de acuerdo a la conjugación de los siguientes elementos: a) la gravedad de las irregularidades cometidas, b) las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron

llevadas a cabo, c) la lesión causada a bienes jurídicamente tutelados, d) medios de ejecución empleados, e) las condiciones externas y socioeconómica del infractor, f) grado de intencionalidad, y g) situación de reincidencia, que no fue acreditada en la denuncia de mérito. Con base en lo anterior, se considera que el parámetro de la reducción que contempla el artículo treinta y cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, oscila de cero pesos a cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, conforme a la escala que se muestra en la tabla siguiente. Porcentaje, veinticinco por ciento, cantidad líquida, cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, grado de sanción, máxima. Porcentaje, veintiún punto ocho por ciento, cantidad líquida, cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos con cuarenta y tres centavos, grado de sanción, cercana a la máxima. Porcentaje, dieciocho punto siete por ciento, cantidad líquida, cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cincuenta y un centavos, grado de sanción, equidistante entre la media y la máxima. Porcentaje, quince punto seis por

ciento, cantidad líquida, treinta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y nueve centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la media. Porcentaje, doce punto cinco por ciento, cantidad líquida, veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco punto sesenta y cinco, grado de la sanción, media. Porcentaje, nueve punto tres por ciento, cantidad líquida, veintiún mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, grado de sanción, cercana a la media. Porcentaje, seis punto dos por ciento, cantidad líquida, catorce mil doscientos treinta y siete punto ochenta y tres, grado de sanción equidistante entra la mínima y la media. Porcentaje, seis punto dos por ciento, cantidad líquida, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos, grado de sanción, equidistante entra la mínima y la media. Porcentaje, tres punto uno por ciento, cantidad líquida, siete mil ciento dieciocho mil con noventa y un centavos. Porcentaje, cero, cantidad líquida, cero y grado de sanción, mínima. En consecuencia, este Consejo General, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina un grado de reprochabilidad de las conductas desplegadas en su conjunto por

el Partido Revolucionario Institucional, entre el parámetro de sanción media doce punto cinco por ciento, equivalente a veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos, moneda nacional, a mínima cero por ciento, equivalente a cero pesos, moneda nacional; concluye imponer la sanción ligeramente superior a la mínima consistente en la reducción equivalente al tres punto uno por ciento del monto que corresponde a la ministración que por mes se le otorga en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida mensual de siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos, moneda nacional), que deberá ser reducida durante el lapso de una ministración, dando un total de siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos, moneda nacional, debiendo realizarse la primera y única reducción en el mes de agosto de dos mil nueve. Esto se ejemplifica visualmente como se plasma en la tabla que a continuación se inserta. Agosto, siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos. Cantidad total, siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos. Siendo aplicable por identidad jurídica sustancial, los lineamientos establecidos en la jurisprudencia S tres ELJ cero nueve diagonal

dos mil tres, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a páginas veintinueve guión treinta, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Arbitrio para la imposición de sanciones. Lo tiene el Consejo General del Instituto Federal Electoral". Esto por ser ambos órganos gubernativos: el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autoridades administrativas electorales, encargadas de la organización de los comicios electivos, así como de la imposición de sanciones por infracciones administrativas en la materia, esto es, con la misma naturaleza institucional y facultades, aunque claro, en distintos ámbitos de competencia. En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de la demostración de una infracción que encuadre en la hipótesis jurídica, luego, automáticamente el infractor se hace acreedor de una sanción; posteriormente, se deben de apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las circunstanciales en la comisión de la infracción, lo que

constituye una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueve la cuantificación de la sanción, de un punto inicial hacia uno de mayor grado; dicho en palabras sencillas, con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo de imponer sanciones más rigurosas. Sobre esta temática, es aplicable la tesis relevante S tres EL cero veintiocho diagonal dos mil tres, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, al resolver el recurso de apelación SUP guión RAP guión cero cuarenta y tres diagonal dos mil dos, consultable a página novecientos dieciséis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes". En la inteligencia de que el inicio de la ejecución de la sanción impuesta es atendiendo a que, de aplicar la reducción del financiamiento público del citado partido en fechas más próximas, le irrogaría una afectación para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en las contiendas del

proceso electoral dos mil nueve, debido a la extrema cercanía de la jornada comicial. Por tal circunstancia, este órgano colegiado estima la aplicación de la sanción impuesta, durante el periodo ya señalado. Así, el Consejo General de este Instituto, asumiendo la responsabilidad que le ha sido conferida por la ciudadanía, de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones electorales, así como ajustar su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad; sanciona al Partido Revolucionario Institucional en los términos y por el periodo indicado. Fundamentos de la resolución. De conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, sesenta y siete, fracción octava, décima tercera; ciento seis, ciento siete, fracción tercera; ciento diez, fracción sexta; doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro, doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, ocho, veintitrés, párrafo primero; treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, fracción

primera, tercera, quinta, sexta; cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y siete, fracción primera, segunda; cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción uno, siete, nueve, once, fracción uno, trece,. Veintitrés, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, y el decreto de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, emitido por C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, y publicado en Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara zona de monumentos históricos en la ciudad de Querétaro de Arteaga, Estado de Querétaro, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro se pronuncia jurídicamente en la causa que nos ocupa en los siguientes términos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento

especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, licenciado Greco Rosas Méndez, en los expedientes sesenta y tres diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y cuatro diagonal dos mil nueve en contra del Partido revolucionario Institucional quien actúa por medio de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, por la comisión de violaciones a la normatividad electoral. Segundo.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro resuelve que sí se acredita la responsabilidad de las conductas reprochables atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de violaciones a la normatividad electoral, respecto de la colocación y difusión de propaganda electoral en las calles de Próspero C. Vega y Privada Damián Carmona en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, dentro del proceso electoral dos mil nueve, por los razonamientos vertidos en los considerandos segundo, cuarto y quinto dentro del proveído que nos ocupa. Tercero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro resuelve la procedencia sobre el retiro físico y suspensión en definitiva de la propaganda identificada en actuaciones y cuya medida cautelar

fue decretada provisionalmente por la Secretaria Ejecutiva, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de la resolución que nos ocupa. Cuarto.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo treinta y seis, puesto en relación con el treinta y cinco, fracción segunda, ambos del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, resuelve imponer como sanción al Partido Revolucionario Institucional, la ligeramente superior a la mínima consistente en la reducción equivalente al tres punto uno por ciento del monto que corresponde a la ministración que por mes se le otorga en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida mensual de siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos, moneda nacional), por una sola mensualidad, la relativa a la ministración del mes de agosto, con base en los motivos esgrimidos en el considerando séptimo de la presente resolución. Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Cordova y maestro Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para

que practiquen indistintamente dicha diligencia. Sexto.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... A favor. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para aprobar la presente resolución, Presidenta. Firman el presente acuerdo la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del décimo segundo punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario

Ejecutivo:- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, relativa al expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y seis diagonal dos mil nueve. Vistos los autos del expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve y su acumulado sesenta y seis diagonal dos mil nueve, relativo al procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, por conducto de su representante propietario, el licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Antecedentes. En diecisiete de junio de dos de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito de denuncia firmado por el licenciado Greco Rosas Méndez, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional. En diecinueve de junio de dos mil nueve, se emitió

acuerdo en el que se admitió a trámite la denuncia planteada, se ordenó la apertura del expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve; se ordenó emplazar al partido político denunciado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas, manifestaran lo que a su interés legal conviniera; se proveyó sobre las medidas cautelares solicitadas, instruyéndose al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un notario público, a fin de verificar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con el propósito de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran; y, se determinó la suspensión provisional de la propaganda, requiriendo al partido denunciado para su ejecución. En veintidós de junio de dos mil nueve, se agregó a los autos la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta, de veintidós de junio de dos mil nueve, con respaldo fotográfico, pasada ante la fe del notario adscrito a la notaría pública número uno, de esta demarcación notarial. En veinticuatro de junio de dos mil nueve, se tuvo al Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se le atribuyeron, realizando

las manifestaciones que estimó pertinentes y ofreciendo los medios de convicción que indicó en su escrito; se giró oficio al Ayuntamiento de Querétaro, para que procediera a la ejecución de la suspensión provisional determinada sobre la propaganda denunciada, en razón de que el denunciado no realizó manifestación alguna dentro del plazo que se le concedió para tal efecto; y, se abrió la causa en su periodo probatorio. En veintisiete de junio de dos mil nueve, se proveyó sobre la admisión y desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por las partes; y, se ordenó el cierre del periodo probatorio. En diecisiete de junio de dos de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito de denuncia firmado por el licenciado Greco Rosas Méndez, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional. En diecinueve de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo en el que se admitió a trámite la denuncia planteada, se ordenó la apertura del expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve; se ordenó emplazar al partido político denunciado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas, manifestaran lo que a su interés

legal conviniera; se proveyó sobre las medidas cautelares solicitadas, instruyéndose al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un notario público, a fin de verificar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con el propósito de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran; y, se determinó la suspensión provisional de la propaganda, requiriendo al partido denunciado para su ejecución. En veintidós de junio de dos mil nueve, se agregó a los autos la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta y dos, de veintidós de junio de dos mil nueve, con respaldo fotográfico, pasada ante la fe del notario adscrito a la notaría pública número uno, de esta demarcación notarial. En veinticuatro de junio de dos mil nueve, se tuvo al Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se le atribuyeron, realizando las manifestaciones que estimó pertinentes y ofreciendo los medios de convicción que indicó en su escrito; se giró oficio al Ayuntamiento de Querétaro, para que procediera a la ejecución de la suspensión provisional determinada sobre la propaganda denunciada, en virtud de las

evasivas realizadas por el denunciado al respecto, y, se abrió la causa en su periodo probatorio. En veintisiete de junio de dos mil nueve, se proveyó sobre la admisión y desechamiento de los medios de prueba aportados y ofrecidos por las partes; se ordenó el cierre del periodo probatorio; se acordó la acumulación del expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve al sesenta y cinco diagonal dos mil nueve, por razón de conexidad en la causa; se glosaron los cuadernos respectivos; se pusieron los autos en estado de resolución, en virtud de haberse agotado las fases del procedimiento y no encontrarse medio de prueba pendiente de acordar; y, se instruyó la elaboración del proyecto respectivo. En veintinueve de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo en el que se ordenó agregar copia certificada de las constancias que integran el expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, así como del cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, relativos a sendos procedimientos especiales sancionadores, instruidos en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, por violaciones a la normas que regulan la propaganda electoral, como medida para mejor proveer, en virtud de guardar una

estrecha vinculación con los hechos denunciados; y se acordó la ampliación del plazo para emitir resolución. Presupuestos procesales, competencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, fracción primera, y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco,

fracción tercera; siete, dieciséis y treinta y uno párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Personería.- Las partes acreditaron la personería con la que se ostentan dentro del presente procedimiento sancionador. Esto es así debido a lo siguiente. El representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, y el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Juan Saldaña Zamora, demostraron tener legitimación ad processum para comparecer con el carácter que se adjudicaron, en virtud de que sus respectivos nombramientos obran dentro del registro que para tal efecto se llevan en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en términos de lo establecido por los numerales sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y quince, último párrafo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Vía.- La vía propuesta por el denunciante fue la correcta. En el escrito de denuncia, que originó el expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve, el representante propietario del Partido Acción Nacional, manifestó a foja uno:

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo treinta y dos, fracción tercera; doscientos treinta y dos, fracción segunda y ciento siete, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado, con todo respecto comparezco para interponer formal denuncia en contra de". Asimismo, en el escrito de denuncia, que originó el expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve, el representante propietario del Partido Acción Nacional, textualmente manifestó a foja uno: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos cuarenta y uno, fracción tercera, apartado "c" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; treinta y dos, fracción tercera y ciento siete, fracción tercera y doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; y uno, tres, cinco, siete, once al quince y demás relativos y aplicables del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, vengo a presentar formal denuncia mediante el Procedimiento Especial Sancionador". Atendiendo a la naturaleza jurídica de la denuncia, consistente en hechos probablemente constitutivos de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, en razón

de que, el Titulo Tercero "Del régimen Sancionador electoral disciplinario interno", Capitulo Tercero "Del procedimiento especial", de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, es claro en ordenar que durante proceso electoral se seguirán por este tipo de vía, las denuncias que se formulen con motivo de la presunta comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, lo cual se encuentra descrito concretamente en el artículo doscientos treinta y dos, fracción segunda, del referido ordenamiento, situación que se encuentra reforzada en el ordinal cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que establece los supuesto para la instrumentación del procedimiento especial. Por lo tanto, se concluye que el procedimiento sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite. Resumen de los actos denunciados, puntos controvertidos y fijación de la litis. Primero.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, en sus escritos de denuncia, se duele fundamentalmente de los siguientes actos. La pinta efectuada por

el Partido Revolucionario Institucional en el Estado, de siete bardas ubicadas en las colonias España, San Pedrito Peñuelas, Menchaca, de esta ciudad capital, respectivamente. La colocación de dos anuncios espectaculares, efectuada por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado, ubicados en. Inciso a).- Boulevard Bernardo Quintana, con calle Peña de Bernal, colonia Las Américas, de esta ciudad capital. Inciso b).- Avenida Cinco de Febrero, con calle Fernando Montes de Oca, de esta ciudad capital. Promocionales que contienen mensajes que implican diatriba, injuria, infamia y denigración hacia el Partido Acción Nacional en el Estado; refiriendo que tal circunstancia afecta la equidad de la contienda electoral y constituye una conducta reincidente por parte del partido denunciado, con relación a las resoluciones emitidas por el Consejo General de este instituto, en el expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, así como en el cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, correspondientes a sendos procedimientos especiales sancionadores instruidos en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de infracciones a las normas que regulan la propaganda

electoral. Segundo.- El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente, en sus ocursos de contestación admitió parcialmente los hechos que se le atribuyeron, y manifestó que. Las denuncias carecen de razón y de derecho, toda vez que a dicho instituto político le asiste el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente y tutelada mediante instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, lo cual deviene en el derecho de formular criticas severas sobre el desempeño del gobierno, o de las actividades de los partidos opositores, en el contexto del debate político y difusión de ideas, sin censura previa, que debe existir de cara a los comicios electorales. Que las cifras utilizadas en sus promocionales, encuentran respaldo en fuentes oficiales. No existe un sujeto pasivo que en su caso pudiera resentir un agravio en su esfera jurídica por los promocionales denunciados. En el caso no existe reincidencia con relación a la resolución emitida por el Consejo General de este instituto, en el expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, así como el diverso cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve,

relativos a sendos procedimientos especiales sancionadores instruidos en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, en virtud de que. Inciso a).- Los promocionales denunciados fueron contratados con anterioridad a la emisión de las resoluciones aludidas. Inciso b).- Los promocionales denunciados, son distintos a los que fueron materia de análisis en las citadas resoluciones, porque fueron colocados en sitios diferentes. Inciso c).- Los promocionales denunciados, tanto en la presente como en las pasadas denuncias, son una unidad, no pueden considerarse como actos nuevos. Considerando. Primero.- Carga de la prueba, por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria, corresponde al denunciante la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que funde su pretensión; mayormente en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la vía especial, acorde con la hipótesis prevista por el ordinal trece del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de

Querétaro a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para el denunciante; en cambio, rige a favor del denunciado el principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegó una conducta infractora. Segundo, valoración del material probatorio, en autos existen los medios de prueba que a continuación se describen, los cuales fueron allegados al procedimiento por las razones que igualmente se indican, y que son tomados en consideración para emitir la presente resolución, con base en el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que debe valorarse la fuerza convictita de los medios de prueba, teniendo como finalidad el esclarecimiento de la verdad, en relación con las pretensiones de todas las partes en conflicto y no sólo del oferente, puesto que el procedimiento sancionador electoral se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. En tal sentido cobra aplicación la jurisprudencia J punto diecinueve diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta

Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, con el rubro: "Adquisición procesal en materia electoral". El Partido Acción Nacional ofreció por conducto de su representante propietario, medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en el escrito de denuncia que dio origen al expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve; no obstante, seguido el procedimiento por sus cauces legales, en veintiséis de junio de dos mil nueve, las probanzas identificada en el apartado respectivo con los incisos b) y c), fueron desechadas en autos, por no encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. Por otro lado, la prueba técnica que ofreció el denunciante, identificada en su escrito de denuncia en el apartado respectivo con el inciso a), consistente en siete impresiones fotográficas a color, se tuvo por admitida y desahogada. Medio de prueba al que se le concede valor de indicio en lo individual, para demostrar la existencia de una barda pintada con el emblema del Partido Revolucionario Institucional, y con una leyenda integrada con

las frases que menciona, ubicada en el lugar que de igual forma refiere el denunciante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción tercera, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en impresiones de imágenes digitales, producto de avances de la ciencia y tecnología. Igualmente, el Partido Acción Nacional ofreció a través de su representante propietario, medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en el escrito de denuncia que dio origen al expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve; empero, seguido el procedimiento por sus cauces legales, en veintiséis de junio de dos mil nueve, las probanzas identificada en el apartado respectivo con los incisos b) y c), fueron desechadas en autos, por no encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. Inciso c).- Por otra parte, la prueba técnica que ofreció el denunciante, identificada en su escrito de

denuncia en el apartado respectivo con el inciso a), consistente en ocho impresiones fotográficas en blanco y negro, se tuvo por admitida y desahogada. Medio de prueba al que se le concede valor de indicio en lo individual, para demostrar la existencia de seis bardas pintadas, y dos anuncios espectaculares, ubicadas en los lugares que refiere el denunciante, con el emblema del Partido Revolucionario Institucional y los mensajes que menciona, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción tercera; cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en impresiones de imágenes digitales, producto de avances de la ciencia y tecnología. En atención a la medida cautelar otorgada en el expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve, mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil nueve, en el que se instruyó al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un notario público, a fin de verificar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con el propósito de impedir que se perdieran,

destruyeran o alteraran; en veintidós de junio de dos mil nueve, se agregó la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta, de veintidós de junio de dos mil nueve, con respaldo fotográfico, pasada ante la fe del notario adscrito a la notaría pública número uno, de esta demarcación notarial. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar la existencia de una barda pintada con el emblema del Partido Revolucionario Institucional, y con una leyenda integrada por tres frases, ubicada en el lugar referido por el denunciante en su escrito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera, cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL, cero, cero, cero, cinco, diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera

Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". Al tenor de los datos que a continuación se detallan. Barda pintada de fondo rojo, ubicada en calle Zafiro, esquina con calle Madrid, colonia España, Santiago de Querétaro, Querétaro, en la parte lateral del inmueble identificado con el número setenta y tres, de la calle Madrid. Contiene letras blancas con una leyenda constante de tres frases: "Váyanse con los bolsillos llenos, pero ya váyanse", primera, "ellos ganaron millones, Querétaro perdió doce años", segunda, "Señores del Partido Acción Nacional: ¿Era este el cambio tan prometido?", tercera. Entre la segunda y tercera frase, se encuentra en la parte superior, una ventana metálica negra, debajo el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris con marco blanco, que engloba un circulo dividido en tres

secciones: la primera sección de color verde –de izquierda a derecha, vista de frente–, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. El recuadro gris se encuentra atravesado por dos líneas diagonales negras formando una "X", la primera línea inicia en la punta superior izquierda y finaliza en la punta inferior derecha, la segunda línea inicia en la punta superior derecha y finaliza en la punta inferior izquierda. Lo expuesto es así, puesto que valorar cualquier medio de convicción, consiste no solamente en decidir si fue debidamente ofrecido, admitido, preparado y desahogado, sino concederle o negarle la posibilidad de demostrar determinados hechos, atendiendo al valor con que lo tasa la normatividad aplicable. En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia J punto cuarenta y cinco diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento ochenta y seis guión ciento ochenta y siete de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro:

"Pruebas documentales. Sus alcances". Así también, lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres, de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". En virtud de la medida cautelar otorgada en el expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve, por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil nueve, en el que se encomendó al personal de la Secretaría Ejecutiva, contratar los servicios de un Notario Público, a fin de constatar la existencia de los objetos materia de la denuncia, con la finalidad de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran; en veintidós de junio de dos mil nueve, se agregó, la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta y dos, de veintidós de junio de dos mil nueve, con respaldo fotográfico, pasada ante la fe del notario adscrito a la notaría pública número uno, de esta demarcación notarial. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar la existencia de cinco bardas pintadas, dos anuncios espectaculares, ubicadas en los lugares que refiere el

denunciante, con el emblema del Partido Revolucionario Institucional y los mensajes que menciona, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera, cuarenta y dos, fracción cuarta, cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL, cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". Al tenor de los datos que acto seguido se

describen. Anuncio espectacular de fondo rojo, localizado sobre estructura metálica negra, ubicada en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja, con calle Peña de Bernal, colonia Las Américas, Santiago de Querétaro, sobre el inmueble identificado con el número diez. Contiene en la parte central letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional." En la esquina inferior derecha contiene el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde de izquierda a derecha, vista de frente-, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. Anuncio espectacular de fondo rojo, localizado sobre estructura metálica con base tubular azul, ubicada en avenida Cinco de Febrero, con calle Fernando Montes de Oca, colonia Niños Héroes, Santiago de Querétaro, sobre el inmueble identificado con el número ciento dieciocho guión "A". Contiene en la parte central letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional."

En la esquina inferior derecha contiene el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde de izquierda a derecha, vista de frente, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco: Barda pintada de fondo rojo, ubicada en Avenida Pie de la Cuesta, esquina con calle Diamante, colonia San Pedrito Peñuelas, Santiago de Querétaro, Querétaro, en la parte lateral del inmueble identificado con el número doscientos uno, frente al Instituto Peñuelas Sociedad Civil, Preescolar y Primaria. Contiene letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional." En la parte superior derecha el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde de izquierda a derecha, vista de frente-, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en

color blanco. Debajo del citado emblema, con letras mayúsculas blancas la frase "Querétaro". Barda pintada de fondo rojo, ubicada en calle Belén, colonia San Pedrito Peñuelas, Santiago de Querétaro, Querétaro, junto al local comercial denominado "Perfumería", identificado con el número dos. Contiene en la parte superior letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional". En la parte inferior izquierda el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde de izquierda a derecha, vista de frente, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. Debajo del citado emblema, con letras mayúsculas blancas la frase "Querétaro". Barda pintada de fondo rojo, ubicada en calle Belén, colonia San Pedrito Peñuelas, Santiago de Querétaro, Querétaro, junto al local comercial denominado "Ciber Belén". Contiene letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional". En la parte superior

izquierda el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde –de izquierda a derecha, vista de frente, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. Debajo del citado emblema, con letras mayúsculas blancas la frase "Querétaro". Barda pintada de fondo rojo, ubicada en carretera Chichimequillas, en las cercanías del inmueble identificado con el número trescientos nueve, esquina con Río Papagayo, colonia Menchaca, Santiago de Querétaro, Querétaro. Contiene letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional". En la parte superior izquierda el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde –de izquierda a derecha, vista de frente–, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. Debajo del citado

emblema, con letras mayúsculas blancas la frase "Querétaro". Barda pintada de fondo rojo, ubicada en carretera Chichimequillas, en las cercanías del inmueble identificado con el número cuatrocientos diez, colonia Menchaca, Santiago de Querétaro, Querétaro. Contiene en la parte superior letras blancas con la leyenda: "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional". Debajo, en la parte izquierda el emblema del Partido Revolucionario Institucional, consistente en un recuadro gris que engloba un circulo dividido en tres secciones: la primera sección de color verde de izquierda a derecha, vista de frente, contiene la letra "P" en color blanco, la segunda sección de color blanco, contiene la letra "R" en color negro, la tercera sección de color rojo, contiene la letra "I" en color blanco. Debajo del citado emblema, con letras mayúsculas blancas la frase "Querétaro". El Partido Revolucionario Institucional, ofreció por conducto de su representante suplente, medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en su escrito de contestación relativo al expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve; sin embargo, en veintisiete de junio de dos mil nueve, las probanzas identificada en el apartado

respectivo con los incisos dos y tres fueron desechadas en autos, por no encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. En otro aspecto, en la misma fecha, el medio de prueba identificado en el apartado respectivo de su escrito de contestación, con el inciso uno, fue admitido y desahogado en virtud de su propia y especial naturaleza, consistente en una documental privada exhibida en original, que fueron puestas a disposición del oferente por así haberlo solicitado, previa copia certificada que de la misma se dejó en autos para debida constancia, relativa a lo siguiente formato de autorización para colocación de propaganda electoral en inmuebles particulares, de veinticuatro de mayo de dos mil nueve, suscrito por José Ma. Soto R., respecto del inmueble ubicado en calle Zafiro, esquina con calle Madrid, colonia España, de esta ciudad capital. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio de indicio en lo individual, para demostrar que, José Ma. Soto R., autorizó la colocación de promocionales y propaganda electoral, en su domicilio particular, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos treinta y ocho, fracción tercera, cuarenta y tres, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento privado elaborado entre particulares. Por otra parte, el partido denunciado, ofreció por conducto de su representante suplente, medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en su escrito de contestación relativo al expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve; no obstante, en veintisiete de junio de dos mil nueve, las probanzas identificada en el apartado respectivo con los incisos dos, tres y cuatro, fueron desechadas en autos, por no encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. Por último, el Partido Revolucionario institucional, en atención al principio de adquisición procesal, en su escrito de contestación ofreció el medio de prueba identificado en el apartado respectivo con el inciso uno, consistente en la prueba técnica originalmente ofertada por el

Partido Acción Nacional, integrada por ocho impresiones fotográficas a blanco y negro. La cual ya ha sido valorada en párrafos precedentes, consideraciones que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones infructuosas, atendiendo al principio de economía procesal. No pasa inadvertido a esta autoridad electoral que, dentro de este procedimiento se ofrecieron la instrumental de actuaciones, la cual consiste en la totalidad de constancias que existen dentro del presente expediente, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que no es más que la valoración de la prueba misma, pues como se sabe, existen presunciones juris et de iure y también iuris tantum. Tercero.- Análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento, este Consejo General, atendiendo a que las causas de sobreseimiento, son de previo y especial pronunciamiento, así como de estudio oficioso, hayan sido alegadas o no por las partes, estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo veintiuno, fracción primera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionado del Instituto Electoral de Querétaro, en relación con los diversos veintisiete, veintiocho,

fracción cuarta; veintinueve, fracción séptimo de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, en virtud de lo estipulado por los artículos cinco y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, sobre el aspecto que a continuación se aborda. Según se advierte de la escritura pública veintiocho mil seiscientos cuarenta y dos, de veintidós de junio de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Uno, de esta demarcación notarial, después de una minuciosa búsqueda del domicilio que el representante propietario del Partido Acción Nacional, señaló a foja cinco de su escrito de denuncia como: "Adyacente a la calzada Cerina, esquina con Belén, de la colonia San Pedrito Peñuelas en esta ciudad", realizada por el personal de la Secretaría Ejecutiva y el notario certificarte, no se encontró la barda objeto de denuncia en el domicilio transcrito. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar la inexistencia de la barda en comentario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. Esto es así porque, de conformidad con el marco jurídico aplicable, dicha documental pública, es suficiente para desvirtuar la fuerza convictita que pudiera proporcionar la prueba técnica aportada por el Partido Acción Nacional, citada en el inciso C, punto segundo, del considerando que antecede, específicamente una impresión fotográfica a blanco y negro de la barda que -según lo refirió el promovente-, se encontraba ubicada en el domicilio reseñado. Circunstancia que no puede ser de otra manera, porque la aludida prueba técnica consistió en la impresión de una imagen digital, producto de los avances de la ciencia y tecnología. Es ampliamente conocido que el contenido de una imagen digital es manipulable por aquellos sujetos que tengan los conocimientos técnicos y el software computacional requerido, quienes pueden modificar su contenido sin complicaciones, estando en la posibilidad de añadir elementos con los que no contaba, o quitar

elementos existentes, produciendo una percepción falsa del contenido real del la imagen de la cual se obtuvo la impresión, e incluso, generar contenidos sin sustento fáctico, lo cual en el lenguaje común se conoce como "fotomontaje". Por ello, el artículo cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, establece que las pruebas técnicas tendrán eficacia demostrativa si y sólo si, cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí; lo cual en el caso no acontece. En esa tesitura, al demostrarse la inexistencia del promocional que el representante propietario del Partido Acción Nacional, manifestó a foja cinco de su escrito de denuncia, se encontraba ubicado: "Adyacente a la calzada Cerina, esquina con Belén, de la colonia San Pedrito Peñuelas en esta ciudad"; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el procedimiento, única y exclusivamente en lo tocante al indicado promocional. Cuarto.- Se acredita el nexo de causalidad entre la hipótesis

normativa específica y el hecho fáctico concreto, en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional. Este Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, debe analizar las circunstancias sujetas a su consideración, para fijar si la actuación cometida tiene un nexo causal entre su supuesto infractor, a efecto de determinar si efectivamente desplegó la conducta atribuida; asimismo, dicho enlace debe ser valorado tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que debieron de haberse suscitado para la perpetración de la conducta. Se corrobora la existencia de un enlace causal entre la conducta consistente en la pinta de las seis bardas y la colocación de dos anuncios espectaculares, ubicadas en los lugares que se detallan en párrafos que anteceden, con el emblema del Partido Revolucionario Institucional, con los mensajes en letras blancas multicitados; y la exigibilidad jurídica o juicio de reproche, de atribuir dicha actuación, en autoría material e intelectual, al Partido Revolucionario Institucional. Se explica. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, al rendir su contestación dentro del expediente sesenta y cinco diagonal dos

mil nueve, textualmente manifestó a foja tres de su escrito: Si bien es cierto que al día de hoy se encuentra colocado el espectacular (sic) referido, es importante precisar que dicho promocional fue contratado en fecha veinticuatro de mayo del presente año como consta en el contrato respectivo que se anexa al presente como elemento de prueba. De lo transcrito puede advertirse el reconocimiento expreso que formula el Partido Revolucionario Institucional, sobre la autoría tanto intelectual como material, de la elaboración, colocación y difusión de los promocionales que se le atribuyen, lo que se traduce en una confesión sobre los hechos imputados, situación que no se encuentra sujeta a prueba ni objeción alguna, por disposición del artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Igualmente, el partido denunciado, por conducto de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, al rendir su contestación dentro del expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve, literalmente manifestó a foja catorce de su escrito: Las acepciones utilizadas se encuentran amparadas bajo el derecho de libertad de expresión previsto en el artículo sexto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en realidad únicamente constituyen una crítica dura al trabajo del partido en el poder. Esto es así, porque el contenido del mensaje no implica la disminución o el demérito de la estima o imagen del Partido Acción Nacional, pues de su simple lectura es válido sostener que en realidad únicamente constituye la opinión del Partido Revolucionario Institucional. De lo cual puede advertirse el reconocimiento expreso que formula el Partido Revolucionario Institucional, sobre la autoría tanto intelectual como material, de la elaboración, colocación y difusión de los promocionales que se le atribuyen, lo que se traduce en una confesión sobre los hechos imputados, situación que no se encuentra sujeta a prueba ni objeción alguna, por disposición del artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Reconocimientos que se encuentran robustecidos con la documentación privada que allegó el propio representante suplente del partido denunciado, licenciado Juan Saldaña Zamora, consistentes en un formato de autorización para colocación de propaganda electoral en inmuebles particulares. Documental que ha sido descrita y valorada en el considerando

que antecede. Más aún porque, dicha autoría no ha sido motivo de controversia por parte del partido denunciado. Aunado a que, en todos los promocionales denunciados, se visualiza el emblema del Partido Revolucionario Institucional, que ya ha sido puntualmente descrito con antelación. Quinto.- Análisis sobre reincidencia, aduce el denunciante que la elaboración, colocación y difusión de los promocionales en estudio, constituye una conducta reincidente por parte del partido denunciado, con relación a lo resuelto por el Consejo General, en sesiones extraordinarias de cinco y diecisiete de junio de dos mil nueve, en los expedientes cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, así como cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, relativos a sendos procedimientos especiales sancionadores instruidos en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Al efecto, en veintinueve de junio de dos mil nueve, se ordenó agregar copia certificada del expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, así como del cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve,

del índice de esta autoridad electoral, como medida para mejor proveer, en virtud de que los hechos ventilados en tales procedimientos, guardan estrecha vinculación con los hechos jurídicamente relevantes que se estudian; mayormente porque lo ahí resuelto constituye un hecho notorio en términos del ordinal treinta y seis, párrafo segundo, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, por ser expedientes tramitados y resueltos por este órgano electoral; constancias que se tienen a la vista para todos los efectos conducentes, por obrar en los archivos que para tal efecto se llevan en la Secretaría Ejecutiva. Circunstancia que de ningún modo causa perjuicio a las partes, debido a que las medidas para mejor proveer constituyen una facultad que se realiza según el prudente arbitrio de la autoridad, que puede ser ejercida o no, cuando considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver. Así, ello no puede considerarse como una afectación al derecho de defensa de las partes en el procedimiento al ser una facultad potestativa de la autoridad que conoce de un conflicto. En tal sentido, resulta aplicable la jurisprudencia S tres ELJ cero nueve diagonal noventa y nueve,

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a página ciento tres de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Diligencias para mejor proveer. Su falta, no irroga perjuicio a las partes, por ser una facultad potestativa del juzgador". Por ello, toda vez que en los autos del procedimiento no se contaban elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, y percibir la magnitud real del problema planteado, por ello, esta autoridad sustanciadora, mediante diligencia para mejor proveer, recabó aquellos documentos para obtener información a efecto de clarificar el campo de análisis de los hechos controvertidos, y tener una panorámica adecuada de la litis, a fin de dirimir la controversia. Habida cuenda que, las constancias recabadas, contienen información útil y datos reveladores, para el esclarecimiento de los hechos materia del asunto, a fin de satisfacer los principios de certeza y legalidad, rectores de los actos electorales. En ese aspecto, resulta aplicable la jurisprudencia S tres ELJ diez diagonal noventa y siete, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento uno guión ciento tres de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Diligencias para mejor proveer. Procede realizarlas cuando en autos no existan elementos suficientes para resolver". Del estudio integral de las constancias que integran la copia certificada del expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, se advierte que el Consejo General de este instituto, sancionó al Partido Revolucionario Institucional, por la pinta de cuatro bardas, ubicadas en distintas calles de la colonia Menchaca Uno, de esta ciudad capital, con semejantes características, y similitud de rasgos, con los promocionales materia de esta resolución: fondo rojo, con leyendas formadas con letras blancas y el emblema del partido de referencia. Asimismo, del análisis de las constancias que integran la copia certificada del expediente cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, se advierte que el Consejo General de este instituto, sancionó al Partido Revolucionario Institucional, por la pinta de tres bardas ubicadas respectivamente en las colonias Menchaca Tres, Lázaro

Cárdenas y Cerrito Colorado, de esta ciudad capital, cuatro anuncios espectaculares localizados correspondientemente sobre las vialidades Boulevard Bernardo Quintana Arrioja, Avenida de la Luz y Avenida Pie de la Cuesta, y un anuncio rotulado en la parte exterior del medallón de una unidad de transporte público colectivo de pasajeros, con semejantes características, y similitud de rasgos, con los promocionales materia de esta resolución: fondo rojo, con leyendas formadas con letras blancas y el emblema del citado partido. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por el denunciante, no se acredita la existencia de reincidencia al respecto, en virtud de que. Uno.- Lo resuelto en el expediente cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, no reviste el carácter de cosa juzgada. La necesidad de poner término a los litigios decididos mediante resolución de autoridad competente, evitando incertidumbre en la vida jurídica, es la razón de ser de la cosa juzgada. La doctrina nacional es unánime en reconocer que la eficacia de la cosa juzgada tiene soporte en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendente a obtener la revisión de la misma materia; b)

inmutabilidad, ya que en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia concebida como cosa juzgada; y c) coercibilidad, consistente en la eventualidad de ejecución forzada, en caso de no darse un cumplimiento espontáneo. En la especie, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, por escrito recibido en la Secretaría Ejecutiva de este instituto, a las veinte horas con veintitrés minutos del veintiuno de junio de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que nos atañe; por tal motivo se ordenó la formación del cuaderno de apelación treinta y ocho diagonal dos mil nueve, dentro del cual, mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil nueve, se proveyeron las diligencias atinentes, para que en su oportunidad se mandaran los autos al tribunal de alzada, para la substanciación y resolución del recurso. Así, es inconcuso que, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional promovió medio de impugnación en contra de la resolución emitida dentro del expediente cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve; esta aún no reviste el carácter de cosa juzgada, puesto que se encuentra en vía

de un nuevo análisis por parte del ad quem, lo que en su caso podría acarrear la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado. Circunstancia que conforma un hecho notorio en términos del ordinal treinta y seis, párrafo segundo, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, por tratarse de un asunto al que la autoridad electoral dio entrada por mandato legal; constancias que se tienen a la vista para todos los efectos conducentes, por encontrarse en los archivos que para tal efecto se llevan en la Secretaría Ejecutiva. Por consiguiente, debe estimarse que hasta el momento, lo resuelto en el expediente cincuenta y seis diagonal dos mil nueve y su acumulado cincuenta y siete diagonal dos mil nueve, únicamente constituye una expectativa de sanción, dado que no se encuentra revestida de firmeza. Dos.- Los actos denunciados que dieron origen a los procedimientos especiales sancionadores sesenta y cinco diagonal dos mil nueve y sesenta y seis diagonal dos mil nueve, se cometieron con anterioridad al dictado de la resolución recaída en el expediente cuarenta y tres diagonal dos mil nueve, en virtud de que. Inciso a).- No obra en autos elemento de convicción con el que se corrobore que los

promocionales en estudio fueron elaborados, colocados o difundidos, con posterioridad al cinco de junio de dos mil nueve. Inciso b).- El citado denunciado al rendir su contestación, negó categóricamente que los promocionales que contrató, hayan sido elaborados, colocados o difundidos, en fecha posterior al cinco de junio de dos mil nueve, y se opuso a las pretensiones del denunciante, asistiéndole el principio de presunción de inocencia a su favor. Lo cual encuentra sustento en la tesis relevante cuarenta y tres romano diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, con el rubro: "Presunción de inocencia. Debe reconocerse este derecho fundamental en los procedimientos sancionadores electorales". Inciso c).- El representante propietario del Partido Acción Nacional no aportó medio de prueba idóneo, suficiente y bastante para desvirtuar la negativa realizada por el denunciado, a pesar de tener la carga de la prueba al respecto; atendiendo a la disposición contenida en el artículo treinta y seis, último párrafo, de la Ley de Medios de Impugnación del

Estado de Querétaro, de aplicación supletoria, que consigna "El que afirma está obligado a probar". Lo cual encuentra fundamento además en la tesis relevante siete diagonal dos mil nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil ocho, con el rubro: "Carga de la prueba. En el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante". Inciso d).- El partido denunciado, en atención al numeral treinta y seis, último párrafo de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro, concretamente en la parte que prevé: "También lo está el que niega cuando su negación implique la afirmación expresa de un hecho", exhibió en el procedimiento: un formato de autorización para colocación de propaganda electoral en inmuebles particulares; documental que han sido descrita en considerandos precedentes, con la que se comprueba por lo menos indiciariamente, que uno de los promocionales en controversia, consistente en la pinta de una barda, fue elaborado, colocado y difundido, antes del cinco de junio de dos mil nueve; en virtud de que, la respectiva

autorización de colocación de propaganda, fue celebrada y otorgada, en el mes de mayo del año que transcurre. Sin embargo, pese a que no se acreditó reincidencia en el caso, ello no exime al Partido Revolucionario Institucional, de las responsabilidades generadas con motivo de los actos denunciados por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, motivo del presente expediente y su acumulado. Sexto.- Estudio de fondo, del análisis minucioso de la litis, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional, aduce esencialmente que: la denuncia planteada en su contra, carece de razón y de derecho, toda vez que a dicho instituto político le asiste el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente y tutelada mediante instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, lo cual deviene en el derecho de formular criticas severas sobre el desempeño del gobierno, o de las actividades de los partidos opositores, en el contexto del debate político y difusión de ideas, sin censura previa, que debe existir de cara a los comicios electorales, mayormente tratándose de temas de interés público; como en el caso de los promocionales en análisis. En principio debe

comentarse que, todo órgano resolutor de conflictos, al encontrarse frente a problemáticas de igual naturaleza, debe razonar en términos semejantes. Más aún, no existe en la legislación ningún precepto o principio jurídico que impida a los órganos electorales, al dictar una resolución, razonar en términos similares, independientemente de que los procedimientos sean resueltos en la misma o en distinta sesión, por lo que esto no sería suficiente para considerar ilegal el acto que se impugna. Por el contrario, siempre se ha considerado acorde a derecho que los razonamientos de las autoridades sean semejantes en los asuntos en que coinciden las mismas o similares circunstancias, dado que con esto se fomenta la seguridad y la certeza en la solución de los conflictos. Situación distinta se presenta cuando en la decisión de un asunto se razone de la misma manera que en otro, cuando existan hechos, pruebas o circunstancias que no sean de idéntica naturaleza en cada uno, o que estén regidos por diferentes ordenamientos jurídicos. Sobre este punto, es aplicable la jurisprudencia S tres ELJ cero ocho diagonal noventa y ocho, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a

fojas doscientos noventa y nueve guión trescientos de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Sentencias. Argumentos análogos, no causan perjuicio a las partes". Ahora, toda vez que la litis a resolver se centra en determinar si los promocionales en estudio, elaborados, colocados y difundidos por el Partido Revolucionario Institucional, no exceden o van más allá de la regulación de la libertad de expresión, es menester hacer referencia al marco jurídico constitucional al respecto. El artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado". El artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: "En la propaganda política o electoral que difundan los partidos

deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas''. De los numerales transcritos se advierte que, debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica; puesto que es consustancial al debate democrático, que se permita la libre circulación de ideas acerca de los candidatos y sus partidos políticos, por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. Asimismo, debe permitirse a los titulares de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, y de expresión, que cuestionen e indaguen sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de forma que los electores puedan formar libremente su propio criterio para votar. En tal virtud, la libertad de expresión, así como el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter político-electoral, constituyen una trama normativa y se fortalecen entre sí; además que, las elecciones libres y auténticas, así como la libertad de expresión,

en particular la libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho fundamental de la libertad de expresión, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Lo cierto es que, en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión, constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios, y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. Por consiguiente, es indispensable proteger y garantizar el

ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información; es preciso que se pueda cuestionar e indagar sobre los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. Cuando se restringe indebidamente la libertad de expresión de un sujeto de derecho, no sólo es el derecho de ese sujeto el que está siendo violentado, sino también el derecho de la colectividad a la obtención de información e ideas. Por un lado, nadie debe ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada sujeto; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento

ajeno. De esta manera, el derecho a la libertad de expresión cobra dos dimensiones, la individual y la social. Ahora, la libertad de expresión en relación con la propaganda electoral que en el curso de una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones a través de los medios de comunicación, admite un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en esos debates o cuando estén involucrados cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática. Las expresiones relativas a servidores públicos o a otras personas que ejercen funciones de carácter público, deben gozar de un margen de apertura a un debate amplio en torno a asuntos de interés público o interés general, lo cual es muy importante en una sociedad democrática, tal criterio es aplicable también respecto de las expresiones que se profieran en relación con una persona pública, por ejemplo, un político o un candidato a un cargo de elección popular, quien se somete voluntariamente al escrutinio público, en relación con cuestiones de interés público o interés general, en los cuales la sociedad tienen un legítimo interés de mantenerse informada. Dichos razonamientos tienen su origen en la jurisprudencia J

punto once diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, intitulada: "Libertad de expresión e información su maximización en el contexto del debate político". En consecuencia, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina que los promocionales elaborados, colocados y difundidos por el Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la pinta de cinco bardas y dos anuncios espectaculares, identificados en el considerando segundo, punto tercero, incisos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, respectivamente, no constituyen infracciones a la normatividad que regula la propaganda electoral, pues si bien es cierto que contienen correspondientemente las leyendas: Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional" y "Quinientos mil desempleados. Hora de despedir al Partido Acción Nacional", lo cierto es que dichas expresiones únicamente constituyen una critica severa y manifestación de desacuerdo con el desempeño que han venido realizando las administraciones

panistas al frente del gobierno del Estado, como a nivel nacional, desde la óptica del que la hace, que no va más allá ni transgrede los limites constitucionales y legales que consagra la libertad de expresión en materia política, ya que –como se ha comentado anteriormente, este derecho fundamental se maximiza, para abarcar criticas que, aun cuando sean duras o ásperas, permitan confrontar propuestas, ideas y opiniones en el ámbito del debate democrático, de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. Como es el caso, porque asuntos como los siguientes, los cuales son enunciados de forma enunciativa más no imitativa, constituyen temas propios de las problemáticas nacionales, y están acordes con los fines de los partidos políticos: a) empleo, b) desempleo, c) desarrollo económico, d) distribución de la riqueza, e) marginación, f) analfabetismo, g) salud, h) seguridad pública, i) migración, j) infraestructura vial, k) respeto a los derechos humanos, l) seguridad social, m) servicios públicos, n) impuestos y tributaciones, o) protección al medio ambiente, p) desarrollo agropecuario, q) administración de justicia, r) educación, s) cultura, t) deporte, u) equidad de genero, v) participación ciudadana, w) transparencia, x) comercio

nacional, y) comercio internacional, así como z) política exterior y diplomática, entre otros. Esto es acorde con los propósitos encomendados constitucional y legalmente a los partidos políticos, ya que de conformidad con el artículo cuarenta y uno, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son entidades de interés público, cuya finalidad es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Sin embargo, tal como lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias relacionadas con el tema, el derecho de libertad de expresión no es absoluto. En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión, encuentra contrapeso con otro valor que también ha sido tutelado tanto por la normatividad electoral como por la de carácter internacional que se ha especificado. Se trata de la honra, la reputación y la dignidad de los servidores públicos o de las personas públicas, los cuales por supuesto, deben ser jurídicamente protegidos, dado que toda persona tiene derecho al

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, por otra, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por tal motivo, para resolver si los restantes promocionales elaborados por el Partido Revolucionario Institucional que se estudian, no exceden o van más allá de la regulación de la libertad de expresión, es menester hacer referencia tanto al marco jurídico constitucional, específicamente el artículo sexto, en relación con el cuarenta y uno, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispositivos transcritos supra, así como a los instrumentos internacionales celebrados por el Estado México, que forman parte de nuestro orden jurídico interno, según lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un nivel jerárquico inmediato inferior a la Constitución, en términos del artículo ciento treinta y tres de la propia Carta Magna, que tutelan la libertad de expresión. El artículo diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mandata: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques''. El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifiesta: Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas''. El ordinal once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques''. El ordinal trece de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Inciso a).- El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o. Inciso b).- La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso dos. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional". El numeral treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere. "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". Los dispositivos transcritos ponen en evidencia que, el derecho al respeto a la honra y a la dignidad personal constituye un límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado, lo que es acorde con la prohibición prevista en el artículo

cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera, ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, como deber de los partidos políticos y de las coaliciones, de abstenerse de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos, en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que utilicen. De la interpretación sistemática de dichos dispositivos, se advierte que constitucional y legalmente se estableció la prohibición categórica de que en la propaganda política o electoral, en forma directa o indirecta, así sea en la modalidad de opinión o información, se empleen expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas, lo cual se traduce en una falta administrativa de rango constitucional y refuerzo legal que enfatiza las limitaciones a la libertad de expresión, manifestación de las ideas y de imprenta

aplicable a la propaganda política y electoral. Pues aún en ambientes donde los estándares democráticos son muy exigentes, se ha aceptado el criterio de que pueden imponerse límites razonables y justificables a la libertad de expresión, pues se trata de un derecho que convive con otros derechos igual de importantes, como el de la vida privada, honra, reputación, imagen, o la salud pública, por mencionar algunos. En esa óptica, es claro que una de las restricciones concretas a la libertad de expresión, necesaria y plenamente justificada en orden al respeto a los derechos y a la reputación de los partidos políticos, se estableció en el artículo cuarenta y uno constitucional, al especificar que en la propaganda política y electoral de los partidos políticos, y por extensión a las coaliciones, no pueden emplearse expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o coaliciones, o que calumnien a las personas. Esto constituye un imperativo del sistema de la democracia mexicana, si se tiene presente que es derecho fundamental de toda persona, el respeto y la garantía del derecho a su dignidad, para no ser sujeto de ataques indebidos en su honra y reputación, así como de conductas que tengan por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, según se dispone en los artículos primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, los candidatos, militantes, simpatizantes, los propios partidos políticos y coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios de esa obligación de respeto al honor o dignidad, a pesar de que sean sujetos de una crítica desinhibida, vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes, sarcásticos y de contenido negativo y, por la otra, esos mismos sujetos están obligados a respetar el derecho al honor y la dignidad de los demás. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y sujetos de obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho al honor y la dignidad, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Y que también trae como consecuencia, reconocer que los partidos políticos pueden ser

sujetos pasivos en caso de sufrir una lesión con motivo de la transgresión del derecho fundamental mencionado, ya que resulta lógico y jurídico sostener que pueden resentir un daño causado en su esfera jurídica al respecto. Por otra parte, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, ello no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir ex ante, normas en consideración a los límites del derecho de libre expresión. No se trata pues, de que no se pueda regular limitativamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, tampoco que no se puedan imponer reglas, incluso respecto del contenido, características, peculiaridades y modalidades de los mensajes. Más bien, se trata de que la determinación y aplicación de estos límites, no puede consistir en excluir, en forma anticipada, el mensaje del conocimiento y probable debate público. Es decir, estos límites no se pueden hacer valer en forma previa, sino a través de la determinación de

responsabilidades jurídicas ex post, tanto de naturaleza civil, penal y administrativa, según sea el caso. Sobre el tema es de importancia la tesis relevante décima segunda diagonal dos mil nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el ocho de abril de dos mil ocho, con el rubro: "Censura previa. Existe cuando la autoridad administrativa sujeta, de manera anticipada, las expresiones que se hacen en la propaganda política, a una restricción distinta a las previstas en el orden constitucional y legal". En efecto, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos, a saber: a) se ataque la moral; b) se afecten los derechos de terceros; c) se provoque algún delito; o, d) se perturbe el orden público. En el ámbito político-electoral existen pues, por disposición constitucional, límites y reglas específicos para el ejercicio de ese derecho por parte de los partidos políticos. Lo antepuesto es relevante porque, en materia de libertad de expresión se encuentra como límite, entre otros, el derecho de los demás o de

terceros; es decir, el respeto a la dignidad, honra o reputación de las personas, por cuanto a que el ejercicio de dicho derecho, si bien es cierto que no puede estar sujeto a censura previa, también lo es que no puede ejercerse de una manera irracional, ya que da lugar a responsabilidades ulteriores, conforme a los artículos seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecinueve, párrafo tres, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como trece, párrafo segundo, inciso a), y treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con base en esas consideraciones, se incluye como transgresión de la normatividad electoral el contenido de mensajes que impliquen la disminución o el demérito de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de diatribas, calumnias, infamias, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de calificativos o de expresiones vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que apreciados en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una

auténtica cultura democrática entre los afiliados o militantes partidarios y de la ciudadanía en general, siendo por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática. Es claro entonces que, el voto de los ciudadanos debe ejercerse como producto de la libre valoración, en la que se tomen en cuenta, preferentemente, los planteamientos de los partidos y de las coaliciones, en tornó a las exposiciones de un análisis de la problemática y necesidades en nuestro entorno, la manera como se pretenda afrontar esa problemática para la satisfacción de las necesidades ciudadanas, así como la ideología pregonada en su caso; que se hayan contenidas en las plataformas electorales, programas de trabajo, agendas de planeación y documentos básicos de los candidatos, partidos y coaliciones. Evitando sustentar esas propuestas y análisis en un ejercicio irreflexivo, irracional y hasta antijurídico, que desvirtúe el derecho de participación política del ciudadano. La argumentaciones expuestas tienen razón de ser en la jurisprudencia J punto

catorce diagonal dos mil siete, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el catorce de noviembre de dos mil siete, titulada: "Honra y reputación. Su tutela durante el desarrollo de una contienda electoral se justifica por tratarse de derechos fundamentales que se reconocen en el ejercicio de la libertad de expresión". Por lo tanto, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina que el restante promocional elaborado, colocado y difundido por el Partido Revolucionario Institucional, consistente en la pinta de una bardas identificada en el considerando segundo, punto segundo, inciso uno de esta resolución, contraviene la normatividad que regula la propaganda electoral, al contener una leyenda integrada por tres frases: "Váyanse con los bolsillos llenos, pero ya váyanse ellos ganaron millones, Querétaro perdió doce años. Señores del Partido Acción Nacional: ¿Era este el cambio tan prometido?". Puesto que las aseveraciones en ellos contenidos, implican la disminución, demérito y degradación de la estima e imagen del Partido Acción Nacional frente al electorado, como consecuencia

de la utilización de expresiones peyorativas, deshonrosas y oprobiosas, que apreciadas en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una auténtica cultura democrática entre la ciudadanía en general; dado que las frases concatenados en su conjunto, constituyen la afirmación de actos de corrupción reprochables, como robos, hurtos, desfalcos, despilfarro o malversación del erario y bienes públicos, lo cual, con base en las reglas de la lógica y según las máximas de la experiencia, se infiere de la simple lectura de las expresiones "Váyanse con los bolsillos llenos", "Ellos ganaron millones" y "Querétaro perdió". Esto es, en un mismo promocional, el Partido Revolucionario Institucional elaboró y difundió un mensaje claramente alusivo al denunciante, porque contiene el mensaje: "Señores del Partido Acción Nacional", siglas que desde luego, se refieren el Partido Acción Nacional, atribuyéndole de manera directa e ineludible, la realización de actos ilegales e inaceptables. Siendo por tanto, aunque de manera disimulada o sutil, la exteriorización de posturas personales y subjetivas de menosprecio, formuladas por el Partido Revolucionario

Institucional, tal y como lo reconoce el representante suplente del partido denunciado, a foja catorce de su escrito de contestación relativo al expediente sesenta y seis diagonal dos mil nueve: "Las acepciones utilizadas se encuentran porque el contenido del mensaje constituye la opinión del Partido Revolucionario Institucional.", máxime que, de la lectura de las frases: "Querétaro perdió doce años", "Váyanse pero ya váyanse", se concluye que, los promocionales se refieren a las administraciones públicas del partido que ha ejercido el gobierno en el Estado durante dos periodos continuos, y que actualmente se encuentra en funciones, siendo un hecho ampliamente conocido que desde mil novecientos noventa y siete, el Partido Acción Nacional ha ejercido la titularidad del gobierno del Estado de Querétaro hasta la fecha. Los mensajes peyorativos citados en la propaganda en estudio, son innecesarias para fomentar un debate serio, pacífico e informado de la situación actual o pasada de esta entidad federativa; y en ese sentido, también resultan desproporcionadas e inconducentes para lograr los propósitos constitucionales encomendados a los partidos políticos, pues en nada contribuyen al desarrollo armónico de la sociedad, a la

integración de los poderes públicos, ni a la posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Lo expuesto, porque si bien, según lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las opiniones no están sujetas al canon de veracidad, y solamente el genero informativo requiere de la demostración o justificación de las expresiones empleadas por los informantes, también lo es que, -como ya se dijo, esta distinción no es aplicable al caso de la propaganda política y electoral de los partidos políticos, en tanto el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, constitucional no distingue entre el género de opinión y el de información, por lo cual, la prohibición de denigrar abarca cualquiera de esas modalidades de comunicación si se trata de propaganda política o electoral de partidos políticos. La honra y dignidad, son valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de los sujetos, de ahí que, a partir de una postura de menoscabo o degradación, es factible la vulneración de los derechos fundamentales precitados. En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con

el fin primordial de denigrar o degradar la capacidad de sus oponentes, implica la vulneración de derechos de terceros o de la reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que se han reconocido constitucionalmente y a través de los pactos internacionales signados por el Estado Mexicano. En el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se distinguió la posibilidad de que las frases denigrantes se emplearan con motivo de una opinión, postura, información o cualquier otra modalidad de expresión, de tal manera que prohibió todo contenido denigrante o que calumnie a las personas, en la propaganda elaborada y difundida por los partidos políticos sin hacer distinción alguna. El constituyente consideró justificada esta prohibición, por diversas causas jurídicas y experiencias político-electorales previas, entre las cuales destaca el hecho de que, de conformidad con el propio artículo cuarenta y uno, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público, cuya finalidad es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática,

contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. La propaganda política y electoral de los partidos políticos, debe ser plenamente coherente con las finalidades constitucionales de los partidos políticos y con los principios democráticos. Con base en este presupuesto, es dable exigirle a los partidos políticos que al difundir propaganda actúen en forma adecuada, respetando la integridad de los candidatos, su reputación y dignidad, así como los derechos de imagen de los demás institutos políticos, coaliciones, y sus candidatos, que también son valores sustanciales de un sistema democrático. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente prohibió que en la difusión de propaganda política y electoral, se denigre a otros partidos políticos, coaliciones o candidatos o se calumnie a las personas, pues ese tipo de prácticas no son idóneas para lograr sus fines. El propósito del constituyente consistió en limitar la denigración y calumnia en la propaganda de los partidos políticos y coaliciones, al considerar que este medio debe reservarse para ejercer una política de auténtico debate ideal de opiniones. La proscripción de denigrar a los partidos, que protege el derecho a

la imagen, enfatiza una de las limitantes generales de la libertad de expresión prevista en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los derechos de un tercero. En ese esquema, se realiza una real afectación a la imagen honra y dignidad del Partido Acción Nacional, pues queda expuesto a una estrategia de desprestigio, que aunque en la presente resolución se estudia de manera individual, no pasa inadvertido a este órgano electoral, que forma parte de una campaña masiva de denostación, tal y como lo afirma el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Juan Saldaña Zamora, a foja once de su escrito de contestación relativo al expediente sesenta y cinco diagonal dos mil nueve: "Los actos denunciados, tanto en la presente como en las pasadas referidas, son una unidad, no pueden considerarse como actos nuevos". De esta manera, los promocionales en cuestión ponen de relieve una conducta ilegal que exterioriza sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática, tal como se ha sostenido en líneas

anteriores, y cuya comisión, al contravenir los principios que animan la contienda electoral, debe ser sancionada. Séptimo.- suspensión definitiva, en razón de que un promocional elaborado por el Partido Revolucionario Institucional, identificado en el considerando segundo, punto dos, inciso uno de esta resolución, contravienen la normatividad electoral en los términos que se han expuesto, este Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, como garante de velar y salvaguardar el desarrollo periódico y pacífico del proceso electoral, ante la presencia de cualquier publicidad de la cual se derive la posibilidad de tener un vínculo evidente con el desarrollo del proceso electoral y lo afecte de manera notable y grave, resulta incuestionable que esta obligado a tomar las medidas que resulten necesarias para restaurar el orden jurídico electoral violado. Consecuentemente, se ordena la suspensión inmediata de dicho promocional en definitiva, a fin de que el mensaje en el contenido no sea legible, ni visible por medio alguno, concretamente las expresiones: "Váyanse con los bolsillos llenos, pero ya váyanse." y "ellos ganaron millones querétaro perdió doce años", conservándose los restantes elementos, a saber: el emblema

del Partido Revolucionario Institucional. Esto con independencia de la sanción que por la comisión de infracciones administrativas se hace acreedor el Partido Revolucionario Institucional. Instrúyase el envió de copia autorizada de la presente resolución, mediante oficio dirigido al Ayuntamiento Municipal de Querétaro, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su recepción, cumplimente la suspensión definitiva determinada, y tenga a bien informar a esta autoridad electoral al respecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias comprobatorias pertinentes. En el entendido que el Partido Revolucionario Institucional, deberá cubrir las erogaciones que cause al Ayuntamiento de Querétaro, con motivo de los gastos que realicen por la suspensión de sus promocionales. Octavo.- Individualización de la sanción. A efecto de proceder a la individualización de la sanción, se toman en cuenta las siguientes consideraciones. En principio debe mencionarse que, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador,

como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal, comúnmente conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen al respecto, para el efecto de evitar la transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes. Orientan lo mencionado, los lineamientos contenidos en la tesis relevante S tres EL cero cincuenta y cuatro diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a foja trescientos setenta y nueve, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "Derecho administrativo sancionador electoral. le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal". En esa vertiente, tratándose del incumplimiento

de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que, por llevar implícito el ejercicio del ius puniendi, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en lo relativo a la imposición de sanciones, adopta la postura del aforismo romano nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos, uno, dos, tres, cuatro y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: Inciso a).- Un principio de reserva normativa, así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas determinan la causa de

incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción. Inciso b).- El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados en forma previa a la comisión del hecho. Inciso c).- La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita, abstracta, general e impersonal, a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad. Inciso d).- Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta -odiosa sunt restringenda-, porque el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre debe ser acotado y muy limitado, por cuanto los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos, en atención a los principios indubio pro cive y favor libertatis. Asimismo, el ius puniendi, consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que se

tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta -imputación subjetiva. Entonces, las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para fijar la sanción que corresponda al partido político por las irregularidades cometidas, comprende tanto a las de carácter objetivo: la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar, como a las subjetivas: el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia, el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia que rodean a la contravención de la norma administrativa. Lo argumentado encuentra sustento en la jurisprudencia J cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a fojas doscientos setenta y seis guión doscientos setenta y ocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". Y en la

jurisprudencia J punto veinticuatro diagonal dos mil tres, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a páginas veintiocho guión veintinueve del suplemento siete de la Revista Justicia Electoral dos mil cuatro, cuyo rubro es: "Sanciones administrativas en materia electoral. Elementos para su fijación e individualización". Es necesario puntualizar que, los partidos políticos se encuentran vinculados jurídicamente a conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. Como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden, existieron infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, por parte del Partido Revolucionario Institucional; durante la prosecución del procedimiento sancionador, se aportaron suficientes elementos para comprobar las violaciones que se le atribuyeron. En este orden de ideas, el partido político denunciado, debe ser sancionado por la comisión de infracciones que redundan en el incumplimiento de las

disposiciones contenidas en el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera, ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Por tal motivo, una vez acreditadas las infracciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, y su atribución subjetiva, con base en las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad electoral determina que las faltas cometidas por el partido denunciado, son de orden leve, porque se ponderan las circunstancias del caso específico que han sido materia de estudio, en atención al principio de equidad, que implica considerar las condiciones especificas, que imperan en el contexto de la materialización de la conducta reprochable. Quedó demostrado en autos que, uno de los promocionales elaborados por el Partido Revolucionario Institucional, constituye una estrategia de desprestigio hacia el Partido Acción Nacional en el Estado, pues si bien el

promocional sancionable consiste solamente en la pinta de una barda, lo cierto es que no debe perderse de vista que forma parte de una campaña masiva de denostación. En esa tesitura, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, ponderando la magnitud de afectación que se le irrogaría, para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en la contienda del proceso electoral dos mil nueve, en fechas muy cercanas a la jornada comicial de cinco de julio, se determina un grado de reprochabilidad situado en el punto equidistante entre la mínima y la media del parámetro de sanciones, para el Partido Revolucionario Institucional, por las conductas desplegadas. Esto quiere decir que, con respaldo en los artículos cinco, doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro de la Ley Electoral de Querétaro, en correlación con los ordinales cincuenta y nueve, párrafo primero, sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos de la Ley e Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y treinta y cinco del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, este Consejo General considera procedente

la sanción pecuniaria contemplada en la fracción tercera del artículo invocado en último término, consistente reducción de las ministraciones del financiamiento público que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, toda vez que la sanción impuesta contempla como máximo el veinticinco por ciento de la percepción de financiamiento público, se procede a graduar o individualizar la sanción, tomando como base la ministración mensual del financiamiento público ordinario que prevalecía al momento de la materialización de los hechos objeto de estudio, que en la especie fue de doscientos veintisiete mil ochocientos cinco pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional, siendo esta cantidad el ciento por ciento de la ministración mensual que percibe el Partido Revolucionario Institucional en el dos mil nueve, según constan en los archivos de la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Instituto Electoral de Querétaro. En esa tesitura, el veinticinco por ciento de la ministración que mensualmente percibe el partido, corresponde a la cantidad de cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional. Lo cual implica que, para la individualización de la

sanción, debe partirse desde el monto mínimo no especificado, que sería el cero por ciento, por ser el porcentaje menor, y oscilar de acuerdo a las circunstancias particulares del caso concreto, hasta el veinticinco por ciento, como monto máximo. En esa óptica, con fundamento en los artículos doscientos veinticuatro de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, siguiendo una adecuada técnica jurídica, esta autoridad establece una graduación de sanciones entre la mínima y la máxima, para determinar la sanción aplicable al partido infractor, de acuerdo a la conjugación de los siguientes elementos: a) la gravedad de las irregularidades cometidas, b) las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron llevadas a cabo, c) la lesión causada a bienes jurídicamente tutelados, d) medios de ejecución empleados, e) las condiciones externas y socioeconómica del infractor, f) grado de intencionalidad, y g) situación de reincidencia, -que no se actualizó en la especie. Con base en lo anterior, se considera que el parámetro de la reducción que contempla el artículo treinta y cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento

Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, oscila de cero pesos a cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, conforme a la escala que se muestra en la tabla siguiente. Porcentaje, veinticinco por ciento, cantidad liquida cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, grado de sanción máxima. Porcentaje, veintiuno punto ocho por ciento, cantidad líquida, cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos punto cuarenta y tres centavos, grado de sanción, cercana a la máxima. Porcentaje, dieciocho punto siete por ciento, cantidad líquida, cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cincuenta y un centavos, grado de sanción, equidistante entre la media y la máxima. Porcentaje, quince punto seis por ciento, treinta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y nueve centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la media. Porcentaje, doce punto cinco por ciento, cantidad líquida, veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos, grado de sanción, media. Porcentaje, nueve punto tres por ciento, cantidad líquida, veintiún mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, grado de sanción, cercana a la media.

Porcentaje, seis punto dos por ciento, cantidad líquida, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y siete centavos, grado de sanción, Equidistante entra la mínima y la media. Porcentaje, tres punto uno por ciento, cantidad líquida, siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la mínima. Porcentaje, cero por ciento, cantidad líquida, cero por ciento, grado de sanción, mínima. Sobra decir que, como es sabido, para obtener el término medio aritmético de la sanción, se debe sumar la mínima con la máxima, y al producto resultante dividirlo entre dos. De la misma manera, para sacar la sanción equidistante entre la mínima y la media, se debe sumar la mínima con la media, y al producto resultante dividirlo entre dos. Operación que se repite sucesivamente hasta obtener la escala anteriormente indicada. En consecuencia, este Consejo General, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina un grado de reprochabilidad de las conductas desplegadas por el Partido Revolucionario Institucional, entre el parámetro de sanción media, doce punto cinco por ciento, equivalente a veintiocho mil cuatrocientos

setenta y cinco pesos, sesenta y cinco centavos moneda nacional, a mínima, concluye imponer la sanción equidistante entre la mínima y la media, consistente en la reducción equivalente al seis punto dos por ciento del monto que corresponde a la ministración que por mes se le otorga en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida de catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos, moneda nacional, que deberá ser reducida en cuatro ministraciones, dando un total de cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y dos centavos moneda nacional, debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última se efectúe en noviembre de dos mil nueve, acorde con razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. Esto se ejemplifica visualmente como se plasma en la tabla que a continuación se inserta. Periodo de reducción de ministraciones durante dos mil nueve. Agosto, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Septiembre, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Octubre, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Noviembre,

catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Cantidad total, cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y dos centavos. Siendo aplicable por identidad jurídica sustancial, los lineamientos establecidos en la jurisprudencia S tres ELJ cero nueve diagonal dos mil tres, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a páginas veintinueve guión treinta de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete-dos mil cinco, con el rubro: "Arbitrio para la imposición de sanciones. Lo tiene el Consejo General del Instituto Federal Electoral". Esto por ser ambos órganos gubernativos: el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autoridades administrativas electorales, encargadas de la organización de los comicios electivos, así como de la imposición de sanciones por infracciones administrativas en la materia, esto es, con la misma naturaleza institucional y facultades, aunque claro, en distintos ámbitos de competencia. En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de la demostración de una infracción

que encuadre en la hipótesis jurídica, luego, automáticamente el infractor se hace acreedor de una sanción; posteriormente, se deben de apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las circunstanciales en la comisión de la infracción, lo que constituye una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueve la cuantificación de la sanción, de un punto inicial hacia uno de mayor grado; dicho en palabras sencillas, con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo de imponer sanciones más rigurosas. Sobre esta temática, es aplicable la tesis relevante S tres EL cero veintiocho diagonal dos mil tres, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, al resolver el recurso de apelación SUP guión RAP guión cero cuarenta y tres diagonal dos mil dos, consultable a página novecientos dieciséis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes". En la inteligencia de que el inicio de la ejecución de la sanción impuesta es atendiendo a

que, de aplicar la reducción del financiamiento público del citado partido en fechas más próximas, le irrogaría una afectación para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en las contiendas del proceso electoral dos mil nueve, debido a la extrema cercanía de la jornada comicial. Por tal circunstancia, este órgano colegiado estima la aplicación de la sanción impuesta, durante el periodo ya señalado. Así, el Consejo General de este instituto, asumiendo la responsabilidad que le ha sido conferida por la ciudadanía, de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones electorales, así como ajustar su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad; sanciona al Partido Revolucionario Institucional en los términos y por el periodo indicado. Fundamentos de la resolución.- De conformidad con los artículos cuarenta y uno, fracción tercero, apartado c, primer párrafo, ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y siete, fracciones octava, décima primera, décima tercera y décima cuarta; ciento

seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera; ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro, doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, ocho, veintitrés, párrafo primero, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, ocho, nueve, once, fracción primera, trece, veinticuatro, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, fracción tercera, y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario,

licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Segundo.- No se acreditó en autos la existencia de la barda descrita en el considerando tercero de esta resolución, con base en lo argumentado en ese mismo considerando; por tanto, lo procedente es sobreseer la presente, única y exclusivamente en lo tocante a la barda indicada. Tercero.- No se acreditó en autos la conducta reincidente atribuida al Partido Revolucionario Institucional, en términos y según los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente. Cuarto.- No se acreditaron en autos las conductas atribuida al Partido Revolucionario Institucional, por cuanto ve a las descritas en el considerando segundo, punto tercero, incisos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, con sustento en las argumentaciones vertidas en el considerando sexto, punto uno de esta resolución; por consiguiente, no procede aplicar sanción al partido denunciado por lo que se refiere a este aspecto. Quinto.- Se acreditó en autos la conducta atribuida al Partido Revolucionario Institucional, por cuanto ve a la detallada en el considerando segundo, punto

segundo, inciso primero, con apoyo en las argumentaciones contenidas en el considerando sexto, punto segundo de esta resolución. Sexto.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina imponer al Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Querétaro, la sanción consistente en la reducción del seis punto dos por ciento del monto que equivale a la ministración que por mes se le otorga por concepto de financiamiento público ordinario en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida de catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional, que deberá ser reducida en cuatro ministraciones, dando un total de cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y dos centavos, moneda nacional), debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última se efectúe en noviembre de dos mil nueve, acorde con los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. Séptimo.- Se ordena la suspensión inmediata, del promocional identificado en el considerando segundo, punto segundo, inciso uno, en definitiva,

conforme a los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo; asimismo, se ordena remitir al Ayuntamiento Municipal de Querétaro, los oficios correspondientes, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, cumplimenten la suspensión definitiva determinada, y tengan a bien informar a esta autoridad electoral al respecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias comprobatorias pertinentes. En el entendido que, el Partido Revolucionario Institucional, deberá cubrir las erogaciones que cause al Ayuntamiento de Querétaro, con motivo de los gastos que realicen por la suspensión de sus promocionales. Octavo.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Córdova y maestro Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para que practiquen indistintamente dicha diligencia. Noveno.- Publíquese la presente resolución en el periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del

Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Adelante consejero Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Antes de la votación sí me gustaría hacer algunas consideraciones que me parecen pertinentes en la forma que debe de aplicar la Ley este Consejo General, en otras ocasiones he manifestado que es muy importante que este órgano electoral en realidad aplique la Ley, creo que han sido muy importantes mis manifestaciones que he dado en diferentes momentos. El señor Secretario ya se fue. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Si me deja ir al baño, señor, si usted me lo permite o usted no tiene con qué. Interviene en el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Respétense. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Si gusta, esperamos a que regrese el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- No sé, si los partidos creen conveniente que lo esperemos, lo

esperamos... En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- ¿Que se puede tardar señor consejero electoral?... fue rápidamente al baño... Si gustan continuamos señor consejero. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Sí, manifestaba que uno de los puntos fundamentales de este órgano electoral es la aplicación de la Ley para eso son los órganos electorales, también he manifestado que es importante que en la aplicación de la Ley tengamos criterios que se expresen muy claramente en relación con los principios que marca la propia Constitución local y la Constitución Federal y la propia Ley Electoral, yo creo que en la aplicación de la Ley debemos de ser muy claros que lo que nos debe de guiar deben de ser estos principios. Se y lo reconozco que cuando hay reglas nuevas es difícil establecer algún criterio en términos de lo que vendría a ser la aplicación de la Ley, sobre todo si hay un acontecimiento en el cual son los mismos sujetos, el denunciante y el denunciado, es la misma leyenda. Estableció una multa o una sanción que se consideró en relación con estas leyendas y se estableció una sanción que se considero que era necesaria para

que en todo caso, se estableciera por parte de los partidos políticos, el respeto a lo que marca la propia Ley; en ese sentido, creo que la propia sanción que se dio el cinco de junio, fue una sanción que de alguna manera puede ser considerada dentro de la misma falta que se viene cometiendo; es decir, me parece que en relación con la multa que se establece en esta resolución, por analogía, puede subsumir la sanción establecida el cinco de junio, es decir, integrar en la sanción del cinco de junio a través de una figura por analogía también podemos hacerlo que esta en el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral, que se establece la figura, de la conexidad para estos casos, porque si no se establece este punto, podemos caer en un juego de aplicación de la Ley, la misma falta se pueda denunciar diez veces y diez veces se tenga que sancionar sobre el mismo asunto, entonces aquí es donde nosotros debemos de tener un criterio claro al respecto, me parece que en todo caso la sanción que fue otorgada el cinco de junio es suficiente y puede integrarse, si tenemos sensibilidad jurídica y entendemos las nuevas reglas electorales y también los nuevos procedimientos electorales que no los podemos confundir con los procedimientos

civiles, son nuevos procedimientos, si tenemos esa sensibilidad, me parece que podríamos establecer a través de la figura de la conexidad y entonces me parece importante que tengamos presente estos conceptos, o sea que en la resolución se integre esta multa a la del cinco de junio y me parece que si lo podemos hacer y si es jurídicamente factible de acuerdo a los procedimientos, esa sería mi propuesta. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- ¿Su voto, doctor?... En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Lo dije desde antes, que antes de votar iba a establecer una propuesta. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Ya estoy en la votación, doctor. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- No. Yo dije desde antes de que usted comenzara la votación, yo levanté la mano para hacer algunas consideraciones, para modificar el proyecto de resolución, ese fue mi planteamiento. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo

Vallejo Casanova?... En contra. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos cinco votos a favor y dos en contra, firman el presente documento la Presidenta y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Adelante licenciado Juan Saldaña Zamora. En el uso de la voz el licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional.- Sí, licenciada, nada más que respetando nuestros lineamientos, si el señor consejero electoral está haciendo una propuesta diferente a la que está presentando la Secretaría, yo creo que se debe de poner a consideración del Consejo General. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Por reglamento no podrá ser. En el uso de la voz el licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del Partido Nueva Alianza.- Yo secundo esa moción, porque si hizo la precisión el consejero en el sentido de que previo a votar iba a ser esa manifestación, entiendo y quiero hacer evidente, porque nos ha tocado a nosotros como partidos políticos, de ese malestar que tienen entre ustedes como consejeros,

el que uno dice una cosa y el otro brinca y le responde. Si entiendo lo que manifestaba el doctor Marco Antonio, si estamos en un Consejo, señores y si vamos a hacer el trabajo que nos fue encomendado por parte de la población, pues lo debemos de hacer con la debida seriedad y respeto de todos los miembros de este Consejo, yo hago una moción en el sentido de que nos respetemos y por lo menos tenemos a la prensa aquí enfrente, cuando menos demos la cara que debe de dar este Consejo a la sociedad, en el sentido de que tiene que ser un elemento de regularización de las elecciones y no un elemento que distorsione estas, ojalá, me ha tocado, tú lo sabes Toño, yo te estimo demasiado, pero sí me ha tocado ver actitudes más que retadoras en cuanto a la manifestación que hace tal o cual consejero, ojalá que en el futuro podamos evitar ese tipo de quebrantos en la relación. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Yo nada más comentar que a veces las necesidades de carácter físico llegan a pedirle al maestro, si me permite ir al baño o no, y yo creo que en una sesión de

Consejo sería altamente desagradable, gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Yo quiero comentar y este respecto y me sumo al licenciado Rocha Anaya que pudiéramos enviar un mensaje, a cuatro días de la jornada electoral, un mensaje de parte de los partidos políticos, del señor Director de los Consejeros Electorales de respeto, un tiempo en que los ciudadanos tendrá que reflexionar su voto, se toma en cuenta licenciado. Adelante doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Si, yo estoy totalmente de acuerdo, pero el respeto inicia cuando se respetan las propuestas que hacen los propios consejeros, no es la salida, lo que representa una falta de respeto es que no se considere la propuesta que yo hice que se reformara el proyecto o que por lo menos se pusiera en consideración y a discusión de este Consejo General, eso es lo fundamental, no lo anterior, eso sí me parece muy grave, señor Secretario Ejecutivo, que usted por su propia iniciativa marque los procedimientos que violentan la Ley, porque la Ley es muy clara en el sentido de que es factible presentar modificaciones a la resolución del proyecto, eso si usted quiere puede verlo en el

artículo noventa y ocho del Reglamento Interior, en caso de que se rechace la aprobación de un proyecto, de acuerdo, porque se discute, por supuesto, de resolución deberá dictarse un nuevo proyecto, que contenga los lineamientos dados en la sesión en que se haya discutido, decretándose al efecto un receso, hasta en tanto se presente el nuevo proyecto. Entonces yo sí le solicito mínimamente por respeto a este Consejo, que se respete la propuesta que en un momento determinado hace un consejero electoral. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Si, yo percibí que después de su locución, además que algún integrante del Consejo levantara la mano para formar parte de esta propuesta que usted hizo, en automático, obviamente pasé la lista, si yo hubiera visto que alguna otra persona como usted al principio, levanta la mano y pues yo me detengo, pero yo veo una cuestión mayoritaria en el momento que uno volteo y no hay ninguna participación pues procedemos a dar cuenta de la votación y espero que con esto haya quedado zanjado el asunto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas. Pasemos al desahogo del siguiente punto del orden

del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y otros, relativo al expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve. Resolución. Vistos los autos del expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve, relativo al procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, por conducto de su representante propietario, el licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional y coalición electoral denominada "Juntos para Creer" en el Estado, así como del ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Antecedentes. Primero:- En diecisiete de junio de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito de denuncia firmado por el licenciado Greco Rosas Méndez, en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional. Segundo.- En diecinueve de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo en el que se admitió a trámite la denuncia planteada, se ordenó la apertura del expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve; se ordenó emplazar a los denunciados, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas, manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Tercero.- En veinticinco de junio de dos mil nueve, se tuvo a los tres denunciados licenciado Sócrates Alejandro Valdez Rosales, representante suplente de la coalición electoral denominada "Juntos para Creer", al ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa y al Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante suplente licenciado Juan Saldaña Zamora, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se le atribuyeron, realizando las manifestaciones que estimaron pertinentes y ofreciendo los medios de convicción que indicaron en su escrito respectivamente; y, se abrió la causa en su periodo probatorio. Cuarto.- En veintiocho de junio de dos mil nueve, se proveyó sobre la admisión y desechamiento de los medios de prueba aportados por las partes; se ordenó el cierre del periodo probatorio; se pusieron los autos en estado de resolución, en

virtud de haberse agotado las fases de este procedimiento y no encontrarse medio de prueba pendiente de acordar; y, se instruyó la elaboración del proyecto respectivo. Presupuestos procesales. Competencia.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, fracción primera y doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos, uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de

la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, dieciséis y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Personería.- Las partes acreditaron la personería con la que se ostentan dentro del presente procedimiento sancionador. Esto es así debido a lo siguiente. El representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Juan Saldaña Zamora, el licenciado Sócrates Alejandro Valdez Rosales, representante suplente de la coalición electoral denominada "Juntos para Creer", y su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, demostraron tener legitimación ad processum para comparecer con el carácter que se adjudicaron, en virtud de que sus respectivos nombramientos obran dentro del registro que para tal efecto se llevan en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en términos de lo establecido por los numerales sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y quince, último párrafo, del Reglamento del Procedimiento

Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Vía.- La vía propuesta por el denunciante fue la correcta. En sus escritos de denuncia expresamente manifestó: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos cuarenta y uno, fracción tercero, apartado "C", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, treinta y dos, fracción tercera y ciento siete, fracción tercera; doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; y uno, tres, cinco, siete, once al quince y demás relativos y aplicables del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, vengo a presentar formal denuncia". Atendiendo a la naturaleza jurídica de la denuncia, consistente en hechos probablemente constitutivos de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, en razón de que, el Titulo Tercero "Del régimen Sancionador electoral disciplinario interno", Capitulo Tercero "Del procedimiento especial", de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, es claro en ordenar que durante proceso electoral se seguirán por este tipo de vía, las

denuncias que se formulen con motivo de la presunta comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, lo cual se encuentra descrito concretamente en el artículo doscientos treinta y dos, fracción segunda, del referido ordenamiento, situación que se encuentra reforzada en el ordinal cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que establece los supuesto para la instrumentación del procedimiento especial. Por lo tanto, se concluye que el procedimiento sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite. Análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento. Este Consejo General, atendiendo a que las causas de sobreseimiento e improcedencia, son de previo y especial pronunciamiento, así como de estudio oficioso, estima que: en el caso no se actualiza ninguna causal de sobreseimiento; y, de las constancias no se advierte que durante la tramitación del procedimiento haya sobrevenido alguna causal de improcedencia, ni que hayan sido alegadas por las partes. Resumen de los actos denunciados, puntos controvertidos y

fijación de la litis. Primero.- El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, en sus escritos de denuncia, se duele fundamentalmente de los siguientes hechos. Uno.- Veinticinco de marzo de dos mil nueve, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, declaró formalmente iniciado el proceso electoral ordinario dos mil nueve en el Estado de Querétaro. Dos.- Quince de junio de dos mil nueve, en las instalaciones del Club de Industriales del Estado de Querétaro, con sede en esta capital, se llevó a cabo un debate público entre los candidatos postulados para ocupar el cargo de Gobernador del Estado. Tres.- Dieciséis de junio del dos mil nueve, se publicó en diversos periódicos de circulación regular en el Estado de Querétaro, un anuncio o desplegado que lleva como encabezado la leyenda: "El candidato Pepe Calzada ganó el debate", seguida de la fotografía del señor José Eduardo Calzada Rovirosa, a cuya izquierda aparece el texto: "En nombre de los ciudadanos Pepe Calzada denuncio al candidato panista por corrupción, ineptitud y manejo caprichoso de los recursos públicos. Mencionó que en estos veintinueve días de campaña ha recogido la indignación de los queretanos por el distanciamiento

de sus gobernantes y la evidente corrupción. Por sus valientes denuncias: ¡pepe calzada ganó el debate organizado por el Instituto Electoral de Querétaro". Segundo:- El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente, en su ocurso de contestación de hechos manifestó en lo que interesa. Uno:- El correlativo, que se contesta, aún cuando no es un hecho propio, manifiesto que tengo conocimiento que efectivamente el veinticinco de marzo del presente, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, declaró el inicio del Proceso Electoral. Dos.- Manifiesto que tengo conocimiento que, efectivamente, se verificó el debate. Tres.- En cuanto a la aparición de los periódicos del "anuncio o desplegado", que refiere el denunciante, manifiesto que tengo conocimiento de la referida publicación. Sin que pase desapercibido para la autoridad electoral que en el capitulado que el denunciante que nos ocupa identifica como "En cuanto a lo que el denunciante denomina derecho", destaca en el párrafo tercero lo siguiente: "Ahora bien, en cuanto a que la publicación realizada en los periódicos y en la que descansa la denuncia que se contesta, habré de manifestar que tal publicación, la que fuera mandada

a publicar por el Comité Directivo Municipal de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional" (sic). Tercero.- La coalición electoral denominada "Juntos para Creer", por conducto de su representante suplente, en su escrito de contestación de hechos manifestó en lo que interesa. Uno.- El correlativo, que se contesta, aún cuando no es un hecho propio, manifiesto que tengo conocimiento que efectivamente el veinticinco de marzo del presente, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, declaró el inicio del Proceso Electoral. Dos.- El hecho segundo de la denuncia, es cierto. Tres.- El hecho tercero de la denuncia, no es un hecho que se atribuya a la Coalición que represento, pues el mismo no hace referencia a que haya sido ésta quien publicó o mandó publicar lo que el denunciante denomina "anuncio o desplegado"; pues como puede observarse de la redacción del hecho que se contesta, utiliza la frase "se publicó"; sin que lo atribuya a mí representada, persona o institución alguno; por lo que al no ser un hecho atribuible a la Coalición que represento, no puedo controvertirlo adecuadamente, en razón de su oscuridad, lo que desde luego, me deja en estado de indefensión. Cuarto.- El licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, en su

escrito de contestación de hechos manifestó en lo que interesa. Uno.- El correlativo, que se contesta, aún cuando no es un hecho propio, manifiesto que tengo conocimiento que efectivamente el veinticinco de marzo del presente, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, declaró el inicio del Proceso Electoral. Uno.- El hecho segundo de la denuncia, es cierto. Dos.- El hecho tercero de la denuncia, no es un hecho que se atribuya al suscrito, pues el mismo no hace referencia a que haya sido el suscrito quien publique o mandé publicar lo que el denunciante denomina "anuncio o desplegado"; pues como puede observarse de la redacción del hecho que se contesta, utiliza la frase "se publicó"; sin que lo atribuya al suscrito, persona o institución alguna; por lo que al no ser un hecho atribuible a mi persona, no puedo controvertirlo adecuadamente, en razón de su oscuridad, lo que desde luego, me deja en estado de indefensión. Considerando. Uno.- Carga de la prueba, por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria, corresponde al denunciante la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que

funde su pretensión; más en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la vía especial, acorde con la hipótesis prevista por el ordinal trece del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para el denunciante; en cambio, rige a favor del denunciado el principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegó una conducta infractora. Segundo.- Valoración del material probatorio, en autos existen los medios de prueba que a continuación se describen, los cuales fueron allegados al procedimiento por las razones que igualmente se indican, y que son tomados en consideración para emitir la presente resolución, con base en el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que debe valorarse la fuerza convictiva de los medios de prueba, teniendo como finalidad el esclarecimiento de la verdad, en relación con las pretensiones de todas las partes en conflicto y no solo del oferente, puesto que el procedimiento sancionador electoral se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. En tal sentido cobra aplicación la jurisprudencia J punto diecinueve diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, con el rubro: "Adquisición procesal en materia electoral". El Partido Acción Nacional ofreció por conducto de su representante propietario, medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en el escrito de denuncia que dio origen al expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve; no obstante, seguido el procedimiento por sus cauces legales, en veintiocho de junio de dos mil nueve, las probanzas identificada en el apartado respectivo con los incisos b) y c), fueron desechadas en autos, por no encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. Por otro lado, la prueba documental privada que ofreció el denunciante, identificada en su escrito de denuncia en el apartado respectivo con el inciso a), consistente en cuatro ejemplares originales de las

publicaciones de prensa que describe, se tuvo por admitida y desahogada. Medio de prueba al que se le concede valor de indicio en lo individual, para demostrar la existencia de las publicaciones de prensa ilustradas en la pagina once del periódico "Diario de Querétaro", de fecha dieciséis de junio del dos mil nueve; pagina séptima del periódico "Noticias", de fecha dieciséis de junio del dos mil nueve; pagina tres de la sección "A" local del periódico "A.M." de fecha dieciséis de junio del dos mil nueve; pagina tres local del periódico "El Corregidor", de fecha dieciséis de junio del dos mil nueve, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción segunda; cuarenta y tres, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Segundo.- En otro aspecto, los medios de prueba consistentes en las documentales privadas que ofreció licenciado Juan Saldaña Zamora, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, para sustentar las afirmaciones que realizó en su escrito de contestación, identificados en el apartado respectivo con

los incisos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los cuales se tuvieron por admitidos y desahogados, en virtud de su propia y especial naturaleza, consistentes las cuatro copias certificadas siguientes: Uno.- Factura uno, cuatro, cinco, tres, nueve, dos. Dos.- Factura, CM dos, nueve, ocho, cinco, seis. Tres.- Factura, cinco, seis, cinco, cuatro, dos. Cuatro.- Orden de inserción de anuncio "a.m." de junio dieciséis, y una copia simple que adjunta con. Cinco.- Folio ocho, cero, cuatro, dos de El Corregidor de Querétaro; sin que pase desapercibido que fueron exhibidas, cotejadas, compulsadas y certificadas, en dos anexos los medios de convicción consistentes en a) orden de inserción A, dos uno, siete, siete, seis, y b) orden de publicidad de fecha quince de junio del dos mil nueve "Top Semanario el medio en el que todos ganan". Medios de prueba a los que se les concede valor indiciario en lo individual, y pleno en su conjunto, para demostrar que. Uno.- La copia certificada de la publicación de prensa que respalda la factura uno, cuatro, cinco, tres, nueve, dos, con el logotipo de "noticias", cuya fecha de inserción fue de fecha dieciséis de junio, fue facturada, instruida y pagada por el Partido Revolucionario Institucional, sin perjuicio de que en el rubro de descripción se estableció

"publicidad del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Querétaro. Dos.- La copia certificada de la publicación de prensa que respalda la factura CM dos, nueve, ocho, cinco, seis, con los logotipos de "Diario de Querétaro", y "El Sol de San Juan", cuya fecha de publicación fue de fecha dieciséis diagonal dos mil seis, fue facturada, instruida y pagada por el Partido Revolucionario Institucional, sin perjuicio de que en el rubro de guía, se estableció "Comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional Querétaro"; situación que se robustece con la diversa copia certificada de la orden de inserción A, dos, uno, siete, siete, seis, con los logotipos Diario de Querétaro y El Sol de San Juan, en el que en el rubro de "fechas de publicación" se señala el mes de junio y se indica el día dieciséis, relativo a la misma factura dos, nueve, ocho, cinco, seis. La copia certificada de la publicación de prensa que respalda la orden de inserción de anuncio "a.m." de junio dieciséis, con el logotipo de "a.m." cuya fecha de inserción fue de junio dieciséis, fue instruida y pagada por el Partido Revolucionario Institucional, según se aprecia del rubro se indico en el rubro "Facturar a:", sin perjuicio de que en el rubro de

descripción-clave, se estableció "Publicidad del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro". Así, se les concede y cobran valor probatorio pleno los medios de convicción descritos con antelación y se acredita que el Partido Revolucionario Institucional instruyo y pago la propaganda electoral, en los periódicos de circulación en la entidad, identificados como "Noticias", Diario de Querétaro" y "A.M."; sin que pase desapercibido que en el rubro de descripciones, guía, cliente o especificaciones, se haya hecho referencia al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, no obstante, las correlativas facturaciones y razón social, se hace a nombre el Partido Revolucionario Institucional, como instituto político y por ende, atribuidas y acreditadas la imputaciones vertidas a dicha fuerza política. Mención especial se hace a la propaganda del periódico "El Corregidor", relativa a. La copia simple de la publicación de prensa que respalda la orden de inserción con folio número cero, ocho, cuatro, dos, con el logotipo de "El Corregidor", cuya fecha de publicación bajo el rubro de registro del mes de junio dieciséis, fue instruida y pagada bajo la razón social del Partido

Revolucionario Institucional, sin perjuicio de que en el rubro de especificaciones se estableció "Publicidad pagada por el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Querétaro". En la inteligencia de que al ser copia simple, dicho medio de convicción carecería de valor probatorio alguno, empero, el órgano resolutor, debe atender a las reglas de la lógica, a la sana crítica y a la experiencia. Así, el documento exhibido en copia simple, surte efecto probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia, lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que la parte denunciante aporto como prueba la publicación de prensa contenida en la pagina tres local del periódico "El Corregidor", de fecha dieciséis de junio del dos mil nueve, con la finalidad de que la autoridad electoral al momento de resolver, verificará las afirmaciones producidas en los escritos en que se fijo la litis, por lo que en la especie también se concede valor probatorio al medio de convicción descrito con antelación. En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia S tres ELJ once diagonal dos mil tres, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas sesenta y seis guión sesenta y siete de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "copia fotostática simple. Surte efectos probatorios en contra de su oferente". Lo antepuesto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción segunda; cuarenta y tres, cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en documentos privados, que enlazados entre sí de acuerdo a un recto raciocinio, generan convicción sobre la verdad de los hechos en ellos descritos, al concatenarse con las afirmaciones vertidas tanto por el denunciante, como por el denunciado en este apartado. Sin que pase desapercibido los medios prueba ofertados por el denunciante identificado en los siguientes términos. Copia certificada de la factura cinco, seis, cinco, cuatro, dos, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, identificado como "Top Semanario", sin perjuicio de que en el rubro concepto: se señala "Pub. Comité Directivo

Municipal Partido Revolucionario Institucional, Querétaro''. Copia certificada de la orden de publicidad de fecha quince de junio dos mil nueve, identificada como "Top Semanario El medio en el que todos ganan''. A los cuales no obstante ser copias certificadas debidamente cotejadas y compulsadas con sus originales, en la especie carecen de valor probatorio alguno, pues de los hechos denunciados por el representante propietario del Partido Acción Nacional, ni de los correlativos contestados por los tres denunciados Partido Revolucionario Institucional, Coalición electoral denominada "Juntos para Creer'', y su candidato a la Gubernatura del Estado ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, no se controvierten ningún hecho relativo a la publicación correspondiente al periódico "Top Semanario'', de tal suerte que al no haberse fijado la litis a este respecto, no acreditan o desvirtúan hecho alguno, pues ninguno de los acontecimientos planteados se refiere a la difusión de la publicación referida. Por otra parte, lo expuesto en el considerando segundo identificado como primera y segunda, es así, toda vez que al valorar cualquier medio de convicción, consiste no solamente en decidir si fue debidamente ofrecido,

admitido, preparado y desahogado, sino concederle o negarle la posibilidad de demostrar determinados hechos, atendiendo al valor con que lo tasa la normatividad aplicable. En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia J punto cuarenta y cinco diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento ochenta y seis guión ciento ochenta y siete de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "Pruebas documentales. Sus alcances". Así también, lo señalado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres, de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". La coalición electoral denominada "Juntos para Creer", por conducto de su representante suplente licenciado Sócrates Alejandro Valdez Rosales, y su candidato a la Gubernatura, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, ofrecieron respectivamente como medio de convicción el

consistente en el informe relativo a la solicitud a los periódicos "Diario de Querétaro, Noticias, A M, El Corregidor y Top; a fin de que informen, el responsable de la publicación a que alude el denunciante, mismos que fueron desechados en virtud de que no se encuentra dentro del catalogo que contempla los medios de prueba que pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral, ya que sólo establece las pruebas documentales y técnicas; atendiendo además que, es de explorado derecho, que solamente puede darse entrada a los medios de prueba expresamente reconocidos por la normatividad vigente; sin que pase desapercibido a esta autoridad electoral que dicho medio de convicción a un cuando es ofertado como "documental", lo cierto es que la naturaleza jurídica de la prueba de informes es distinta, además de que el objeto que se pretendía acreditar se colma con los medios de convicción consistentes en las documentales privadas ofertadas, admitidas, desahogadas, valoradas y descritas en supra líneas por el licenciado Juan Saldaña Zamora, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, que evidencian quien instruyo las publicaciones de mérito y a quien se facturo las

mismas. Por último, no pasa inadvertido que, el denunciante y los tres denunciados en la causa, ofrecieron y les fueron desechadas respectivamente, el medio de convicción de la instrumental de actuaciones, la cual consiste en la totalidad de constancias que existen dentro del presente expediente, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, empero, no son mas que la valoración de la prueba misma, pues como se sabe, existen presunciones juris et de iure y también iuris tantum. Tercero.- No se acredita el nexo de causalidad entre la hipótesis normativa específica y el hecho fáctico concreto, en lo relativo a la coalición electoral denominada "Juntos para Creer", ni de su candidato a la Gubernatura ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa. Lo anterior, en virtud de que de los medios de convicción ofrecidos, admitidos, desahogados y valorados por el Partido Acción Nacional, en su carácter de denunciante por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del propio instituto, no obstante acredito la existencia de la propaganda electoral en los cuatro periódicos que describe en su denuncia de mérito, identificados como "noticias", "Diario de Querétaro", "a.m." y "El Corregidor", no obstante al tener dicho

denunciante la carga de la prueba, no acredito que dicho desplegado fuera pagado e instruido por la coalición electoral denominada "Juntos para Creer", ni de su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, máxime que ambos denunciados referidos negaron categóricamente al contestar los hechos de la denuncia respectiva dicha circunstancia y que por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante suplente exhibió las documentales privadas que al ser valorados en el considerando que antecede, se acredito que las publicaciones motivo de la litis fueron instruidas y pagadas con motivo de la facturación respectiva por dicho Partido Revolucionario Institucional, deslindando así de toda responsabilidad a su codenunciados, robusteciendo así la ausencia de nexo de causalidad en comento, resultando ocioso entrar al estudio de la responsabilidad que le pudiera resultar a la coalición electoral denominada "Juntos para Creer" y a su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, por los argumentos expuestos con antelación. Cuarto.- Se acredita el nexo de causalidad entre la hipótesis

normativa específica y el hecho fáctico concreto, en lo relativo al Partido Revolucionario Institucional. Este Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, debe analizar las circunstancias sujetas a su consideración, para fijar si la actuación cometida tiene un nexo causal entre su supuesto infractor, a efecto de determinar si efectivamente desplegó la conducta atribuida; asimismo, dicho enlace debe ser valorado tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que debieron de haberse suscitado para la perpetración de la conducta. Se corrobora la existencia de un enlace causal entre la conducta consistente en la publicación en cuatro periódicos de circulación en la entidad que se detallan en párrafos que anteceden, y la exigibilidad jurídica o juicio de reproche, de atribuir dicha actuación, en autoría material e intelectual, al Partido Revolucionario Institucional. Se explica. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente, licenciado Juan Saldaña Zamora, al rendir su contestación dentro del expediente sesenta y siete diagonal dos mil nueve, textualmente manifestó a fojas una y dos de su escrito. Uno:- El correlativo, que se contesta, aún cuando no es un hecho propio, manifiesto que tengo

conocimiento que efectivamente el veinticinco de marzo del presente, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, declaró el inicio del Proceso Electoral. Dos.- Manifiesto que tengo conocimiento que, efectivamente, se verificó el debate. Tres.- En cuanto a la aparición de los periódicos del "anuncio o desplegado", que refiere el denunciante, manifiesto que tengo conocimiento de la referida publicación. Sin que pase inadvertido que en el capitulado que el denunciante que nos ocupa identifica como "En cuanto a lo que el denunciante denomina derecho", destaca en el párrafo tercero lo siguiente: Ahora bien, en cuanto a que la publicación realizada en los periódicos y en la que descansa la denuncia que se contesta, habré de manifestar que tal publicación, la que fuera mandada a publicar por el Comité Directivo Municipal de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional" (sic). De lo transcrito puede advertirse el reconocimiento expreso que formula el Partido Revolucionario Institucional, sobre la autoría tanto intelectual como material, al haber instruido la inserción de las leyenda motivo de cuestionamiento en la causa, en los medios de prensa escrito identificados como "noticias", Diario de Querétaro, "A.M."

y "El Corregidor", situación que se acreditó con los medios de convicción que describe en su capitulo de pruebas que ofreció, se admitieron, desahogaron y valoraron en el apartado respectivo de la presente resolución, que se les determino valor probatorio pleno para acreditar que la instrucción de la inserción de las leyendas motivo de estudio, fue a cargo del Partido Revolucionario Institucional, pues fue a dicha fuerza política a quien se facturo su cobro, sin perjuicio como se dijo, de que en el apartado de descripciones o especificaciones se haya asentado al Comité Directivo Municipal del partido político denunciado; lo que se traduce en una confesión sobre los hechos imputados, situación que no se encuentra sujeta a prueba ni objeción alguna, por disposición del artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Reconocimiento que se encuentran robustecidos con las documentales privadas que allegó el propio representante suplente del partido denunciado, licenciado Juan Saldaña Zamora, consistentes en las copias certificadas de: a).- Publicación de prensa que respalda la factura uno, cuatro, cinco, tres, nueve, dos, con el logotipo de "noticias", b).-

Publicación de prensa que respalda la factura CM dos, nueve, ocho, cinco, seis, con los logotipos de "Diario de Querétaro", y "El Sol de San Juan", c).- Publicación de prensa que respalda la orden de inserción de anuncio "A.M." y copia simple de d).- Publicación de prensa que respalda la orden de inserción con folio número ocho mil cuarenta y dos, con el logotipo de "El Corregidor". Documentales que fueron instruidas, pagadas y facturadas a cargo del Partido Revolucionario Institucional, y que han sido descritas y valoradas con antelación. Más aún porque, dicha autoría no ha sido motivo de controversia por parte del Partido Revolucionario Institucional, sino por el contrario se limito a señalar en su ocurso de contestación de denuncia que fue mandada publicar por el Comité Directivo Municipal de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional, de tal suerte que atribuye su autoría a dicha fuerza política, con independencia de su carácter municipal o estatal. Quinto.- Análisis sobre reincidencia. Aduce el denunciante en la última foja de su denuncia a la "clara violación reincidente de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que se le imputan y que han quedado

acreditadas al Partido Revolucionario Institucional''. Al efecto, en los términos del diverso sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, no obra en los archivos de la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del propio instituto que al día diecisiete de junio del dos mil nueve, fecha de la presentación de la denuncia que nos ocupa, haya quedado firme causa alguna relativa a hechos similares en que haya sido sancionado el Partido Revolucionario Institucional en el Estado; mayormente porque hasta ese momento histórico, no había causado ejecutoria resolución alguna determinada en contra de la fuerza política en comento, constituyendo un hecho notorio en términos del ordinal treinta y seis, párrafo segundo, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, por que los expedientes radicados con motivo de las denuncias presentadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y resueltos por esta autoridad electoral no ha habían causado estado, según las constancias que obran en los archivos que para tal efecto se llevan en la Secretaría Ejecutiva. Lo expuesto obedece a la necesidad de poner término a los litigios decididos mediante resolución de autoridad competente, evitando

incertidumbre en la vida jurídica, es la razón de ser de la cosa juzgada. La doctrina nacional es unánime en reconocer que la eficacia de la cosa juzgada tiene soporte en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendente a obtener la revisión de la misma materia; b) inmutabilidad, ya que en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia concebida como cosa juzgada; y c) coercibilidad, consistente en la eventualidad de ejecución forzada, en caso de no darse un cumplimiento espontáneo. Por su parte el Partido Revolucionario Institucional, negó categóricamente en su apartado respectivo la existencia de la reincidencia, alegando que a la fecha de la presentación de la denuncia, no existía resolución que haya causado ejecutoria, a través de la cual se haya sancionado a su representada, razón por la cual no se daba la pretendida reincidencia; asistiéndole el principio de presunción de inocencia a su favor. Lo cual encuentra sustento en la tesis relevante cuarenta y tres diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en

sesión pública celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, con el rubro: "Presunción de inocencia. Debe reconocerse este derecho fundamental en los procedimientos sancionadores electorales". El representante propietario del Partido Acción Nacional no aportó medio de prueba idóneo, suficiente y bastante para desvirtuar la negativa realizada por el denunciado, a pesar de tener la carga de la prueba al respecto; atendiendo a la disposición contenida en el artículo treinta y seis, último párrafo, de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria, que consigna "El que afirma está obligado a probar". Lo cual encuentra fundamento además en la tesis relevante séptima diagonal dos mil nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil ocho, con el rubro: "Carga de la prueba. En el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante". Sin embargo, pese a que no se acreditó reincidencia en el caso, ello no exime al Partido Revolucionario Institucional, de las responsabilidades generadas con motivo de los actos denunciados

por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, motivo del presente expediente. Sexto.- Estudio de fondo, del análisis minucioso de la litis, se advierte que el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Juan Saldaña Zamora, aduce esencialmente que. No es verdad que todos los actos de un partido, estando en un proceso electoral, son tendientes a conseguir la simpatía o adhesión de los ciudadanos y en su momento su voto; pues haya actos que de ninguna manera aún cuando se realicen por los partidos políticos de manera pública tengan esa finalidad; pues hay actos dentro del proceso electoral que no tiene esa finalidad. En cuanto a la publicación realizada en los periódicos y en la que descansa la denuncia que se contesta, habré de manifestar que tal publicación, la que fuera mandad publicar por el Comité Directivo Municipal de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional; de ninguna manera trasgredí disposiciones legales en la materia, sino que se da en un marco de libertad de imprenta y de expresión, derechos fundamentales que son tutelados por Pactos Internacionales que nuestro país ha suscrito y que en términos del artículo ciento treinta y tres de nuestra Ley

Fundamental, son Ley Suprema. Sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho. Es por ello que los sistemas democráticos deben poner énfasis en la capacidad política de los ciudadanos para participar en las decisiones que les afectan; promover la compatibilidad de los derechos de libertad con los derechos políticos y con los derechos sociales; sí como defender el valor de la asamblea representativa como espacio de deliberación y decisión política. En ese orden de ideas, la libertad de expresión juega un papel fundamental, toda vez que a través de la expresión de las ideas, se busca que en la contienda electoral, los ciudadanos que en su momento habrán de ejercer el voto, lo hagan de una manera razonada, en base a la información proporcionada por los partidos políticos, a través de la libre manifestación. En el caso que nos atañe, la publicación que refiere el Partido Acción Nacional, como censurable y merecedora de sanción; de ninguna manera sale del marco legal que establecen los artículos sexto y séptimo de la Constitución General de la República; pues en ninguna de sus partes, se hace alusión a la vida privada de persona alguna, y mucho menos de la del señor González Valle, candidato del

partido denunciante al Gobierno del Estado; la publicación de ninguna manera ataca la moral ni la paz pública; en consecuencia, la publicación referida y que aparece en diversos rotativos, de ninguna manera rebasa los límites que la propia Constitución establece a la libertad de expresión así como de imprenta. En las condiciones referidas, el Comité Directivo Municipal del Municipio de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional, expone sus ideas, en el sentido de establecer el por qué considera que el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Candidato de la Coalición Juntos para Creer, fue quien ganó el debate organizado por el Instituto Electoral de Querétaro; dando al efecto, las razones por las que lo considera ganador; razones que de ninguna manera, reitero, pueden considerarse en forma alguna, como ataques a la vida privada de alguien, ni contra la moral, ni mucho menos atentan contra la paz pública, pues la libertad de expresión comprende, tanto la libertad de expresar el pensamiento propio dimensión individual, como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; situación que es lo que se hace en la publicación en que descansa la denuncia del partido

político actor. Abundando, la libertad de expresión, en particular la libertad del debate y la crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional. Respecto a lo que el denunciante llama, propaganda injuriosa, tal y como el propio denunciante establece en su libelo, ello en todo caso es materia de procedimientos diversos que no pueden traerse al presente procedimiento, en razón de que las sanciones aún las de carácter administrativo o electoral, se rigen por el principio "non bis in idem", esto es, no pueden sancionarse dos veces o mas, los mismo hechos, y por ende, no pueden instaurarse mas que un solo procedimiento sancionador. Toda vez que la litis a resolver se centra en determinar si el contenido de la publicación el los periódicos "noticias", "Diario de Querétaro", "A.M", y "El Corregidor", instruidos por el Partido Revolucionario Institucional, no exceden o van más allá de la regulación de la libertad de expresión, es menester hacer referencia al marco jurídico constitucional al respecto. El artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. Provoque algún delito, o perturbe el orden

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.'' ''La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero. El artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: ''En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas''. De los numerales transcritos se advierte que, debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica; puesto que es consustancial al debate democrático, que se permita la libre circulación de ideas acerca de los candidatos y sus partidos políticos, por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. Asimismo, debe permitirse a los titulares de los

derechos fundamentales de libertad de pensamiento, y de expresión, que cuestionen e indaguen sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de forma que los electores puedan formar libremente su propio criterio para votar. En tal virtud, la libertad de expresión, así como el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter político-electoral, constituyen una trama normativa y se fortalecen entre sí; además que, las elecciones libres y auténticas, así como la libertad de expresión, en particular la libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho fundamental de la libertad de expresión, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Lo cierto es que, en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión, constituye un bastión

fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios, y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. Por consiguiente, es indispensable proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información; es preciso que se pueda cuestionar e indagar sobre los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera

que los electores puedan formar su criterio para votar. Cuando se restringe indebidamente la libertad de expresión de un sujeto de derecho, no sólo es el derecho de ese sujeto el que está siendo violentado, sino también el derecho de la colectividad a la obtención de información e ideas. Por un lado, nadie debe ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada sujeto; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. De esta manera, el derecho a la libertad de expresión cobra dos dimensiones, la individual y la social. Ahora, la libertad de expresión en relación con la propaganda electoral que en el curso de una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones a través de los medios de comunicación, admite un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en esos debates o cuando estén involucrados cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática. Las expresiones relativas a servidores públicos o a otras personas que ejercen funciones de carácter público, deben gozar de un margen de apertura a un

debate amplio en torno a asuntos de interés público o interés general, lo cual es muy importante en una sociedad democrática, tal criterio es aplicable también respecto de las expresiones que se profieran en relación con una persona pública, por ejemplo, un político o un candidato a un cargo de elección popular, quien se somete voluntariamente al escrutinio público, en relación con cuestiones de interés público o interés general, en los cuales la sociedad tienen un legítimo interés de mantenerse informada. Dichos razonamientos tienen su origen en la jurisprudencia J punto once diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, intitulada: "Libertad de expresión e información. Su maximización en el contexto del debate político". Segundo.- Sin embargo, tal como lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias relacionadas con el tema, el derecho de libertad de expresión no es absoluto. En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión, encuentra contrapeso con otro valor que

también ha sido tutelado tanto por la normatividad electoral como por la de carácter internacional que se ha especificado. Se trata de la honra, la reputación y la dignidad de los servidores públicos o de las personas públicas, los cuales por supuesto, deben ser jurídicamente protegidos, dado que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, por otra, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por tal motivo, para resolver si el contenido de de la propaganda electoral difundida en los periódicos "Noticias", Diario de Querétaro, "a.m" y "El Corregidor", instruida por el Partido Revolucionario Institucional, no exceden van más allá de la regulación de la libertad de expresión, es menester hacer referencia tanto al marco jurídico constitucional, específicamente el artículo sexto, en relación con el cuarenta y uno, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispositivos transcritos supra, así como a los instrumentos internacionales celebrados por el Estado México, que forman parte de nuestro orden jurídico interno,

según lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un nivel jerárquico inmediato inferior a la Constitución, en términos del artículo ciento treinta y tres de la propia Carta Magna, que tutelan la libertad de expresión. El artículo diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mandata. "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifiesta. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para. Inciso a).- Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas''. El ordinal once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques''. El ordinal trece de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Inciso a).- El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o. Inciso b).- La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso dos. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional''. El numeral treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere: Los

derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". Los dispositivos transcritos ponen en evidencia que, el derecho al respeto a la honra y a la dignidad personal constituye un límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado, lo que es acorde con la prohibición prevista en el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera, ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, como deber de los partidos políticos y de las coaliciones, de abstenerse de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos, en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que utilicen. Esto constituye un imperativo del sistema de la democracia mexicana, si se tiene presente que es derecho

fundamental de toda persona, el respeto y la garantía del derecho a su dignidad, para no ser sujeto de ataques indebidos en su honra y reputación, así como de conductas que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, según se dispone en los artículos primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, los candidatos, militantes, simpatizantes, los propios partidos políticos y coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios de esa obligación de respeto al honor o dignidad, a pesar de que sean sujetos de una crítica desinhibida, vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes, sarcásticos y de contenido negativo y, por la otra, esos mismos sujetos están obligados a respetar el derecho al honor y la dignidad de los demás. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y sujetos de obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho al

honor y la dignidad, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Y que también trae como consecuencia, reconocer que los partidos políticos pueden ser sujetos pasivos en caso de sufrir una lesión con motivo de la transgresión del derecho fundamental mencionado, ya que resulta lógico y jurídico sostener que pueden resentir un daño causado en su esfera jurídica al respecto. En otro aspecto, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, ello no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir ex ante, normas en consideración a los límites del derecho de libre expresión. No se trata pues, de que no se pueda regular limitativamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, tampoco que no se puedan imponer reglas, incluso respecto del contenido, características, peculiaridades y modalidades de los mensajes. Más bien, se trata de que la determinación y aplicación de estos límites, no puede consistir en

excluir, en forma anticipada, el mensaje del conocimiento y probable debate público. Es decir, estos límites no se pueden hacer valer en forma previa, sino a través de la determinación de responsabilidades jurídicas ex post, tanto de naturaleza civil, penal y administrativa, según sea el caso. En efecto, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos, a saber: a) se ataque la moral; b) se afecten los derechos de terceros; c) se provoque algún delito; o, d) se perturbe el orden público. Sobre el tema es de importancia la tesis relevante doce diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el ocho de abril de dos mil ocho, con el rubro: "Censura previa. Existe cuando la autoridad administrativa sujeta, de manera anticipada, las expresiones que se hacen en la propaganda política, a una restricción distinta a las previstas en el orden constitucional y legal". Lo antepuesto es relevante porque, en materia de libertad de expresión se encuentra como límite, entre otros, el derecho de los demás o de terceros; es decir,

el respeto a la dignidad, honra o reputación de las personas, por cuanto a que el ejercicio de dicho derecho, si bien es cierto que no puede estar sujeto a censura previa, también lo es que no puede ejercerse de una manera irracional, ya que da lugar a responsabilidades ulteriores, conforme a los artículos sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecinueve, párrafo tercero inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como trece, párrafo segundo, inciso a), y treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con base en esas consideraciones, se incluye como transgresión de la normatividad electoral el contenido de mensajes que impliquen la disminución o el demérito de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de diatribas, calumnias, infamias, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de calificativos o de expresiones vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que apreciados en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una

auténtica cultura democrática entre los afiliados o militantes partidarios y de la ciudadanía en general, siendo por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática. Es claro entonces que, el voto de los ciudadanos debe ejercerse como producto de la libre valoración, en la que se tomen en cuenta, preferentemente, los planteamientos de los partidos y de las coaliciones, en tornó a las exposiciones de un análisis de la problemática y necesidades en nuestro entorno, la manera como se pretenda afrontar esa problemática para la satisfacción de las necesidades ciudadanas, así como la ideología pregonada en su caso; que se hayan contenidas en las plataformas electorales, programas de trabajo, agendas de planeación y documentos básicos de los candidatos, partidos y coaliciones. Evitando sustentar esas propuestas y análisis en un ejercicio irreflexivo, irracional y hasta antijurídico, que desvirtúe el derecho de participación política del ciudadano. La argumentaciones expuestas tienen razón de ser en la jurisprudencia J punto

catorce diagonal dos mil siete, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el catorce de noviembre de dos mil siete, titulada: "Honra y reputación. Su tutela durante el desarrollo de una contienda electoral se justifica por tratarse de derechos fundamentales que se reconocen en el ejercicio de la libertad de expresión". Por lo tanto, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina que el contenido de la propaganda electoral contenida en los "desplegados o anuncios", difundidos por el Partido Revolucionario Institucional, consistentes en cuatro publicaciones que efectuó en los medios de comunicación impresos denominados "Noticias", "Diario de Querétaro", "A.M." y "El Corregidor", de esta ciudad, el dieciséis de junio de dos mil nueve, plenamente identificados en el considerando segundo, punto segundo, de esta resolución, contravienen la normatividad que regula la propaganda electoral, al contener frases y palabras intrínsecamente denigratorias, que apreciadas en su significado y usual y en el contexto del mensaje que difunden, son constitutivos de ataques a la honra, dignidad e imagen, del

ciudadano Manuel González Valle, candidato a la Gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, así como de dicho instituto político. Puesto que las aseveraciones en ellos contenidos, implican la disminución, demérito y degradación de la estima e imagen del referido partido político y del candidato indicado frente al electorado, como consecuencia de la utilización de expresiones peyorativas, deshonrosas y oprobiosas, que nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una auténtica cultura democrática entre la ciudadanía en general; dado que cada una de las publicaciones en lo individual, y concatenados en su conjunto, constituyen la afirmación directa y contundente de actos reprochables, como robos, hurtos, desfalcos e ineficiencia, que con base en las reglas de la lógica y según las máximas de la experiencia, se obtiene de la sola lectura de las expresiones "corrupción e ineptitud". No es dable admitir que en la propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional se asocie al Partido Acción Nacional y al ciudadano Manuel González Valle, candidato a Gobernador por dicha fuerza política según los archivos que obran en la Secretaria Ejecutivo

del propio Instituto, con expresiones que intrínsecamente empañan o deterioran la imagen de cualquier sujeto, como lo son las de "Corrupción e ineptitud". Dichas expresiones en lo individual, por sí mismas son suficientes para descalificar a cualquier partido, persona o institución, pues están relacionadas en general con prácticas ilícitas e inaceptables. Como se ve, el común denominador de las expresiones invocadas en los promocionales cuestionados, es el de aludir a prácticas ilegales que se asocian con el "candidato panista". En lo individual, cada una de esas palabras es suficiente para descalificar al Partido Acción Nacional y su candidato Manuel González Valle, pues su significado autónomo conlleva una carga expresiva de alguien que incurre en prácticas ilegales o deshonestas, lo cual denigra la imagen del sujeto al que califican. Así por ejemplo, en el lenguaje cotidiano y convencional, corrupción tiene diversos significados, todos vinculados a la alteración o vicio de una forma natural de las cosas, así por ejemplo, alude a una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho propio, bien económico o de otra índole, en detrimento de la ciudadanía. Mientras que la

ineptitud corresponde a la ineficacia en la conducta desplegada por la persona a quien se le atribuye o al partido político que representa. En ese tenor, con mayor razón deben tenerse como violatorios a las normas que regulan la propaganda electoral, ciertos mensajes contenidos en las publicaciones que se examinan, puesto que contienen párrafos en los que se atribuyen de manera contundente y directa, las características de las palabras denigratorias aludidas, al candidato panista, en razón de que literalmente se plasmó: "En nombre de los ciudadanos Pepe Calzada denuncio al candidato panista por corrupción e ineptitud"". Nótese que la expresión "candidato panista", desde luego se refieren a Manuel González Valle, candidato a la Gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional. La finalidad denigrante que revelan las expresiones y mensajes aludidos, que se encuentran en los promocionales en análisis, es única en tanto que son manifestaciones con un propósito unívoco, que no se desvirtúa con algún otro elemento que permita observar una finalidad distinta a aquella, pues en dicha propaganda no se hace una propuesta política de solución a problemas, tampoco se expone una crítica respetuosa, no se proporciona información

suficiente para que el ciudadano ejerza con mayor libertad su derecho a votar, ni se contribuye a un debate serio y razonado en la sociedad. Las palabras denostativas y mensajes peyorativos citados en la propaganda en estudio, son innecesarias para fomentar un debate serio, pacífico e informado de la situación actual o pasada de esta entidad federativa; y en ese sentido, también resultan desproporcionadas e inconducentes para lograr los propósitos constitucionales encomendados a los partidos políticos, pues en nada contribuyen al desarrollo armónico de la sociedad, a la integración de los poderes públicos y al posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Lo expuesto, porque si bien, según lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las opiniones no están sujetas al canon de veracidad, y solamente el genero informativo requiere de la demostración o justificación de las expresiones empleadas por los informantes, también lo es que, como ya se dijo, esta distinción no es aplicable al caso de la propaganda política y electoral de los partidos políticos, en tanto el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado C, constitucional no distingue entre el género de opinión y el de

información, por lo cual, la prohibición de denigrar abarca cualquiera de esas modalidades de comunicación si se trata de propaganda política o electoral de partidos políticos, aún cuando se aduzca la reproducción de información obtenida de otra fuente, que de forma previa se haya hecho del conocimiento de la ciudadanía en general. De ahí lo infundado de los argumentos sostenidos por el partido denunciado al respecto. La honra y dignidad, son valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de los sujetos, de ahí que, a partir de una postura de menoscabo o degradación, es factible la vulneración de los derechos fundamentales precitados. En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar la capacidad de sus oponentes, implica la vulneración de derechos de terceros o de la reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que se han reconocido constitucionalmente y a través de los pactos internacionales signados por el Estado Mexicano. En el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado C, primer párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se distinguió la posibilidad de que las frases denigrantes se emplearan con motivo de una opinión, postura, información o cualquier otra modalidad de expresión, de tal manera que prohibió todo contenido denigrante o que calumnie a las personas, en la propaganda elaborada y difundida por los partidos políticos sin hacer distinción alguna. El constituyente consideró justificada esta prohibición, por diversas causas jurídicas y experiencias político-electorales previas, entre las cuales destaca el hecho de que, de conformidad con el propio artículo cuarenta y uno, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público, cuya finalidad es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. La propaganda política y electoral de los partidos políticos, debe ser plenamente coherente con las finalidades constitucionales de los partidos políticos y con los principios democráticos. Con base en este presupuesto, es dable exigirle a los partidos políticos que al

difundir propaganda actúen en forma adecuada, respetando la integridad de los candidatos, su reputación y dignidad, así como los derechos de imagen de los demás institutos políticos, coaliciones, y sus candidatos, que también son valores sustanciales de un sistema democrático. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente prohibió que en la difusión de propaganda política y electoral, se denigre a otros partidos políticos, coaliciones o candidatos o se calumnie a las personas, pues ese tipo de prácticas no son idóneas para lograr sus fines. Pues bien, el hecho de que el constituyente haya enfatizado que tratándose de propaganda política electoral no se permite el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, no significa una censura generalizada o la prohibición del uso de ciertas palabras en la deliberación pública manifestada en formas distintas a la propaganda política, como refiere el partido denunciado. Debido a que, el propósito del constituyente consistió en limitar la denigración y calumnia, en la propaganda de los partidos políticos y coaliciones, al considerar que este medio debe reservarse para ejercer una política de auténtico debate ideal de opiniones. Es decir, el

constituyente prohibió en la propaganda de los partidos políticos, utilizar un lenguaje innecesario o desproporcionado, en relación con los derechos a la imagen de los partidos, coaliciones, de los candidatos y en general de las personas; satisfaciendo así un interés público imperativo, con todo lo cual se pone en evidencia lo infundado de las afirmaciones sostenidas por el partido denunciado. En ese sentido, la proscripción de denigrar a los partidos y sus candidatos, que protege el derecho a la imagen, enfatiza una de las limitantes generales de la libertad de expresión prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los derechos de un tercero. En ese esquema, se realiza una real afectación a la imagen, honra y dignidad del Partido Acción Nacional y del ciudadano Manuel González Valle, candidato a la Gubernatura del Estado por dicha fuerza política, pues quedan expuestos a una estrategia de descalificación, debido a que las publicaciones denostativas fueron elaboradas de forma completamente idéntica, y difundidos a la ciudadanía en general a través de cuatro distintos medios de comunicación impresa de esta ciudad. Por tanto, las publicaciones en cuestión ponen de relieve una

conducta ilegal, -aunque efectuada de manera disfrazada o discreta, por valerse de la inserción de comentarios, información u opiniones de otras fuentes-, que exterioriza sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática, tal como se ha sostenido en líneas anteriores, y cuya comisión, al contravenir los principios que animan la contienda electoral, debe ser sancionada. Sin que pase inadvertido para esta autoridad electoral lo vertido por el denunciante en relación a la realización del debate público llevado a cabo el quince de junio del dos mil nueve, en el que aduce que el candidato a la coalición "Juntos para Creer", José Eduardo Calzada Rovirosa, acusó de "corrupto" al licenciado Manuel González Valle, candidato a la Gubernatura del Estado postulado por el Partido Acción Nacional y la correlativa ponderación jurídica de dicho debate, empero la naturaleza jurídica de éste, como el mismo denunciante lo aduce, se da en el marco contextual de un foro de contrastación de proyectos, cuya dinámica y mecanismo estaba regulada por el reglamento de debates del Instituto Electoral de

Querétaro, con replicas y contrarréplicas, de tal suerte que concebirlo de la manera que pretende el denunciante, se contravendría la naturaleza jurídica del mismo, a mayor abundamiento, el debate se generó el día quince de los corrientes y las publicaciones cuyo contenido se tilda de ilegal fueron difundidas el día siguiente, además de que como ha quedado acreditado, no se acredito que dicha promoción fuera a cargo de la coalición electoral denominada "Juntos para Creer" y su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, de tal manera que a este respecto, resulta inatendible los razonamientos vertidos a este respecto por el promovente de la denuncia de mérito. Séptimo.- Individualización de la sanción. A efecto de proceder a la individualización de la sanción, se toman en cuenta las siguientes consideraciones. En principio debe mencionarse que, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal, comúnmente

conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen al respecto, para el efecto de evitar la transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes. Orientan lo mencionado, los lineamientos contenidos en la tesis relevante S tres EL cero cincuenta y cuatro diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a foja trescientos setenta y nueve de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "Derecho Administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal". En esa vertiente, tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida

como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que, por llevar implícito el ejercicio del ius puniendi, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente trasgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en lo relativo a la imposición de sanciones, adopta la postura del aforismo romano nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos, uno, dos, tres, cuatro y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe. Inciso a).- Un principio de reserva normativa, así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción. Inciso b).- El supuesto normativo y la

sanción deben estar determinados en forma previa a la comisión del hecho. Inciso c).- La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita, abstracta, general e impersonal, a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad. Inciso d).- Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta odiosa sunt restringenda, porque el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre debe ser acotado y muy limitado, por cuanto los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos, en atención a los principios indubio pro cive y favor libertatis. Asimismo, el ius puniendi, consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos

perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta imputación subjetiva. Entonces, las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para fijar la sanción que corresponda al partido político por las irregularidades cometidas, comprende tanto a las de carácter objetivo: la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar, como a las subjetivas: el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia, el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia que rodean a la contravención de la norma administrativa. Lo argumentado encuentra sustento en la jurisprudencia J punto cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a fojas doscientos setenta y seis guión doscientos setenta y ocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". Y en la jurisprudencia J punto veinticuatro diagonal dos mil tres,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a páginas veintiocho guión veintinueve, del suplemento séptimo de la Revista Justicia Electoral dos mil cuatro, cuyo rubro es: "Sanciones administrativas en materia electoral. Elementos para su fijación e individualización". Es necesario puntualizar que, los partidos políticos se encuentran vinculados jurídicamente a conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. Como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden, existieron infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, por parte del Partido Revolucionario Institucional; durante la prosecución del procedimiento sancionador, se aportaron suficientes elementos para comprobar las violaciones que se le atribuyeron. En este orden de ideas, el partido político denunciado, debe ser sancionado por la comisión de infracciones que redundan en el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo

cuarenta y uno, fracción tercera, Apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera; ciento once, párrafo tercero; ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segundo, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Por tal motivo, una vez acreditadas las infracciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, y su atribución subjetiva, con base en las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad electoral determina que las faltas cometidas por el partido denunciado, son de orden leve, porque se ponderan las circunstancias del caso específico que han sido materia de estudio, en atención al principio de equidad, que implica considerar las condiciones especificas, que imperan en el contexto de la materialización de la conducta reprochable. Quedó demostrado en autos que, las publicaciones instruidas por Partido Revolucionario Institucional, constituye una estrategia de desprestigio, hacia el Partido Acción Nacional y su candidato a la Gubernatura del Estado Manuel González Valle, pues no debe

perderse de vista que forma parte de una campaña de desprestigio. En esa tesitura, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, ponderando la magnitud de afectación que se le irrogaría, para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en la contienda del proceso electoral dos mil nueve, en fechas muy cercanas a la jornada comicial de cinco de julio, se determina un grado de reprochabilidad situado en el punto equidistante entre la mínima y la media del parámetro de sanciones, para el Partido Revolucionario Institucional, por las conductas desplegadas. Esto quiere decir que, con respaldo en los artículos cinco, doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro de la Ley Electoral de Querétaro, en correlación con los ordinales cincuenta y nueve, párrafo primero, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y treinta y cinco del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, este Consejo General considera procedente la sanción pecuniaria contemplada en la fracción tercera del artículo invocado en último término,

consistente reducción de las ministraciones del financiamiento público que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, toda vez que la sanción impuesta contempla como máximo el veinticinco por ciento de la percepción de financiamiento público, se procede a graduar o individualizar la sanción, tomando como base la ministración mensual del financiamiento público ordinario que prevalecía al momento de la materialización de los hechos objeto de estudio, que en la especie fue de doscientos veintisiete mil ochocientos cinco pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional, siendo esta cantidad el cien por ciento de la ministración mensual que percibe el Partido Revolucionario Institucional en el dos mil nueve, según constan en los archivos de la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Instituto Electoral de Querétaro. En esa tesitura, el veinticinco por ciento de la ministración que mensualmente percibe el partido, corresponde a la cantidad de cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, moneda nacional. Lo cual implica que, para la individualización de la sanción, debe partirse desde el monto mínimo no especificado, que sería el cero

por ciento, por ser el porcentaje menor, y oscilar de acuerdo a las circunstancias particulares del caso concreto, hasta el veinticinco por ciento, como monto máximo. En esa óptica, con fundamento en los artículos doscientos veinticuatro de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, siguiendo una adecuada técnica jurídica, esta autoridad establece una graduación de sanciones entre la mínima y la máxima, para determinar la sanción aplicable al partido infractor, de acuerdo a la conjugación de los siguientes elementos: a) la gravedad de las irregularidades cometidas, b) las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron llevadas a cabo, c) la lesión causada a bienes jurídicamente tutelados, d) medios de ejecución empleados, e) las condiciones externas y socioeconómica del infractor, f) grado de intencionalidad, y g) situación de reincidencia, que no fue acreditada en la denuncia de mérito. Con base en lo anterior, se considera que el parámetro de la reducción que contempla el artículo treinta y cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de

Querétaro, oscila de cero pesos a cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos, conforme a la escala que se muestra en la tabla siguiente. Porcentaje, veinticinco por ciento, cantidad líquida, cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y uno pesos con treinta y cinco centavos, grado de sanción, máxima. Porcentaje, veintiuno punto ocho por ciento, cantidad líquida, cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos con cuarenta y tres centavos, grado de sanción, cercana a la máxima. Porcentaje, dieciocho punto siete por ciento, cantidad líquida, cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cincuenta y un centavos, grado de sanción, equidistante entre la media y la máxima. Porcentaje, quince punto seis por ciento, cantidad líquida treinta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y nueve centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la media. Porcentaje, doce punto cinco por ciento, cantidad líquida, veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos, grado de sanción, media. Porcentaje, nueve punto tres por ciento, cantidad líquida, veintiún mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, grado de la sanción, cercaba a la media. Porcentaje, seis

punto dos por ciento, cantidad líquida, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con setenta y cinco centavos, cercana a la media. Porcentaje, seis punto dos por ciento, cantidad líquida catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos, grado de la sanción, cercana a la media. Porcentaje, tres punto uno por ciento, cantidad líquida, siete mil ciento dieciocho pesos con noventa y un centavos, grado de la sanción, ligeramente superior a la mínima. Porcentaje, cero por ciento, cantidad líquida, cero pesos, grado de la sanción, mínima. Sobra decir que, como es sabido, para obtener el término medio aritmético de la sanción, se debe sumar la mínima con la máxima, y al producto resultante dividirlo entre dos. De la misma manera, para sacar la sanción equidistante entre la mínima y la media, se debe sumar la mínima con la media, y al producto resultante dividirlo entre dos. Operación que se repite sucesivamente hasta obtener la escala anteriormente indicada. En consecuencia, este Consejo General, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina un grado de reprochabilidad de las conductas desplegadas por el Partido Revolucionario

Institucional, entre el parámetro de sanción media doce punto cinco por ciento, equivalente a veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos, moneda nacional), a mínima cero por ciento, concluye imponer la sanción equidistante entre la mínima y la media, consistente en la reducción equivalente al seis punto dos por ciento del monto que corresponde a la ministración que por mes se le otorga en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida mensual de catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos, moneda nacional), que deberá ser reducida durante el lapso de tres ministraciones, dando un total de cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última sea efectuada en octubre de dos mil nueve. Esto se ejemplifica visualmente como es plasma en la tabla que a continuación se inserta. Periodo de reducción de ministraciones durante dos mil nueve. Agosto, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Septiembre, catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Octubre, catorce mil doscientos

treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos. Cantidad total, cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cuarenta y nueve centavos. Siendo aplicable por identidad jurídica sustancial, los lineamientos establecidos en la jurisprudencia S tres LJ cero nueve diagonal dos mil nueve, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a páginas veintinueve guión treinta de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "arbitrio para la imposición de sanciones. lo tiene el consejo general del instituto federal electoral". Esto por ser ambos órganos gubernativos: el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autoridades administrativas electorales, encargadas de la organización de los comicios electivos, así como de la imposición de sanciones por infracciones administrativas en la materia, esto es, con la misma naturaleza institucional y facultades, aunque claro, en distintos ámbitos de competencia. En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de la demostración de una infracción que encuadre en la hipótesis

jurídica, luego, automáticamente el infractor se hace acreedor de una sanción; posteriormente, se deben de apreciar las circunstancias particulares del trasgresor, así como las circunstanciales en la comisión de la infracción, lo que constituye una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueve la cuantificación de la sanción, de un punto inicial hacia uno de mayor grado; dicho en palabras sencillas, con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo de imponer sanciones más rigurosas. Sobre esta temática, es aplicable la tesis relevante S tres EL cero veintiocho diagonal dos mil tres, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, al resolver el recurso de apelación SUP guión RAP guión cero cuarenta y tres diagonal dos mil dos, consultable a página novecientos dieciséis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y seis guión dos mil cinco, con el rubro: "Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponde y puede aumentar según las circunstancias concurrentes". En la inteligencia de que el inicio de la ejecución de la sanción impuesta es atendiendo a

que, de aplicar la reducción del financiamiento público del citado partido en fechas más próximas, le irrogaría una afectación para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en las contiendas del proceso electoral dos mil nueve, debido a la extrema cercanía de la jornada comicial. Por tal circunstancia, este órgano colegiado estima la aplicación de la sanción impuesta, durante el periodo ya señalado. No pasa desapercibido para este órgano colegiado que el denunciante en la foja seis de su denuncia, solicito la cancelación de la candidatura de la coalición electoral denominada "Juntos para Creer" y su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, sin embargo, al no haberse acreditado el nexo causal entre dicha coalición y su candidato de referencia, con los hechos motivo de la denuncia de mérito en los términos del considerando tercero de la presente resolución, resulta inatendible la petición aludida. Así, el Consejo General de este instituto, asumiendo la responsabilidad que le ha sido conferida por la ciudadanía, de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones electorales, así como ajustar su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y

objetividad; sanciona al Partido Revolucionario Institucional en los términos y por el periodo indicado. Fundamentos de la resolución.- De conformidad con los artículos cuarenta y uno, fracción tercera, Apartado c, primer párrafo; ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y siete, fracciones octava, décima primera, décima tercera y décima cuarta}, ciento seis, párrafo primero; ciento siete, fracción tercera; ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro, doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, ocho, veintitrés, párrafo primero, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; ocho, nueve, once, fracción primera; trece, veinticuatro, treinta y dos,

treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, fracción tercera y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, licenciado Greco Rosas Méndez, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, la coalición electoral denominada "Juntos para Creer" y su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Segundo.- No se acreditó en autos la conducta reincidente atribuida al Partido Revolucionario Institucional, en términos y según los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente. Tercero.- No se acreditaron en autos las conductas atribuida a la coalición electoral denominada "Juntos para Creer" y su

candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, por cuanto ve a las descritas en el considerando segundo, punto uno, con sustento en las argumentaciones vertidas en el considerando tercero de esta resolución; por consiguiente, no procede aplicar sanción a la coalición electoral denominada "Juntos para Creer", ni a su candidato a la Gubernatura del Estado, ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, por lo que se refiere a este aspecto. Cuarto.- Se acreditaron en autos las conductas atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, por cuanto ve a las detalladas en el considerando segundo punto uno, en relación con el punto segundo, incisos, uno, dos, tres y cuatro, con apoyo en las argumentaciones contenidas en el considerando cuarto y sexto, de esta resolución. Quinto.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina imponer al Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Querétaro, la sanción consistente en la reducción del seis punto dos por ciento del monto que equivale a la ministración que por mes se le otorga por concepto de financiamiento público

ordinario en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida de catorce mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos, moneda nacional, que deberá ser reducida durante el lapso de tres ministraciones, dando un total de cuarenta y dos mil setecientos trece pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional),debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última se efectúe en octubre de dos mil nueve, acorde con razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Córdova y maestro Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para que practiquen indistintamente dicha diligencia. Séptimo.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue. En el uso de la voz la

licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Adelante, doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- No obstante de que mi voto es a favor, quisiera hacer algunas consideraciones en el sentido de que cómo debemos efectivamente aplicar la Ley por parte del Instituto Electoral de Querétaro, yo creo que si bien hay la aplicación de la Ley, también se deja de lado ciertos elementos que aún el órgano electoral debe de considerar, que es fundamentalmente el contexto político, y si no vemos el contexto político y si no analizamos y vemos las cosas tal y como son, entonces caeremos siempre en una interpretación muy juridictista de las cosas, y yo creo que este órgano electoral debe de ir más allá, debe de ser muy equitativo, debe de ser muy igual, debe ser muy claro en la transparencia en sus diferentes decisiones, recordemos que las disposiciones establecen tanto como a nivel constitucional como a nivel de la Ley Electoral local relacionadas con sancionar o prohibir lo que viene a ser el denigrar a las instituciones o el calumniar a las personas esta muy relacionada con un contexto político que se dio en el dos mil seis, que fue la guerra sucia, la guerra sucia es una serie de

actividades que se dieron encaminadas al desprestigio directo, calumniando y denigrando las instituciones y en realidad ese es el sentido de la Ley, cuando hay una guerra sucia, cuando hay actividades y que están integradas, que están interrelacionadas, que están orquestadas, que están para debilitar a determinado candidato, eso a mi me pareció que era muy importante establecerlo y en todo momento lo apoyé en las discusiones que se establecieron aquí respecto de la reforma electoral, me parecía que era muy importante esto, la principal critica que se ha tenido al respecto es que efectivamente es la cuestión de la libertad de expresión y yo creo que hay cierto grado de racionalidad al respecto, de la libertad de expresión en el establecimiento de una estrategia política yo creo que es fundamental, claro sin llegar al extremo de establecer actividades orquestadas que efectivamente generen problemas, a mi me parece que en el caso que estamos ahorita analizando, no hubo una seria de actividades a generar guerra sucia en Querétaro, en el caso que estamos analizando, no estoy analizando otros casos y en ese sentido deberíamos de ser más analíticos en el contexto que se le da en las estrategias políticas en los partidos que hubiera una

vinculación o ciertas actividades en este caso el debate, podamos nosotros ser también ver por donde esta el documento en este caso en relación con los desplegados para en relación con su publicación, no veo propaganda orquestada, pero si veo una violación a la Ley, por eso apruebo la sanción, pensaría que debería de bajar la sanción, pero ya me va a decir que ya estamos en la votación y entonces no lo presento porque me voy a quedar así, pero si me parece que eso es lo importante en mi apreciación y si me parece que tengamos esto presente, no podemos tampoco limitar las estrategias de los partidos políticos cuando no están determinado lo que vendría a ser la guerra sucia y para esto lo único que vendría a ser es la capacidad que tenga este órgano para poder determinar la sanción, no hay otra cuestión más que la sensibilidad y la capacidad que tenga este órgano de sujetarse a las situaciones especificas de la Ley, si no ver el contexto y aplicar sobre todo la sustancia del derecho electoral que es los principios, ese es mi planteamiento. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Gracias. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de

la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... En el uso de la voz el licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova, Consejero Electoral.- Me permite señor Secretario, creo que el Consejero Miranda hace clara alusión en lo que busca evitar en lo que restan estos días en el término del proceso y de la jornada electoral que es la guerra sucia, sin embargo, en medios de comunicación y no solamente impresos, sino también en el Internet se han tenido algunos señalamientos sobre actores políticos y candidatos y bueno, al final de cuentas la guerra sucia sigue teniendo una condición de prevalecer en Querétaro, lamentablemente. En el caso de del Partido Revolucionario Institucional, bueno se acreditan mediante algunas facturas, comprobantes que se dan en estos desplegados, yo quisiera señalar que cada partido político, que cada candidato después de debate puede decirse ganó, al final de cuentas eso no corresponde a nosotros, como consejo electoral, el evitar el que alguien se sienta el que ganó o no ganó o el descalificar la capacidad que se tiene en un debate, lo que sí es importante de destacar es que hay un reglamento y un servidor presidió la Comisión de Debates, si hubiere estudiando en un

caso de fondo y debido a que está en video y si hubiere alguna acusación directa de un candidato hacia otro de corrupción y esto en términos de poder elementar y tener consideraciones sobre la presentación y en su caso de la aprobación de esta resolución, cosa que yo no escuché, y creo que era importante destacar, pues que ahí se tiene el análisis, se tiene el documento y que pudiera ser un elemento no para reducir porque no estamos en una miscelánea sino para bajar una multa o no, para poder compensar si técnicamente si esta acusación que se dice se dio en el debate y que después se presenta en medios impresos pudo haber sido una prueba que debió haberse allegado la Secretaría con los señores del jurídico, sin embargo, eso ya esta también en términos de votación y yo solamente dejo en consideración que se hubiera tomado en cuenta como una prueba técnica ese video y si había una acusación directa también hubiera servido como un elemento, mi voto es a favor. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo:- Muchas gracias. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor, Presidenta.

Firman la presente resolución la Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. Pasemos al desahogo del décimo cuarto punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación y aprobación en su caso, del proyecto de resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Juan Ricardo Ramírez Luna, en contra del Partido Acción Nacional, relativa al expediente sesenta y ocho diagonal dos mil nueve. Antecedentes. Primero.- En diecisiete de junio de dos de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, un escrito de denuncia firmado por el licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, por propio derecho, en su carácter de ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo.- En diecinueve de junio de dos mil nueve, se emitió acuerdo en el que se admitió a trámite la denuncia planteada; se ordenó la apertura del expediente sesenta y ocho diagonal dos mil nueve; y se ordenó emplazar al partido político denunciado, para que

dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas, manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Tercero.- En veintitrés de junio de dos mil nueve, se tuvo al Partido Acción Nacional, por medio de su representante propietario, licenciado Greco Rosas Méndez, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se le atribuyeron, realizando las manifestaciones que estimó pertinentes; y, se abrió la causa en su periodo probatorio. Cuarto.- En veintiséis de junio de dos mil nueve, se proveyó sobre la admisión y desechamiento de los medios de prueba aportados y ofrecidos; se ordenó el cierre del periodo probatorio; se pusieron los autos en estado de resolución, en virtud de haberse agotado las fases de este procedimiento y no encontrarse medio de prueba pendiente de acordar; finalmente, se instruyó la elaboración del proyecto respectivo. Quinto.-En veintinueve de junio de dos de dos mil nueve, se acordó agregar como medida para mejor proveer, copia certificada de sendas constancias que obran dentro de los archivos de la Secretaría Ejecutiva, por ser relevantes para la resolución del caso; y, se ordenó la ampliación del plazo para emitir resolución, a efecto de tomar en consideración dicho elemento de convicción. Presupuestos procesales, competencia, el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador electoral, con base en los artículos ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, fracción primera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y tramitar el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, así como para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos uno, dos, sesenta y siete, fracción décima tercera; doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, dieciséis y treinta y uno, párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de

Querétaro: Personería.- Las partes acreditaron la personería con la que se ostentan dentro del presente procedimiento sancionador. Esto es así debido a lo siguiente. El licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, demostró tener legitimación para comparecer con el carácter que se adjudicó, esto es, como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se advierte de la certificación de la copia de la credencial para votar con fotografía, folio nacional cero, cero, cero, cero, cero, cuatro, cero, siete, nueve, cero, dos, cuatro, seis, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, que obra anexa dentro de la escritura pública seis mil trescientos noventa y dos, de dieciséis de junio de dos mil nueve, elaborada por el Notario Público Adscrito a la Notaria Número Treinta de esta demarcación notarial, que acompañó a su escrito de denuncia, a la cual se le otorga valor probatorio pleno para tal efecto, según lo establece el artículo treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento elaborado por fedatario

público en el que consignó hechos que le constan. Así también, conforme a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete-dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". De conformidad con lo dispuesto por el artículo catorce del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, cualquier ciudadano puede presentar denuncias por probables infracciones a los supuestos enmarcados dentro del ordinal cinco del propio ordenamiento, que en su fracción tercera, contempla la contravención a las normas que regulan la propaganda político-electoral. Puesto que, de conformidad con el artículo invocado en primer término, cuando los partidos políticos presenten denuncias, lo harán por

medio de sus legítimos representantes; sin embargo, tratándose de personas físicas, estas lo harán por su propio derecho. Esto es, los ciudadanos se encuentran legitimados para presentar denuncias dentro del procedimiento especial sancionador electoral. Las denuncias de hechos o conductas de los partidos políticos, que se consideren violatorias de la normativa electoral, y que por ende, merezcan la aplicación de las sanciones previstas para tal efecto, pueden ser presentadas por algún ciudadano que tenga conocimiento de ellos, toda vez que, la violación de las disposiciones legales por algún partido político, debe ser sancionada por la autoridad electoral, lo cual puede ocurrir no sólo cuando la denuncia la realice otro partido político, sino también cuando la autoridad conoce de la probable infracción que se haya cometido, a través de una denuncia ciudadana. Máxime que, entre las obligaciones de los partidos políticos, resalta la de conducir sus actividades dentro de los causes legales, con apego a las disposiciones vigentes en la materia, como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, así como la Ley Electoral de Querétaro, y demás ordenamientos aplicables; en

razón de que, los institutos políticos deben ajustar su conducta a los principios que rigen en todo Estado Constitucional Democrático de Derecho. Lo antepuesto obedece a que, el procedimiento especial sancionador electoral, es de orden público, por lo que basta que se presente la denuncia correspondiente, que haga del conocimiento de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales, para que se inicie su trámite, siempre y cuando cumpla con los requisitos que para ello exige el Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. En ese sentido, cobra aplicación por identidad jurídica sustancial, la tesis relevante S tres EL cero veintiuno diagonal dos mil tres, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dos, consultable a páginas ochocientos cinco guión ochocientos seis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Procedimiento administrativo sancionador electoral. Los

ciudadanos están legitimados para presentar queja o denuncia de hechos legislación de baja california''. Así también, la tesis trece diagonal dos mil nueve, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recurso de revisión SUP guión JDC guión cuatrocientos cuatro diagonal dos mil nueve y SUP guión RRV guión uno diagonal dos mil nueve acumulados, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil nueve, con el rubro: ''Procedimiento administrativo especial sancionador. Sujetos legitimados para presentar la queja o denuncia''. El representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, demostró tener legitimación ad processum para comparecer con el carácter que se adjudicó, en virtud de que su nombramiento obra dentro del registro que para tal efecto se lleva en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, en términos de los artículos sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y quince, último párrafo, del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de

Querétaro. Además de que, también adjuntó copia certificada por el Notario Público Adscrito a la Notaria Número Treinta y Uno, de esta demarcación notarial, del escrito fechado en doce de julio de dos mil siete, por el que se le designó con tal carácter, cotejado bajo el número novecientos treinta y tres diagonal dos mil nueve, en el registro de cotejos de dicha notaria. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno al respecto, según lo establece el artículo treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento elaborado por fedatario público. Vía.- La vía propuesta por el denunciante fue la correcta. En su escrito de denuncia expresamente manifestó: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos doscientos treinta y dos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como trece y catorce del Reglamento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; respetuosamente comparezco y expongo: Presento denuncia en contra del Partido Acción Nacional". Atendiendo a

la naturaleza jurídica de la denuncia, consistente en hechos probablemente constitutivos de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, se siguió el presente procedimiento sancionador por la vía especial, en razón de que, el Titulo Tercero "Del régimen Sancionador electoral disciplinario interno", Capitulo Tercero "Del procedimiento especial", de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, es claro en ordenar que durante proceso electoral se seguirán por este tipo de vía, las denuncias que se formulen con motivo de la presunta comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, lo cual se encuentra descrito concretamente en el artículo doscientos treinta y dos, fracción segunda del referido ordenamiento, situación que se encuentra reforzada en el ordinal cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que establece los supuesto para la instrumentación del procedimiento especial. Por lo tanto, el procedimiento sancionador electoral respectivo, se siguió debidamente por la vía especial, por ser la idónea para su trámite. Análisis de las causas de improcedencia y

sobreseimiento, este Consejo General, atendiendo a que las causas de sobreseimiento e improcedencia, son de previo y especial pronunciamiento, así como de estudio oficioso, estima que: en el caso no se actualiza ninguna causal de sobreseimiento; y, de las constancias no se advierte que durante la tramitación del procedimiento haya sobrevenido alguna causal de improcedencia, ni que hayan sido alegadas por las partes. Resumen de los actos denunciados, puntos controvertidos y fijación de la litis. Primero.- El ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, en su escrito de denuncia, se duele fundamentalmente de los siguientes actos. Promocional elaborado por el Partido Acción Nacional, difundido en el medio de comunicación impreso denominado "Diario de Querétaro", en la página dos A, de la sección "Local", de catorce de junio de dos mil nueve, año cuarenta y siete, número diecisiete mil trescientos sesenta y nueve. Promocional elaborado por el Partido Acción Nacional, difundido en el medio de comunicación impreso denominado "Noticias", en la página ocho A, de la sección "ciudad", de catorce de junio de dos mil nueve, año treinta y siete, número doce mil novecientos noventa y siete. Propaganda

que contiene mensajes denigratorios, según refiere a foja tres de su escrito de denuncia: La Publicación a que se ha venido haciendo referencia, y que origina la presente denuncia, denigra al Partido Revolucionario Institucional, así como a su candidato a diputado local Jesús Llamas, a quien menciona por su nombre; y al candidato al Gobierno del Estado de Querétaro, por parte de la Coalición "Juntos Para Creer", integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza; a quien aun cuando no lo menciona como José Eduardo Calzada Rovirosa, hace una franca alusión a PEPE, que es como dicho candidato, aparece en la propaganda electoral de dicha Coalición". Asimismo, refiere el denunciante a foja tres de su escrito de denuncia: Inciso d).- En efecto, por principio, tenemos que el responsable de la publicación, es el Partido Acción Nacional, quien ha registrado candidatos a Gobernador del Estado, como a diputados locales por lo que tiene interés no solo en la búsqueda del voto, sino también desincentivar el voto que la ciudadanía pueda otorgar a favor de otros Partidos Políticos y sus candidatos, como en este caso lo son el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición Juntos para Creer";

indicando que tal circunstancia desemboca en una desacreditación y ofensa hacia la fama del ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato propietario a diputado local por el principio de representación proporcional, y del Partido Revolucionario Institucional. Segundo.- El Partido Acción Nacional en el Estado, por conducto de su representante propietario, en su ocurso de contestación, por una parte, no afirmó ni negó los hechos, por no considerarlos propios de su partido, sino apreciaciones jurídicas, y por otra, expresó como ciertos determinados hechos que se le atribuyeron, manifestando que. La publicación materia de controversia, no constituye un acto violatorio de la norma electoral que resulte jurídicamente reprochable al Partido Acción Nacional, toda vez que dicha publicación, no hace sino reproducir una nota periodística preexistente, públicamente difundida por el periódico "Diario de Querétaro", intitulada "Chocan Cetemistas", que fue divulgada por ese medio informativo en su edición de once de febrero de dos mil nueve. La publicación no causa algún agravio al Partido Revolucionario Institucional, ni a la coalición "Juntos Para Creer", a sus candidatos, ni al propio ciudadano promovente de

la denuncia. La nota periodística reproducida en la publicación controvertida, no fue de autoría del Partido Acción Nacional, sino del reportero responsable de la entrevista respectiva, que manifestó consideraciones personales. El Diario de Querétaro, filial de la empresa Organización Editorial Mexicana, se constituyó como un tercero ajeno al Partido Acción Nacional, que al elaborar la nota periodística, que fue reproducida en los promocionales denunciados, se encontraba en ejercicio de su libertad de prensa. Aunado a que, muchos otros medios impresos y electrónicos han ejercido la libertad de prensa informando sobre declaraciones adversas en el mismo sentido. En los promocionales denunciados, se realizó la mera reproducción de informaciones periodísticas o mensajes preexistentes, que ya se encontraban a disposición del público y que fueron divulgados al resguardo de las libertades de expresión e imprenta. La denuncia carece de razón y de derecho, toda vez que a dicho instituto político le asiste el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente, lo cual deviene en el derecho de formular criticas severas y palabras duras, sobre cualquier figura de la clase política o las actividades de los

partidos opositores, en el contexto del debate político y difusión de ideas, sin censura previa, que debe existir de cara a los comicios electorales. Considerando. Primero, carga de la prueba por cuestión de método, y de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria, corresponde al denunciante la carga de la prueba, es decir, acreditar los hechos en los que funde su pretensión; mayormente en este caso, debido a que el procedimiento se substanció en la vía especial, acorde con la hipótesis prevista por el ordinal trece del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro a instancia de parte, por lo que la técnica jurídica se encamina mediante el principio de impulsión procesal para el denunciante; en cambio, rige a favor del denunciado el principio de presunción de inocencia, en tanto se compruebe que desplegó una conducta infractora. Segundo.- Valoración del material probatorio, en autos existen los medios de prueba que a continuación se describen, los cuales fueron allegados al procedimiento por las razones que igualmente se indican, y que son tomados en consideración para emitir la presente resolución,

con base en el principio de adquisición procesal. Dicho principio se traduce en la valoración de la fuerza convictiva de los medios de prueba, teniendo como finalidad el esclarecimiento de la verdad, en relación con las pretensiones de todas las partes en conflicto y no solo del oferente, puesto que el procedimiento sancionador electoral se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. En tal sentido cobra aplicación la jurisprudencia J punto diecinueve diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, con el rubro: "Adquisición procesal en materia electoral". El ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, ofreció medios de prueba para sustentar las afirmaciones que realizó en su escrito de denuncia; no obstante, seguido el procedimiento por sus cauces legales, en veintiséis de junio de dos mil nueve, las probanzas identificadas en el apartado respectivo con los incisos dos, tres, cinco y cinco (sic), fueron desechadas en autos, por no

encontrarse dentro del catalogo que establece los medios de prueba que válidamente pueden ser ofrecidos, admitidos y desahogados para el procedimiento especial sancionador electoral. Por otro lado, los documentos privados que ofreció, identificados en su escrito de denuncia en el apartado respectivo con el inciso uno, se tuvieron por admitidos y desahogados en virtud de su propia y especial naturaleza, consistentes en: Inciso a).- Un ejemplar del medio del periódico denominado "Diario de Querétaro", de catorce de junio de dos mil nueve, año cuarenta y siete, número diecisiete mil trescientos sesenta y nueve, concretamente la página dos A, de la sección "local". Inciso b).- Ejemplar del periódico denominado "Noticias", de catorce de junio de dos mil nueve, año treinta y siete, número doce mil novecientos noventa y siete, específicamente la página ocho A, de la sección "Ciudad". Medios de prueba a los que se les otorga valor de indicio en lo individual, y pleno en su conjunto, para demostrar la existencia de los dos promocionales que refiere el ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna en su denuncia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción segunda; cuarenta y tres y cuarenta y

siete, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Esto por consistir en documentos privados, que enlazados entre sí de acuerdo a un recto raciocinio, generan convicción al respecto, al concatenarse con las afirmaciones vertidas tanto por el denunciante, como por el denunciado, pues constituyen en sí mismos, los promocionales en controversia, los cuales son iguales en ambos casos, al tenor de los datos que a continuación se detallan. Inciso a).- Partiendo de la parte superior hacia abajo del documento, en el primer renglón, al centro la frase "Jesús Llamas", en el segundo renglón, al centro con letras rojas la frase "Candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional", en el tercer renglón al centro la frase "Ni en la Confederación de los trabajadores de México te quieren". inciso a).- debajo, la inserción de una imagen que contiene: en su parte central superior, la leyenda en letras rojas estilo gótico: "diario de querétaro", debajo en la parte inferior izquierda visto el documento de frente, la imagen de un sol en color amarillo, debajo las letras "OEM", en la parte central

del documento las frases "organización editorial mexicana", "año cuarenta y seis romano", "diecisiete mil doscientos cuarenta y siete", "http://www.diariodequeretaro.com.mx", "Mario Vázquez Raña, presidente y director general" y "Sergio Arturo Vargas Alarcón, director"; luego una franja roja que contiene al centro letras blancas con la leyenda "Querétaro, Querétaro, miércoles once de febrero de dos mil nueve", y en la parte inferior de la imagen la leyenda con letras rojas "chocan", así como la diversa leyenda en letras negras "cetemistas". En la parte central izquierda del documento, el texto siguiente en dos párrafos, primero: "Dirigente nacional del Sindicato de Transporte, Miguel Rodríguez Maciel, acusó, al líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Jesús Llamas Contreras, de "apadrinar" empresas de "outsourcing" y con ello perjudicar a treinta mil trabajadores, lo que podría provocar el debilitamiento del sector obrero queretano", segundo: "Además Rodríguez Maciel consideró necesario que salgan de Confederación Mexicana de los Trabajadores de Querétaro los 'corruptos y ladrones', pues de lo contrario provocará la división y debilitamiento del sector obrero". Por debajo las frases "Fuente: Diario de Querétaro",

"Portada y página tres A" y "Fecha: once de febrero de dos mil nueve". En la parte central izquierda del documento, una imagen que contiene: en la parte superior las leyendas "Diario de Querétaro" y "Local", debajo, la leyenda con letras grises "Chocan" y con letras negras "Cetemistas", descendiendo un poco más, en la parte izquierda texto ilegible a dos columnas, en la parte derecha la imagen de dos sujetos de sexo masculino, sentados, reclinados sobre una mesa en la que se encuentran platos con alimentos y cubiertos, teniendo como fondo un lugar en el que se aprecian varias mesas y sillas, por debajo un recuadro con texto ilegible, englobado en un rectángulo rojo con los bordes redondeados. Debajo de la imagen descrita en el párrafo precedente, el texto "Rodríguez Maciel, consideró necesario que salgan de Confederación de Trabajadores de México, Querétaro los 'corruptos y ladrones, pues de lo contrario provocarán la división y debilitamiento del sector obrero", englobado en un rectángulo rojo con los bordes redondeados. En la parte inferior del documento la frase "!Fuera los corruptos y ladrones de la Confederación de Trabajadores de México, centrada horizontalmente, con énfasis tipo negritas en las

palabras "corruptos y ladrones", por debajo, texto en dos columnas, con párrafos enumerados de la siguiente manera, primera columna "Muchos trabajadores manifiestan: Uno.- Que le cuiden las manos a Jesús Llamas porque tiene fama de 'corrupto y ladrón'. Dos.- Que Llamas obtuvo la dirigencia por medio de irregularidades y transas. Tres.- Que humilla a las familias queretanas mediante sus abusos," poniéndose énfasis tipo negrita en las palabras "corrupto y ladrón"; segunda columna "desvíos y trinquetes que la propia Confederación de Trabajadores de México, ha denunciado. Cuatro.- Que las autoridades investiguen a fondo las denuncias de los cetemistas en contra de Jesús Llamas. Cinco.- Que respete el derecho de cada trabajador a votar libremente." Poco más abajo, el texto "En esta ocasión no habla el 'Señor ciudadano molesto con mentada de ma... los que hablan, son los propios cetemistas", con énfasis tipo negritas en las palabras "propios cetemistas". En la última sección del documento, en la parte inferior derecha, el emblema del Partido Acción Nacional, consistente en un recuadro azul, con puntas redondeadas, que engloba un circulo blanco, que a su vez contiene una circunferencia concéntrica azul, y dentro de

esta última, las letras azules "Partido Acción Nacional", Inmediatamente debajo de dicho emblema, la leyenda "Comité Directivo Estatal". Al finalizar, en la última sección del documento, en la parte inferior izquierda, la frase "¡PEPErderán!". Para efectos ilustrativos y a fin de obtener una perspectiva clara, exacta e inequívoca sobre los actos denunciados que dieron origen a este procedimiento sancionador electoral, se inserta la siguiente imagen, la cual es la misma en ambos promocionales, coincidiendo exacta y puntualmente en sus características esenciales y accidentales. A su vez, la documental publica que ofreció, identificada en su escrito de denuncia en el apartado respectivo con el inciso cuatro, se tuvo por admitida y desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, consistente en la escritura pública seis mil trescientos noventa y dos, elaborada por el Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número Treinta, de esta demarcación notarial. Medio de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, para demostrar que el ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, compareció ante dicho notario para solicitar sus servicios, quien se traslado a las oficinas ubicadas en avenida

constituyentes esquina con calle Guanajuato, colonia San Francisquito, Santiago de Querétaro, Querétaro, y siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil nueve, ingresó al inmueble referido, y en ese momento el denunciante le exhibió cinco ejemplares de propaganda política de la coalición "Juntos Para Creer", integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, apreciándose en los diversos ejemplares la mención "PEPE CALZADA", candidato a Gobernador de la coalición en comento, propaganda que fue anexada al acta notarial mencionada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y ocho, fracción primera; cuarenta y dos, fracción cuarta; cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en un documento expedido por fedatario público, en el que se consignan hechos que le constan. De igual manera, acorde a lo expuesto por la tesis relevante S tres EL cero, cero, cero, cinco diagonal noventa y nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página trescientos dieciocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Acta notarial. Para determinar su alcance probatorio debe acudirse a sus anexos si éstos forman parte integrante de la misma". Lo expuesto es así, puesto que valorar cualquier medio de convicción, consiste no solamente en decidir si fue debidamente ofrecido, admitido, preparado y desahogado, sino concederle o negarle la posibilidad de demostrar determinados hechos, atendiendo al valor con que lo tasa la normatividad aplicable. En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia J punto cuarenta y cinco diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a fojas ciento ochenta y seis guión ciento ochenta y siete de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "Pruebas documentales. Sus alcances". Así también, lo señalado

por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, en el criterio emitido por unanimidad de votos, al resolver el recurso de apelación cero dos diagonal dos mil tres, de diecisiete de mayo de dos mil tres, siendo ponente el licenciado Juan Manuel Zepeda Garrido, con el rubro: "Medios de prueba. Valoración de los". El representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, al rendir su contestación, no aportó ni ofreció medio de prueba alguno para sustentar las afirmaciones que vertió en su escrito. No pasa inadvertido que, dentro de este procedimiento se ofrecieron la instrumental de actuaciones, la cual consiste en la totalidad de constancias que existen dentro del presente expediente, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que no es más que la valoración de la prueba misma, pues como se sabe, existen presunciones juris et de iure y también iuris tantum. Tercero.- Se acredita el nexo de causalidad entre la hipótesis normativa específica y el hecho fáctico concreto, en lo relativo al Partido Acción Nacional. Este Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, debe analizar las circunstancias sujetas a su consideración, para fijar si la actuación cometida tiene un nexo

causal entre su supuesto infractor, a efecto de determinar si efectivamente desplegó la conducta atribuida; asimismo, dicho enlace debe ser valorado tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que debieron de haberse suscitado para la perpetración de la conducta. Se corrobora la existencia de un enlace causal entre la conducta consistente en la elaboración de los dos promocionales indicados por el denunciante, y su difusión el catorce de junio de dos mil nueve, en dos distintos periódicos de circulación en esta ciudad, con las frases y mensajes que han sido descritos supra líneas, así como el emblema del partido denunciado, y la exigibilidad jurídica o juicio de reproche, de atribuir dicha actuación, en autoría material e intelectual, al Partido Acción Nacional. Se explica. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario, licenciado Greco Rosas Méndez, al rendir su contestación, textualmente manifestó a foja cuatro de su escrito. Actuar en esa dirección, implicaría menoscabar la libertad de expresión que asiste a los medios masivos de comunicación en el Estado, toda vez que en el caso concreto que nos ocupa, las declaraciones del señor Miguel Rodríguez Maciel, son exactamente las mismas en el

desplegado del Partido Acción Nacional que en la nota del prestigiado "Diario de Querétaro", y resultaría contrario a la lógica más elemental, sostener que en su caso el mensaje es denigratorio, pero en el otro no. De lo transcrito puede advertirse el reconocimiento expreso que formula el Partido Acción Nacional, sobre la autoría tanto intelectual como material, de la elaboración y difusión de los promocionales que se le atribuyen, lo que se traduce en una confesión sobre los hechos imputados, situación que no se encuentra sujeta a prueba ni objeción alguna, por disposición del artículo treinta y seis de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Reconocimiento que se encuentra robustecido con la circunstancia de que, en los dos promocionales denunciados, se visualiza el emblema del Partido Acción Nacional, que ya ha sido puntualmente descrito con antelación, y debajo la leyenda "Comité Directivo Estatal". Más aún porque, si bien el partido denunciado no acepta haber elaborado la nota periodística que se insertó en la propaganda denunciada, pero lo cierto es que la autoría de los promocionales en sí, no ha sido negada ni motivo de controversia por parte del Partido Acción Nacional, toda vez

que la nota periodística que se utilizó como fuente, es de naturaleza distinta a la propaganda electoral en estudio. Cuarto.- estudio de fondo, del análisis minucioso de la litis, se advierte que el representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Greco Rosas Méndez, aduce esencialmente que. La denuncia planteada en su contra, carece de razón y de derecho, toda vez que los promocionales materia de controversia, no constituyen un acto violatorio de la norma electoral que resulte jurídicamente reprochable al Partido Acción Nacional, por no constituir expresiones denigratorias en contra del ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato a diputado local por el principio de representación proporcional, del Partido Revolucionario Institucional, ni del ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, candidato a gobernador del Estado, en virtud de que en dichos promocionales, meramente se reproduce una nota periodística preexistente, que ya se encontraban a disposición de la ciudadanía en general, debido a su difusión por diversos medios impresos y electrónicos, información y mensajes que fueron divulgados al resguardo de las libertades de expresión e imprenta. Además de que, a dicho instituto político

le asiste el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente, lo cual deviene en el derecho de formular criticas severas y palabras duras, sobre cualquier figura de la clase política o las actividades de los partidos opositores, en el contexto del debate político y difusión de ideas, sin censura previa, que debe existir de cara a los comicios electorales, como en el caso de los promocionales en análisis. La litis a resolver se centra en determinar si los promocionales en estudio, elaborados y difundidos por el Partido Acción Nacional, contienen o no, mensajes denigratorios que van más allá de la regulación de la libertad de expresión que le asiste como instituto político. Tal como lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias relacionadas con el tema, el derecho de libertad de expresión no es absoluto. En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión, encuentra contrapeso con otro valor que también ha sido tutelado tanto por la normatividad electoral como por la de carácter internacional suscrita y ratificada por el Estado Mexicano. Se trata de la honra, la reputación y la dignidad de los servidores públicos o de las personas públicas, los cuales por supuesto,

deben ser jurídicamente protegidos, dado que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, por otra, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por tal motivo, para resolver si los promocionales elaborados y difundidos por el Partido Acción Nacional que se estudian, contiene o no mensajes denigratorios que van más allá de la regulación de la libertad de expresión que le asiste como instituto político, es menester hacer referencia tanto al marco jurídico constitucional, específicamente el artículo sexto en relación con el cuarenta y uno ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los instrumentos internacionales celebrados por el Estado México, que forman parte de nuestro orden jurídico interno, según lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un nivel jerárquico inmediato inferior a la Constitución, en términos del artículo ciento treinta y tres de la propia Carta Magna, que tutelan la libertad de expresión; así como al marco normativo aplicable en el ámbito de esta entidad federativa. El

artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado." El artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: "En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas". El artículo diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mandata. Uno.- "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Dos.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifiesta: Uno.-

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Dos.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Tres.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para. Inciso a).- Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". El ordinal once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos

ataques''. El ordinal trece de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: Inciso a).- El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o: Inciso b).- La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Tres.- No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Cuatro.- Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso dos. Cinco.- Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional". El numeral treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere. Dos.- Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". El artículo ciento seis, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, dispone: "La propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los precandidatos, durante las precampañas, deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos. El Consejo General del Instituto, está facultado para ordenar el retiro o la suspensión de la propaganda que contravenga lo anterior". El artículo ciento siete, fracción tercera

de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, mandata: "La propaganda electoral está constituida por los elementos producidos, empleados y difundidos durante el periodo de campañas electorales por los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, con el propósito de obtener el voto, tales como escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones, debiendo abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto determinará lo procedente para el retiro o suspensión de la propaganda que contravenga lo anterior". El artículo ciento once, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ordena: "La propaganda política que realicen los partidos políticos, deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar el retiro o la suspensión de la propaganda que contravenga lo anterior". El artículo ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, indica: "Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, infamia, injuria o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a

otros partidos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales en la propaganda política que se utilice durante las mismas". Los dispositivos transcritos ponen en evidencia que, el derecho al respeto a la honra y a la dignidad personal constituye un límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado, lo que es acorde con la prohibición prevista en el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos ciento seis, párrafo primero; ciento siete, fracción tercera; ciento once, párrafo tercero; ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, como deber de los partidos políticos y de las coaliciones, de abstenerse de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos, en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que utilicen. De la interpretación sistemática de dichos dispositivos, se advierte que constitucional y legalmente se estableció la prohibición

categórica de que en la propaganda política o electoral, en forma directa o indirecta, así sea en la modalidad de opinión o información, se empleen expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas, lo cual se traduce en una falta administrativa de rango constitucional y refuerzo legal que enfatiza las limitaciones a la libertad de expresión, manifestación de las ideas y de imprenta aplicable a la propaganda política y electoral. Pues aún en ambientes donde los estándares democráticos son muy exigentes, se ha aceptado el criterio de que pueden imponerse límites razonables y justificables a la libertad de expresión, pues se trata de un derecho que convive con otros derechos igual de importantes, como el de la vida privada, honra, reputación, imagen, o la salud pública, por mencionar algunos. En esa óptica, es claro que una de las restricciones concretas a la libertad de expresión, necesaria y plenamente justificada en orden al respeto a los derechos y a la reputación de los partidos políticos, se estableció en el artículo cuarenta y uno constitucional, al especificar que en la propaganda política y electoral de los partidos políticos, y por extensión a las

coaliciones, no pueden emplearse expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o coaliciones, o que calumnien a las personas. Esto constituye un imperativo del sistema de la democracia mexicana, si se tiene presente que es derecho fundamental de toda persona, el respeto y la garantía del derecho a su dignidad, para no ser sujeto de ataques indebidos en su honra y reputación, así como de conductas que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, según se dispone en los artículos primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecisiete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y once de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ya que, los instrumentos internacionales también reconocen y tutelan el carácter no absoluto de la liberta de expresión. Así, los candidatos, militantes, simpatizantes, los propios partidos políticos y coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios de esa obligación de respeto al honor o dignidad, a pesar de que sean sujetos de una crítica desinhibida, vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes, sarcásticos y de contenido negativo y, por la otra, esos

mismos sujetos están obligados a respetar el derecho al honor y la dignidad de los demás. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y sujetos de obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho al honor y la dignidad, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Y que también trae como consecuencia, reconocer que los partidos políticos pueden ser sujetos pasivos en caso de sufrir una lesión con motivo de la transgresión del derecho fundamental mencionado, ya que resulta lógico y jurídico sostener que pueden resentir un daño causado en su esfera jurídica al respecto. En otro aspecto, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, ello no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir ex ante, normas en consideración a los

límites del derecho de libre expresión. No se trata pues, de que no se pueda regular limitativamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, tampoco que no se puedan imponer reglas, incluso respecto del contenido, características, peculiaridades y modalidades de los mensajes. Más bien, se trata de que la determinación y aplicación de estos límites, no puede consistir en excluir, en forma anticipada, el mensaje del conocimiento y probable debate público. Es decir, estos límites no se pueden hacer valer en forma previa, sino a través de la determinación de responsabilidades jurídicas ex post, tanto de naturaleza civil, penal y administrativa, según sea el caso. Sobre el tema es de importancia la tesis relevante duodécimo diagonal dos mil nueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el ocho de abril de dos mil ocho, con el rubro: "censura previa. Existe cuando la autoridad administrativa sujeta, de manera anticipada, las expresiones que se hacen en la propaganda política, a una restricción distinta a las previstas en el orden constitucional y legal". En efecto, la manifestación de las ideas

no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos, a saber: a) se ataque la moral; b) se afecten los derechos de terceros; c) se provoque algún delito; o, d) se perturbe el orden público. En el ámbito político-electoral existen pues, por disposición constitucional, límites y reglas específicos para el ejercicio de ese derecho por parte de los partidos políticos. Lo antepuesto es relevante porque, en materia de libertad de expresión se encuentra como límite, entre otros, el derecho de los demás o de terceros; es decir, el respeto a la dignidad, honra o reputación de las personas, por cuanto a que el ejercicio de dicho derecho, si bien es cierto que no puede estar sujeto a censura previa, también lo es que no puede ejercerse de una manera irracional, ya que da lugar a responsabilidades ulteriores, conforme a los artículos seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecinueve, párrafo tres, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como trece, párrafo segundo, inciso a), y treinta y dos, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con base en esas consideraciones, se incluye como transgresión de la normatividad

electoral el contenido de mensajes que impliquen la disminución o el demérito de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de diatribas, calumnias, infamias, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de calificativos o de expresiones vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que apreciados en su significado usual y en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una auténtica cultura democrática entre los afiliados o militantes partidarios y de la ciudadanía en general, siendo por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática. Es claro entonces que, el voto de los ciudadanos debe ejercerse como producto de la libre valoración, en la que se tomen en cuenta, preferentemente, los planteamientos de los partidos y de las coaliciones, en tornó a las exposiciones de un análisis de la problemática y necesidades en nuestro entorno, la manera

como se pretenda afrontar esa problemática para la satisfacción de las necesidades ciudadanas, así como la ideología pregonada en su caso; que se hayan contenidas en las plataformas electorales, programas de trabajo, agendas de planeación y documentos básicos de los candidatos, partidos y coaliciones. Evitando sustentar esas propuestas y análisis en un ejercicio irreflexivo, irracional y hasta antijurídico, que desvirtúe el derecho de participación política del ciudadano. La argumentaciones expuestas tienen razón de ser en la jurisprudencia J punto catorce diagonal dos mil siete, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el catorce de noviembre de dos mil siete, titulada: "honra y reputación. Su tutela durante el desarrollo de una contienda electoral se justifica por tratarse de derechos fundamentales que se reconocen en el ejercicio de la libertad de expresión". Por lo tanto, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina que los promocionales elaborados y difundidos por el Partido Acción Nacional, consistentes en dos publicaciones que efectuó en los medios de

comunicación impresos denominados "Diario de Querétaro", y "Noticias", de esta ciudad, el catorce de junio de dos mil nueve, plenamente identificados en el considerando segundo, punto segundo de esta resolución, contravienen la normatividad que regula la propaganda electoral, al contener frases y palabras intrínsecamente denigratorias, que apreciadas en su significado y usual y en el contexto del mensaje que difunden, son constitutivos de ataques a la honra, dignidad e imagen, del ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato a diputado local por el principio de representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, así como de dicho instituto político. Puesto que las aseveraciones en ellos contenidos, implican la disminución, demérito y degradación de la estima e imagen del referido partido político y del candidato indicado frente al electorado, como consecuencia de la utilización de expresiones peyorativas, deshonrosas y oprobiosas, que nada aportan a la formación de una opinión pública libre, ni a la consolidación del sistema de partidos, ni al fomento de una auténtica cultura democrática entre la ciudadanía en general; dado que cada uno de los promocionales en lo individual, y concatenados en su

conjunto, constituyen la afirmación directa y contundente de actos reprochables, como robos, hurtos o desfalcos, que con base en las reglas de la lógica y según las máximas de la experiencia, se obtiene de la sola lectura de las expresiones "corruptos y ladrones", "!Fuera los corruptos y Ladrones", "corrupto y ladrón", y "transas". No es dable admitir que en la propaganda electoral del Partido Acción Nacional se asocie al Partido Revolucionario Institucional y al ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato a diputado local por el principio de representación mismas son suficientes para descalificar a cualquier partido, persona o institución, pues están relacionadas en general con prácticas ilícitas e inaceptables. Proporcional de dicho partido, con expresiones que intrínsecamente empañan o deterioran la imagen de cualquier sujeto, como lo son las de "!Fuera los corruptos y Ladrones", "corrupto y ladrón", y "transas". Dichas expresiones en lo individual, por sí. Como se ve, el común denominador de las expresiones invocadas en los promocionales cuestionados, es el de aludir a prácticas ilegales que se asocian a las siglas de un partido político y al nombre de un candidato. En lo individual, cada una de esas palabras es suficiente para descalificar al

Partido Revolucionario Institucional y a su candidato Jesús Llamas Contreras, pues su significado autónomo conlleva una carga expresiva de alguien que incurre en prácticas ilegales o deshonestas, lo cual denigra la imagen del sujeto al que califican. Así por ejemplo, en el lenguaje cotidiano y convencional, ladrón significa: sujeto que comete el delito de robo, apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleando violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas. Por su parte, la palabra transa se entiende como una conducta que contraviene la ley, se califica de transa a quien es un embustero o burla la ley. Asimismo, la palabra corrupción tiene diversos significados, todos vinculados a la alteración o vicio de una forma natural de las cosas, así por ejemplo, alude a una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho propio, bien económico o de otra índole, en detrimento de la ciudadanía. En ese tenor, con mayor razón deben tenerse como violatorios a las normas que regulan la propaganda electoral, ciertos mensajes contenidos en los promocionales que se examinan, puesto que contienen párrafos completos en los que se atribuyen de manera

contundente y directa, las características de las palabras denigratorias aludidas, al ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato a diputado local por el principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional y al propio instituto político, en razón de que literalmente se plasmó: "Jesús Llamas candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional ni en la Confederación de Trabajadores de México te quieren", "Que le cuiden las manos a Jesús Llamas porque tiene fama de 'corrupto y ladrón'.", "Que Llamas obtuvo la dirigencia por medio de irregularidades y transas", y "Que humilla a las familias queretanas mediante sus abusos, desvíos y trinquetes". Nótese que las siglas "PRI", desde luego se refieren al Partido Revolucionario Institucional. La finalidad denigrante que revelan las expresiones y mensajes aludidos, que se encuentran en los promocionales en análisis, es única en tanto que son manifestaciones con un propósito unívoco, que no se desvirtúa con algún otro elemento que permita observar una finalidad distinta a aquella, pues en dicha propaganda no se hace una propuesta política de solución a problemas, tampoco se expone una crítica respetuosa, no se proporciona información

suficiente para que el ciudadano ejerza con mayor libertad su derecho a votar, ni se contribuye a un debate serio y razonado en la sociedad. Las palabras denostativas y mensajes peyorativos citados en la propaganda en estudio, son innecesarias para fomentar un debate serio, pacífico e informado de la situación actual o pasada de esta entidad federativa; y en ese sentido, también resultan desproporcionadas e inconducentes para lograr los propósitos constitucionales encomendados a los partidos políticos, pues en nada contribuyen al desarrollo armónico de la sociedad, a la integración de los poderes públicos y a la posibilidad el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Lo expuesto, porque si bien, según lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las opiniones no están sujetas al canon de veracidad, y solamente el genero informativo requiere de la demostración o justificación de las expresiones empleadas por los informantes, también lo es que, -como ya se dijo-, esta distinción no es aplicable al caso de la propaganda política y electoral de los partidos políticos, en tanto el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, constitucional no distingue entre el género de opinión y el de

información, por lo cual, la prohibición de denigrar abarca cualquiera de esas modalidades de comunicación si se trata de propaganda política o electoral de partidos políticos, aún cuando se aduzca la reproducción de información obtenida de otra fuente, que de forma previa se haya hecho del conocimiento de la ciudadanía en general. De ahí lo infundado de los argumentos sostenidos por el partido denunciado al respecto. La honra y dignidad, son valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de los sujetos, de ahí que, a partir de una postura de menoscabo o degradación, es factible la vulneración de los derechos fundamentales precitados. En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar la capacidad de sus oponentes, implica la vulneración de derechos de terceros o de la reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que se han reconocido constitucionalmente y a través de los pactos internacionales signados por el Estado Mexicano. En el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se distinguió la posibilidad de que las frases denigrantes se emplearan con motivo de una opinión, postura, información o cualquier otra modalidad de expresión, de tal manera que prohibió todo contenido denigrante o que calumnie a las personas, en la propaganda elaborada y difundida por los partidos políticos sin hacer distinción alguna. El constituyente consideró justificada esta prohibición, por diversas causas jurídicas y experiencias político-electorales previas, entre las cuales destaca el hecho de que, de conformidad con el propio artículo cuarenta y uno, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público, cuya finalidad es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. La propaganda política y electoral de los partidos políticos, debe ser plenamente coherente con las finalidades constitucionales de los partidos políticos y con los principios democráticos. Con base en este presupuesto, es dable exigirle a los partidos políticos que al

difundir propaganda actúen en forma adecuada, respetando la integridad de los candidatos, su reputación y dignidad, así como los derechos de imagen de los demás institutos políticos, coaliciones, y sus candidatos, que también son valores sustanciales de un sistema democrático. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente prohibió que en la difusión de propaganda política y electoral, se denigre a otros partidos políticos, coaliciones o candidatos o se calumnie a las personas, pues ese tipo de prácticas no son idóneas para lograr sus fines. Pues bien, el hecho de que el constituyente haya enfatizado que tratándose de propaganda política electoral no se permite el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, no significa una censura generalizada o la prohibición del uso de ciertas palabras en la deliberación pública manifestada en formas distintas a la propaganda política, como refiere el partido denunciado. Debido a que, el propósito del constituyente consistió en limitar la denigración y calumnia, en la propaganda de los partidos políticos y coaliciones, al considerar que este medio debe reservarse para ejercer una política de auténtico debate ideal de opiniones. Es decir, el

constituyente prohibió en la propaganda de los partidos políticos, utilizar un lenguaje innecesario o desproporcionado, en relación con los derechos a la imagen de los partidos, coaliciones, de los candidatos y en general de las personas; satisfaciendo así un interés público imperativo, con todo lo cual se pone en evidencia lo infundado de las afirmaciones sostenidas por el partido denunciado. En ese sentido, la proscripción de denigrar a los partidos, que protege el derecho a la imagen, enfatiza una de las limitantes generales de la libertad de expresión prevista en el artículo seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los derechos de un tercero. En ese esquema, se realiza una real afectación a la imagen, honra y dignidad del Partido Revolucionario Institucional y del ciudadano Jesús Llamas Contreras, candidato a diputado local por el principio de representación proporcional por dicho partido, pues quedan expuestos a una estrategia de descalificación, debido a que los promocionales denostativos fueron elaborados de forma completamente idéntica, y difundidos a la ciudadanía en general a través de dos distintos medios de comunicación impresa de esta ciudad. Por tanto, los promocionales en cuestión ponen de

relieve una conducta ilegal, aunque efectuada de manera disfrazada o discreta, por valerse de la inserción de comentarios, información u opiniones de otras fuentes-, que exterioriza sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática, tal como se ha sostenido en líneas anteriores, y cuya comisión, al contravenir los principios que animan la contienda electoral, debe ser sancionada. Particular atención merece lo aducido por el ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, en su carácter de denunciante, en el sentido que, la frase "¡PEPErderán!", que se visualiza en la parte final de la última sección de los promocionales en cuestión, constituye una conducta violatoria a la normatividad electoral, por conformar una expresión que denigra al ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, candidato a gobernador del Estado de Querétaro, por parte de la coalición "Juntos Para Creer", integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza. En primer lugar debe precisarse que, según lo estipulado por los artículos sexto, párrafo primero y siete

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como trece de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica; puesto que es consustancial al debate democrático, que se permita la libre circulación de ideas acerca de los candidatos y sus partidos políticos, por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. Asimismo, debe permitirse a los titulares de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, y de expresión, que cuestionen e indaguen sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de forma que los electores puedan formar libremente su propio criterio para votar. En tal virtud, la libertad de expresión, así como el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter político-electoral, constituyen una trama normativa y se fortalecen entre sí; además que, las elecciones libres y auténticas,

así como la libertad de expresión, en particular la libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional. Los partidos políticos, en tanto personas jurídico-colectivas expresamente reconocidas en ley, son titulares de derechos y obligaciones en materia político-electoral, ello conlleva a convalidar el reconocimiento expreso que la legislación reconoce a su favor, en torno al derecho fundamental de la libertad de expresión, en concordancia con sus fines como entidades de orden público. Lo cierto es que, en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión, constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios, y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. Por consiguiente, es indispensable proteger y

garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información; es preciso que se pueda cuestionar e indagar sobre los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. Cuando se restringe indebidamente la libertad de expresión de un sujeto de derecho, no sólo es el derecho de ese sujeto el que está siendo violentado, sino también el derecho de la colectividad a la obtención de información e ideas. Por un lado, nadie debe ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada sujeto; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir información y a conocer

la expresión del pensamiento ajeno. De esta manera, el derecho a la libertad de expresión cobra dos dimensiones, la individual y la social. Ahora, la libertad de expresión en relación con la propaganda electoral que en el curso de una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones a través de los medios de comunicación, admite un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en esos debates o cuando estén involucrados cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática. Las expresiones relativas a servidores públicos o a otras personas que ejercen funciones de carácter público, deben gozar de un margen de apertura a un debate amplio en torno a asuntos de interés público o interés general, lo cual es muy importante en una sociedad democrática, tal criterio es aplicable también respecto de las expresiones que se profieran en relación con una persona pública, por ejemplo, un político o un candidato a un cargo de elección popular, quien se somete voluntariamente al escrutinio público, en relación con cuestiones de interés público o interés general, en los cuales la sociedad tienen un legítimo interés de mantenerse informada. Dichos

razonamientos tienen su origen en la jurisprudencia J punto once diagonal dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, aprobada por unanimidad de votos, en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, intitulada: "Libertad de expresión e información. Su maximización en el contexto del debate político". En consecuencia, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina que la frase "¡PEPErderán!", contenida en los promocionales analizados, contrariamente a lo aducido por el denunciante, por sí misma no constituye infracción a la normatividad que regula la propaganda electoral, pues dicha expresión únicamente constituye una expresión severa, e incluso sarcástica, producto de la mercadotecnia política, que simplemente sugiere la derrota de algún contrincante político, que en modo alguno puede considerarse intrínsecamente denigrante, vejatoria u oprobiosa; y que no va más allá ni transgrede los limites constitucionales y legales que consagra la libertad de expresión en materia política, ya que como se ha comentado anteriormente-, este derecho fundamental se maximiza, para abarcar criticas que, aun

cuando sean duras o ásperas, permitan confrontar propuestas, ideas y opiniones en el ámbito del debate democrático, de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. Así, los candidatos, militantes, simpatizantes, los propios partidos políticos y coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios del respeto al honor o dignidad, y se encuentran obligados a respetar el derecho de los demás en tal sentido; sin embargo, ello no implica que no puedan ser sujetos de una crítica desinhibida, vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes, sarcásticos y de contenido negativo. En el caso, si bien, tal como se advierte del acta notarial que adjuntó el ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna a su denuncia, el candidato a gobernador del Estado por la coalición "Juntos Para Creer", ha optado por difundir su persona de manera constante y reiterada con el seudónimo "PEPE", en diferentes modalidades de su propaganda electoral durante la actual campaña. Lo cierto es que dicho seudónimo no conforma el nombre del candidato aludido, que en la especie es José Eduardo Calzada Rovirosa. Por lo tanto, la utilización o modificación de dicho seudónimo, por parte de sus opositores

políticos, con tintes satíricos o sarcásticos, para declarar algún tipo de aventajamiento en la contienda electoral, a menara de cierto tipo de recurso creativo de mercadotecnia política, en modo alguno implica denigración, diatriba, infamia o algún tipo de denostación hacia su persona; lo cual es propio y connatural a todo proceso electivo. La propaganda electoral, no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario, y se logra al presentar ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos; sino también, busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos que no son mutuamente excluyentes sino concurrentes, por una parte, atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos. Dichas aseveraciones encuentran su origen en la tesis relevante S tres EL ciento veinte diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a página ochocientos dieciséis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "propaganda electoral. Finalidades legislación de chihuahua y similares". No pasa inadvertido a esta autoridad electoral que, tal como se desprende de los registros de la Secretaría Ejecutiva, se solicitó que en las boletas electorales se identificará al candidato a la coalición "Juntos Para Creer", como Pepe Calzada; sin embargo, la óptica sostenida para pronunciar la presente resolución se encuentra reforzada por los siguientes razonamientos. El nombre completo y correcto del candidato a gobernador del Estado de Querétaro por la coalición "Juntos para Creer", según se aprecia de la copia certificada del acta de nacimiento folio trece mil seiscientos cuarenta, expedida por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, en veinticuatro de marzo de dos mil nueve, es José Eduardo Calzada Rovirosa, según consta en los archivos de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, en términos del artículo sesenta y siete, fracción octava de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, concretamente en el expediente treinta y dos diagonal dos mil nueve, formado con motivo de la solicitud de registro presentada por la coalición de mérito, documental que se tiene a la vista al

momento de emitir la presente resolución, y que se agregó en copia certificada como diligencia para mejor proveer, mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil nueve, dentro del expediente que nos ocupa. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno para demostrar tal circunstancia, según lo establece el artículo treinta y ocho, fracción primera, cuarenta y dos, fracción cuarta, cuarenta y siete, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y nueve del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro; por consistir en copia certificada de un documento expedido por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por lo cual, el nombre oficial y legal del citado candidato es José Eduardo Calzada Rovirosa, en términos de lo establecido por el los artículos treinta y cinco y treinta y ocho del Código Civil para el Estado de Querétaro. Esto es así porque, el nombre es el vocativo con el cual se designa a una persona, y se compone del nombre propio y los apellidos, cuando se trate de personas físicas. Desde luego, la usurpación del nombre por terceros, así como su utilización indebida, origina el pago de los daños y perjuicios que se causen por culpa o

negligencia. El nombre de las personas físicas es inmutable, inalienable e imprescriptible y sólo puede ser modificado por resolución administrativa o judicial proveniente de autoridad competente. Sin embargo, en términos del artículo cuarenta del Código Civil para el Estado de Querétaro, el seudónimo, mote o sobrenombre no es elemento constitutivo del nombre de las personas físicas, aun cuando tenga protección en materia de derechos de autor. La doctrina nacional es unánime en considerar que, el nombre es un atributo de la personalidad, que puede considerarse como la denominación que distingue en sus relaciones jurídicas y sociales, a una persona de las demás que forman la comunidad. Toda persona humana tiene derecho a un nombre, porque es de gran importancia social, ya que puede ser unido al honor, a la fama o a la consideración social, en este sentido, se habla de tener renombre. El orden jurídico requiere tener identificadas a todas las personas físicas, para hacer prevalecer con claridad quienes son titulares de ciertos derechos y obligaciones, pues la finalidad del nombre, como atributo de las personas físicas, es individualizar e identificar al sujeto con su correspondiente status. La utilización del nombre es

exclusivamente de su titular, el derecho al nombre es intransferible e inembargable. Es común encontrar tres maneras distintas al nombre, de individualizar a las personas dentro de nuestra sociedad, y que han sido objeto de estudio de la ciencia normativa: Uno.- seudónimo, Dos.- Apodo (mote o sobrenombre), y. Tres.-Alias. El seudónimo se utiliza en el medio artístico, literario, periodístico o propagandístico, y en general en el autoral. Los interesados optan en utilizar una referencia distinta al nombre que legalmente les corresponde, para desplazarse en el ambiente de sus actividades. Puede considerársele como medio de identificación adoptado por una persona, por el que es conocida en el ambiente en que se desenvuelve, que se desvincula de su identidad oficialmente reconocida por el ordenamiento jurídico. Los alcances del seudónimo de ninguna manera pueden sustituir al nombre de la persona, aún cuando se trataren de circunstancias especiales. Quienes recurren a la utilización del seudónimo, lo pueden hacer sólo en el ambiente y en relación con sus actividades; no obstante, en el ambiente oficial, deberá de considerarse su nombre como único medio de individualización jurídica. Es decir, el seudónimo que la persona libremente se

impone, no constituye el verdadero nombre, en virtud de que el seudónimo solo individualiza a quien lo usa en ciertos actos, más no en la vida jurídica. El apodo por su parte, es la designación que se da a una persona para ridiculizarla o caricaturizarla mediante algún defecto. Una habilidad física, un determinado defecto o cualidad física y hasta una mutilación corporal, son tomados en cuenta algunas veces para identificar a una persona más que por su nombre; esto es el apodo, que también es conocido como mote o sobrenombre. El alias a su vez, es frecuentemente utilizado entre la gente de bajo nivel cultural, y cobra limitada importancia para el sistema jurídico, porque se convierte en el medio para identificar a una persona para asuntos de carácter policiaco, por ser utilizado comúnmente entre los maleantes y delincuentes. Estas tres formas de individualizar a las personas; seudónimo, apodo (mote o sobrenombre) y alias, no constituyen el nombre verdadero y oficial de las personas físicas reconocido por el orden jurídico. El nombre sí constituye un atributo de la personalidad, susceptible de ataques a la dignidad de la persona en caso de una modificación arbitraria e irracional; pero no el seudónimo, apodo (mote o sobrenombre), ni

el alias. En los promocionales de mérito, no se menciona en ninguna ocasión al ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa, porque su nombre no se plasmó en los mismos, ni de forma total, ni en alguna de sus partes, como pudiera haber sido al colocar sus apellidos o nombre de pila. Más aún porque, la frase "¡PEPErderán!", se encuentra en la última sección, finalizando cada uno de los promocionales controvertidos, y como se puede apreciar de una acuciosa observación, dicha expresión no guarda ninguna relación con los mensajes que le anteceden; por el contrario, cuando se llega hasta la parte en la que se encuentra la citada frase, se puede advertir una ruptura en la continuidad lingüística, semántica, sintáctica y semiótica del documento, que la desarticula de la connotación precedente, otorgándole una significación desvinculada con las demás partes de esa propaganda. Esto es, el análisis de la expresión "¡PEPErderán!", en relación con el área del documento en el que se encuentra ubicada, y en concatenación con las reglas usuales del lenguaje, permite arribar a la conclusión anterior, pues dicha expresión se plasmó a manera de posdata, o sea, fue utilizada en forma de "por cierto" o "dicho sea de paso". Quinto.- Individualización de

la sanción. A efecto de proceder a la individualización de la sanción, se toman en cuenta las siguientes consideraciones. En principio debe mencionarse que, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal, comúnmente conocido como poder correctivo o sancionador del Estado, incluyendo en este concepto a todo organismo público, en el caso específico del Instituto Electoral de Querétaro, autónomo, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen al respecto, para el efecto de evitar la transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes. Orientan lo mencionado, los lineamientos contenidos en la tesis relevante S tres EL cero cincuenta y cuatro diagonal dos mil dos, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a foja trescientos setenta y nueve de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil dos, con el rubro: "derecho administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal". En esa vertiente, tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que, por llevar implícito el ejercicio del ius puniendi, debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en lo relativo a la imposición de sanciones, adopta la postura del aforismo romano nulla poena sine lege

praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos uno, dos, tres, cuatro y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: Inciso a).- Un principio de reserva normativa, así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción. Inciso b).- El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados en forma previa a la comisión del hecho. Inciso c).-La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita, abstracta, general e impersonal, a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad. Inciso d).- Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta -odiosa sunt restringenda-, porque el ejercicio de ese poder correctivo estatal,

siempre debe ser acotado y muy limitado, por cuanto los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos, en atención a los principios indubio pro cive y favor libertatis. Asimismo, el ius puniendi, consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta imputación subjetiva. Entonces, las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para fijar la sanción que corresponda al partido político por las irregularidades cometidas, comprende tanto a las de carácter objetivo: la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar, como a las subjetivas: el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia, el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia que rodean a la contravención de la norma administrativa. Lo argumentado encuentra sustento en la

jurisprudencia J punto cero siete diagonal dos mil cinco, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a fojas, doscientos setenta y seis guión doscientos setenta y ocho de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "régimen administrativo sancionador electoral. Principios jurídicos aplicables". Y en la jurisprudencia J punto veinticuatro diagonal dos mil tres, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, consultable a páginas veintiocho guión veintinueve del suplemento siete, de la Revista Justicia Electoral dos mil cuatro, cuyo rubro es: "Sanciones administrativas en materia electoral. Elementos para su fijación e individualización". Es necesario puntualizar que, los partidos políticos se encuentran vinculados jurídicamente a conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. Como ha quedado asentado en los considerandos que

anteceden, existieron infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral, por parte del Partido Acción Nacional; durante la prosecución del procedimiento sancionador, se aportaron suficientes elementos para comprobar las violaciones que se le atribuyeron. En este orden de ideas, el partido político denunciado, debe ser sancionado por la comisión de infracciones que redundan en el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera, ciento once, párrafo tercero; ciento ochenta y siete, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Por tal motivo, una vez acreditadas las infracciones cometidas por el Partido Acción Nacional, y su atribución subjetiva, con base en las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución, esta autoridad electoral determina que las faltas cometidas por el partido denunciado, son de orden leve, porque se ponderan las circunstancias del caso específico que han sido materia de

estudio, en atención al principio de equidad, que implica considerar las condiciones especificas, que imperan en el contexto de la materialización de la conducta reprochable. Quedó demostrado en autos que, los promocionales elaborados por el Partido Acción Nacional, constituyen una estrategia de desprestigio, hacia el Partido Revolucionario Institucional en el Estado, pues si bien los promocionales fueron publicados el mismo día, en una sola ocasión, en el mismo tipo de medio propagandístico, sin que se localizaran en la primera plana; resulta evidente que en esta ciudad capital, es donde se encuentra la mayor concentración de población en toda la entidad federativa, por lo que al difundirse en dos periódicos distintos, la referida propaganda fue susceptible de provocar un impacto importante en la ciudadanía. En esa tesitura, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, ponderando la magnitud de afectación que se le irrogaría, para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en la contienda del proceso electoral dos mil nueve, en fechas muy cercanas a la jornada comicial de cinco de julio, se determina un grado de reprochabilidad situado en el punto

equidistante entre la mínima y la media del parámetro de sanciones, para el Partido Acción Nacional, por las conductas desplegadas. Esto quiere decir que, con respaldo en los artículos cinco, doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro de la Ley Electoral de Querétaro, en correlación con los ordinales cincuenta y nueve, párrafo primero, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos de la Ley e Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y treinta y cinco del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro que corresponde al Partido Acción Nacional. Este Consejo General considera procedente la sanción pecuniaria contemplada en la fracción tercera del artículo invocado en último término, consistente reducción de las ministraciones del financiamiento público. Por tanto, toda vez que la sanción impuesta contempla como máximo el veinticinco por ciento de la percepción de financiamiento público, se procede a graduar o individualizar la sanción, tomando como base la ministración mensual del financiamiento público ordinario que prevalecía al momento de la materialización de los hechos objeto de estudio, que en la especie fue de trescientos ochenta y seis mil

quinientos treinta y seis pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional, siendo esta cantidad el cien por ciento de la ministración mensual que percibe el Partido Acción Nacional en el dos mil nueve, según constan en los archivos de la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Instituto Electoral de Querétaro. En esa tesitura, el veinticinco por ciento de la ministración que mensualmente percibe el partido, corresponde a la cantidad de noventa y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos con dieciocho centavos, moneda nacional. Lo cual implica que, para la individualización de la sanción, debe partirse desde el monto mínimo no especificado, que sería el cero por ciento, por ser el porcentaje menor, y oscilar de acuerdo a las circunstancias particulares del caso concreto, hasta el veinticinco por ciento, como monto máximo. En esa óptica, con fundamento en los artículos doscientos veinticuatro de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, siguiendo una adecuada técnica jurídica, esta autoridad establece una graduación de sanciones entre la mínima y la máxima, para determinar la sanción aplicable al

partido infractor, de acuerdo a la conjugación de los siguientes elementos: a) la gravedad de las irregularidades cometidas, b) las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron llevadas a cabo, c) la lesión causada a bienes jurídicamente tutelados, d) medios de ejecución empleados, e) las condiciones externas y socioeconómica del infractor, f) grado de intencionalidad, y g) situación de reincidencia, -que no fue materia de la denuncia de mérito: Con base en lo anterior, se considera que el parámetro de la reducción que contempla el artículo treinta y cinco, fracción tercera del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, oscila de cero pesos a noventa y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos con dieciocho centavos, conforme a la escala que se muestra en la tabla siguiente. Porcentaje, veinticinco por ciento, cantidad líquida, noventa y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos con dieciocho centavos, grado de sanción, máxima. Porcentaje, veintiuno punto ocho por ciento, cantidad líquida, ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con noventa centavos, grado de sanción cercana a la máxima. Porcentaje, dieciocho punto siete por ciento, cantidad

líquida, setenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y tres centavos, grado de sanción, equidistante entre la media y la máxima. Porcentaje, quince punto seis por ciento, cantidad líquida sesenta mil trescientos noventa y seis pesos con treinta y seis centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la media. Porcentaje, quince punto seis, cantidad líquida, sesenta mil trescientos noventa y seis pesos con treinta y seis centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la media. Porcentaje, doce punto cinco por ciento, cantidad líquida, cuarenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos con nueve centavos, grado de sanción, media. Porcentaje, nueve punto tres por ciento, cantidad líquida, treinta y seis mil doscientos treinta y siete pesos con ochenta y un centavos, grado de sanción, cercana a la media. Porcentaje, seis punto dos por ciento, cantidad líquida, veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos, grado de sanción, equidistante entra la mínima y la media. Porcentaje, tres punto uno por ciento, cantidad líquida, doce mil setenta y nueve pesos con veintisiete centavos, grado de sanción, ligeramente superior a la mínima. Porcentaje, cero por ciento, cantidad líquida, cero pesos, grado de sanción,

mínima. Sobra decir que, como es sabido, para obtener el término medio aritmético de la sanción, se debe sumar la mínima con la máxima, y al producto resultante dividirlo entre dos. De la misma manera, para sacar la sanción equidistante entre la mínima y la media, se debe sumar la mínima con la media, y al producto resultante dividirlo entre dos. Operación que se repite sucesivamente hasta obtener la escala anteriormente indicada. En consecuencia, este Consejo General, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina un grado de reprochabilidad de las conductas desplegadas por el Partido Acción Nacional, entre el parámetro de sanción media doce punto cinco por ciento, equivalente a cuarenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos con nueve centavos, moneda nacional, a mínima cero por ciento, concluye imponer la sanción equidistante entre la mínima y la media, consistente en la reducción equivalente al seis punto dos por ciento del monto que corresponde a la ministración que por mes se le otorga en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida mensual de veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional, que

deberá ser reducida durante el lapso de dos ministraciones, dando un total de cuarenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos con ocho centavos, moneda nacional, debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última se efectúe en septiembre de dos mil nueve. Esto se ejemplifica visualmente como se plasma en la tabla que a continuación se inserta. Periodo de reducción de ministraciones durante dos mil nueve. Agosto, veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos. Septiembre, veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos. Cantidad total, cuarenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos con ocho centavos. Siendo aplicable por identidad jurídica sustancial, los lineamientos establecidos en la jurisprudencia S tres ELJ cero nueve diagonal dos mil tres, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, visible a páginas veintinueve guión treinta, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Arbitrio para la imposición de sanciones. Lo tiene el consejo general del instituto federal

electoral''. Esto por ser ambos órganos gubernativos: el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autoridades administrativas electorales, encargadas de la organización de los comicios electivos, así como de la imposición de sanciones por infracciones administrativas en la materia, esto es, con la misma naturaleza institucional y facultades, aunque claro, en distintos ámbitos de competencia. En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de la demostración de una infracción que encuadre en la hipótesis jurídica, luego, automáticamente el infractor se hace acreedor de una sanción; posteriormente, se deben de apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las circunstanciales en la comisión de la infracción, lo que constituye una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueve la cuantificación de la sanción, de un punto inicial hacia uno de mayor grado; dicho en palabras sencillas, con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo de imponer sanciones más rigurosas. Sobre esta temática, es aplicable la tesis relevante S tres EL cero veintiocho diagonal dos mil tres, pronunciada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP- cero cuarenta y tres diagonal dos mil dos, consultable a página novecientos dieciséis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes mil novecientos noventa y siete guión dos mil cinco, con el rubro: "Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes". En la inteligencia de que el inicio de la ejecución de la sanción impuesta es atendiendo a que, de aplicar la reducción del financiamiento público del citado partido en fechas más próximas, le irrogaría una afectación para competir equitativamente con otras fuerzas políticas en las contiendas del proceso electoral dos mil nueve, debido a la extrema cercanía de la jornada comicial. Por tal circunstancia, este órgano colegiado estima la aplicación de la sanción impuesta, durante el periodo ya señalado. Así, el Consejo General de este instituto, asumiendo la responsabilidad que le ha sido conferida por la ciudadanía, de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones electorales, así como ajustar su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y

objetividad; sanciona al Partido Acción Nacional en los términos y por el periodo indicado. Fundamentos de la resolución. De conformidad con los artículos cuarenta y uno, fracción tercera, apartado c, primer párrafo, ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso b), c) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, sesenta y siete, fracciones octava, décima primera, décima tercera y décima cuarta, ciento seis, párrafo primero, ciento siete, fracción tercera; ciento once, párrafo tercero, ciento ochenta y tres, párrafo segundo, fracción segunda, inciso c), doscientos veintidós, fracción primera, inciso c), doscientos veinticuatro, doscientos treinta y dos, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, uno, ocho, veintitrés, párrafo primero, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y dos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, uno, dos, tres, cinco, fracción tercera; siete, ocho nueve, once, fracción uno, trece, veintiséis, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro,

treinta y cinco, fracción tercera, y treinta y seis del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador del Instituto Electoral de Querétaro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, resuelve. Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador electoral, promovido por el ciudadano licenciado Juan Ricardo Ramírez Luna, en contra del Partido Acción Nacional en el Estado, por la comisión de presuntas violaciones a las normas que regulan la propaganda electoral. Segundo.- No se acreditaron en autos las conductas atribuida al Partido Acción Nacional, por cuanto ve específicamente a las descritas en el considerando cuarto, punto segundo de esta resolución, con base en los razonamientos ahí descritos; por consiguiente, no procede aplicar sanción al partido denunciado por lo que se refiere a este aspecto. Tercero.- Se acreditaron en autos las conductas atribuidas al Partido Acción Nacional, por cuanto ve a las detalladas en el considerando segundo, punto segundo, con apoyo en las argumentaciones contenidas en el considerando cuarto, punto I, de esta resolución.

Cuarto:- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, valorando las circunstancias casuísticas, contextuales y contingentes, vertidas en esta resolución, determina imponer al Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, la sanción consistente en la reducción del seis punto dos por ciento del monto que equivale a la ministración que por mes se le otorga por concepto de financiamiento público ordinario en dos mil nueve, resultando en la cantidad líquida de veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), que deberá ser reducida durante el lapso de dos ministraciones, dando un total de cuarenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos con ocho centavos, moneda nacional), debiendo realizarse la primera reducción a partir de agosto de dos mil nueve, para que la última se efectúe en septiembre de dos mil nueve, acorde con los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. Quinto:- Notifíquese el presente acuerdo a las partes, autorizando a los licenciados Pablo Cabrera Olvera, Javier Afif Musiate Córdova y maestro Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, para que practiquen

indistintamente dicha diligencia. Sexto.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue. ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Secretario Ejecutivo.- A favor, con las mismas consideraciones que hice en mi participación anterior. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Muchas gracias. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... En el uso de la voz el Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova, Consejero Electoral.- Gracias señor Secretario, nada más para hacer una reflexión de mi voto. Qué bueno que o afortunadamente no se da el señalamiento de algún candidato al gobierno del estado, porque sino en caso de que se aprobara esta

resolución en esos términos, pues si estaríamos avalando la guerra sucia, lo bueno es que no está implícita según en estos desplegados el análisis jurídico que se hace de un candidato al gobierno del estado y por ende mi voto es a favor. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Muchas gracias. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para la presente resolución, Presidenta. Firman la Presidente y el Secretario Ejecutivo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera Casas, pasemos al desahogo del siguiente décimo quinto punto del orden del día. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Es el relativo a la presentación de la solicitud que formulan los representantes del Partido Revolucionario Institucional y la coalición "Juntos para Creer", respecto del establecimiento de medidas cautelares que impidan que los ciudadanos fotografíen con sus teléfonos celulares o cámaras fotográficas las boletas electorales al momento de sufragar el cinco de julio del presente año. Esta Secretaria da

cuenta de que ha recibido tres escritos signados por el licenciado Sócrates Alejandro Valdés Rosales que dice lo siguiente. Por medio de este conducto y en mi carácter de representante de la coalición "Juntos para Creer", solicito que este Honorable Consejo General que con carácter de urgente considere y acuerde el establecimiento de medidas cautelares que impidan que los ciudadanos fotografíen con sus teléfonos celulares o cámaras fotográficas las boletas electorales al momento de sufragar este cinco de julio. Lo anterior bajo el temor fundado de la compra de votos y violaciones a la libertad de sufragio, toda vez que hemos detectado un reparto indiscriminado de teléfonos y que se corrobora con las denuncias que se han hecho por empleados de las administraciones publicas municipales, estatales federales y ciudadanos, taxistas y comerciantes que han recibido amenazas y condicionamientos para votar coaccionados. Me permito destacar que la medida solicitada es una garantía para proteger el principio constitucional y universal del sufragio libre y secreto, pilares del sistema electoral y elementos esenciales de la competencia democrática, por lo tanto así como se impide que alguien entre con símbolos o imágenes electorales a la casilla, en

estado alterado, o permanezca dentro de la casilla sin estar autorizado, la medida solicitada se debe entender como una medida que de mayor libertad a sufragar al ciudadano, que sea este instituto quien agote todos los medios a su alcance para garantizar a cada uno de los queretanos que no podrán coaccionarlos y que en cumplimiento a la ley electoral del estado velemos por el sufragio libre y secreto, no compartimos la visión de quienes consideran que la tutela de la secrecía del sufragio es una molestia al ciudadano que implique violaciones a sus garantías individuales, toda vez que se trata de una medida que privilegia el Principio Democrático y de Certeza de la Libertad y secrecía del Voto, que destierra la coacción o la compra del mismo. Me permito destacar que estas medidas han sido criterios sostenidos por otros organismos electorales en el país que aunque autónomos y con regímenes jurídicos locales distintos, todos están bajo el orden constitucional que consagra nuestra constitución política y así lo reflejan las decisiones en los estados de Nayarit, Nuevo León y Sonora. Siendo, además, que se trata de una medida cautelar pasajera, pues, no se le desposee al ciudadano de ningún bien o derecho en sentido alguno. De igual manera, es

evidente que no existe razón objetiva para que un ciudadano fotografíe una boleta electoral, y en el caso de hacerlo, ello puede constituir la presunción de un delito empujado por la coacción o por el temor de sufragar en un sentido u otro y después tenerlo que demostrar. Por lo anterior, la Coalición Juntos para Creer pide se acuerde lo necesario y convoca a todas las fuerzas políticas para defender el sufragio universal, libre y secreto, atentamente coalición "Juntos para Creer", licenciado Sócrates Valdés Rosales. Un oficio del licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional que dice lo siguiente. Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo ocho, Constitucional, uno, dos, cuatro, siete, veinticuatro, treinta, fracciones primera; cincuenta y seis, fracción cuarta; sesenta y cinco, fracción trigésima primera; sesenta y ocho, ciento treinta, fracción primera y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el suscrito Representante de la Coalición "Juntos para Creer", solicito que este Honorable Consejo General acuerde el establecimiento de una restricción y medidas cautelares que prohíban e impidan que los ciudadanos fotografíen o tomen

imágenes con sus teléfonos celulares, agendas electrónicas o cámaras fotográficas de las boletas electorales al momento de sufragar este cinco de Julio. Lo anterior bajo el temor fundado, basado en la indiscriminada utilización de recursos económicos que el Partido Acción Nacional y su Gobierno están ejerciendo a través de los programas sociales. Han obsequiado más de veinte mil teléfonos celulares con cámara, a cambio de la fotografía del voto. Cabe hacer mención que esto no constituye una molestia al ciudadano que implique violaciones a sus garantías individuales, toda vez que se trata de una medida que privilegia el Principio Democrático y de Certeza de la Libertad y Secrecía del Voto, que destierra la coacción o la compra del mismo. Siendo, además, que se trata de una medida cautelar pasajera, pues, no se le desposee al ciudadano de ningún bien en sentido alguno. Por lo anteriormente expuesto solicito. Único se acuerde de conformidad, atentamente licenciado Juan Saldaña Zamora. Un escrito del licenciado Hiram Rubio García, que dice lo siguiente: Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo ocho, Constitucional, uno, dos, siete, veinticuatro, treinta, fracción primera; cincuenta y seis, fracción cuarta;

sesenta y cinco, fracción trigésima primera y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el suscrito Representante del Partido Revolucionario Institucional, solicito que este Honorable Consejo General acuerde el establecimiento de una restricción y medidas cautelares que prohíban e impidan que los ciudadanos fotografíen o tomen imágenes con sus teléfonos celulares, agendas electrónicas o cámaras fotográficas de las boletas electorales al momento de sufragar este cinco de Julio. Lo anterior bajo el temor fundado, basado en la indiscriminada utilización de recursos económicos que el Partido Acción Nacional y su Gobierno están ejerciendo a través de los programas sociales. Han obsequiado más de veinte mil teléfonos celulares con cámara, a cambio de la fotografía del voto. Cabe hacer mención que esto no constituye una molestia al ciudadano que implique violaciones a sus garantías individuales, toda vez que se trata de una medida que privilegia el Principio Democrático y de Certeza de la Libertad y Secrecía del Voto, que destierra la coacción o la compra del mismo. Siendo, además, que se trata de una medida cautelar pasajera, pues, no se le desposee al ciudadano de ningún bien en sentido alguno. Por lo

anteriormente expuesto solicito, único, se acuerde de conformidad, atentamente licenciado Hiram Rubio García. Que en conjunto solicitan a este órgano electoral un acuerdo para que los ciudadanos no ingresen a la casilla con celular para que puedan tomar fotografías de su voto. Asimismo doy cuenta de un escrito del licenciado Greco Rosas Méndez, que dice lo siguiente: En respuesta a su consulta planteada mediante oficio SE diagonal mil ochenta y dos diagonal dos mil nueve, relativa a la valoración de posibles medidas tendientes a garantizar la libertad y secrecía del voto durante la próxima jornada electoral, le manifiesto que el Partido Acción Nacional será, en todo momento, respetuoso de lo que determine la autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones. Sin otro particular, reitero la más amplia disposición del partido que represento, para seguir consolidando la democracia de Querétaro, atentamente licenciado Greco Rosas Méndez, representante del Partido Acción Nacional. Un documento del Partido del Trabajo que versa en los siguientes términos. El que suscribe José A. Martínez Hernández. en mi carácter de representante Propietario del Partido del Trabajo, el que tengo debidamente acreditado y registrado ante el Consejo

General de ese Instituto Electoral, con lo que disponen los artículos ocho y cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siete de la Constitución Política del Estado de Querétaro; uno, dos, siete, veinticuatro, treinta, fracción primera; cincuenta y seis, fracción cuarta; sesenta y cinco; fracción trigésima primera y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado, ante usted de la manera más atenta comparezco Y manifiesto: Que vengo por medio del presente escrito a solicitar a este honorable Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que para el debido cumplimiento de los fines del Instituto, tengan ustedes a bien acordar el establecimiento de medidas cautelares. Incluso restrictivas, que impidan que los ciudadanos fotografíen o tomen imágenes con teléfono celular, agenda electrónica o cámara fotográfica de las boletas electorales, al momento de emitir su voto, el próximo día cinco de julio del año actual. Por lo que el Partido del Trabajo sugiere a ustedes ciudadanos Consejeros, se giren las instrucciones a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, para que soliciten a todas aquellas personas que lleven consigo un teléfono celular, una agenda electrónica o una cámara fotográfica el día

de la Jornada Electoral, al momento de presentarse ante la Mesa Directiva de Casilla depositen en una bolsa de plástico transparente tales equipos electrónicos y/o fotográficos en resguardo momentáneo, mientras emiten su voto, de los escrutadores, en un lugar visible y seguro en la mesa en que se encuentran los funcionarios de la mesas y los representantes de los partidos políticos; de tal manera que esas personas no puedan ingresar a la mampara a emitir su voto. Con tales instrumentos tecnológicos ya que todos ellos que no se requieren para la opción de su preferencia electoral Y en la mampara se encuentran los elementos necesarios para marcar el emblema del partido político de su preferencia, es decir los crayones, que son parte del material electoral que envía este Consejo General a todos los funcionarios de casilla, a través de los consejos distritales o municipales. Lo anterior, por el temor fundado en la indiscriminada utilización de recursos económicos que determinados partidos políticos Y del gobierno estatal y municipal en tumo, están ejerciendo incluso a través de programas sociales institucionales, de tal forma que incluso de estos partidos ha obsequiado a diversas personas, más de veinte

mil teléfonos celulares con cámara. A cambio de que los ciudadanos tomen fotografía de su voto, una vez que lo emitan Y antes de depositarlo en las medidas que se de ninguna manera constituyen actos de molestia al ciudadano, ni tampoco implica violaciones a sus garantías individuales toda vez que, en caso de aprobarse por este Consejo General. De una medida que privilegia los Principios de certeza, legalidad, autenticidad Y efectividad del voto de todos los ciudadanos. Que destierra la coacción o la compra del mismo. Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted ciudadano Secretario del Consejo General, atentamente solicito se sirva: Único, acordar de conformidad lo solicitado por nuestro derecho, licenciado José Ascención Martínez Hernández, representante del Partido del Trabajo. Un escrito signado por los consejeros electorales licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez, licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova y el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, que dice lo siguiente. En atención a su oficio SE diagonal mil setenta y seis diagonal dos mil nueve y toda vez, que deriva del escrito presentado por el licenciado Hiram Rubio Garda, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, así como del licenciado Juan Saldaña Zamora y el licenciado Sócrates Alejandro Valdez Rosales, representante propietario y suplente de la Coalición "Juntos para Creer', en el que solicitan que el Honorable Consejo General acuerde el establecimiento de una restricción y medidas cautelares que prohíban e impidan que los ciudadanos fotografíen o tomen imágenes con sus teléfonos celulares, agendas electrónicas o cámaras fotográficas de las boletas electorales al momento de sufragar este cinco de julio", los abajo firmantes, consejeros electorales, nos pronunciamos porque se atienda la solicitud planteada y se convoque a Sesión del Consejo General para que sea este órgano colegiado quien trate . el asunto en extenso y mediante el debate crítico se puedan conocer los posicionamientos y argumentaciones jurídicas de los miembros de Consejo sobre de este polémico asunto y se tome una determinación. Lo anterior, lo suscribimos no sólo apoyándonos en las disposiciones que la Ley Electoral establece en sus artículos siete, sesenta y ocho y sesenta y cinco, fracción trigésima primera, así como en el capítulo sexto del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, sino, y sobretodo, porque se atiende una

cuestión delicada que se encuentra presente en los reclamos de diversos sectores sociales, de manera que la discusión colectiva y la determinación que de ella se extraiga contribuirá a dar certeza jurídica el día de la jornada electoral. En espera que se atienda la solicitud planteada, nos despedimos de Usted. Atentamente, licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez, licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova y el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa. Un escrito del consejero electoral Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo que versa en los siguientes términos. En respuesta a su oficio número SE diagonal mil setenta y siete diagonal dos mil nueve, de fecha diecinueve de junio del año en curso, hago los siguientes comentarios: Primero:- Querétaro se ha distinguido por ser uno de los Estados de la República Mexicana con mayor participación ciudadana. En el proceso electoral de dos mil tres, tuvimos una participación ciudadana del cincuenta y siete punto cinco por ciento y para el proceso electoral de dos mil seis, aumentamos nuestra participación al sesenta y dos punto cinco por ciento, es decir que aumentamos cinco puntos porcentuales. Segundo:- En el presente proceso electoral, los medios de

comunicación han difundido que los ciudadanos participen anulando su voto, así también que el abstencionismo podría alcanzar un mayor porcentaje, se habla de que podría llegar hasta un sesenta y cinco por ciento. Tercero.- El artículo segundo Ley Electoral del Estado de Querétaro, establece lo siguiente: Las autoridades del Estado, las de los municipios. Los organismos electorales y las instituciones políticas, velarán por la estricta aplicación y cumplimiento de esta ley; promoverán .La participación democrática de los ciudadanos; alentarán toda expresión que tienda a fortalecer el régimen de partidos. El artículo siete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, dice: El sufragio es la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. El voto popular es un derecho y una obligación. El voto es universal, libre, secreto, personal y directo. El artículo cincuenta y seis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, dice: Son fines del Instituto Electoral de Querétaro. Entre otros, establece fracciones, primera. Primero.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos residentes en el Estado; fracciones cuarta, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. El artículo ciento treinta y dos de la Ley Electoral de

Estado de Querétaro, dice: El presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden durante la elección, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, conforme con las disposiciones siguientes fracciones primera y fracciones segunda, no se admitirán en la casilla. Inciso a).- A quienes acudan en estado de ebriedad o manifiesten una conducta violenta o agresiva. Inciso b).- A quienes hagan propaganda política. Inciso c).- Quienes, de cualquier forma, pretendan influir en los votantes. Cuarto.- Como podemos ver, los artículos anteriormente comentados, establecen que como órganos electorales, debemos de promover la participación democrática de los ciudadanos, que el voto es universal, libre, secreto, personal y directo, y también se establece de aquellos ciudadanos que incurran en conductas que violenten las disposiciones legales el día de la jornada electoral. Pero nunca se establece que aquellos ciudadanos que porten teléfonos celulares o cámaras fotográficas cuando acudan a la casilla a votar, sea causal para que no se les permita emitir su voto, por consiguiente, considero que para el caso de que este Consejo determinara emitir un acuerdo en el sentido de que no se permita a los ciudadanos que deseen expresar su derecho a emitir

su voto el próximo cinco de julio y que porten teléfonos celulares o cámaras fotográficas, es violatorio de las garantías individuales que como ciudadanos nos otorga nuestra carta magna. El artículo catorce Constitución Federal establece: A ninguna Ley nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad El artículo dieciséis de la misma Constitución establece: Nadie puede ser molestado en su persona. Familia, domicilio. papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo expuesto, considero que como integrantes de éste Órgano Electoral estatal, debemos de promover la participación ciudadana, cuidando siempre de no tomar medidas. Que pudieran generar limitaciones, y que contrario a. la participación estaríamos generando una mayor abstención a nosotros mismo como ciudadanos. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, atentamente consejero electoral Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo. Un escrito

del consejero electoral Efraín Mendoza Zaragoza, que dice lo siguiente: En atención a su oficio SE diagonal mil ochenta diagonal dos mil nueve, relacionado con la solicitud formulada por el Partido Revolucionario Institucional y la coalición Juntos para Creer, sobre la pertinencia de establecer restricciones a los electores en el uso de instrumentos tecnológicos el día de la jornada electoral, le participo mis comentarios. En relación con la materia de la solicitud. Es necesario advertir que se solicita del Consejo General el "establecimiento de una restricción" y una "medida cautelar pasajera" consistente en impedir que los ciudadanos, al momento de sufragar, fotografíen "las boletas electorales mediante el uso de teléfonos celulares, agendas electrónicas o cámaras fotográficas". Se aduce que esta medida constituirá una "garantía para proteger el principio constitucional y universal del sufragio libre y secreto"; que, además, "privilegia el Principio Democrático y de Certeza de la Libertad y Secrecía del Voto"; que se propone "desterrar la coacción o la compra" del voto, y que propiciará "mayor' libertad al sufragar al ciudadano". Para sustentar tal solicitud, los solicitantes dicen tener conocimiento de: Que "hemos detectado

un reparto indiscriminado de teléfonos", aunque no se precisan autores de esos actos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que "el Partido Acción Nacional y su Gobierno" son responsables de una "indiscriminada utilización de recursos económicos que están ejerciendo a través de los programas sociales", y específicamente se afirma que "han obsequiado más de veinte mil teléfonos celulares, a cambio de la fotografíen del voto", aunque tampoco se precisan responsabilidades personales en la autoría de estos actos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que existen "denuncias" entre "ciudadanos, taxistas, comerciantes y empleados de las administraciones públicas municipales, estatales y federales", quienes, se afirma, han sido objeto de "amenazas y condicionamientos para votar coaccionados", aunque tampoco se precisan datos que permitan conocer la certeza de tales aseveraciones, y finalmente. Que lo anterior da sustento al "temor fundado de la compra de votos y violaciones a la libertad del sufragio". Dos.- En relación con la legalidad de la medida solicitada. Obligados como estamos a atender el principio supremo de legalidad, no podría el suscrito objetar la obligación del Instituto Electoral de Querétaro de garantizar a los

ciudadanos el ejercicio del voto, con los atributos que le confiere el artículo siete de la Ley Electoral del Estado: "universal, libre, secreto, personal y directo". Sólo que es necesario advertir que es la propia ley la que establece las restricciones a las que se sujetará el ciudadano en ese ejercicio, a saber: a) quienes acudan en estado de ebriedad o manifiesten una conducta violenta o agresiva; b) quienes hagan propaganda política; y c) quienes, de cualquier forma, pretendan influir en los votantes, tal como lo dispone la fracción segunda del artículo ciento treinta y dos. Asimismo, la misma ley dispone las medidas extremas que han de tomarse para mantener el orden y garantizar que la votación se desarrolle conforme a la ley y faculta al presidente de la mesa directiva para que, en su caso, las ejecute, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Comparto el análisis jurídico que en respuesta a una solicitud similar, formulada por el Partido de la Revolución Democrática, externó la presidenta del Consejo General mediante oficio P diagonal setecientos veintiocho diagonal dos mil nueve de fecha trece de junio de dos mil nueve, y que establece que las medidas solicitadas constituirían una restricción que contravendría la ley de la materia, cosa que la

autoridad electoral no puede permitirse autorizar. En relación con el cauce que debe darse al planteamiento. Habrá que decir que algunas conductas prohibidas por la ley, y que esgrimen en su argumentación los solicitantes, están tipificadas como delitos en el Código Penal para el Estado de Querétaro, dentro del título denominado "Delitos cometidos contra la seguridad, certeza y eficacia del sufragio". Si partimos de lo argumentado por los solicitantes, y que el suscrito condensó en el punto uno, e) de este escrito, puede advertirse que la fracción octava del artículo trescientos dieciocho de ese ordenamiento, impone de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a cien días de salario, a quien "otorgue u ofrezca algún beneficio a una o más personas, con la condición de que voten en determinado sentido o de que se abstenga de votar". En mi apreciación particular. Resultan graves las aseveraciones que formulan los solicitantes, y es necesario advertirles de su obligación de poner en conocimiento, de manera inmediata, los hechos y toda la información de que dispongan a la autoridad competente para impedir la consumación de un delito, esto es, ante la Fiscalía del Ministerio Público Especializada en la Atención de Delitos Electorales, cuya

creación fue puesta del conocimiento de los gobernados mediante el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga", el veintisiete de marzo de dos mil nueve. De igual manera, es necesario tener presente lo que previene el artículo trescientos cuatro del Código Penal en relación con las sanciones aplicables a quienes "no procuren impedir la consumación de los delitos que sepa van. A cometerse o se estén cometiendo". En su caso, la autoridad podrá valorar la pertinencia de poner en conocimiento de la autoridad competente lo que mediante los escritos en cuestión le ha sido comunicado. Al margen de lo anterior, diré que de los escritos de solicitud no se desprenden hechos, evidencias ni indicios siquiera, que den fundamento al Consejo General para tomar una medida extrema como la planteada, que traería consecuencias indeseables, como éstas: a) causaría molestias a los ciudadanos, en contravención de las garantías constitucionales; b) alentaría el abstencionismo, y c) generaría complicaciones logísticas a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, desde el eventual resguardo de los bienes hasta las formas para su detección entre las ropas y pertenencias de los electores. De la misma manera en que sostiene la representación de la coalición

Juntos para Creer, en el sentido de que medidas como las solicitadas "han sido criterios sostenidos por otros organismos electorales", opongo a ello los argumentos que para una solicitud similar adoptó el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, según puede verse en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado, titulado El Estado de Sinaloa, en su edición del veintiuno de septiembre de dos mil siete, tomo noventa y ocho romano, número ciento catorce, paginas nueve a once. Finalmente, diré que en el momento en que los promoventes, los representantes del Partido Revolucionario Institucional y de la coalición Juntos para Creer, aporten a la autoridad electoral hechos y no hipótesis, que sirvan de elementos de juicio, podría el tema ser revalorado. Le envió un cordial saludo, atentamente, sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral. Esta es la preocupación de los diferentes integrantes de este Consejo General. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Yo sugiero a este Consejo General que pudiera ser primero las fuerzas políticas de conformidad al Reglamento Interior las fuerzas políticas y después sean los Consejeros Electorales manifestar, si no hubiera alguna observación. Adelante licenciado Sócrates

Alejandro Valdés Rosales, representante de la coalición "Juntos para Creer". En el uso de la voz el licenciado Sócrates Alejandro Valdés Rosales, representante de la coalición "Juntos para Creer".- Muchas Presidenta, con el permiso de los representantes de los partidos políticos, en mi carácter de representante de la coalición "Juntos para Creer". Agradecimiento a los medios y a que sean el conducto para informar a la ciudadanía de una muy buena noticia. Que el Consejo local del Instituto Federal Electoral en Querétaro, en su sesión del día de ayer, aprobó el acuerdo signado con CL diagonal A diagonal veintidós diagonal dos mil nueve, en el cual emite medidas necesarias para garantizar la libertad y secrecía del sufragio, entre otras, prohibir el uso de los celulares en los recintos electorales en los centro de votación. Entre las medidas que destaca el acuerdo, y entregaré copia del mismo a los medios, está "la prohibición de ingresar y/o utilizar implementos electrónicos como videocámaras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares o aparatos diversos que permitan tomar video o fotografías digital o mecánica dentro de los recintos donde se encuentren ubicadas las casillas electorales". Lo anterior le regresa al ciudadano el poder de su voto; garantiza que éste se

haga de forma libre, secreta y sobre todo sin de coacción y blinda al proceso electoral y la próxima jornada electoral del cinco de julio de la compra del voto, como ya se ha dado y lo hemos vivido en el caso de Querétaro hace poco en las contiendas internas de otros partidos políticos en la que sus propios candidatos lo denunciaron. Esta medida no es una novedad, se aplica en otras entidades de la república, en estados como Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Sonora y garantiza que los ciudadanos y que su voto sea secreto y no esté sujeto a trampas a fraudes electorales, a que condicionen a los trabajadores del ayuntamiento o de gobierno del estado o a los compañeros de las comunidades a la entrega de los apoyos sociales para que pueda votar por un determinado partido político. Ésta no es sólo una buena noticia para la coalición a la cual represento, ni para sólo Pepe Calzada, lo es para todas las fuerzas políticas que participamos en este proceso electoral, para todos aquellos que confiamos en la voluntad libre y secreta de los ciudadanos a ser valientes, a que voten con fuerza, que saquen la alegría y voten con el corazón, a que ya no se puede coaccionar el voto por medio de la compra de voto del mismo, en la que se

utilizan celulares como presumiblemente se ha usado en otras contiendas de los partidos políticos para poder corroborar que si votaste por determinado partido político. A este Consejo General lo exhortamos, le solicitamos a que asuma un ejercicio de responsabilidad y su papel y no exponga a los ciudadanos a que se violente la secrecía del voto y sobre todo a que no generemos un clima poselectoral complicado, porque la coalición que tenemos representación en todas y cada una de las casillas y en los centros de votación, vamos a vigilar que se cumpla este acuerdo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, vamos vigilar que no se viole esta disposición y además vamos a asumir las decisiones y presentar las denuncias correspondientes para que se lleve a cabo, a este Instituto le pedimos que ayude a que los ciudadanos ejerzan su derecho para votar, que garantice que lo puedan ejercer con secrecía, la secrecía del voto no es una cuestión que se limita a la escena particular es un derecho político y social por lo tanto debe de ser privilegiado y protegido por este Consejo y por las decisiones que se tomen al interior del mismo, es importante reconocer que vamos a una elección concurrente, donde en el centro de votación vamos a tanto encontrar las casillas a nivel

local como en el caso de la federal, va haber una sola fila de acceso al centro de votación, este acuerdo y llamada que hace la Junta Local del Instituto Federal Electoral no solamente es necesario que se acate para proteger los derechos del ciudadano, sino para evitar que el cinco de julio tengamos un problema real de operación en el desarrollo de la votación, al mismo tiempo exhortamos a este Instituto para que auxilie al Instituto Federal Electoral como se lo pide en el propio acuerdo del la Junta Local del Instituto Federal Electoral en la señalización en el exterior de los recintos sobre la prohibición del ingreso con celulares como dice el punto cuarto del acuerdo ya mencionado; y que publique en desplegados en los medios locales, la prohibición y que señale de forma clara y sin ambigüedades que no hacerlo implica una violación a la ley; así como que publique y distribuya los edictos, circulares y demás instrumentos de comunicación, legales para dar cumplimiento con lo establecido en el punto octavo en lo concerniente a la coadyuvación del Instituto Electoral de Querétaro y para acatar y vigilar el cumplimiento del acuerdo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral. Es importante también decir que estamos optimistas con esta decisión que ha

tomado la Junta Local, se da un paso más en que el verdadero protagonista del cinco de julio sean los ciudadanos, para que se privileje el voto libre y secreto, para que vayamos todos juntos a votar sin miedo, a votar libremente, a que votemos por la decisión que mejor le parezca al ciudadano, quiero señalar también que es importante destacar que nuestra propia norma local, en su artículo siete, concatenado con los fines del Instituto Electoral de Querétaro que reglamentan el artículo cincuenta y seis, nos da la posibilidad al Instituto de tomar acuerdos que permitan privilegiar sobre todo el derecho del voto del ciudadano, el privilegiar que tengamos un jornada electoral democrática, que tengamos una jornada en la que realmente sea el voto del ciudadano que decida y que no generemos conflictos, dentro de cada una de las casillas cuando ya tenemos una decisión que tomó la Junta Local del Instituto Federal Electoral, la coalición no vamos a aceptar medidas o acuerdos titubeantes, la coalición no vamos a permitir medidas que simulen acciones reales, confiamos en que el acuerdo que se tome sea un acuerdo que realmente proteja al ciudadano y le garanticen sus derechos, no estamos hablando de un daño o un perjuicio irreparable al

ciudadano, estamos hablando simplemente de una limitación del uso por un momento de los celulares, cámaras fotográficas o videocámaras para que permita que el ciudadano ejerza su voto con total secrecía y además para que nosotros podamos prever la comisión de una infracción y no tengamos después del cinco de julio este Consejo General lleno de impugnaciones, muchas gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Marco Antonio León Hernández. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia.- Gracias señora Presidenta. El asunto al cual nos convoca el día de hoy en este punto del orden del día, no es un asunto irrelevante, tiene que ver con garantías individuales, con libertad del sufragio, con democracia y con soberanía. Con normas, principios, valores e interpretación constitucional. Debemos reconocer la fragilidad de nuestra incipiente democracia, por la desigualdad económica, por la pobreza que impera en muchas regiones de nuestro estado, por los procesos internos de algunos partidos, la deficiente legislación electoral, las inequitativas campaña y la actitud solo testimonial del Instituto Electoral de Querétaro, estamos lejos de

una democracia estable, madura y con calidad. Parafraseando a Juan Jacobo Rousseau no puede haber elecciones libres si hay partidos ricos capaces de comprar el voto y hay ciudadanos que su pobreza los obliga a vender su voto a cambio de tinacos, cemento, laminas, promesas de beneficios sociales o directamente de dinero. ¿Debe o no permitirse que los ciudadanos usen su teléfono celular, con cámara fotográfica y puedan fotografiar su voto el día cinco de julio al momento de ejercer su derecho al voto? Es evidente que no se trata de que algunos ciudadanos guarden un recuerdo de la boleta electoral y del sentido en que votaron. El problema es que la fotografía puede significar un ingreso económico, si se voto a favor de un partido determinado, es pues la prueba para cobrar, estamos en el supuesto de la venta del voto. En este caso el voto ni es libre ni es secreto. Se trata de que este Consejo sea capaz de garantizar la libertad de la voluntad popular, es cierto que estamos frente a una cuestión reglamentada en la Legislación Penal, numeral trescientos dieciocho, fracción octava, pero no se trata solo de sancionar con multa y cárcel a los delincuentes electorales, se trata de actuar a priori, de prevenir, de evitar los delitos que se cometan contra la

seguridad, certeza y eficacia del sufragio, de garantizar la libre voluntad de la ciudadanía, pues si se pretende posteriormente reparar el daño este suele ser irreparable, el delincuente goza de impunidad o aun castigándolo no se repara el daño a la voluntad popular. Si este Consejo no garantiza la libertad del voto estará favoreciendo al partido comprante y estará actuando parcialmente, estaríamos en presencia de un fraude a la Constitución, no por el engaño, sino por el daño. En primer lugar este Consejo si tiene facultades para resolver la cuestión. La Constitución General en su articulo ciento dieciséis, fracción cuarta, ordena de manera imperativa que las autoridades electorales de las entidades, en esta caso el Instituto Electoral en el ejercicio de su función electoral debe estar sometidas a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, inciso b), y las elecciones mandata el inciso a) de gobernador, miembros de la Legislatura y de los integrantes de los ayuntamientos deben realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, es obligación cumplir este precepto desde el Consejo General hasta los funcionarios de casilla. En segundo lugar se trata de interpretación

constitucional. La interpretación de la Constitución requiere de una hermenéutica propia y distinta, pues si se aplica la interpretación propia de los textos legales, solamente gramatical, es decir, exegética o dogmática, este Consejo General estará convirtiendo la Constitución en norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico, en norma secundaria. Seria una interpretación restrictiva que reduce el sentido y el alcance de la norma fundante, cuando la técnica de interpretación constitucional nos dice que debe ser evolutiva. La interpretación de la ley refleja y especifica la vida en sociedad y la de la Constitución concretiza la vida del estado, no es posible interpretar la constitución en sus preceptos de estado de derecho, democracia, mandato representativo y soberanía a partir de las reglas tradicionales, necesitamos acudir por lo menos a los principios de unidad, de concordancia practica, corrección funcional, función integradora, principio de fuerza normativa, pues es condición necesaria acudir a sus principios, a sus valores, a su teleología y en todo caso a ponderar. Una interpretación constitucional democrática como expresión de la voluntad del pueblo ha de empezar justamente por salvaguardar el principio

democrático en su cabalidad. No estamos solo frente a un texto sino fundamentalmente a un contexto. Lo anterior si hubiera contradicción entre una garantía individual, un acto de molestia, artículo dieciséis y valores, principios y esencia de la democracia, numeral ciento dieciséis, pero no la hay, no estamos en presencia de un caso trágico. Los dos escritos de los señores consejeros electorales, sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza y del licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo, no argumentan absolutamente nada, sólo transcriben, en el caso de Juan Carlos, el artículo catorce y dieciséis, pero no hay ninguna motivación de la aplicación al caso concreto a que nos referimos. Efectivamente se trata de aprobar un acto de molestia a la ciudadanía, pero tenemos que distinguir que hay dos tipos de actos de molestia, los que violentan la Constitución por restringirse o suspenderse las garantías individuales sin cumplir, como dice el primero articulo con las condiciones que ella misma establece, por ejemplo los actos que cometen algunos funcionarios del Instituto Electoral de Querétaro en contra de Convergencia, al sustraer propaganda sin derecho, quitar calcomanías de vehículos, violentando la libertad de expresión de los

propietarios o entrar a nuestras oficinas, abrir puertas y tomar fotografías sin autorización alguna. Pero en el caso que nos ocupa, el acto de molestia es constitucional, si este Consejo General que es la autoridad competente para organizar las elecciones funda y motiva debidamente la causa legal del procedimiento. Yo he señalado la fundamentación de la Constitución General y su debida interpretación, pero también la encontramos en la particular y en la norma reglamentaria. Es entonces cuestión de voluntad de por lo menos de cuatro consejeros, que son lo que se requieren para aprobar el acuerdo. Aunque parece que la decisión esta tomada de antemano por cuatro en contra, es importante oír sus argumentos y sus razonamientos. En tercer lugar se trata de actuar para garantizar la aplicación de las normas y principios constitucionales en materia electoral. Este Consejo debe emitir un acuerdo imperativo, que obligue, no puede ser un exhorto o una recomendación, por que este potestativo, le diríamos al delincuente que si quiere que cumpla con la Ley y si no, no hay problema. Tampoco es válido decir que se quedan ahí los celulares, que entonces cuando entonces cuando salga de votar el

ciudadano a lo mejor ya se lo robaron, entonces hay que decirle al ciudadano que no deje su casa sola porque a lo mejor se la roban, que no salga el ciudadano a la calle porque a lo mejor lo secuestran, que no salga en su vehículo porque a lo mejor se lo roban, me parece que eso no es serio. La Ley Electoral del Estado señala en el numeral cincuenta y seis que son fines del Instituto Electoral de Querétaro, fracción cuarta, velar por la autenticidad y efectividad del voto. Artículo sesenta y cinco, el Consejo General tiene competencia para: fracción trigésima primera, dictar los acuerdos, implementar los mecanismos necesarios para la debida observancia de la Ley. El numeral doscientos doce, señala entre otros a los partidos y ciudadanos como sujetos de responsabilidad por las infracciones cometidas entre otras disposiciones a los acuerdos que emitan los Consejos Electorales. El diccionario para juristas de Palomar de Miguel dice que exhorta es inducir a uno con palabras, ruegos y razones a que haga o deje de hacer. Un exhorto implica que este Consejo General actúe en este proceso de manera contemplativa, testimonial, asumiéndose como Poncio Pilatos y dejando el cumplimiento a la simple voluntad del ciudadano que lo quiera hacer, pues no hay sanción, además

que es cuestionable la legalidad del simple exhorto o recomendación, por supuesto no es de ninguna manera un mecanismo adecuado para la debida observancia de la ley. Las recomendaciones no tienen ningún valor jurídico y no tienen ninguna consecuencia, incurrirán señores consejeros en omisión si no garantizan el voto libre, estarán favoreciendo a los partidos que tengan capacidad para comprar el voto. Hay ya una propuesta interesante que ha sido aprobada en Querétaro, en el Instituto Federal Electoral que podemos adherirnos o bien podemos asumirla con una característica propia y aprobarla en el mismo sentido, pero insisto, que tiene que ser con carácter imperativo, de lo contrario será como las llamadas a misa, es cuanto señora Presidenta. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante al representante del partido Nueva Alianza. En el uso de la voz el licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del Partido Nueva Alianza.- Ya escuchamos a los compañeros miembros de los partidos políticos hacer los pronunciamientos al respecto relativos al porqué sí debe de aprobar este Consejo General el acuerdo relativo a la imposibilidad de poder utilizar

los teléfonos celulares o cualquier medio de técnica de video o de fotografía que transfiera de manera inmediata la intención del voto de alguno de los votantes. Para el partido Nueva Alianza, que yo represento en este Consejo General, es importante apoyar esta moción esta solicitud de acuerdo y basándonos en el acuerdo tomado por el Instituto Federal Electoral y el cual me voy a permitir dar lectura, porque muchos de los que están aquí presentes no saben el contenido del mismo, se ha dicho por parte de dos consejeros electorales de este Instituto que se afectaría la garantía de libertad que tiene el votante para efecto de emitir su voto, yo retomaría una parte muy sintética de este acuerdo y lo considere este Consejo al momento de emitir el acuerdo respectivo y dice: De esta manera, la prohibición del uso de determinados implementos electrónicos durante el momento de la votación en un proceso electoral y solamente al interior de las casillas y los recintos en los que se encuentren ubicadas estas no implica la afectación fundamental y directa al individuo, ya que en ese momento preciso la protección del derecho de libertad y secrecía del voto que garantizan el pleno goce de un derecho político de los ciudadanos en general, exige la limitación temporal del uso

de los bienes propios en aras de proteger y conservar un valor de mayor jerarquía, dado que ante el uso de la propiedad se debe ponderar la libertad política de elegir, pues sin ella, carecería de sentido realizar un proceso electoral en el que las condiciones impidieran al ciudadano se le garantizara estar libre de presiones para elegir a sus gobernantes al emitir su sufragio. Para muchos de los ciudadanos comunes y corrientes, al hablar de carruseles, tacos pudiera entenderse una presunción de un artículo de una feria o de un producto que se vende mucho en México. Desde el punto de vista electoral entendemos una cosa muy diferente, los partidos políticos en este caso cuatro fuerzas políticas representadas en este Consejo General lo que estamos solicitando es precisamente la preservación de un proceso electoral, claro, si permitiéramos que los ciudadanos ingresaron a los recintos en donde se va a votar con un cámara fotográfica integrada a un medio integrado de comunicación, estaríamos permitiendo que la propia Constitución que las propias Constituciones políticas electorales de los estados establecen que deba de ser secreto, terminarían con esa secrecía, es por que el partido político que represento, apoya la solicitud que hace la

coalición, que hace el Partido Revolucionario Institucional y que realiza el partido Convergencia, a efecto de que se emita un acuerdo en el que validando lo que emitió el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, prohibiera de manera terminante y con las debidas medidas de caso, que los particulares al emitir su voto hagan uso de estos medios de comunicación, de las cámaras fotografías o de estas cámaras de video, en el momento de emitir su voto, porque el propio acuerdo ya lo tendrá cada uno de los medios de comunicación, no prohíbe que se ingrese con ese tipo de implementos, simplemente a la hora de emitir el voto no se utiliza, en consecuencia el partido Nueva Alianza, se pronuncia porque este Consejo apoye esta propuesta y se realice lo conducente y para efectos validarlo, porque además de no hacerlo estaríamos teniendo dos situaciones muy difíciles de concatenar, que el Instituto Federal Electoral estuviera a través de la propuesta que ellos emitieron, prohibiéndolo y el Consejo a través de nuestra representación permitiéndolo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante representante del Partido del Trabajo. En el uso de la voz el licenciado José Ascención Martínez Hernández,

representante del Partido del Trabajo:- Buenas tardes, de igual manera en el Partido del Trabajo, hicimos un documento que se tomaran medidas en este sentido de cortar y la libertad de votar al ciudadano por su preferencia política, es cierto que existe una guerra sucia, en el Internet, en la televisión, además no es desconocido para todos nosotros, el condicionamiento del voto que se hace en empresas privadas para los trabajadores, para que voten por determinada opción, en el dos mil seis, lo vivimos, vimos la intromisión muy en contra de la ley de las cúpulas empresariales, en tiendas departamentales a los trabajadores se les ha hecho hincapié a votar por determinada persona o partido, inclusive en las dependencias publicas, tanto estatales, municipales y federales es de todos sabido que la coacción que existe para todos los trabajadores, empleados, secretarias del personal de base para quien voten, el hecho de dejar momentáneamente su teléfono, cámaras fotográficas, de video, etcétera, a las personas para emitir su voto de ninguna manera es violatoria de su garantía individual, hay otra situación más grave y que en lo particular a mi me preocupa, aquí estamos pidiendo o dejar momentáneamente o no utilizar su teléfono con

cámara fotográfica al ciudadano, el día de ayer en la Procuraduría General de la República de la Delegación Querétaro, cuando me presente con dos testigos a rendir su comparecencia, me fue pedida además de mi cédula, querían que me tomara una fotografía querían además que pusiera mis huellas digitales y eso es totalmente violatorio de la Constitución y eso es gravísimo, que además dicen que es natural, que en todo el país se esta implementando, es grave lo que se viene sobre el país, es grave la utilización del ejercito, es grave tomar este tipo de medidas que si violan las garantías individuales y sobre presumen que somos delincuentes los ciudadanos y trabajadores que estamos ejerciendo nuestro derecho de utilizar un servicio público, eso si es preocupante y eso si debería preocuparnos a todos, eso si es grave, es grave que los periodistas hagan su trabajo y que finalmente en las mesa de redacción se les coarta ese trabajo que hicieron en todo el día al no permitirse su publicación, entonces no solamente un mensaje de emitir este Consejo General, sino un acuerdo en el cual se invite a patrones, gerentes, jefes de personal, tanto de empresas públicas y negocios y sobre todo a los funcionarios públicos superiores para que

permitan a todos los trabajadores y personas que estén bajo su mando, el acceso, inclusive de permitir el salir a votar a la casilla de su circunscripción, es importante que se tome una medida en ese sentido y no solamente un exhorto y dándole el sentido de que debe tener el ciudadano, el voto debe ser, libre, secreto para todos y solamente de esta forma estaremos cumpliendo con nuestra función en este Consejo, Ustedes como consejeros y nosotros como representantes de los partidos políticos, interesados en que deveras haya democracia y fomentar la cultura política que tanto decimos, nada más. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante representante del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la voz el licenciado Carlos Alejandro Pérez Espindola, representante del Partido de la Revolución Democrática.- Gracias. Nosotros el Partido de la Revolución Democrática se presentó ya nuestra posición en la cual nos dieron contestación oportunamente y lo que me queda claro es que hay una contradicción de principios, uno que es el de legalidad no perturbar al ciudadano en sus posesiones, derechos, etcétera, pero hay otro principio que se contrapone al parecer de la

contestación del oficio que es la certeza y la secrecía del sufragio, me queda claro también que es el propio Consejo el que tomara la decisión, pero si me gustaría que se considerara, con cual de los dos principios se causa menos daño al ciudadano y a la certeza de sufragio y por último también puntualizar que se tome en cuenta de este esfuerzo que se esta haciendo de auto regularización de las fuerzas políticas, digamos es difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque nuestros interés, si bien son los ciudadanos, pero si vale la pena que se considere este esfuerzo de autorregulación que estamos haciendo algunas fuerzas políticas, si no es que todas, gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Si hubiera algún otro comentario de las fuerzas políticas. . . Si no fuera así, entonces pasaríamos a las intervenciones de los consejeros electorales. Adelante consejero Efraín Mendoza. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Creo que bajo ninguna circunstancia podría este Consejo y ninguno de sus miembros en particular desconocer sus obligaciones en torno a la garantía que debe de haber para los electores, de libertad, y secrecía en la

emisión del sufragio. Me parece que eso no está en discusión, es un punto de partida al que estamos obligados por mandato constitucional y legal. Se trata de un aspecto efectivamente muy sensible, relevante, que muestra la preocupación de un número importante de fuerzas políticas, que exige sensibilidad y creo yo, Alejandro, que tenemos que buscar la conciliación entre esos dos principios, no tanto el establecer cuál de los dos somete al otro, cuál de los dos es superior, los dos son igual de importantes y hay que encontrar aquí un punto de conciliación, hay que cuidar que los actos de esta autoridad se ciñan siempre a la ley, hay que cuidar que no sea la autoridad la que introduzca algún elemento de vulneración del orden constitucional y legal, no digo que este asunto lo esté introduciendo, digo que seamos muy mesurados, muy cuidadosos en las medidas que tomemos. Todo gira en torno a una figura contenida en el Código Penal como un delito, justamente al que ha hecho alusión el doctor Marco Antonio León Hernández, el trescientos dieciocho del Código Penal para Estado: se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a cien días de salario, a quién otorgue u ofrezca algún beneficio a una o más personas, con la condición de que voten en

determinado sentido o de que se abstengan de votar. Este debe ser el eje de análisis porque es lo que se manifiesta en los documentos que presentaron las fuerzas políticas que promovieron inicialmente este acuerdo y por supuesto que no tenemos que esperar a que sucedan las cosas, tenemos que buscar las vías que nos lleven a las medidas preventivas, esto es a las garantías de manera anticipada. Aquí el problema es otro, aquí el problema es de los alcances de alguna medida que pudiera aquí adoptarse y tenemos que ser responsables en el qué, sino también en el cómo y en los alcances, en las consecuencias. El acuerdo que aprobó el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, el día de ayer, contiene algunos aspectos que recuperan esta preocupación y me parece que en algunos hay que elogiarlos, pero otros a mí en lo personal me inquietan. Ejemplo, se establece una prohibición al interior de los recintos y de las casillas, que se entiende por el interior o recintos de las casillas, en que momento aplicaría esta medida, esta prohibición como se plantea, y segundo, en este acuerdo me parece que hay una omisión, porque se establece la prohibición pero no se establece en ninguna de sus partes, los medios de habrán de tomarse para

su efectivo cumplimiento, y yo creo a que este asunto de los medios hay que ponerle atención, no bastaría con solamente establecer la prohibición y a ver qué sucede y dejar al presidente de la mesa directiva que dicte las medidas discrecionalmente para garantizar ésta, hay que ser cuidadosos aquí, porque no olvidemos que una de las vías de nulidad de la votación, es si se generan violencia o se genera condiciones que impidan el desarrollo de la votación. Tan es complicado que las propias fuerzas políticas han externado su inquietud sobre este aspecto, como el periódico a.m., del día veinticuatro de junio, una declaración del señor Francisco Núñez Montes, candidato a gobernador, del Partido del Trabajo, pregunta: "como vas a controlar esto, tendríamos que entrar a la urna, tendríamos que entrar como Dios nos echó al mundo a la urna, sin teléfonos celulares o que te revisen, que traes en las bolsas, qué traes en el saco, qué traes bajo el sombrero", lo dice uno de los candidatos a la gubernatura del estado, esto es, tendría que ser este Consejo, cuidadoso y responsable, así como se dictaría una medida de restricción que se adicionaría a las cuatro que establece el artículo ciento treinta y dos de la Ley Electoral y tendríamos que

dictar las medidas para su debido cumplimiento, ¿se va a inspeccionar lo que las gentes, los ciudadanos, traen entre sus ropas o va a ser voluntario?. Yo no veo en el acuerdo esta medida, si el Consejo Local nos lo aclara, yo creo que sería importante como un elemento de juicio para establecer que los términos en que lo aprueba el Instituto Federal Electoral es lo procedente. A partir de los tres documentos que la Secretaría Ejecutiva turnó a todos los miembros de este Consejo, yo detecto una cuestión: se hacen afirmaciones categóricas que aluden a hechos graves, se dice por ejemplo, hemos detectado un reparto indiscriminado de teléfonos pero no se precisan autores de sus actos, ni circunstancias de tiempo, modo y lugar, se señala que el gobierno, no se dice de qué niveles, es responsable de una indiscriminada utilización de recursos que están ejerciendo a través de los programas sociales y específicamente se afirma que se han obsequiado más de veinte mil teléfonos celulares a cambio de la fotografía del voto, tampoco se precisa responsabilidades personales en la autoría de estos actos, ni circunstancias tiempo, modo y lugar; se sostiene que existen denuncias entre ciudadanos, taxistas, comerciantes, empleados de las administraciones

municipales, estatales y federales y se afirma que estos han sido objetos de actos de amenazas y condicionantes para lograr votar coaccionados, tampoco se precisan datos que permitan conocer la certeza de estas aseveraciones, y se establece por último como conclusión, que esto da sustento al temor fundado de la compra de votos y violaciones a la libertad del sufragio. En lo particular me parece que hay que tener en cuenta lo que previene precisamente el artículo trescientos dieciocho, fracción octava del Código Penal en el sentido de que es necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos, quienes afirman que esto está ocurriendo, están obligados a ponerlos en conocimiento de una autoridad competente y toda vez que se trata de una figura delictiva y hago mi planteamiento formal que se proceda de esta manera y que se alleguen a la autoridad competente elementos para poder hacer la investigación respectiva, más aún teniendo en cuenta lo que previene el trescientos cuatro del Código Penal, en relación con las sanciones aplicables a quienes no procuren impedir la consumación de los delitos que sepan van a cometerse o se estén cometiendo, todos tenemos conocimiento en el periódico oficial de Gobierno del

Estado "La Sombra de Arteaga", del veintisiete de diciembre de dos mil nueve, de la puesta de la Fiscalía Especializado en Atención de Delitos Electorales. Finalmente, entre los documentos que por distintas vías nos han hecho llegar quisiera mencionar uno que amablemente la senadora María del Socorro García Quiroz, nos ha remitido y esto es un documento denominado "Proposición como punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del Senado de la República, exhorta al Instituto Electoral Querétaro a suscribir un acuerdo" como aquí se señala, en algunas de sus partes este documento establece, que si bien es cierto que nadie puede ser privado de sus bienes si no existe de por medio una orden judicial, también es cierto que a través de acuerdo que se firme en este sentido que estamos discutiendo, se recomendará a los electores que no introduzcan este tipo de aparatos a las casillas y principalmente a las mamparas, es decir, no se les prohibiera de manera arbitraria la utilización de los mismos, más adelante señala, las autoridades electorales pueden recomendar a los ciudadanos que no los utilicen. Me parece que esto es una referencia importante qué considerar, en lo personal me parece que debemos de encontrar un punto que nos permita

conciliar la garantía constitucional o las diversas garantías constitucionales y que nos lleve a atender esta preocupación, de ahí que mi planteamiento es que efectivamente este Consejo pueda acordar la toma de una medida consistente en difusión, vía la prensa o los medios que estén a nuestro alcance y vía la colocación, impresión y posterior colocación de carteles en los sitios en donde se ubiquen las mesas directivas de casilla, en donde se establezca un aviso, primeramente, recordarle al elector que el voto es libre y secreto; hay que enviarle un mensaje positivo, en el sentido de recordarle que el voto tiene estas características que es libre y secreto, segundo, indicarle que el Código Penal para el Estado de Querétaro, impone sanciones a quien otorgue u ofrezca algún beneficio con la condición de que voten en determinado sentido o se abstengan de votar, y tercero, la indicación de que es importante que los electores se abstengan de incurrir en actos que podrían constituir en un delito y por ello se recomienda que al momento de emitir su sufragio eviten ingresar con cámaras fotográficas, celulares o cualquier otro instrumento similar. Esas serían mis consideraciones y sinceramente externo a mis compañeros de este órgano colegiado que nos orientemos a

encontrar un punto que concilie, una medida que sea viable, que sea aplicable y que no vayamos a introducir algún elemento de alteración del orden el día de la jornada electoral y que apelemos a la consideración de los ciudadanos que puedan ellos también voluntariamente despojarse de estos elementos a menos de que aquí se indique de qué manera los presidentes de las mesas directivas de casilla van a aplicar una prohibición. Es mi apreciación y esta propuesta que yo formulo busca asumir cuidadosamente esta medida de previsión. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Adelante doctor Miranda, por favor. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Si me parece que debemos de considerar con detenimiento la propuesta de acuerdo que nos hacen los partidos políticos, para ello quisiera yo iniciar con una pregunta clave que ya salió en el planteamiento que se hizo por parte de los partidos políticos y de la participación del consejero Efraín Mendoza, está pregunta sería: ¿cuál es el bien jurídico que esta en discusión, al solicitarse por acuerdo la prohibición del uso de celulares y cámaras fotográficas podrían decirse en las mamparas y no

necesariamente en la casilla, el acuerdo se redacta de tal manera que se pueda caer en contradicción que no la veo tan fuerte, porque me parece que tenemos capacidad para entender que lo que se busca es las mamparas y ahí yo no entraría yo a la discusión. El bien jurídico es la libertad y la secrecía del voto, no es el artículo catorce y dieciséis tengan ustedes la plena seguridad de que si se garantiza por parte de órgano electoral que es a el a quien le corresponde garantizar la libertad y la secrecía del voto y esa en nuestra obligación, plantearía que no es una situación de carácter jurídico de alguna manera el doctor Marco Antonio León dio los elementos constitucionales con los cuáles se puede motivar y fundamentar el acuerdo, en la Ley hay diferentes artículos que nos pueden apoyar para fundamentarlo, jurídicamente le encontramos obligaciones en relación con la secrecía del voto con fundamento en el artículo noventa y cuatro, fracción cuarta inciso b), lo encontramos también en el artículo ciento treinta, ciento treinta y dos, fracción primera y si esto no es suficiente y se considera que hay un vacio legal, entonces están presentes los principios y sustanciales de la interpretación que le debamos de dar a la Ley en caso de que haya una necesidad de

interpretación y una necesidad de la interpretación, los principios son la guía y el elemento fundamental, no olvidemos que este planteamiento esta muy interrelacionado con los avances tecnológicos, no es un problema nuevo, el problema de la coacción y la compra de votos, anteriormente se hacía a través del ratón loco, a través de carrusel, ustedes recordaran el llevar a la gente y empieza a votar, la prácticas clientelares de coacción y compra del voto se han modernizado, gracias la desarrollo tecnológico, no, nos implica en ese sentido evitarlo, evadirlo, como anteriormente se hizo por parte de este mismo órgano electoral para evitar las prácticas clientelares anteriormente y le dijo se utilizan en algunos lugares, pero ahora esta práctica a través de la tecnología tiene el mismo sentido, la coacción y la compra de votos y luego entonces si podemos actuar como órgano electoral hay que hacerlo, yo creo que es importante hacerlo, recuerden ustedes que lo que vino a generar el desprestigio del Instituto Federal Electoral en la elección del dos mil seis, fue omiso ante circunstancias muy parecidas a estas, fue omiso en la guerra sucia, fue omiso en la compra de spots en radio y televisión por parte de particulares y eso todavía no se lo quitan

de encima y por eso es el acuerdo del Instituto Federal Electoral en relación con estos puntos porque quiere recuperar credibilidad señores, entonces nosotros no tenemos ese problema, Marco, y no tenemos una actitud testimonial, actuamos en muchas circunstancias, que se presentaron en la elección del dos mil seis y que en esta elección tenemos que actuar y este es momento en que debemos de hacerlo, recordemos una situación que ha sido muy importante para que esta campaña política independientemente de los vicios que tiene y que se seguirán teniendo, han sido de alguna manera regulada adecuadamente por las nuevas reformas electorales que se establecieron en nuestra propia Ley Electoral, quiérase o no, muchas de esas reformas surgieron de aquí del Instituto Electoral de Querétaro, la no utilización de los recursos públicos no había una sola denuncia en donde se dijiera que la utilización de los recursos públicos por lo menos en el desarrollo de la campaña se utilizaron, recuerden la del dos mil seis, la utilización de los recursos lo que genero más problema en la elección de Querétaro, al federal también, pero aquí fue donde se genero más problemas y se actuó en consecuencia para tratar de limitarlo, creo que esta medida

que se puede tomar a través de un acuerdo y efectivamente creo que siguiendo y el Instituto Federal Electoral lo esta haciendo, ya no quiere ser omiso quiere actuar para recuperar credibilidad como lo decía yo anteriormente, esta por lo menos es lo que yo siento, esta dentro del espíritu de las reformas electorales que no sea el dinero especifico que defina las campañas electorales en Querétaro, entonces creo que esta situación la debemos de considerar, la cuestión práctica, Efraín, no siento yo en lo particular que sea un problema en lo especifico, tu lo estas viendo en razón del artículo catorce y dieciséis, no lo estas viendo en función al bien jurídico que hay que proteger la libertad y la secrecía del voto, entonces yo si me pronuncio porque se establezca un acuerdo donde efectivamente se establezca la prohibición de celulares y de cámaras fotográficas y de videocámaras en el sentido de defender el bien jurídico que si nos corresponde a nosotros. En la forma de instrumentar que se pueda cumplir con esta prohibición de proteger algo que corresponde al Instituto Electoral de Querétaro que es salvaguardar la libertad y secrecía del voto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.-

Gracias. Adelante licenciada Sonia Clara Cárdenas. En el uso de la voz la licenciada Sonia Clara Cárdenas Manríquez, Consejera Electoral.- Estaría de acuerdo con las apreciaciones del doctor Miranda, estoy absolutamente cierta que tenemos las facultades para poder emitir un acuerdo, yo creo que es cuestión de buscar una redacción en que estemos convencidos todos los integrantes del Consejo General y buscar una redacción de la procedencia y la pertinencia para que no haya ninguna violación a las garantías, creo y pienso que desde la Constitución de la República, la Constitución local, la Ley Electoral local como lo manifestó en su momento lo manifestó el doctor Marco Antonio León Hernández, lo podemos fundamentar y sobre todo el Instituto Electoral de Querétaro, como garante de la democracia y si le corresponde dar una respuesta cierta no confusa, sino algo perfectamente que quede seguro la prohibición ese día, si va a ser dentro de la mampara o dentro de la casilla, yo pienso que el artículo cincuenta y seis, fracción cuarta que se a mencionado mucho, es un fundamento muy claro que nos sirve para fundamentarnos, yo creo que una obligación muy clara es por velar por autenticidad y por la efectividad del sufragio y con esto

quiero decir hay que mandar en este acuerdo, certeza para que la sociedad este tranquila de que las elecciones va a ser transparentes que el cinco de julio pueden depositar libremente su voto, de que no va ser coaccionado y de que no va a ver compra y sobre todo garantizar el ejercicio libre de su derecho político electorales, yo creo que el principal derecho electoral que tiene el ciudadano es el voto y yo si hago la invitación para que podamos encontrar una salida y buscar una redacción y que nos permita llegar a un acuerdo firme y dar muestras de certeza, de objetividad, de legalidad el día de la jornada electoral, esta es mi apreciación y bueno si estuviéramos en la posibilidad de hacer un receso para tomemos un acuerdo todos que valga la pena que mandemos un mensaje de darle certeza, eso es lo que yo propongo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante consejero Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo. En el uso de la voz el licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo, Consejero Electoral.- Antes que nada comentar que de acuerdo a la Constitución Federal, artículo treinta y cinco, dice: Son prerrogativas del ciudadano, primera fracción, votar en las elecciones populares, es decir, yo como

ciudadano, todos los que somos ciudadanos, no nos dice si tenemos que llevar o no tenemos que llevar celulares, es un derecho constitucional y me parece que ese sentido tenemos que atender ese derecho, por un lado comentar que de acuerdo a los principios que tiene este Instituto, como consejeros debemos de seguir el principio de la legalidad a mi me parece que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos en que sentido vamos a tomar el acuerdo de la petición de los partidos políticos, me parce que el comentario que hizo la senadora María del Socorro García Quiroz, podía tomarse en consideración, es decir, se recomendara a los electorales que no introduzcan este tipo de aparatos en las casillas y en las mamparas y en ese término me parecería conveniente que este Consejo se estuviera pronunciando, ya lo argumentaba el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, y yo creo que por ahí podíamos irnos y no tanto el proyecto, sino irnos por ahí, muchas gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante consejero Vallejo. En el uso de la voz el licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova, Consejero Electoral.- Sí, gracias. Hacer unos breves comentarios que

interesan a la ciudadanía y que esta latente, no hay que pasar por alto lo que es la tecnología en estos tiempos como dice el doctor Miranda que tienen alguna atención sobre lo electoral, yo he escuchado algunas de las propuestas de los representantes de los partidos como el de auxiliar por parte de la coalición, el del doctor Marco Antonio el de fundar y motivar un acuerdo, sobre la propuesta que hace la senadora García Quiroz, sobre recomendar y yo creo ha sido ilustrativo para un servidor el de escuchar la opinión de abogados que al final de cuenta tienen elementos que se tienen que privilegiar, como lo advierte el doctor Miranda de cual es la medida y cual es la que se tiene que llevar al final del voto y la secrecía de este, yo creo que debemos ser muy cuidadosos de lo que se esta pidiendo por parte de los compañeros de los representantes de los partidos políticos, es un acuerdo que la Junta Local del Instituto Federal Electoral, ya logro realizar, a mi preocuparía no este acuerdo y su prohibición que se pudiera dar por una parte del Consejo General, a mi me preocuparía que el día de mañana que conforme al artículo noventa y nueve, segunda fracción, nos solicitaran por parte de los partidos políticos y dice: El Instituto Electoral de Querétaro

podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste organice procesos electorales locales. El día de mañana que nos pidan saben que, que sea el Instituto Federal Electoral que organice los procesos electorales locales, debido a un convenio y que se establezca la factibilidad de electoral necesarios para el desarrollo de las elecciones locales, aquí esta el ejemplo de lo que se hizo en la Junta Local, creo que este acuerdo y no duda de la capacidad técnica, operativa que existe para que la cobertura del cinco de julio, creo que hay consenso de esta mesa a que se lleve a un acuerdo que esta avalado por los propios representantes de los partidos políticos y los propios consejeros electorales, creo que el fundar y motivar como se ha dicho este acuerdo de prohibición no llevaría más que el área jurídica pudiera hacer alguna redacción como lo hizo el Instituto Federal Electoral como decía el licenciado Sócrates y retomando algunos articulados de la Ley de Querétaro, para que después no se nos vaya a acusar de omisiones y de que no se privilegio la secrecía del voto, reitero, hoy lo que se esta solicitando independientemente de que se pudiera fundar y motivar y creo que si sería conveniente para que se pudiera llegar a un acuerdo y se garantice la secrecía y

ojala el día de mañana también los representantes de los partidos políticos que el Instituto Federal Electoral sea el que organice los procesos electorales estatales, yo creo que tenemos que ir en la misma sincronía que lo esta haciendo en Instituto Federal Electoral y bueno respetuosamente hay un consenso de un acuerdo y que en términos jurídicos se pudiera fundar y motivarlo se pudiera presentar por el área correspondiente, es todo, gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Marco Antonio León Hernández. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia.- Gracias Presidenta. Dice el señor consejero Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo, que la Constitución establece el derecho al voto, por supuesto que eso no es cuestionable pero tiene reglamentaciones, no es una cuestión abstracta, genérica, tiene una complexión en la Ley para esos son las leyes reglamentarias, la Constitución no tiene que establecer los principios, inclusive un argumento contundente en su escrito en el comentario tres cuando se refiere al artículo dos de la Ley Electoral, y dice: Promoverá la participación democrática de los ciudadanos y la

democracia tiene valores, del voto libre, si el voto no es libre, si el voto no es secreto, entonces esta violentando la propia Constitución, se apega al principio de legalidad, pero primero hay que recordarle que primero es el artículo de constitucionalidad y luego de la legalidad. Dos consejeros han hecho alusión a un documentos que desconozco de una senadora, yo preguntaría Presidenta si es un documento oficial para hacerlo del conocimiento de todos para ver qué tratamiento hay que darle en términos de nuestro reglamento o bien es nada más simplemente una hojita epístolar. Por lo que ve a Efraín, qué bueno que siga teniendo su vocación democrática y crítica que le conocimos como un extraordinario periodista vinculado, que lo conocimos, a la izquierda. El problema ese de los avisos, a lo mejor en el segmento de los avisos de ocasión podemos colocarlo y ahí se va a perder, me parece que su propuesta de aviso no tiene la fundamentación y no tiene la consecuencia jurídica de no poder acatar un simple aviso, no se trata de conciliar, cómo podríamos conciliar entre la probable la comisión de un delito y la posibilidad de defender la democracia, el voto libre y el voto secreto, la propuesta que comentó el señor representante de la

coalición, se ciñe estrictamente a la Constitución y a la legalidad, la actuación testimonial y completa es como la dijo el consejero Miranda en cuanto no hay actuación y lamento que hay muchas actuaciones que ha faltado en el Instituto, que la ha dejado solamente para que los partidos impugnen y si no impugna pues ahí la dejamos y sobran ejemplos, pero si fuera necesario traerlos por supuesto que tendríamos que señalar, si no actúa el Consejo entonces estaría asumiendo una actuación de parcialidad. A mi me parece que ha hecho unos buenos comentarios Efraín, no descalificó el acuerdo que se tomó en el Instituto Federal Electoral, al contrario lo valida, pero dice que tiene imperfecciones que hay cosas que no lo resuelve, a mi me parece que ese es el punto en el que debemos de trabajar, ya lo dijo Arturo Vallejo, hay que fundamentar y motivar y hay que perfeccionarlo, en los términos que ha dicho Efraín Mendoza, estaríamos contribuyendo de manera clara y contundente a la democracia, es un delito, sí, pero qué gana la democracia con el simple hecho de meter delincuentes a la cárcel, con eso no reparamos el daño a la voluntad popular, necesitamos actuar de manera preventiva, yo me sumo a la propuesta que se ha hecho

aquí y que tiene fundamento en el artículo ochenta y cinco del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, que habla de las mociones del orden cuando tenga algún objetivo y uno dice la fracción primera, aplazar la discusión de un asunto por tiempo determinado o indeterminado según el caso. Yo propondría que se pudiera nombrar una comisión entre los integrantes del Consejo y los integrantes de Consejo con diferentes calidades, pero son los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos, podríamos trabajar en la idea de Efraín, de hacer un documento que perfeccione el que fue aprobado en el Instituto Federal Electoral y que el día de mañana nos pudieran convocar a la una de la tarde y se discutiera y se perfeccionara y se votara, me parece que esto sería voluntad de todos de contribuir al proceso democrático y demostraría algo de los consejeros, que no tienen el voto jurado por lo menos cuatro, es cuanto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- De manera muy breve, voy a ser corto en mis explicaciones porque mi capacidad no me da para tanto y

creo todo mundo estamos de acuerdo que estamos en la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados de mayoría relativa y esto se repite de manera constante y si es grave por ser elección de gobernador todo mundo lo sabemos; dos, me preocupa por ahí una frase de mi amigo Sócrates, no vamos a tolerar acuerdos tibios y lo digo en plan de amigos, no es con amenazas como se tratan los asuntos electorales, yo creo que la Ley da recursos suficientes para interponer los recursos ante las autoridades competentes, yo creo que podemos llevar una discusión con tranquilidad y con propuestas. De mi amigo Marco Antonio León Hernández, hasta ahorita escuché una salida, la primera parte todos sus argumentos jurídicos estuvieron ausentes de una solución y de una postura dogmática, sólo lo que yo digo es cierto, hasta ahorita dijo le estamos encontrando el hilo con la propuesta de Efraín, yo creo que eso es lo conducente de alguna manera se podrán citar todos los artículos que se quieran, se dice una maraña de artículos y se leen y mas o menos se concatenan y se dicen, no, aquí el problema es cómo lograr el acuerdo entre todos, sin que venga para allá y para acá en el vaivén de las olas y en cuanto a posturas únicas que sólo lo que digo es lo cierto,

busquemos esa forma, trabajémosla, yo lamento mucho porque hay comisiones de enlace entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Querétaro, comisiones de enlace en las que hemos trabajado todas las semanas y casi todos los días y de repente te sacan de la jugada y sacan un acuerdo que a mi me parece una auténtica burla, porque nos hemos reunido los consejeros electorales, Efraín, Eduardo, con ellos con bastante frecuencia, para muchos asuntos y en ésta se van; qué les costaba habernos convocado, como los hemos convocado para otros asuntos; porque unilateralmente deciden las cosas en un punto que saben que tenemos diferentes anexos, qué propósitos maleables los lleva a hacernos a un lado cuando llevamos días, semanas trabajando juntos, porqué en esta ocasión prácticamente nos ignoran, qué no saben que tenemos anexos firmados con ellos, que hemos platicado todos los días, qué no podíamos llegar a una solución juntos de este problema, no, decirnos ahora, oiga, ustedes nos van a auxiliar porque resulta que yo soy tu patrón, de donde acá el Instituto Federal Electoral es el Instituto Electoral de Querétaro para que me auxilie, si esas cosas las platicamos de manera cotidiana, y nos lo decimos, yo voy a poner esto, porque

en todo nos han tomado en cuenta y por qué en esto no, me preocupa mucho, yo creo que buscar una solución es buena. Por último, quiero decir que se bajó de Internet un documento que ya comenté con el licenciado Juan Saldaña o con Sócrates, del Estado de Sinaloa del año dos mil siete, en donde esa petición que están haciendo muchos partidos, ahorita la hizo el Partido Acción Nacional y dice exijo que se prohíban la introducción de celulares a las mesas directivas de casilla, allá el partido en el poder es otro, allá les dijeron no y el acuerdo firmado del Consejo General es no, nosotros no vamos a repetir la hazaña, ni lo estoy proponiendo siquiera, aquí tengo el documento, allá lo pidió el Partido Acción Nacional, qué curioso, no deja de ser curioso que lo haya propuesto el Partido Acción Nacional y que le hayan dicho que no, es para el análisis, porque cuando se está de lado de la banca sí funciona y cuando está más arriba no funciona, ataquemos el problema, busquemos la solución, yo me congratulo que mi amigo Marco Antonio en esta segunda intervención le haya puesto una vía de solución, busquemos una reunión entre los integrantes de Consejo y busquemos, pero no vayamos a consolidarnos en un solo tabique y esta mezcla que yo le pongo

me hace que nadie me convenza, yo creo que eso es ridículo, muchas gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Juan Saldaña. En uso de la voz el licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional.- Antes que nada, señor Secretario, comentamos del documento que hacia alusión Sinaloa, sin embargo, le hicimos ver que hay cinco o seis estados que lo han implementado y él sólo me comentó que uno y yo le dijo que en cinco estados este acuerdo se ha llevado a cabo. Independientemente de eso, licenciada, no podemos dejar al marguen la opción que propone el doctor Marco Antonio a la cual obviamente nos unimos a la petición, no podemos dejar de lado que el Instituto Electoral tiene un convenio firmado con el Instituto Federal Electoral, que hay un anexo técnico en donde se establece de cómo se van a poner las casillas y cómo se va a votar en un fila única y no vamos a llegar y con el acuerdo que sacó el Instituto Federal Electoral, si vas a entrar a votar en lo federal, dejas tu celular y cuando vayas a votar en lo local puedes entrar con el, para el acuerdo que se va tomar, la redacción que se dé debemos de tomar en cuenta, dejar a un lado los temores y pienso

por sobretodo en este momento la decisión de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes antes que cualquier otra circunstancia. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Marco Antonio León Hernández. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Gracias Presidenta. Digo el señor consejero Antonio Rivera Casas, que sólo lo que yo digo es cierto, de ninguna manera, yo he propuesto desde mi primera intervención incluso que argumentáramos, que los consejeros no sólo votaran, sino que argumentáramos para debatir, de tal manera su afirmación es temeraria e infundada, es su costumbre de descalificar a quien no coincide con usted, esto es evidente; en la primera intervención, hubo propuestas, hubo fundamentación y hubo una posición concreta de lo que pedíamos, si no la entendió, pues las clases y las asesorías las cobro aparte, yo le recomendaría que leyera a Orlando García, Agustini, Celia Mora Donato, Quintana, a Manuel Atienza, a Ferrajoli, por decir algunos. Por cierto, no escuché su propuesta. Es cuanto, señora Presidenta. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante

licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Yo creo que lo que dije no lo escuchó porque estaba usted hasta el fondo de un pozo y normalmente ahí se pierden las cosas, yo no dije lo que usted dijo, que solamente lo que yo dije, sino que se concluye en que efectivamente usted puede citar a todos los autores que usted ha leído, seguramente le sirvieron para perder el juicio de inconstitucionalidad cuando propuso su Constitución de Querétaro, lo cual es público. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Yo quisiera, dado que ya llevamos un gran avance en este Consejo General que estamos llegando a un acuerdo, de no enfrascarnos en este tipo de cuestiones y si pudiéramos avanzar de manera muy responsable. Adelante doctor. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Tengo derecho a la réplica. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Así es. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Otra vez se equivoca lamentablemente, yo no he perdido ningún juicio, ninguna, acción de inconstitucionalidad

en contra de una persona, representante de un partido, ni siquiera de un diputado, ni yo hice la defensa de la Legislatura, en todo caso, me parece que está nervioso el señor consejero, yo le pido serenidad, prudencia, que nos vayamos a los argumentos y a las razones, eso del pozo, esos argumentos en una reunión de altura, por lo menos en lo que nos ha dicho la señora Presidenta, en la cual coincido, no van con eso, yo lamento mucho sus comentarios, señor Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Yo también lamento muchos los suyos, porque a veces no nada más es jurídico, es también de la chiricuta, muchas gracias. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- No vale la pena. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Sócrates. En el uso de la voz el licenciado Sócrates Alejandro Valdés Rosales, representante de la coalición "Juntos para Creer".- Primero a nombre de la coalición nos sumamos a que tengamos un receso a fin de que los

integrantes de esté Consejo General podamos revisar la redacción del documento, creo que independientemente de que esto no este votado y la intención es claro a que lleguemos al acuerdo y podamos garantizar la secrecía del voto y únicamente definamos el cuerpo de esta resolución, creo que esto nos ha quedado claro a todos nosotros, pero si me interesaría a mi conocer el punto de vista del representante del Partido Acción Nacional al respecto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Tengo a otras personas por adelante y si ella gusta hacer uso de la voz adelante. Por favor, adelante consejero Efraín Mendoza. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Únicamente para recuperar la discusión, no podemos regatearle el tiempo a nada, me parece que lo básico está ya puesto en la mesa, me parece que no hay discrepancias, hay más convergencias que divergencias, de tal forma podríamos convenir y en términos del Reglamento Interior de si pudiera hacer ese receso y que se pueda hacer una propuesta más elaborada que funde y motive y que también que ya presente redactado el aviso, Marco, la intención más que publicarla por ahí perdida, es que se traduzca en un cartel, es

decir, que esté en un lugar visible, de buen tamaño que permita cumplir su propósito y que esté a la vista, que sea atendido, de manera que pudiéramos establecer, el doctor Marco propone que sea mañana a la una cuando se reanude la sesión y con el auxilio del área jurídica que podamos tener un documento breve, directo, que nos permita dejar este asunto a satisfacción de los promoventes. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Antes de que otra cosa suceda, dejar claro que el acuerdo sería en relación con la prohibición de celulares y cámaras de video, porque si no al rato vamos a salir que sea un exhorto y sí, que quede claro que sería en la prohibición de celulares, porque es así como se planteó en relación con este punto. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Una moción doctor, yo no quisiera, doctor, que nos enfrascáramos. Me parece que plantearlo así sería ignorar la discusión, yo veo la discusión orientada a precisamente encontrar un punto en el cual todos estemos convencidos. Yo creo que ha habido aquí ya

planteamientos muy diversos, muy respetuosos, muy cuidadosos, como para insistir en la posición inicial. Yo creo que la posición inicial ya quedó superada por la discusión, yo si pediría que fuera en términos de encontrar una redacción que refleje lo que aquí se está discutiendo, de tal manera que si pasamos por alto lo que aquí se está discutiendo, lo único que vamos a lograr es prorrogar las discrepancias, yo si pediría que orientáramos esto a un punto de confluencia. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Quiero entender que lo que tú estas planteando es que sería en términos de la prohibición porque ese es el consenso que se ha tenido aquí en relación con ese punto. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Es para atender la solicitud, pero aquí se discutieron muchas cosas y yo insistiría que no pongamos el dedo en el punto que nos va a meter en más confrontación, pongámoslo precisamente para llegar a un acuerdo, llegar a una definición y esto no es asunto de rutas excluyentes, si no de encontrar una ruta que concilie las

posturas. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Es que se va a formar una comisión que no lleva en estricto sentido el elemento fundamental y es una comisión que se va a enfrascar y que no va a llevar a nada, mejor vamos directamente a establecer el punto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Rocha. En el uso de la voz el licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya, representante del Partido Nueva Alianza.- La posición inicial que tenía el licenciado Efraín al principio era en el sentido de que el acuerdo emitido por la Junta Local del Instituto Federal Electoral, era deficiente en cuanto exigía la prohibición, no tenía una manera de llevarlo a cabo, lo que también propuso el representante del Partido Convergencia fue precisamente en cómo perfeccionamos este acuerdo emitido por el Consejo y creo que lo que se tendría que hacer este Consejo en pleno, sería precisamente ser concomitante con esa propuesta, con ese acuerdo que emite el Consejo Local, es decir, ya tenemos establecida una prohibición del Consejo Local

del Instituto Federal Electoral, si ya tenemos esa prohibición, esa no la vamos a poder revocar, no tenemos ni la posibilidad ni la facultad de revocarla, cómo la vamos a perfeccionar y establecer y buscar la manera de torcerle al acuerdo de tal manera evitemos llamarle prohibición y lo denominemos de otra manera, creo que lo que se ha estudiado en esta mesa es cómo vamos a perfeccionar ese documento, para eso es la comisión porque no la podemos revocar, ni tampoco la podemos modificar o buscarle y darle otro nombre o otra alternativa, creo que eso sería. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Juan Saldaña. En el uso de la voz el licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional.- El comentario que estuvimos haciendo aquí, es en el mismo sentido y de acuerdo que tenemos un punto de partida que es el acuerdo del Instituto Federal Electoral que está sujeto a una modificación para perfeccionarlo y entonces la comisión que se forme para la redacción debe de tomar en cuenta esto y el punto de partida es el acuerdo expedido por el Instituto Federal Electoral. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias.

Adelante licenciado Antonio Rivera Casas. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- A mi no me gusta la idea que porque el Instituto Federal Electoral lo dijo, yo tengo que decirlo, porque el Instituto Federal Electoral sanciona una parte y yo la otra, yo creo que no, podemos encontrar y aquí estoy sugiriendo incluso un sinónimo a la palabra prohibición, incluso hacer un documento más pequeño y más contundente, menos largo y menos embarazo en un berenjenal que se metieron que dijeron cuantas cosas y ya no supieron qué decir, hagamos un documento que diga algo similar sino queremos decir prohibición, busquemos una palabra que sea similar y encontremos la misma ruta pero no tenemos por qué ceñirnos a lo que el Instituto Federal Electoral dice, a mi sí me preocupa, en ese sentido pues el Instituto Federal Electoral, yo insisto, nos ignoró, no tenemos que seguir su ruta, incluso podemos hacer un documento mejor al que él tiene. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado Juan Saldaña. En el uso de la voz el licenciado Juan Saldaña Zamora, representante del Partido Revolucionario Institucional.- Toño, no nos referimos a que el

Instituto Federal Electoral dijo; no, el acuerdo en el que se fundó para la integración de esa comisión, es a partir de ese acuerdo que no va decir lo que dice él, de acuerdo, pero si del contenido, es del que debemos de partir. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante consejero Efraín Mendoza. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Yo creo que no se trata de pelear con el Instituto Federal Electoral, ni es nuestro contrincante, ni estamos disputando las competencias, están determinadas por la Ley, pero yo sí quiero dejar en la mesa, y sin que esto constituya algún señalamiento hacia el Instituto Federal Electoral, que conocemos gran cantidad de acuerdos del Instituto Federal Electoral que son revocados y nosotros con el Instituto Federal Electoral tenemos un convenio que estable los márgenes de coordinación y ahora hasta constitucionalmente hay algunos mandatos de coordinación, entonces aquí Juan, ni podemos partir que por que el Instituto Federal Electoral así lo dispuso, nosotros le obedecemos, tenemos que coordinarnos con el Instituto Federal Electoral, pero coordinarnos entre pares, el Instituto Federal Electoral es par nuestro, no es una instancia a que

nosotros estemos supeditados, de tal manera que de lo que ellos resolvieron, para ellos, ellos son los responsables exclusivamente, de lo que nosotros resolvamos, para nosotros, somos responsables. Esa es una referencia que nos permitirá buscar los términos que nosotros como órgano autónomo y responsable de nuestros actos, determinemos el ánimo que prive en esta redacción que se proponga es de votarlo, y que salga por unanimidad, que recoja la discusión en los términos que se dieron, en términos de disminuir las abismales diferencias y encontrar los puntos que nos acercan y efectivamente no sacar un acuerdo con chispas y truenos, sino que sea un acuerdo que tenga como propósito sumar y atender la inquietud de las fuerzas políticas y mandar un mensaje de confianza y garantía del secreto del voto, eso es todo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Yo creo que la argumentación no tiene que ver nada con el Instituto Federal Electoral y aquí se argumentó con ciertos conceptos que no está el Instituto Federal Electoral presente, se argumentó constitucionalmente, se argumentó políticamente, en

fin, yo traté de argumentar que nos corresponde al Instituto Electoral de Querétaro de salvaguardar el bien jurídico de la libertad y secrecía del voto y todos estos elementos nos llevaron a la conclusión de que el modelo del Instituto Federal Electoral puede ser importante, pero el modelo del Instituto Federal Electoral tiene un punto de partida es la prohibición de celulares y cámaras fotográficas, ahí está, todo lo demás puede ser modificado, menos lo fundamental que está presentado en el acuerdo del Instituto Federal Electoral que es al acuerdo a que llegamos de alguna manera todos, entonces no pongamos al Instituto Federal Electoral, ni tratemos de argumentar para desviar el elemento principal que nos corresponde que es abordarlo, etcétera, etcétera. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciada María Daniela Correa Ruiz. En el uso de la voz la licenciada María Daniela Correa Ruiz, representante del Partido Acción Nacional.- Buenas tardes, la postura del Partido Acción Nacional ya quedó muy clara, nosotros somos muy respetuosos de la autoridad electoral, así como se respeta la decisión que ya tomó el Instituto Federal Electoral e igualmente la decisión que

tome este órgano electoral será respetado por Acción Nacional, nosotros no tenemos ningún interés que se tome una decisión que sea a satisfacción de los demás partidos políticos, lo que quiere Acción Nacional es que se privilegie la libertad del ciudadano por votar, además de la libertad y la secrecía del voto que se privilegie la libertad de votar y evitar que los ciudadanos se abstengan de no acudir a las urnas, eso es lo principal y estamos seguros que el acuerdo que dicte este Consejo será respetuoso de la libertad de los ciudadanos y evitara que la gente no vaya a votar y será satisfactorio para lasa fuerzas políticas. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante doctor Marco Antonio. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia.- Gracias. Ahora sí me amplió la duda la posición de la representante del Partido Acción Nacional, no sé qué quiso decir al manejar tantos conceptos, me parece que aquí la posición es clara, ser o no ser, yo propongo en adhesión a la moción suspensiva, que la comisión la pondría integrar, sin demerito que se quiera integrar a trabajar, de parte de los partidos, Sócrates, Arturo y por parte de los Consejeros Electorales, Eduardo y Efraín

y que nos sumemos todos, ya se dijo que está el apoyo del Jurídico, es cuanto. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado José Vidal. En el uso de la voz el licenciado José Vidal Uribe Concha, Director General.- Buenas tardes, gracias, mi intervención gira en torno como hemos venido capacitando, como hemos suscrito el anexo técnico número once y que tiene un apartado que corresponde precisamente al funcionamiento de las mesas directivas de casilla, de manera puntual, en su momento la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral conoció y aprobó, hay en nuestro manual del funcionario de mesa directiva de casilla, el apartado del inicio y desarrollo de la votación y tres incisos me voy a permitir leer y a lo cual desde luego y es que si el órgano electoral tiene a bien aprobar la integración de la comisión, deben de observarse. Inciso b).- Los ciudadanos que se presente a emitir su voto, se formarán en una sola fila, la cual estará asistida por un escrutador local y uno federal con el único propósito de agilizar las votaciones. Inciso c).- Se colocaran dos mesas de recepción juntas, en las cuáles estarán ubicadas los Presidentes y Secretarios de las mesas

directivas de casilla local y federal. Inciso c).- Cada presidente recibirá la credencial de electora que presenten los ciudadano, y solicitará a cada secretario que verifique se encuentre el nombre completo del ciudadano en las listas nominales, una vez confirmado lo anterior, los presidentes les proporcionaran las boletas de las elecciones correspondientes a cada elección para la emisión del sufragio. Estamos hablando de casillas contiguas y eso hace que lo que tenga a bien aprobar este máximo órgano de dirección tenga como propósito fundamental, no confundir al ciudadano, no confundir a nuestros presidentes que han sido ya capacitados, a nuestros secretarios que han sido debidamente capacitados y a nuestros escrutadores como lo hice saber a ustedes estamos ya en la entrega de los paquetes electorales, lo que aprueben con la prontitud que amerita lo haremos llegar a los mil novecientos noventa y cinco presidentes de las mesas directivas de casilla de todo el estado, pero si atender y en este momento hemos tenido un flujo de votación en el cual donde siempre nuestros procesos de elección que hoy le llaman coincidentes atendemos una mecánica y un procedimiento, solamente en estos términos licenciada Cecilia Pérez Zepeda, con

el ánimo de que quede esto debidamente cubierto y que sepamos que no somos casillas espejo como en otros estados, las casillas espejo funcionan la casilla federal esta en un lugar y la casilla estatal esta en otro y ahí sí no tenemos ningún problema, es todo, gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciada María Daniela Correa Ruiz. En el uso de la voz la licenciada María Daniela Correa Ruiz, representante del Partido Acción Nacional.- No entiendo, doctor, qué parte de la postura del Partido Acción Nacional no le quedó clara, yo reitero que la posición será de respeto para la decisión que tome el Consejo General Instituto Electoral de Querétaro, gracias. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante de Convergencia.- Gracias. Toda su postura, toda su historia, toda su plataforma, todos sus documentos básicos, toda su actuación y por supuesto sus comentarios de esta tarde. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Entonces está la propuesta en donde coincidió la mayoría de los

integrantes de este Consejo General, nada más respecto de la integración de la comisión está el consejero Efraín Mendoza y el doctor Miranda, el licenciado Sócrates y obviamente el licenciado Antonio Rivera Casas por ser el titular de la Secretaría Ejecutiva y podrían integrar esa comisión y independientemente de las fuerzas políticas que quieran sumarse, adelante por favor. En el uso de la voz el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Consejero Electoral.- Yo no tengo ningún inconveniente para integrar dicha comisión, sólo plantear que se concurra a la comisión en términos de producir un documento de consenso, no un documento confrontado y también creo que sería importante que el diputado Marco Antonio pudiera formar parte de esta instancia y por supuesto el Director General como miembro del Consejo, en razón de las responsabilidades que le otorga la Ley y también por las consecuencias que trae para la canalización de estos mandatos a través de los consejos distritales y municipales y por supuesto de los presidentes de las mesas directivas de casilla, de tal manera que el Director General también puede alertar, como lo ha hecho ahora, de aquellos aspectos logísticos, operativos, muy finos que no podríamos pasar por alto. En el uso

de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Si en la misma propuesta que el señor Director pueda ser integrado así como el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, para obviamente conocer y dentro también la Secretaría Ejecutiva. Adelante consejero Miranda. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- De lo que se trata es que no haya votación y de sacar un documento por consenso con los criterios que se han establecido aquí y también solicitaría por el comentario que hizo el Director General, no sé si porque como esta el anexo se este en la capacidad de capacitar en caso de que se dé la prohibición o es al revés y en el caso contrario esta el Instituto Federal Electoral que ya tiene el acuerdo y se pueda a través de anexo técnico se pueda tener comunicación con ellos y no entremos en contradicción con ellos, aquí si me parece que entraría el Instituto Federal Electoral siempre y cuando tengamos voluntad para hacerlo. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Adelante licenciado José Vidal. En el uso de la voz el licenciado José Vidal Uribe Concha, Director General.- Sí, mi intervención

doctor, es en el sentido de que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral por mandato de Ley ha llevado a cabo el trabajo de la capacitación electoral, esta intervención es que el funcionario de casilla cuente con algún elemento, el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza hace la propuesta de un gráfico, debemos de contar con algún elemento que permita darle claridad a lo que este Consejo General apruebe, en ningún momento este servidor está inhibiendo esa prohibición y tampoco está alentando alguna tendencia hacia el acuerdo, simplemente es que sepamos que hay documentos que se han estado utilizando y que conocen en este momento los mil novecientos noventa y cinco presidentes de las mesas directivas de casilla y desde luego lo que hemos escuchado por parte de la Presidenta que se integre el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral nos ayudará a escuchar sus puntos de vista e implementar el operativo que se necesita para sacar adelante este acuerdo de Consejo General. En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias. Ha quedado integrada esta comisión transitoria, ya será propuesta de la misma comisión la hora que quiera reunirse, yo

propongo que nos veamos el día de mañana a las dieciocho horas para que tengan toda la tarde para que trabaje el documento la comisión y que nos veamos a las dieciocho horas para aprovechar toda la tarde de hoy y toda la mañana de mañana, si no hubiere algún inconveniente. Se declara un receso hasta el día de mañana, que pasen buenas tardes. **Se reanuda la sesión extraordinaria** y en el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Reiniciamos la sesión y pediría la licenciado Antonio Rivera Casas, haga uso de la voz. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Muchas gracias, de acuerdo con lo encomendado el día ayer para lograr un acuerdo de consenso relativo al punto que convocó a esta comisión de carácter transitoria y me permito dar lectura del acuerdo correspondiente y antes de la lectura damos cuenta de la presencia del licenciado Greco Méndez Rosas, representante del Partido Acción Nacional. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro por medio del cual restringe y prohíbe el uso de teléfonos celulares, cámaras de de fotografía y video, así como cualquier otro medio de comunicación tecnológica de reproducción de imágenes. Considerando.

Primero.- Conforme a lo dispuesto por el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una función esencial del estado libre y democrático la de conducir, organizar y llevar a cabo las elecciones para lograr el relevo del poder en el estado, y esto, a través de la actuación del Instituto Electoral de Querétaro. El artículo ciento dieciséis, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otros: a) las elecciones de los órganos de gobierno se realizaran mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y, b) en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades de las entidades federativas, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Por su parte, el artículo treinta y dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro estipula en su párrafo primero, que el Instituto Electoral de Querétaro es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones. En el ejercicio de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores. El artículo tercero de la Ley Electoral del Estado de

Querétaro establece que la interpretación de la presente ley para su aplicación, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático, funcional, por analogía y por mayoría de razón, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. Todo acto emitido por las autoridades electorales del Estado, deberá estar fundado y motivado. El artículo cuarto de la Ley Electoral del Estado de Querétaro refiere que son principios rectores en el ejercicio de la función electoral: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad. El artículo siete de la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su párrafo primero indica, que el sufragio es la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. El voto popular es un derecho y una obligación. El voto es universal, libre, secreto, personal y directo para todos los cargos de elección popular en el estado. El artículo cincuenta y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro dispone que Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; es la autoridad competente para la función estatal, de organizar las elecciones locales, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. El artículo cincuenta y seis de la Ley Electoral del

Estado de Querétaro señala, que son fines del Instituto Electoral de Querétaro entre otros: a) garantizar a los ciudadanos residentes en el Estado, el ejercicio de los derechos político-electorales; b) velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; c) garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones. El artículo sesenta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro estipula que el Consejo General es el órgano superior de dirección del instituto y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por que los principios rectores en la materia, rijan todas las actividades de los órganos electorales. El artículo sesenta y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece, que es facultad del Instituto Electoral de Querétaro entre otras, dictar los acuerdos e implementar los mecanismos necesarios para la debida observancia de la ley. El artículo noventa y cinco de la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su inciso a) señala que, son facultades del presidente de la mesa directiva de casilla vigilar el cumplimiento de dicha ley sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas. Atendiendo a la solicitud formal realizada por la coalición denominada "Juntos para

Creer'', Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo, realizada al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es pertinente establecer condiciones adecuadas respecto a la secrecía y privacidad del sufragio ciudadano. Debido a los avances de la ciencia y tecnología actualmente existen aparatos electrónicos de uso cotidiano, móviles y fácilmente transportables, que contienen dispositivos capaces de capturar de modo fácil y sencillo, imágenes y grabar videos, tales como teléfonos celulares, cámaras de fotografía y video, así como cualquier otro medio de comunicación tecnológica de reproducción de imágenes. El artículo catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un principio de certeza y legalidad en relación con el derecho de propiedad sobre los bienes de los gobernados; sin embargo, el sufragio ciudadano es un bien jurídico al que debe darse mayor tutela durante los procesos electorales. Esto se logra evitando conductas que vulneren o que estén en posibilidad de lesionar las características fundamentales del voto: universal, libre, secreto, personal y directo. Lo cual se ha conseguido estableciendo faltas administrativas, e incluso, figuras delictivas a nivel local, como la prevista y sancionada en

el artículo trescientos dieciocho del Código Penal del Estado de Querétaro. Mediante comunicación oficial recibida en la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, el Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, ingeniero J. Jesús Lule Ortega, hizo del conocimiento el contenido del acuerdo CL diagonal A diagonal veintidós diagonal cero diez diagonal dos mil nueve, celebrado por dicho órgano en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil nueve, por medio del cual se emitieron medidas necesarias para garantizar la libertad y secrecía del sufragio, en donde se determinó prohibir ingresar y/o utilizar implementos electrónicos como: videocámaras, cámaras fotográficas y/o teléfonos celulares o aparatos diversos que permitan la toma de video o fotografía digital o mecánica dentro de los recintos donde se encuentren ubicadas las casillas electorales. El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, ejerciendo funciones preventivas y de vigilancia, estima pertinente que como medida de seguridad adicional a las que ya establece la normatividad electoral aplicable, para la conducción y desarrollo de la próxima jornada electoral, y reforzar la libertad y secrecía del voto ciudadano,

considera conducente restringir y prohibir el uso de teléfonos celulares, cámaras de fotografía y video, así como cualquier otro medio de comunicación tecnológica de reproducción de imágenes de la boleta electoral ya sufragada, al interior de las mamparas en las casillas electorales. La restricción y prohibición temporal antes mencionada, si bien no se encuentra expresamente contemplada en la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo cierto es que tiene su origen en una ponderación de los principios rectores en materia electoral, en razón de que los procesos electivos son de orden público e interés social. Con base en lo anteriormente expuesto este Consejo General emite el siguiente acuerdo: Primero.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro es competente para emitir el presente acuerdo en términos de las atribuciones que le han sido conferidas constitucional y legalmente. Segundo.- El Consejo General dispone que el día de la jornada electoral de cinco de julio de dos mil nueve, se restrinja y prohíba el uso de teléfonos celulares, cámaras de fotografía y video, así como cualquier otro medio de comunicación tecnológica de reproducción de imágenes en el interior de las mamparas para captar la imagen de la boleta

electoral ya sufragada. Tercero:- Uno de los escrutadores de las Mesas Directivas de Casilla, al momento que los ciudadanos se integren a la fila dirá a los votantes: "Les informo que por acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, está restringido y prohibido el uso de instrumentos de reproducción de imágenes al momento de votar. Se les hace saber que su voto es libre y secreto". Cuarto:- Se instruye al Director General del Instituto Electoral de Querétaro, la publicación en los medios de comunicación de mayor circulación en el Estado, a efecto de que informe a la ciudadanía de esta medida restrictiva y prohibitiva. Quinto:- Se instruye al Director General del Instituto Electoral de Querétaro, para disponer la elaboración y colocación de carteles en donde se encuentren las Mesas Directivas de Casilla con las medidas, de por lo menos noventa por sesenta centímetros, que deberán contener la siguiente leyenda. Importante. El voto es libre y secreto. El Código Penal para el Estado de Querétaro impone sanciones a quien otorgue u ofrezca algún beneficio a una o más personas con la condición de que voten en determinado sentido o se abstengan de votar. Usted debe evitar actos que pudieran constituir un delito. Por tanto, en

el momento de emitir su voto, no debe hacer uso de cámaras fotográficas, videocámaras, teléfonos celulares o cualquier otro instrumento similar". Sexto.- La restricción y prohibición anterior no incluye las llamadas telefónicas que con sus equipos de telefonía celular, realicen los funcionarios de casilla, observadores electorales, representantes de partido político, coalición y capacitadores-asistentes electorales. Séptimo.- Para la debida observancia del presente acuerdo, notifíquese a los Consejos Distritales y Municipales, por conducto del Director General del Instituto Electoral de Querétaro, para los efectos conducentes. Octavo.- Comuníquese este acuerdo para efectos de coordinación institucional, al Consejo Local del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Presidenta de este colegiado. Noveno.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga". Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a treinta de junio de dos mil nueve. Damos fe. El ciudadano Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, hace constar que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue como sigue: ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... En el uso

de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Sí, nada más en el punto tercero, uno de los escrutados de las Mesas Directivas de Casilla, al momento que los ciudadanos se integren a la fila dirá a los votantes: "Les informo que por acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, está restringido y faltó y prohibido. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- Ahí dice, lo acabo de leer. En el uso de la voz el doctor Marco Antonio León Hernández, representante del Partido Convergencia.- Sí lo leyó. En el uso de la voz el doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Consejero Electoral.- Bueno, está bien. En el uso de la voz el licenciado Antonio Rivera Casas, Secretario Ejecutivo.- ¿Doctor Ángel Eduardo Simón Miranda Correa?... A favor. ¿Sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza?... A favor. ¿Licenciada Clara Cárdenas Manríquez?... A favor. ¿Licenciado en ciencias de la comunicación Arturo Adolfo Vallejo Casanova?... A favor. ¿Licenciado Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo?... A favor. ¿Licenciada Cecilia Pérez Zepeda?... A favor. ¿Licenciado Antonio Rivera Casas?... A favor. Tenemos siete votos a favor para aprobar el presente acuerdo, firman el presente acuerdo la Presidenta del

Consejo General y el Secretario Ejecutivo. En virtud de que el doctor Marco Antonio León Hernández retira su propuesta de participar en asuntos generales, es todo en cuanto En el uso de la voz la licenciada Cecilia Pérez Zepeda, Consejera Presidenta.- Gracias licenciado Antonio Rivera. He girado instrucciones para que una vez aprobado este acuerdo se entregue ya en estos momentos en cada uno de los integrantes del Consejo General copia simple del acuerdo que se acaba de aprobar, en unos minutos daremos copia del acuerdo. Esta inscrito en asuntos generales el licenciado Arturo Emilio Rocha Anaya y dado que no se encuentra presente, damos por concluida la presente sesión extraordinaria de Consejo General que pasen buenas tardes. - - -
- -
- -
- -
-